

© *Luis Arce Borja*

Diseño y Diagramación:
Carlos Moreno Rodríguez
<http://www.estudiocaos.com/>
caos@estudiocaos.com

2009

**MEMORIA DE UNA GUERRA
PERU 1980-2000**

PROLOGO

Este libro y el tema que aquí se aborda se originaron de un encuentro inesperado con un amigo que yo había dado por muerto. Quizás asesinado en algún centro clandestino de tortura y crímenes del ejercito o de la policía peruana. Emiliano era estudiante en sociología, y había desaparecido un día del año 1987, en plena guerra interna en Perú. Fue secuestrado en una calle céntrica de Lima cuando acudió a una cita con Teresa, a quien amaba y que nunca más volvería a ver. Ella, fue capturada momentos antes de que él llegara al punto de encuentro, y su destino fue la muerte.

Ese día de 1987, era un invierno frío y bastante tarde en la noche. Estábamos en horas de cierre edición, y alguien subió a toda prisa al segundo piso donde estaba mi oficina en la redacción de El Diario. Han secuestrado a Emiliano, me informaron a boca de jarro. Cuando nos preparábamos para introducir una nota periodística de denuncia, alguien nos comunicó que no había que publicar nada sobre este caso. Solo el silencio, lo puede salvar nos dijeron. De ahí pasaron varios meses antes de darlo por uno de los cientos y miles de desaparecidos en todo el país. Nunca más se supo de él.

Si estaba secuestrado en algún centro clandestino de torturas del ejército o de la policía, nada podría salvarlo de una muerte segura. Pero Emiliano no murió porque logro engañar a sus captores. Se hizo pasar por alguien que no era, sin ninguna importancia para los servicios secretos de las fuerzas arma-

das ni para la policía. Así mientras el verdadero Emiliano desaparecía para siempre, él asumía su propio destino bajo otra cobertura, cuyo único delito era ser estudiante de una universidad limeña considerada nido de terroristas. Con el nombre de otra persona fue condenado por un tribunal militar por subversión y traición a la patria. Paso de 10 años en diversas prisiones del Perú, y en ese refugio siniestro de las cárceles peruanas pudo salvar su vida. El año 1997, fue liberado porque fingió ser partidario de las “cartas de paz”, redactadas en 1993 por Abimael Guzmán, cuyo propósito fue renunciar a la lucha armada y negociar con el gobierno fujimorista. Ya en libertad mando al diablo a los militantes de las cartas de paz, y los acusó de traidores. Salio clandestinamente del Perú para radicar en algún país de Europa, desde donde tomó constato con el autor de este libro.

El año 2000 el Perú fue convulsionado por cambios bruscos en su política interna. Alberto Fujimori abandonó el gobierno y salio huyendo clandestinamente del país para refugiarse en Japón. Fue en esos momentos que pude encontrarme por primera vez con Emiliano. Desde nuestra primera conversación abordó sin rodeos el tema que le calentó la cabeza durante todos sus años de prisionero. En Perú, me dijo, la historia no es historia, es solo una perversidad inventada para borrarlo todo. Para que nada quede, salvo el terror, en la mente histórica de los pueblos. De esa manera salió el tema de este libro, y quedó confeccionado su principal argumento que no es otra cosa que escribir los pasajes principales de la historia social de dos décadas de guerra interna. De ahí viene el título, Memoria de una Guerra”, que en ocho capítulos recoge, el conjunto de fenómenos sociales, políticos y militares que rodearon el proceso armado que vivió el Perú entre 1980 y el año 2000.

Este libro es en cierto modo, un balance en dimensión abreviada de los factores y elementos que participaron en el sur-

gimimiento, el desarrollo y el fracaso de un proceso armado que cobró notoriedad en Perú y en el extranjero. El texto aborda, a través del análisis o de testimonios directos, los acontecimientos más significativos de este proceso armado, y el rol que cumplieron cada uno de los entes políticos que tomaron parte en dicho fenómeno social. En cierto sentido, recuperar la memoria colectiva de un pueblo, es también una forma de prolongar la lucha contra la opresión y mantener la esperanza de liberación. Sobre todo si, esta memoria, se opone a través de la verdad, a una historiografía aberrante, cuyos trazos oficiales describen los hechos al margen de la verdad y de la exposición objetiva de los acontecimientos.

Recuperar esta memoria, es una labor de vasto alcance, que quizás no lograremos cumplir en este texto, pero buscamos en lo posible oponernos a la falsificación del pasado cuyo propósito es crear en el seno del pueblo, desconfianza, sentimiento de inferioridad, espíritu de derrota eterna, y sumisión de vasallo frente a sus explotadores. En esa historia oficial construida en las redacciones de los medios de comunicación mercenarizados y en los laboratorios del ejército y la policía, los guerrilleros y luchadores sociales son simplemente terroristas y traidores a la patria. Militares y policías asesinos se convierten en héroes y prohombres de la libertad. Políticos tráfugas y mafiosos son elevados al rango de padres de la patria y paladines de la justicia y la democracia. Presidentes mafiosos y corruptos son mostrados como personificación de la nación, la moral y la ética. Aceptar esta historia es el envilecimiento colectivo y el desprecio a una experiencia, que al margen de su derrota y sus tremendas fallas, es una herencia válida para futuras luchas por un mundo mejor.

Tema central de este libro es la intensa lucha de clases que se desarrolló en el periodo 1980-2000, y la posición que asumieron las clases sociales, los partidos políticos, la iglesia, las ONG, y otras instituciones. Sobre todo se recorre con minucio-

sidad la forma y los métodos brutales que empleo el ejército en la aplicación de la guerra contrainsurgente. Nuestro análisis muestra que la iglesia católica no fue tan santa en este conflicto y tomó parte, no a favor de los oprimidos sino más bien para apoyar a las fuerzas armadas y grupos de poder. La Izquierda legal, ahora cuando en el camino han quedado más de 70 mil muertos a causa del conflicto interno, se dice defensora de los derechos humanos, pero que en los momentos dramáticos y violentos de la guerra interna colaboró con el crimen y el genocidio organizados desde el Estado. Su preocupación no fueron los pobres como decía en el discurso electoral, sino más bien, salvar y proteger el Estado. Las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), que se multiplicaron como hongos en una tierra ensangrentada y llena de dolor, hicieron de la tragedia de un pueblo, una forma para enriquecerse y ganar posiciones en los escalones del poder. El mismo Abimael Guzmán, que comenzó como un revolucionario y acabó como un capitulador, es en sí una tergiversación de la historia social. Héroe para algunos, farsante para otros, solo son calificativos que al margen de un análisis de su naturaleza ideológica política, como se aborda en este libro, solo son útiles para confundir aun más la historia social del Perú.

En el caso de la universalidad de la historia social, es evidente que el proceso armado peruano, estuvo determinado por nexos casuales internos, pero ello no le resta méritos en su relación con fenómenos políticos sociales de carácter internacional. La guerra de clases en Perú, no fue un caso aislado del conjunto de la lucha en América Latina. Los fenómenos que se han presentado en Perú, hacen parte de la problemática histórica de Latinoamérica, cuyos orígenes sociales se encuentran en la extrema pobreza, la marginalización social, la explotación brutal de los trabajadores, la semifeudalidad, y el carácter semi colonial de los estados sometidos a las potencias mundiales. Guerra de guerrillas, represión militar, intervención americana, estados en bancarrota, clases políticas

y partidos políticos en crisis y descomposición, permanentes luchas contra el hambre y la miseria, fuerzas religiosas, ONG contrarrevolucionarias, paramilitares, son algunos de los síntomas comunes que se han presentado en Perú, y que estarán presentes en cualquier país de América Latina cuando las organizaciones políticas de avanzada se planteen la lucha por un mundo mejor.

CAPITULO PRIMERO

GUERRA CONTRARREVOLUCIONARIA.

Un análisis crítico de la guerra contrainsurgente en Perú no puede restringirse a la entrega descriptiva del número de víctimas durante el brutal conflicto interno que el país vivió. Las cifras, cálculos y porcentajes, no puede ir al margen del análisis de la esencia ideológica, política y doctrinal en las que actuaron las fuerzas de seguridad. Guerra contrarrevolucionaria, guerra de baja intensidad y doctrina de Defensa Nacional, son concepciones de una misma matriz militar. Integradas por un conjunto de operaciones, militares y no militares, cuyo objetivo es liquidar al “enemigo interno” conocido como subversión o terrorismo. En el periodo que abarcó dos décadas (1980-2000), las fuerzas armadas y fuerzas policiales, actuaron en aplicación de la doctrina de guerra de baja intensidad (Low Intensity Conflict), la misma que esta inserta en la doctrina de Defensa Nacional que como se conoce en la jerga militar, “está ligada al conjunto de medidas y previsiones que garantizan la seguridad del Estado” (1). Los autores del Low Intensity Conflict, han sido los militares norteamericanas a partir del reconocimiento de los conflictos sociales en los países del tercer mundo. Su objetivo está dirigido a ubicar y liquidar las rebeliones populares, principalmente los movimientos armados de guerra de guerrilla, que amenazan el poder político constituido por los grupos de poder.

Al avance del comunismo, ¿cuál es la respuesta del mundo

libre? Preguntó en 1983 el general Jorge Chávez Quelopana. La guerra contrarrevolucionaria, fue su respuesta tajante, y añadió, que se refería a aquella “que realiza el mundo libre en todos los dominios del potencial nacional...reconquistar o conservar el apoyo popular y destruir la acción ideológica revolucionaria del marxismo-leninismo, a la vez que defender la estabilidad de los gobiernos democráticos y los postulados de la civilización y sistema político-social de los pueblos de occidente” (2).

La doctrina de Guerra de Baja Intensidad (GBI) surge en la década del 60 y se nutre de la experiencia norteamericana en la guerra de Vietnam. Su aplicación en América latina tiene su apogeo en los golpes militares en diferentes países. Por ejemplo en Brasil en 1964 los militares se alzan contra el presidente brasileño Joao Goulart. Este golpe militar estuvo apoyado por el entonces presidente de Estados Unidos Lyndon Johnson quien participó directamente en la decisión de respaldar a los militares brasileños. En agosto de 1971 en Bolivia triunfa un golpe militar y se instaura una dictadura militar. En junio de 1973 es Uruguay que sigue el camino del golpe militar y se establece un gobierno militar sostenido por la CIA americana y el gobierno estadounidense. El 11 de septiembre de 1973 es el turno de Chile. El general Augusto Pinochet respaldado públicamente por los Estados Unidos se apodera sanguinariamente del poder del Estado y establece una de las más brutales dictaduras militares en el continente. Después sería el turno de Argentina, cuando en marzo de 1976 los militares dan un golpe militar cuyo saldo sería miles de ciudadanos asesinados. Otros ejemplos como Paraguay, El Salvador, Guatemala, Colombia y Perú ilustran bien la aplicación de los planes y doctrinas militares en Latinoamérica y la imposición de la represión, el secuestro, la tortura y el asesinato para liquidar las luchas populares.

La guerra de baja intensidad, ya sea en el enfrentamiento de

acciones armadas revolucionarias, o simplemente como medida represiva de rebeliones populares espontáneas, se aplica y se desarrolla en tres niveles: Uno, se refiere a la acción militar directa bajo la conducción de las fuerzas armadas del país pero sostenida y apoyada (material y técnicamente) por los Estados Unidos y otras potencias. Dos, en el reclutamiento forzado de la población y en la aplicación de la táctica de enfrentar “pueblo contra pueblo”. En este terreno, los militares, mediante la prepotencia y la coerción obligan a la población a participar en la lucha contrainsurgente. Las fuerzas armadas organizan grupos de civiles para usarlos como fuerzas auxiliares y de choque en la guerra contrainsurgente. Se crean las acciones cívicas del ejército, y otras formas de militarizar la sociedad civil. En el caso peruano se formaron las rondas campesinas, rondas urbanas, grupos de defensa civil y otros grupos paramilitares. Desde el Estado, la iglesia y los partidos políticos oficiales se movilizan en “marchas por la paz” y otras actividades “populares” contra el terrorismo. En medio de la guerra civil se instituyen los procesos electorales, no como expresión democrática, sino más bien como instrumento de manipulación y de distorsión de la realidad política. Democracia contra terrorismo, es la disyuntiva política que sirve de eje de unidad de las fuerzas políticas oficiales y de todo aquello que se denomina sociedad civil. Tres, la lucha antisubversiva se lleva al terreno psicológico y se manipula la conciencia de las masas. Su propósito es ganar opinión pública a favor del Estado y del gobierno. Bajo este fin, las fuerzas rebeldes son satanizadas y presentadas como “enemigos de la paz”, de la democracia y de la libertad. Se les califica de “terroristas”, narcotraficantes y criminales. En este terreno resulta fundamental que el Estado y las fuerzas armadas, aseguren el apoyo de los medios de comunicación, principalmente de los diarios, canales de televisión y emisoras radiales.

En Perú la actuación de las fuerzas armadas y fuerzas policiales en la lucha contrainsurgente se desarrolló como parte de

la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria que el Pentágono americano introduzco en América Latina hace más de 40 años. Esta doctrina, altamente ideologizada de enfrentamiento entre dos concepciones de la sociedad y del Estado (socialismo versus capitalismo), tiene su eje de acción en la lucha anticomunista. Como anota Jorge Rodríguez Beruff, en este marco los conflictos sociales, cualquiera fuere su naturaleza, “son efectos provocados por el comunismo internacional”, y se le tiene que afrontar como una extensión de la confrontación internacional entre la democracia y el comunismo (3). En 1981 la Conferencia de Inteligencia de los Ejercito Americanos (*) auspiciada por los Estados Unidos, abordó este problema de la siguiente manera: “Sudamérica es seguramente la parte del Continente mas afectada por la subversión dirigida desde el exterior. Es un denominador común en todos los países la lucha contra el sistema democrático apoyadas con entrenamiento, armamento y económicamente por el comunismo internacional desde bases localizadas fuera del área” (4). Con mucho más precisión se anota en el documento Santa Fe II de 1988 (5), preparado por expertos norteamericanos, cuyo análisis sobre la situación de lucha social en América Latina fue considerada como parte de una “red comunista subversiva” que se extendía desde Chiapas hasta Chile, “haciendo de toda la costa del Pacifico, al sur del Río Grande un escenario de conflicto abierto”.

Por naturaleza ideológica y por formación los militares peruanos asumieron la lucha antisubversiva dentro de los más estrictos esquemas anticomunistas. Su objetivo estratégico fue la protección del sistema, el Estado y los intereses de los grupos de poder. De ello resultó coherente que al inicio del conflicto armado voceros del gobierno y de los militares hablaran del “apoyo externo comunista” que tenía la guerrilla maoísta y que los subversivos buscaban destruir el sistema democrático para implantar una sociedad dictatorial y sin libertad. Para los políticos y militares más conservadores, la

subversión peruana, era parte de un complot azuzado por “oscuras fuerzas comunistas del campo internacional”. Decían incluso que las armas que utilizaban los subversivos venían del extranjero. Fernando Belaúnde, presidente de la República entre 1980 y 1985, en una conferencia de prensa dominical el 2 de enero 1983, refiriéndose a la subversión, anunció que la violencia que vivía Ayacucho era insana y perversa, y que era incentivada y sostenida desde el “extranjero y tenía el propósito de empobrecer al país” (6). El general Carlos Giral Monzón delegado en la Conferencia de Ejércitos Americanos en 1965 decía que la guerra revolucionaria era parte de la guerra fría que confrontaban el bloque socialista con la URSS a la cabeza y el mundo occidental con los Estados Unidos como líder. “Es el bloque comunista el que determina esta situación y condiciona su desarrollo...La guerra revolucionaria no es el resultado del subdesarrollo, sino deliberada acción del bloque soviético” (7).

La gran línea estratégica de esta doctrina es la defensa del Estado y del orden impuesto, que ellos califican de democrático y libre. Para conseguir este objetivo no se plantean ningún límite de carácter legal, moral, político o militar. Sus leyes y la misma constitución no tienen ningún valor cuando se trata de salvar la “supervivencia del Estado”. Para liquidar o exterminar como dicen los militares a los “enemigos de la patria” y de la democracia, se utilizan los métodos mas brutales. Las ejecuciones clandestinas, la acción de los grupos paramilitares, el secuestro, la tortura y la desaparición se convierten en hechos cotidianos cuyos responsables son gratificados por el Estado. En Perú hay decenas de casos donde se ha visto que militares o policías responsables de muertes y genocidios han sido premiados por el Estado y las autoridades del gobierno. Un ejemplo de ello es el teniente del ejército Telmo Hurtado, quien el 14 de agosto de 1985 dirigió en Accomarca (Ayacucho) la matanza de 69 personas entre ancianos, niños y mujeres. Brutal crimen que enriqueció la hoja de méritos de este

militar, y que le fuera útil para ascender a grados superiores. Junto con los ascensos se le siguió confiando cargos de jefaturas militares e incluso estuvo por cuenta del ejército como agregado militar en los Estados Unidos.

Otro caso se refiere a los miembros del “Grupo Colina” que fueron tratados por el gobierno con honores de héroes. Este grupo paramilitar funcionó desde 1990 en el cuartel del Servicio de inteligencia Nacional (SIN) dirigido por Vladimiro Montesinos y apoyado personalmente por Alberto Fujimori (presidente, entonces del Perú) y el general Hermoza Ríos, comandante general del ejército en esos momentos. Este grupo secuestró y asesinó clandestinamente a estudiantes, obreros, profesores y diferentes ciudadanos peruanos. Entre sus crímenes se cuenta el cometido en Barrios Altos (Lima) el 3 de noviembre de 1991 contra 15 personas sindicadas de senderistas, entre ellas un niño de 8 años. Otro asesinato del grupo Colina fue en julio de 1992 cuando secuestró y asesinó a 9 estudiantes y un profesor universitario en la universidad La Cantuta (Chosica-Lima). Los integrantes del “Grupo Colina”, oficiales, subalternos y técnicos de las fuerzas armadas, fueron premiados por el mismo Fujimori, quien en un documento de la presidencia de la República, les expresa su reconocimiento por haber participado en “trabajos especiales en materia de Seguridad Nacional”. Fujimori pide que estos “señores oficiales y subalternos”, sean ascendidos “toda vez que dichos miembros de las Fuerzas Armadas han participado en exitosas Operaciones Especiales de Inteligencia que han posibilitado significativos avances en la lucha contrasubversiva” (8). Este memorando, firmado por Alberto Fujimori, estaba dirigido al ministro de Defensa, cuyo texto nombra a los principales cabecillas del grupo “Colina” (9).

En la lucha contrainsurgente, como en ningún otro tipo de guerra, los militares son facultados por sus más altas jefaturas para cometer los más abominables asesinatos. No hay ley

que pueda interponerse en su paso, y ni el parlamento, ni el poder judicial, ni otra instancia del Estado, tienen vigencia frente al poder de las fuerzas armadas que se impone violentamente en todo los niveles de la sociedad. Elemento sustancial de la doctrina contrarrevolucionaria, no es solo detener el avance de la subversión, sino su exterminio como movimiento social y político. Se liquida no solamente al militante sino también al que sostiene al movimiento o a cualquier persona que muestra sus simpatías con el movimiento insurrecto. A diferencia de las guerras clásicas entre ejércitos contrarios, aquí no se busca solo derrotar al enemigo en el terreno militar. El objetivo es reducir a la nada al enemigo interno constituido por la subversión, destruirlo completamente y dar una muestra ejemplar del poderío de los militares y del Estado. Una prueba de lo que aquí señalamos es la directiva del Comando Conjunto del Ejército peruano descubierta en 1991, en cuyo texto se anota que el “mejor subversivo es el subversivo muerto”, y donde se especifica que en esta guerra “no se capturarán prisioneros” (10).

LOS NORTEAMERICANO EN LA LUCHA ANTIGUERRILLERA

En términos generales fue en este cuadro, donde se orientó la acción de los militares peruanos en la guerra interna que vivió el país. Sus principales ingredientes internacionales fueron la aplicación de teorías militares importadas de América del Norte (guerra de baja intensidad y la guerra contrarrevolucionaria), y la participación directa e indirecta de los Estados Unidos. Desde el inicio, las autoridades norteamericanas, se vieron involucradas en la guerra interna. A partir de 1980 respaldaron con dinero, equipos, técnicos y personal especializado en las acciones contra la subversión. El Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), equipo de la Dirección Nacional contra el terrorismo (DINCOTE) que se dedicó en exclusivo al trabajo

de inteligencia para dar con el paradero y capturar a los más altos dirigentes del Partido Comunista del Perú (PCP), recibía una jugosa subvención mensual de los americanos. El GEIM fue formado el 5 de marzo de 1990 durante el régimen de Alberto Fujimori. Se crea bajo el principio, según sus fundadores, “para vencer al enemigo hay que conocerlo”. Desde el inicio la CIA americana participó en esta organización anti-terrorista, y como lo reconoce el coronel Benedicto Jiménez Bacca, fundador y uno de los jefes de este grupo, “la CIA había colaborado en la captura del líder senderista...la CIA estuvo apoyando al GEIN desde sus inicios” (11).

El mayor apoyo del gobierno de los Estados Unidos estuvo dirigido hacia las fuerzas armadas. David Scout Palmer, un ex voluntario del Cuerpo de Paz, y director en la década del 80 del Programa de Estudios Latinoamericanos del Instituto de Servicios exteriores de los Estados Unidos, declaró en julio de 1986 (12) que la administración Reagan había respondido favorablemente el pedido de ayuda para “contrarrestar el terrorismo” que el gobierno peruano hizo en los Estados Unidos. El mismo David Scout, dijo en 1992, cuando ya Fujimori había consumado el golpe de Estado, que consideraba “muy importante la ayuda de los Estados Unidos para el Perú por el peligro que corre la democracia” (13). Este apoyo, fue directo a través del Estado, o se camufló bajo la cobertura de la “lucha antidroga”. Los Estados Unidos participaron directamente en la lucha contrainsurgente en la selva peruana, y además permitieron que el dinero del narcotráfico se utilice para sostener materialmente las tropas del Estado. El 9 de abril de 1997, cuando ya el Servicio de Inteligencia Nacional y el ejército estaban bastante involucrados en el tráfico internacional de droga, el general Barry McCarffrey, director de la Oficina de la Casa Blanca para el Control de Drogas, elogio los esfuerzos del gobierno peruano en la “lucha antidrogas”, y reconoció, como lo dijo para la prensa peruana, que se había reunido en varias oportunidades con Vladimiro Montesinos, que como se

conoce era el “capo” del narcotráfico en Perú (14).

Tanto la CIA como la DEA americana, permitieron que los altos generales del ejército peruano, así como miembros del gobierno, hicieran grandes negocios en el narcotráfico internacional. Es una vieja costumbre de los gobiernos de los Estados Unidos emplear el dinero de procedencia ilícita para financiar operaciones militares dirigidas a sostener “gobiernos amigos”. En 1986 se descubrió que la administración de Ronald Reagan vendía ilegalmente y en secreto armas a Irán, cuyos beneficios servían para financiar a los “Contras” que como se conoce era un movimiento armado que reunía diversos grupos que luchaban violentamente para derribar al gobierno de los Sandinistas dirigidos por el Daniel Ortega. En México, dice un estudio preparado por Alain Labrousse (15) “los narcotraficantes mejicanos han estado históricamente subordinados al poder de políticos pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional (PRI)”. Este partido ha gobernado durante medio siglo con el apoyo directo del gobierno estadounidense. En Colombia se habla con mucha razón del Narco Estado, y Álvaro Uribe Vélez, actual presidente de este país, ha sido acusado a través de abundante pruebas que es un representante de las mafias de drogas. Uribe Vélez es un incondicional de los Estados Unidos y desde de la década del 90, era sindicado como hombre del cartel de Medellín. En agosto del 2000, cuando Uribe era senador, un informe The National Security Archive, un grupo de investigación de la Universidad George Washington, lo acusó de “estar dedicado a la colaboración con el cartel de Medellín en altos niveles del gobierno”. Uribe, dice este informe, “estuvo vinculado a negocios involucrados en actividades del narcotráfico en los Estados Unidos...y trabajó para el cuartel del Medellín y es un cercano amigo personal de Pablo Escobar’ (16).

En otras latitudes la droga y política tienen el mismo objetivo. En los últimos años Afganistán alcanzó un lugar prominente

en el negocio del opio. Este país es el proveedor del 75% de esta droga a nivel mundial. Como lo anota la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el crimen (ONUDC), en el 2003 Afganistán produjo 3600 toneladas de opio, y para ello utilizó una superficie de un poco más de 80.000 hectáreas. Según Michel Chossudovsky, la historia del tráfico de droga en este país, “esta íntimamente ligada a las operaciones clandestinas de la CIA en la región”. En efecto señala este analista, antes de la guerra soviético-afgana (1979 - 1989), la producción de opio en Afganistán y en Pakistán, era prácticamente inexistente. “La economía afgana de la droga fue un proyecto minuciosamente concebido por la CIA, en concordancia con la política extranjera estadounidense”, dice Michel Chossudovsky (17).

En Perú la relación del tráfico de drogas y la lucha contra-insurgente es sin equívocos. Si antes de 1980, cuando aún no había conflicto armado, se contabilizaban en todo el país 30 mil hectáreas de tierras para el cultivo de la coca. Esa situación cambió con el inicio de la lucha armada y la militarización del Perú. Las plantaciones de hoja de coca y su transformación en droga aumentaron en forma acelerada. En 1981, la superficie del cultivo de la coca se estimaba en 50 mil hectáreas, lo que significaba 20 mil hectáreas de aumento. Cinco años más tarde cuando las fuerzas armadas habían ganado terreno en el control del Estado y los poderes civiles, el sembrío de coca subió a 100 mil hectáreas. Para el año 1988, cuando la lucha armada estaba en su desarrollo más alto y cerca del 60% del país estaba bajo control absoluto de los Comandos Políticos Militares, las tierras para producir coca aumentaron a 196 mil hectáreas. Para 1991, primer año del triunvirato gubernamental entre Fujimori, los militares y la CIA americana, las tierras para el cultivo de la coca fue de más de 200 mil hectáreas (18).

La relación entre las bandas del narcotráfico y los militares

constituyó uno de los negocios más rentables que se administró desde el Estado. Este dinero sucio como se le llama para denominar los ingresos provenientes de la producción de drogas servía para sostener la alimentación de las tropas y otra para enriquecer a los altos oficiales de las fuerzas armadas y fuerzas policiales. En 1989, un diario de Lima decía que lo excesivo era “la dependencia del Ejército de los cupos cobrados a las avionetas para alimentar a la tropa” (19). Esta situación se extendió aún más durante el gobierno de Alberto Fujimori, que como se conoce era manejado por los militares y la CIA americana. Los carteles de la droga pagaban millonarias sumas de dinero para utilizar los aeropuertos militares y acciones de protección de parte de las tropas del ejército y la policía. El contingente militar dividía su tarea entre la lucha contra la guerrilla y la protección de las pistas de aterrizaje que utilizaban las avionetas de las diferentes “compañías” provenientes de Perú y Colombia. En 1996 fue arrestado Demetrio Chávez Peñaherrera, conocido con el seudónimo de “Vaticano”, y uno de los más importantes narcotraficantes afincados en la selva peruana. “Vaticano” declaró desde la cárcel que estaba obligado a entregar 50 mil dólares mensuales a Vladimiro Montesinos para tener derecho a “trabajar libremente” en la producción y venta de droga. En 1995, un oficial del ejército que había prestado servicios en la selva (región de la coca) y que salió huyendo a Europa para que no lo asesinen sus propios camaradas de armas, testimonió desde España que “muchos aeropuertos militares se utilizan para sacar droga. Los oficiales recibían a cambio un «maletín» de parte de «El Vaticano», uno de los capos del narcotráfico, y lo entregaban al general Bellido, jefe político militar del Frente Huallaga. El Alto Huallaga está dividido en áreas que tienen su batallón y que están al mando de un comandante. Sobre ellos está el general que les dice «tú tienes tantas bases que tiene tantos aeropuertos. El movimiento ahí es tanta droga, pide tanto» (20).

En el aspecto de infraestructura militar, la guerra contrainsurgente obligó al Estado peruano movilizar un aparato militar que en 1995 alcanzó 680 mil efectivos militares, en los que se consideraban fuerzas armadas, fuerzas policiales, rondas campesinas, rondas urbanas, grupos de de defensa civil, y otros grupos paramilitares organizados desde el Estado. Este aparato militar, resultó sumamente caro y el Estado se vio obligado a prever importantes recursos económicos para sostener un ejército, que por sus dimensiones jamás se había visto en la historia peruana. Los gastos militares aumentaron proporcionalmente al mismo ritmo de la creciente militarización del país. Si en 1990 el Estado dedicaba 1,250 millones de dólares para las fuerzas armadas, en 1991 subió a 1,610 millones de dólares. Y si en 1994 los gastos fueron de 1,646 millones de dólares en 1995 alcanzo a 1,879 millones de dólares. Pero 1997 esta suma aumentó a 2,232 millones de dólares, mientras que los gastos para salud fueron de 572 millones de dólares y para educación solo fue de 729 millones de dólares. Estas cifras son oficiales, y en ellas no se incluyen el apoyo material (armas y dinero) otorgado por los Estados Unidos y otros países ricos. Tampoco se incluye el dinero proveniente del narcotráfico, del contrabando de armas, coimas y robos, que el ejército y los servicios de inteligencia utilizaron para financiar la guerra contra la guerrilla maoísta, y para enriquecer a los altos mandos de las fuerzas armadas y fuerzas policiales. En latinoamericana, no registra un caso semejante donde una fuerza subversiva tuvo que hacer frente un aparato contrainsurgente de tales proporciones. Las fuerzas contrainsurgentes del Estado peruano eran solo comparables a las fuerzas armadas de Brasil que con 161'374 millones de habitantes, tenía una fuerza militar de 680, 000 miembros (militares y policiales). Para las estadísticas de instituciones internacionales para el periodo 1980 y 1995, Perú se convirtió en el país con el ejército más voluminoso de América Latina, solo comparable a Brasil, pero superior a naciones vecinas como Argentina (89,240), Colombia (233,000), Chile

130,000), Ecuador (57,270) y Bolivia (64,100) (21).

FUERZAS ARMADAS Y “EXCESOS” MILITARES

En diciembre de 1982 el gobierno decide que las fuerzas armadas intervengan en la guerra contrainsurgente. Se inicia con ello una de las etapas más violentas de la historia de la lucha social peruana. La represión, el secuestro masivo de campesinos, desapariciones, torturas y ejecuciones clandestinas alcanzaron niveles de genocidio. Esta forma de actuar de las fuerzas armadas, no fueron “excesos” de algunos militares como se repitió en las esferas oficiales, sino la esencia de la doctrina militar contra insurgente. Así, en 1982 se registran oficialmente dos personas desaparecidas y 170 fueron muertas a causa de la guerra interna (22), pero para julio de 1983 y julio 1984 cuando se impuso la doctrina militar, los desaparecidos aumentaron a 970 (23). Para el mismo periodo los muertos sumaron 2,807 personas (24). De ahí para adelante la espiral de la violencia, a causa de la acción contra-insurgente, no tendría límites ni fin. En el periodo que va de 1982 hasta 1991, la cifra de desaparecidos alcanzó a 13,764 personas y la suma de la víctimas mortales llegó a 22,443, lo que convirtió esta guerra, en uno de los conflictos armados internos mas violentos de América Latina.

Los “excesos” militares estaban refrendados por órdenes y planes elaborados al más alto nivel de las fuerzas armadas y del gobierno. El exterminio del enemigo subversivo y de la población que la sostenía, fue una acción planificada y constituyó el ingrediente fundamental de la estrategia militar. Nada se dejó al azar y las matanzas masivas o selectivas, como se verá en los testimonios que aquí entregamos, correspondió a una estrategia concebida para proteger a “cualquier precio” la estabilidad del Estado. Esta forma de actuar de los militares contó con el apoyo de los partidos políticos, el parlamento,

la iglesia y otras instituciones de la sociedad civil. En enero de 1983, a pocas semanas de la intervención de los militares, el Comando Conjunto de las fuerzas armadas emitió una directiva secreta con el código 01-CCFFAA-JICS donde se ordenaba que las operaciones contra los terroristas debieran ser “altamente ofensivas y agresivas, sin olvidar que el mejor subversivo es el subversivo muerto”. Se anotaba también que las operaciones de exterminio de subversivos tenían que ser “clandestinas utilizando procedimientos legales e ilegales y si la situación y las condiciones lo permitían podrán realizarse eliminaciones sin dejar rastro” (25). Esta directiva de los militares peruanos se sustentaba en el pensamiento militar norteamericano sobre la forma de afrontar la subversión, expresada por Claude C. Sturgill, profesor de la alta oficialidad de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, profetizó el futuro de la lucha de clases en el continente americano y la forma que se debía afrontar este problema considerado peligroso para la seguridad continental. Este experto de los EE.UU. anunció en la década del 80 que “tal vez en el año 2000, observaremos a esos revolucionarios comunistas como mirábamos a nuestros indios hace un siglo. No hay duda que aquí en Estados Unidos, un criterio amplio sobre este problema debe ser: El único buen insurrecto, es el insurrecto muerto (26).

Por su parte, Luis Cisneros Vizquerra, ministro de guerra en la época y conocido con el apelativo del “gaucho”, adelantó en enero de 1983, lo que sería la política antisubversiva dirigida por las fuerzas armadas. Hay que matar senderistas y no senderistas, dijo sin inmutarse. “Matar 60 personas y a lo mejor ahí hay 3 senderistas... y seguramente la policía dirá que los 60 eran senderistas””, señaló en tono de orden a través de una revista de Lima (27). El “gaucho” Cisneros Vizquerra había estudiado su carrera militar en Argentina y se había nutrido de la práctica y experiencia antisubversiva de los militares argentinos, que como se conoce ha sido uno de los ejércitos más criminales de América Latina. En Perú, no

era un desconocido en la política peruana y en 1977 siendo ministro del Interior de la dictadura militar del general Francisco Morales Bermúdez, se encargó de la represión, encarcelamiento y despido de más de 5 mil trabajadores y dirigentes sindicales durante el paro nacional del 19 de julio de 1977.

La supuesta teoría de los “excesos militares”, que han utilizado la mayoría de las comisiones investigadoras parlamentarias o diversas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) dedicadas a la defensa de los derechos humanos, ha servido solamente para ocultar el contenido doctrinal de la guerra sucia en Perú. Cuando se habló de “excesos” en el tema de la represión antisubversiva, se buscó encubrir con simpleza la institucionalidad del crimen en la conducta militar. La palabra “exceso” fue concebida como elemento de las campañas psicosociales del ejército y fue de uso corriente en la alta oficialidad de las fuerzas armadas del Perú. Por ejemplo, el general Hugo Martínez Aloja comandante del Frente Militar de Huamanga en 1991, buscando una justificación a brutales crímenes cometidos por las tropas bajo su mando, reconoció que “algunos militares cometen excesos”, pero negó que la “violación de los derechos humanos y la guerra sucia sean la política y la norma que rige la lucha contrasubversiva” (28). Por su parte el general Clemente Noel, quien en 1983 cuando era jefe Político Militar de Ayacucho, organizó diversos centros de exterminio de prisioneros en este departamento, rechazó la acusación sobre abusos y crímenes del ejército, y admitió en una entrevista periodística “algunos excesos” de los militares en su jurisdicción (29). En 1991, Enrique Bernal en ese entonces dirigente de Izquierda Unida y presidente de la Comisión de Pacificación del Senado, hablando de las “violaciones de los derechos humanos” por parte de los militares, enfatizó que esas “violaciones no forman parte de la política autorizada por el gobierno y los altos mandos militares” (30).

EXTERMINAR A LOS SUBVERSIVOS

La exterminación de los subversivos no es solamente una practica en el ejercito peruano. Esta forma de afrontar la subversión tiene carácter doctrinal y fue diseñada por los militares de los Estados Unidos. En 1962, una misión del Ejército norteamericano dirigida por el general William Yarborough estuvo en Colombia como parte de un peregrinaje de instrucción militar en Latinoamérica. De esta visita queda las lecciones contrainsurgentes otorgadas a los ejércitos de esta región y de ello surgieron los planes militares de exterminio del “elemento subversivo” que han aplicado en gran forma los ejércitos en Argentina, Colombia, Chile, Perú, Bolivia y otros países. Las directivas de la misión militar estadounidense han sido la medula de los diferentes planes contrainsurgentes que hasta la actualidad emplean las fuerzas armadas de América Latina. Según el general Yarborough, la población debe ser el blanco principal de la guerra anticomunista y el campo de batalla no tiene límites. Fue Colombia donde se entrenó con anticipación estas directivas, y en 1963, como se anota en una revista especializada, se le ordenaba al ejercito de este país “realizar operaciones militares permanentes para extirpar el elemento subversivo” (31). En Perú estas directivas tuvieron su prueba concreta en la primera mitad de la década del 60, cuando las fuerzas armadas lucharon contra la guerrilla del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Frente de liberación Nacional (FLN).

En 1983 se filtró en la prensa peruana un documento secreto del ejército en el cual se daban órdenes de tortura y muerte de supuestos subversivos prisioneros. El texto es de 1983 y es una comunicación entre una patrulla del ejército y el alto mando militar cuyo contenido revela una escalofriante manera de exterminar a los prisioneros. Los hechos tienen lugar en la localidad de San Francisco y el Comando Político Militar de Ayacucho que en esos momentos estaba bajo la jefatura del

general Clemente Noel Moral. En la siniestra comunicación el jefe de la patrulla pide a sus superiores la “autorización” para matar once prisioneros pertenecientes a Sendero Luminoso. La respuesta es contundente y se ordena que antes de matarlos había que sacarles información. Las instrucciones son claras, y se dice que había que torturarlos y dejarlos desangrar hasta que mueran. La nota textual es la siguiente: “El G-2 del ejército peruano indica la captura de once terroristas en la localidad de San Francisco. Hay un herido que se encuentra desangrándose. Desde Ayacucho se indica que lo mantengan lo más posibles con vida. Que se le interrogue lo máximo antes de que muera por la herida, si no llega a suceder mátenlo de todas maneras. A los otros elimínenlos luego del interrogatorio. La orden ya está dada, que no quede ninguno con vida. Orden de Papá punto” (32).

En octubre de 1989, un documento secreto de las fuerzas armadas, consideraba a los subversivos y sus familiares como “excedente poblacional” y sector “nocivo de la población”. Para estos sectores, dice el texto secreto, “dado su carácter incorregibles...solo queda su exterminio” (33). En enero de 1983, el general Carlos Arnaldo Briceño Zevallos, en esos momentos presidente del Comando Conjunto de las fuerzas armadas y Comandante General del ejército, anunció que la lucha que había emprendido el ejército era hasta el “aniquilamiento de los desquiciados sociales que hacen uso irracional de violencia contra del pueblo peruano y el sistema democrático” (34). Es en estas directivas militares donde se encuentra la raíz de la brutal acción contrainsurgente que significó miles de crímenes contra pobladores, campesinos, estudiantes y cualquier ciudadano considerado subversivo. En aplicación de estas directivas se organizaron desde el Estado grupos paramilitares como el “Rodrigo Franco” y el Grupo Colina que fueron responsables de decenas de asesinatos selectivos. Estas órdenes castrenses sirvieron para planificar y ejecutar los tres genocidios de prisioneros en los penales (Octubre 1985,

junio de 1986 y mayo de 1992).

VICTIMAS DE LA GUERRA EN CIFRAS OFICIALES

Las cifras oficiales más recientes sobre las víctimas durante guerra interna son de 69,280 muertos (35). Esta suma proviene de la Comisión de la Verdad y reconciliación (***) y por la filiación política de esta institución hay que dudar de su veracidad. En todo caso será difícil precisar el número exacto de personas asesinadas durante el conflicto interno que vivió el Perú entre 1980 y el año 2000. Esto se complica aun más mientras las cifras y estadísticas provienen de “comisiones de investigación” o de instituciones privadas (ONG) que no fueron imparciales durante el conflicto interno y que abiertamente o encubiertamente tomaron parte a favor del Estado y las fuerzas armadas. La verdad y la justicia no pueden abrirse camino mientras el poder militar y la actividad mafiosa de los políticos se siga manifestando en el Estado y en todas las instancias de la sociedad civil, sobre todo en el gobierno de turno, en el parlamento y el poder judicial. En las condiciones políticas actuales del Perú, cuando los mismos que planificaron y ejecutaron los crímenes de guerra se mantienen en el poder del Estado, cualquier “comisión de investigación”, deriva en una institución encubridora de los crímenes y genocidios planificados desde los más altos rangos del Estado y de las Fuerzas Armadas. Un ejemplo de esta situación es el caso Alan García Pérez, actual presidente del Perú, y de su primer vicepresidente el contralmirante de la Marina de Guerra Luis Giampietri Rojas. Ambos están acusados por haber cometido graves delitos contra los derechos humanos. El primero se le sindicó, con mucha razón, de haber planificado y ordenado la matanza de 300 prisioneros de guerra en junio de 1986. También está acusado de haber utilizado el cargo de presidente de la República para enriquecerse. El segundo es el actual

vicepresidente de la República, quien durante la matanza de los penales fue el jefe de la Marina de Guerra y tuvo a su cargo el operativo sangriento que eliminó a 40 prisioneros cuando estos se habían rendido. Por esos crímenes, tanto García como Giampietri están acusados penalmente en Perú y en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) como todas las comisiones oficiales que la antecedieron, no transgredió los marcos delimitados con anticipación por los militares y los grupos de poder. En la investigación de esta Comisión prevaleció el criterio encubridor y la complicidad para justificar los crímenes organizados desde el Estado y de las más altas instancias de las fuerzas armadas y fuerzas policiales. Bajo este propósito ha resultado, según el análisis de la CVR, que el “principal violador de los derechos humanos” durante el conflicto interno fue Sendero Luminoso. (CVR). “Las investigaciones realizadas por la CVR demuestran claramente que el PCP-SL fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones a los derechos humanos” ... “Sendero Luminoso fue responsable del uso sistemático y masivo de métodos de extrema violencia y terror y que causó el 53.68% de los muertos y desaparecidos”, dice esta comisión, agregando que los “miembros de las fuerzas armadas resultaron responsables del 28.73% de muertos y desaparecidos reportados”. Esta comisión, que recibió en pago 13 millones dólares del Estado, no ha tenido ningún problema en sentenciar que Sendero Luminoso tiene más responsabilidad en los resultados mortales de la guerra en tanto “fue el que inició el conflicto” (36).

La fórmula de culpar a Sendero para exculpar a los militares y al gobierno proviene de las autoridades peruanas y de la administración de los Estados Unidos. Por ejemplo Alejandro Toledo presidente del Perú entonces, declaraba en noviembre de 2003, a raíz de la conclusión final de la CVR, que “Sendero fue el responsable de los años de terror y el país tuvo que re-

currir a las Fuerzas Armadas, pero algunos de sus elementos incurrieron en acciones dolorosas...” (37). Después de Toledo le toco el turno al general Eduardo Fournier un militar de estrecha relación con el fujimorismo, quien en tono amenazador dijo que si Toledo hubiera respaldado cualquier denuncia sobre violaciones de los derechos humanos contra los militares, “su gobierno se caería”. En 1994, la administración americana que ha sostenido todos los regimenes peruanos y en particular al gobierno de Alberto Fujimori, declaraba respecto a los derechos humanos, que “los principales responsables de la violación de los derechos humanos continúan siendo Sendero Luminoso, en menor grado, las fuerzas de seguridad del gobierno” (38).

La CVR es aun mas explicita cuando hace esfuerzos para encubrir la responsabilidad que tuvieron los gobiernos y los políticos en la guerra contrainsurgente aplicada desde el Estado. Insólito, pero esta Comisión, dijo en su informe final, que pudo “constatar” que el Perú en el periodo 1980 y 1992 a pesar del conflicto armado interno y a “diferencia de otros países de América Latina por esa misma época se desarrolló un régimen democrático, con elecciones libres, libertad de prensa y el sistema político más inclusivo de nuestra historia contemporánea”. Hay que recordar que durante la “democracia” ejemplar de la que habla irresponsablemente, las fuerzas armadas y fuerzas policiales habían cometido abominables crímenes en los andes, en las prisiones, en las universidades y todo los campos de la sociedad civil. En aplicación de la guerra contrainsurgente se había arrasado cientos de comunidades y pueblos andinos. Putis es una comunidad de los andes donde los militares asesinaron a 123 personas, incluidos niños de entre 6 y 12 años, y es apenas una muestra los crímenes masivos que se cometían durante el gobierno “democrático” de Acción Popular.

La matanza en Putis fue en septiembre de 1984 durante el

gobierno de Fernando Belaúnde Terry, considerado por algunos políticos como el “padre de la democracia” peruana. Este genocidio fue perpetrado en el lugar denominado Putis a 3,600 metros de altitud cerca de Huanta en Ayacucho. Las víctimas, entre ellas mujeres, ancianos y niños, pertenecían a las comunidades de Cayramayo, Vizcatampata, Orccohuasi y Putis y los eliminaron porque los soldados creían que eran colaboradores de la guerrilla maoísta. Después que los 123 comuneros fueron ejecutados con tiros de bala en la cabeza, los militares se apoderaron de las vacas, y otras pertenencias de las víctimas. Este crimen estuvo oculto hasta 1998 cuando algunos comuneros sobrevivientes removieron los escombros donde estaban enterradas las víctimas de este pueblo. Recién en el 2001 la prensa peruana dedicó algunos reportajes a este crimen de los militares. Posteriormente, en junio del 2008, el fiscal Rubén López y del Equipo Peruano de Antropología Forense, iniciaron el desentierro de los restos humanos en esta fosa común que es un testimonio de los planes de exterminio que aplicaron las fuerzas armadas durante la guerra interna que vivió el país.

¿Cómo fue esta matanza?. Según la Comisión de la Verdad y reconciliación (CVR), «los militares recibieron a los pobladores que llegaron a Putis y los reunieron en el local del colegio, juntándolos con otros pobladores a quienes los soldados habían sacado de sus viviendas. Les aseguraron que a partir de ese momento les darían protección y colaborarían con ellos en diversas obras para mejorar la calidad de vida de la población. Con ese pretexto, los militares ordenaron a los varones, apuntándolos con sus armas, que cavaran una gran poza. Les dijeron que era para construir una piscigranja en la que criarían truchas, mientras a otros les aseguraron que allí construirían casas. Sin embargo, cuando estuvo lista la supuesta piscina, los efectivos militares reunieron al centenar de pobladores alrededor de la poza, entre los que había hombres, mujeres y niños, y sin mayor explicación les dispararon

a matar”. ¿Quiénes fueron los militares que cometieron este abominable crimen?, es la pregunta que se hacen los sobrevivientes de Putis. Frente a esta pregunta los altos jefes de las Fuerzas Armadas han respondido con cinismo que no tienen ninguna relación de los soldados que estuvieron en el 1984 en esa localidad de Ayacucho. Por su parte el director adjunto de la Asociación Paz y Esperanza, Germán Vargas, declaró: «Este es uno de los cuadros más espantosos de los que hemos tomado conocimiento. Es importante que esta diligencia pueda ser seguida por el Estado, para que luego de ello podamos determinar las responsabilidades de quienes ejecutaron tal crimen» (39).

“Lo ví con mis propio ojos” es el testimonio de un soldado que estuvo en Putis cuando en 1984 ocurrió el exterminio de campesinos. (Aprodeh, 27 de noviembre 2001). “No hay persona que haya visto con sus propios ojos como yo. Hubo un llamado de pacificación, vengan, no va a pasar nada, por eso estamos acá. Llegaron de todos los cerros. Ellos han venido con todas sus cosas a Putis para formar un centro poblado. Porque pensaban que iban a estar mas tranquilos al lado de la base militar. Cada uno tenia ganado de 60, 70, 80 cabezas. Entonces, los jefes militares, mayores, comandantes, vieron por conveniente vender 40 toros y obtener regular dinero.

Tenían siete clases de animales para comercializar: ovejas, vacunos, caballos, mulas, chanchos, llamas y alpacas. Había gente conocida de Marccaraccay que trabajaba con la base militar y que dijeron por qué no matamos a esa gente y declaramos que son terrucos. Todos esos animales los venderíamos y tendríamos dinero?. Había unos cinco de Marccaraccay, pero la verdad yo no los conozco por sus nombres. Ellos a cada rato venían a la base trayendo el ganado que encontraban por acá, por allá.

Cuando íbamos de patrulla encontrábamos un montón de ga-

nado, ese ganado lo traíamos a Putis. La gente de Marccaracay se llevaba todo ese ganado. Vieron por conveniente matar a esa gente inocente y quitarle su ganado y venderlo a la gente de Marccaracay. Los trajeron por la mañana y los pusieron en ese caserón. Los engañaron, les dijeron vamos a hacer una piscigranja. Acá vamos hacer un cuadrado de tanto por tantos metros. Fueron más de tres horas. Todos los varones hicieron su propia fosa, ellos mismos. Tiene una profundidad de cerca de dos metros. Los comenzaron a matar de seis en seis. Una parte de los efectivos militares estaba más o menos a cuarenta metros, vigilando por donde podrían escapar. El corralón donde los reunieron era el centro educativo. No pretendieron escapar porque estaban acorralados. Eran 99, pero al final solo enterraron a 98. Una criatura se metió en un hueco de la construcción, no lo vieron y lo encontraron después de haber cerrado totalmente la fosa. El jefe dijo no, ya no quiero matar más. Fue un varón de la familia Calderón. Lo llevaron a Marccaracay, su madre lo reconoció y se lo devolvieron”.

LA MILITARIZACIÓN DEL PAIS

Entre 1980 y el año 1992, el país estaba completamente militarizado y atravesaba uno de los periodos más represivos de la historia de este país. En esa época más del 50% del territorio nacional estaba bajo el control absoluto de las fuerzas armadas. El poder judicial no tenía ninguna independencia y estaba sujeto al poder político del momento. La “libertad de prensa” de la que habla la CVR, daba los primeros pasos para devenir posteriormente una prensa mercenarizada que se alquiló a los regimenes de turno, principalmente al gobierno de Fujimori. Cuando la CVR alaba la “democracia” peruana, no lo hace en razón de que esta haya sido verdadera, sino para proteger a los gobiernos de turno, y a los políticos, quienes fueron responsables o cómplices directos de la carnicería que se impuso al Perú. En ninguna parte del mundo, un “sistema

democrático” mide su valor y legitimidad por el simple hecho que se realizan elecciones. Las elecciones en países como Perú, con una marcada militarización y una clase política corrompida, no son representativas del espíritu democrático del pueblo. Estas elecciones son jurídicamente ilegales en razón al sistema electoral mafioso que permite que narcotraficantes, putas, criminales y ladrones, puedan ser candidatos a parlamentarios y a presidente de la República.

De acuerdo a la cifra que entrega la CVR hubo cerca de tres mil víctimas mortales cada año. En el mismo periodo, dice esta comisión, 20 mil personas acusadas de militar o colaborar con las organizaciones subversivas pasó por las prisiones del Perú, y cientos de ellas fueron asesinadas en las cárceles del país. De otro lado, como lo resume una institución especializada del Perú (40), por lo menos son 43,042 huérfanos y 23,203 viudas o viudos que quedan de esta etapa. Más de 2000 prisioneros hacinados en cárceles medievales, cerca de 5 mil requisitorizados en el Perú y extranjero, y más de 500 mil personas desplazadas a causa de la guerra constituyen problemas actuales de la guerra civil que vivió el país. Este conflicto, dice la Comisión de Verdad y Reconciliación, fue mas violento y ocasionó más muertes que la guerra de independencia en 1821 y la guerra con Chile en 1876. Solo Ayacucho, con 26,259 personas ejecutadas o desaparecidas, constituye, según esta misma comisión, la región más afectada de 20 años de conflicto interno. En el censo de 1981 Ayacucho contaba con 503,392 personas residentes, lo que significa que los estragos mortales de la guerra afectaron al 5% de la población total.

BELAUNDE Y EL INICIO DE LA GUERRA INTERNA

La etapa inicial de la guerra sucia en Perú tuvo dos protago-

nistas principales: Fernando Belaúnde Terry, un civil y presidente del Perú, y Clemente Noel, un general de brigada del ejército peruano. En diciembre de 1982 Fernando Belaúnde, líder de Acción Popular (AP), ingresaba a su segundo año de gobierno. Era la segunda vez que se encontraba sentado en el palacio presidencial. La primera vez que llegó al gobierno fue en 1963 cuando ganó las elecciones generales convocadas por una Junta Militar. La desastrosa administración acciopopulista, admirable por los niveles de corrupción administrativa y el colapso económico llegó a su fin cuando las fuerzas armadas, en prevención de una exposición social peligrosa para el Estado y el sistema, le dieron un golpe militar en octubre de 1968. Previo al golpe militar el gobierno de Acción Popular estuvo rodeado de un gigantesco escándalo de contrabando en los que estuvieron implicados altos personajes del entorno presidencial. Pero la parte más aguda de este drama político resultó cuando Belaúnde hizo un contrato casi clandestino con la International Petroleum Company (filial de la Standard Oil of New Jersey), que venía operando en el norte del Perú por más de 50 años. El Contrato con la IPC fue calificado por los opositores políticos del gobierno, de “entreguista y contrario a los intereses del Perú”, en cuyo texto, entre otras cosas se anulaba ilegalmente el pago aproximado de 600 millones de dólares de impuestos que esta empresa debía al Estado, y se le otorgaba el monopolio por un espacio de 40 años en la refinería de combustibles y comercialización de la gasolina.

Fernando Belaúnde Terry (1912-2002) fue fundador y líder de Acción Popular (AP), partido político de la derecha liberal peruana que saltó a la palestra política en 1958 con un discurso electoral partidario de reformas y de cambios sociales. El jefe de AP era acartonado y tenía la costumbre de discursar como si estaría dando clases de geografía a estudiantes de primaria. Su tema favorito en geografía era la carretera “La Marginal” en la selva peruana. No tenía ningún brillo político, y no se le conoce ninguna obra intelectual importante. Sus correligio-

narios en Perú lo han presentado como un gran demócrata y contrario a los manejos corruptos en la administración del Estado, pero los hechos desmienten esta afirmación. Han ocultado que bajo sus dos gobiernos (1963-1968 y 1980-1985), la corrupción en las instituciones del Estado alcanzaron niveles de escándalos nacionales y las fuerzas de seguridad del Estado (militares y policías) cometieron miles de brutales crímenes contra la población. En su primer gobierno ordenó a las fuerzas armadas y fuerzas policiales reprimir con brutalidad criminal el movimiento guerrillero de 1965. En 1980 inaugura su segundo gobierno y paralelamente la guerrilla maoísta da inicio a la lucha armada. En 1982, a dos años de su segunda administración, Belaúnde repitió su experiencia anti-subversiva de su primer gobierno, y echó mano a los militares para que liquiden, a sangre y fuego, la subversión maoísta.

Era el 27 de diciembre del año 1982, y Belaúnde, acostumbrado a hablar más para la publicidad que para resolver los problemas del Estado y de la nación, lanzó un ultimátum a los “terroristas” y les dio un plazo de 72 horas para que depusieran las armas. “Entreguen las armas”, les dijo a través de los medios de comunicación. La respuesta fue una andanada de bombazos que se trajo abajo una docena de torres de alta tensión eléctrica que dejó en tinieblas varias ciudades, incluida la capital del país. El Partido Comunista del Perú (PCP) en un comunicado público distribuido en Ayacucho, anuncio que “A más represión habrá más acciones guerrilleras”, y que para ello contaba con “militantes debidamente organizados y estratégicamente ubicados” (41). El mismo día los subversivos destruyeron con fuertes cargas de dinamita la central hidroeléctrica de Paqcha a 170 kilómetros de Ayacucho.

Tres días después, el 30 de diciembre de 1982 el gobierno dispuso públicamente la intervención de las Fuerzas Armadas (FFAA) en la lucha antisubversiva. Un contingente de avanzada de 2000 efectivos del Ejército aterrizó en el aeropuerto de

Ayacucho. La prensa limeña los despidió como héroes desde Lima. Habló de ellos como si se hubiera tratado de modernos personajes de la Iliada de Homero, que iban a una guerra, no como los griegos a luchar para salvar el honor de un marido ofendido a quien le habían robado la hermosa mujer, sino para proteger la patria y la libertad, decía la propaganda. Una semana antes del anuncio oficial de la intervención militar en la lucha antiguerrillera, los altos mandos militares, habían ordenado que en secreto se trasladaran tropas especiales a la zona de Ayacucho. En la madrugada del 24 de diciembre, un batallón de paracaidistas de la División Aerotransportada y una unidad de Infantería de Marina salieron casi clandestinamente rumbo a la zona de guerra. El secreto de la operación, cuenta el general Clemente Noel, uno de los jefes militares de la época, se debió para llegar “en seguridad y por sorpresa a la ciudad de Ayacucho” (42).

El gobierno de Fernando Belaúnde había esperado dos años para entregar la lucha contrainsurgente a los militares. Antes de que los militares se involucren directamente en la guerra interna, el gobierno había tratado con desdén y desprecio a los subversivos. Los calificó con simpleza de “abigeos” (ladrones de vacas) o de desadaptados sociales a secas. Para acabar con ellos movilizó 50 mil miembros de las fuerzas policiales incluidos los “Sinchis” (Grupo de Operaciones Especiales de la policía) entrenados por expertos americanos. Los brutales crímenes policiales contra los maoístas y contra la población civil no sirvieron para detener el avance de la guerrilla. El 17 de mayo de 1980 la subversión realizó su primera acción armada en Chuschi, un alejado pueblo andino de Ayacucho. En esta acción para quemar las ánforas electorales participó, según información del gobierno, un grupo armado de 5 encapuchados. Los atacantes destruyeron los padrones y registros de los votos de las elecciones presidenciales que se realizaban el mismo día de esta acción. Veinticuatro meses después del acontecimiento subversivo en Chuschi, la guerrilla se había

extendido a los departamentos de Huánuco, Cerro de Pasco, Junín y Huancavelica. En los 8 primeros meses del inicio del conflicto armado (de mayo de 1980 a diciembre de 1982), la guerrilla maoísta había acumulado 1,342 acciones militares, lo que significó 167 acciones por mes (43). En el segundo semestre del 82, admite un alto general del ejército, “las Fuerzas Policiales habían perdido el control territorial en el área de Ayacucho” (44).

Se creía en la alta esfera del gobierno y en las clases políticas del país, que con la intervención de las fuerzas armadas, la guerrilla sería liquidada en un tiempo record, y por que no en 30 días, dijeron los más optimistas. Por ejemplo, Sinesio López, un dirigente de la izquierda oficial y columnista de El Diario Marka vaticinó en un artículo, que la guerra entre Sendero Luminoso y las fuerzas armadas sería “rápida”, y que los militares no tenían ningún interés en quedarse mucho tiempo en este conflicto. Según este analista, las “Fuerzas Armadas calculaban “que un mes es suficiente para pacificar la zona convulsionada. Ellas no tienen interés alguno en desempeñar por mucho tiempo el rol de represión interna que no les corresponde, que distrae sus energías y que las desgasta y desprestigia” (45). Falso cálculo de este izquierdista, y como se sabe los militares se quedaron dos décadas, y al momento de reprimir y asesinar a miles de peruanos, poco les importó el “desprestigio” y la fama de criminales que se ganarían en el seno de la población peruana.

EL GENERAL CLEMENTE NOEL

El primer día de enero de 1983, el general de brigada Clemente Noel Moral se trasladó a Ayacucho y tomó el mando del Comando Político Militar de la región. Las fuerzas policiales que durante casi dos años habían llevado todo el peso de la lucha antisubversiva seguían actuando, pero ahora lo hacían bajo

la dirección del ejército. La llegada de este militar a la zona más convulsionada del país se hacía en aplicación del plan estratégico estructurado en las más altas instancias del Estado para detener y liquidar la subversión maoísta. El parlamento, la iglesia y los partidos políticos vieron en el general Noel el salvador de la democracia y el pacificador del Perú. Sus pergaminos personales lo acreditaban con excelencia para esta tarea.

Noel era un soldado formado a la antigua, una especie de prusiano a la peruana. Un mamut militar que hablaba sin cesar del “honor militar” y de glorias del ejército inexistentes que él había inventado para elevar su ego personal. Ingresó al ejército en 1949 cuando aun se podía llegar a general por el camino del soldado recluta sin necesidad de pasar por escuelas militares. Pasó al retiro en 1987 cuando tenía 58 años de edad y nunca pudo llegar a general de división, el máximo cargo en la jerarquía del ejército. El mismo se autocalificaba “oficial distinguido del ejército” (46). Era anticomunista primario y se expresaba con simplicidad para dividir el mundo entre comunistas y no comunistas, entre demócratas y totalitarios. Para él no había término medio, y los que no estaban con los militares eran terroristas, y ellos debían ser o presos o liquidados. Sin mucha cultura política ni versado en los asuntos de la sociedad civil, tenía grandes dificultades para reconocer las diferencias entre un marxista y un socialdemócrata o entre un discurso humanista y una arenga subversiva. Ante cualquier crítica respondía con insolencia y llenaba de insultos a su contrincante. “Traficantes” dijo de los familiares de los periodistas muertos en Uchuraccay.

Como oficial fue alumno en la Escuela de las Américas manejada por el ejército norteamericano en Panamá, en cuyo centro los militares latinoamericanos se adiestran en la lucha contrainsurgente, y especialmente en las técnicas de torturas, secuestros y ejecuciones clandestinas de luchadores sociales.

El 1979 era la época de la dictadura militar del general Morales Bermúdez y fue nombrado prefecto del departamento de Lima. En 1981 el gobierno de Fernando Belaúnde le entregó el cargo de jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). Clemente Noel Moral, creyente hasta la religiosidad mojigata, le gustaba participar cada domingo, no en cualquiera de los 33 templos católicos que cuenta la capital ayacuchana, sino mas bien en la sagrada liturgia que se celebraba cada domingo en la hermosa catedral del siglo XVII ubicada con toda su majestuosidad en la Plaza mayor de Huamanga.

Ninguna de las acusaciones sobre violaciones de los derechos humanos que pesaban sobre Clemente Noel, impidieron que el gobierno de Fernando Belaúnde lo nombrara agregado militar en la embajada del Perú en Washington. Posteriormente, el gobierno de Alan García Pérez le extendió la recompensa y lo ratificó en el cargo que ocupaba en Norteamérica. El mismo gobierno aprista lo nombró representante del Perú en la Junta Interamericana de Defensa (JID), que como se sabe es un foro internacional que lo integran militares de alto rango de América Latina y de los Estados Unidos, formado para “cuidar de la defensa e integridad que surgen en el continente”. En esos cargos, jugosamente remunerados concluyó apaciblemente su carrera militar en 1987. Admitió que mientras estuvo como jefe militar en la zona de emergencia de Ayacucho, recibió el “respaldo del comandante general del ejército y del presidente constitucional arquitecto Belaúnde” (47). Murió el sábado 5 de marzo del 2007, el día mismo que debía presentarse ante un tribunal peruano que lo juzgaba por los crímenes, secuestros y desapariciones de ciudadanos que ocurrieron mientras fue jefe militar de Ayacucho. La muerte le llegó a los 75 años de edad, y nunca fue sancionado por los brutales asesinatos y torturas cometidos en la Casa Rosada ni en el cuartel Los Cabitos de Ayacucho.

El general Clemente Noel tenía pocas semanas como jefe mi-

litar de Ayacucho, cuando el 26 de enero de 1983, los comuneros de Uchuraccay asesinaron brutalmente a 8 periodistas y un guía (***)). Esta matanza fue propiciada por los militares y policías. No actuaron directamente en la masacre pero fueron los que instigaron y dieron la orden para el crimen de los periodistas que se proponían investigar el asesinato de siete adolescentes y niños a manos de comuneros ligados al ejército. Días antes del crimen de los hombres de prensa, el 22 de enero 1983 en la comunidad de Huaychao, un grupo de comuneros, instigados por los militares dieron muerte a 7 jóvenes y presuntos terroristas entre 17 y 13 años edad quienes fueron despedazados con machete. El mismo día del crimen los comuneros se trasladaron a Huanta para reportar a las autoridades militares lo sucedido con los siete supuestos subversivos. Los campesinos fueron felicitados y alentados a seguir matando a punta de machete a toda persona sospechosa de ser un senderista. Como contaron los diarios de esa fecha, el mismo presidente Belaúnde hablando de este hecho de sangre dijo en señal de triunfo: “Recientemente, una de esas comunidades, sin armas, se impusieron gallardamente al terrorismo que pretendía amedrentarla” (48). Otra revista peruana de la época, cuanta también que cuando el presidente se enteró del crimen de los niños y jóvenes en Huaychao, tomo el teléfono y llamó al general clemente Noel Moral, para decirle: “Muy bien general, ahora ya están recibiendo de su propia medicina. Siga usted adelante que cuenta con mi mas plena confianza y respaldo” (49).

El crimen de Uchuraccay, en el que el principal acusado fue el general Noel, quedo impune y después de 4 años de un juicio penal poco transparente en el marco de un poder judicial corrupto quedó en nada. Solo se condenó a 3 de los 18 comuneros que participaron en la matanza de los periodistas. Este crimen removió la conciencia política del Perú, y el gobierno de Fernando Belaúnde hizo algunas fintas para calmar los ánimos nacionales y del extranjero. Para este fin en 1983

se nombró una “comisión investigadora” presidida por el escritor Mario Vargas Llosa. Esta comisión, bien mediatizada, convirtió este crimen en una novela fantasiosa y encubridora, que como conclusión final atribuyó este crimen al miedo de los comuneros de Uchuraccay, sin mencionar que tras las piedras y los cuchillos de estos campesinos estaban las manos de las fuerzas militares, que con esta matanza inauguraban los grupos de defensa civil en el campo. El informe de la Comisión Vargas Llosa, entregada a inicios de Marzo de 1984, señaló en un extremo de parcialidad con los militares y el gobierno, que desde que las “fuerzas armadas asumieron la responsabilidad de la lucha antisubversiva, se han hecho esfuerzos para evitar excesos y por ejemplo, en Huanta y Tambo según testimonios recogidos por la Comisión la llegada de los Infantes de Marina ha tenido un efecto moderador y mejorado notoriamente las relaciones entre las fuerzas del orden y la población civil” (50). La comisión de Vargas Llosa, que quedó en la memoria de los peruanos, como el informe de la mentira y del encubrimiento de la matanza de Uchuraccay, paso por alto la responsabilidad de los militares y menos del gobierno. El general Clemente Noel Moral, apoyado por el gobierno y las fueras armadas, hizo fracasar la acción de los jueces y al final no recibió ninguna sanción. Con apoyo de una institución del Estado (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) publicó un alegato personal en formato de libro que tituló: “Ayacucho, testimonio de un soldado” (noviembre de 1989) cuyo texto, una especie de anacronismo militar sirvió para injuriar a periodistas, parlamentarios y todo opositor político. En el libro se hizo también un panegírico a la guerra sucia que las fuerzas armadas implantaron en Ayacucho y en todo el país.

Pero Noel Moral no llegó a Ayacucho solamente para elevar sus plegarias al cielo cada domingo en la mañana en las misas que ofrecía el Arzobispo de Ayacucho, Monseñor Federico Richter Prada. Estaba ahí para exterminar a la guerrilla maoísta y aquellos que simpatizaban con este movimiento.

Noel se instaló en cuartel los Cabitos ubicado a un costado del aeropuerto de Ayacucho. Aquí se constituyó el cuartel general del ejército, donde funcionaba la jefatura del Comando Político Militar. Desde los Cabitos el poderoso Clemente Noel impartía sus órdenes de muerte y suplicio de prisioneros y de toda persona sospechosa de pertenecer a las filas de la subversión maoísta. En forma secreta con la aprobación del gobierno y de la jefatura del ejército creó un cuerpo de inteligencia para Ayacucho, que durante casi todo el proceso que duró la guerra interna sería un grupo integrado por militares entrenados para el crimen cuya labor era secuestrar, torturar y eliminar presuntos subversivos. Sus miembros fueron reclutados entre el personal del ejército con experiencia en lucha antisubversiva. Para este fin hizo traer clandestinamente desde Lima 30 Agentes de Inteligencia Operativa (AIO pertenecientes al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE)). Este grupo llegó bajo la jefatura del comandante Edgar Paz, quien solo rendía cuentas al general Clemente Noel. La tarea de este grupo, fue hacer un “trabajo de campo” en la ciudad de Huamanga, y detectar a los senderistas y los posibles senderistas. Todo el trabajo, dice Jesús Sosa un suboficial de inteligencia que fue parte de este grupo de inteligencia, era “ubicar, capturar y desaparecer terroristas” (51).

Como da cuenta Ricardo Uceda en su libro “Muerte en el Pentagonito”, los agentes llegaron camuflados como vendedores ambulantes, y mientras ofrecían calzones de nylon, calzoncillos de tela barata, medias y otras vestimentas tomaban apuntes de los ciudadanos que ellos consideraban sospechosos de pertenecer a la guerrilla maoísta. Estos agentes, la mayoría de rostro cetrino, se alojaron como simples ciudadanos en los diversos hoteles de la ciudad. Al final del día tenían un encuentro secreto con un enlace de los mandos militares concentrados en el cuartel “Los Cabitos”, a quienes entregaban un escueto informe de sus investigaciones. Este grupo de inteligencia, como señala el mismo Clemente Noel, tenía la

misión de recolectar información “con el objeto de ampliar el conocimiento y así redefinir el dispositivo, composición, fuerza, mandos, equipamiento y accionar de los grupos subversivos que actuaban en la zona” (52).

LA “CASA ROSADA” Y EL CUARTEL “LOS CABITOS”

Cementerios secretos del Ejército, centros clandestinos de tortura, criaderos de chanchos que eran alimentados con carne humana proveniente de los subversivos sacrificados. Hornos gigantescos para incinerar a los prisioneros asesinados, experimentos de tortura inhumana, es el recorrido espeluznante de la accionar militar en la guerra contrainsurgente que puso en ejecución el Estado peruano para contener la lucha subversiva en el país. Entre 1983 y 1990, funcionaron en Ayacucho los más brutales centros de tortura y exterminio de prisioneros que manejaron las Fuerzas Armadas y el Estado peruano. Pocos eran los que salieron con vida del cuartel “Los Cabitos”, la Casa Rosada”, y de otros lugares de tortura instalados en Ayacucho. “Guerra sucia” la llamaron algunos como subterfugio para encubrir la naturaleza criminal de la accionar militar en la lucha contra la subversión. El 29 de diciembre de 1982 el gobierno de Fernando Belaúnde, con la complacencia del Congreso integrado por todos los partidos políticos, incluida la izquierda legal (Izquierda Unida), decretó el ingreso de las fuerzas armadas en la lucha contra la guerrilla maoísta que en ese tiempo estaba ubicada principalmente en la región de Ayacucho. Esta decisión, que algunos la calificaron de decisiva para el país y la “democracia”, ensangrentó el Perú, cuyo saldo de dos décadas de militarización fue cerca de 70 mil muertos a causa de la aplicación de los planes y estrategias diseñadas por el Estado y sus fuerzas represivas en la guerra contrainsurgente. Con la complicidad de medios de comunicación, de periodistas, de parlamentarios fantoques, de partidos

políticos, del poder judicial, e incluso de la iglesia católica del Perú, pueblos enteros y miles de ciudadanos peruanos fueron masacrados y eliminados.

En el cuartel “Los Cabitos, como parte de la estrategia contra-insurgente, se puso en funcionamiento un centro de torturas y crímenes de prisioneros. Para ello se construyó un horno gigantesco donde se incineraban los restos mortales de los detenidos. Al costado del cuartel militar se instalaron criaderos de chanchos, los que eran alimentados con una parte de los restos humanos de los presuntos subversivos asesinados. Recientes investigaciones de instituciones de derechos humanos del Perú han constatado que en este horno más de 300 personas fueron incineradas bajo el propósito de borrar cualquier rastro de su paso por los centros de tortura. La infraestructura para la tortura y crímenes al interior de Los Cabitos se complementaba con la instalación de un cementerio clandestino de dos kilómetros cuadrados en los alrededores de este cuartel. Según el testimonio de Jesús Sosa, quien tuvo activa participación en estos hechos, ahí habrían enterrado unas 500 personas, pero que “nadie conocería la cifra exacta a ciencia cierta”. Además, ese no era el único lugar donde se desaparecían las víctimas de los militares. Los acantilados, los barrancos, los ríos y las calles de Ayacucho servían también como cementerios abiertos de cientos de hombres y mujeres asesinados por las tropas del ejército y la policía. Como cuenta Sosa, no enterrar los cadáveres y dejarlos a la intemperie, era parte de una táctica militar psicológica para crear terror en la población. De esa manera en los años 1983, 1984 y parte del 1985, era común ver en los alrededores de Ayacucho restos humanos mutilados y en avanzado estado de putrefacción. Como anota, Sosa, “eran los días en que se mataba prisioneros sin haber sabido qué preguntarle, aunque, ese año, a la mayoría de cadáveres se les botó fuera del cuartel, en las quebradas del Infiernillo y de Huatatas, en los caminos y las calles” (53).

Cerca del cuartel “Los Cabitos”, funcionó desde 1983 hasta la mitad de la década del 90, la “Casa Rosada”, un centro de torturas y crímenes, donde de acuerdo al testimonio de un agente del ejército que participó en esas orgías de sangre, por lo menos se liquidaron mil subversivos. La “Casa Rosada”, se encontraba fuera de las instalaciones del cuartel. Era una amplia vivienda de dos pisos de color rosado, y de ahí le viene el nombre. En apariencia estaba utilizada por comerciantes limeños que nada tenían que ver ni con el ejército ni con la policía. Estaba ubicada en la urbanización Villa Jardín cerca del Aeropuerto de Ayacucho. Los miembros asignados a este centro de tortura y crimen, eran los mismos agentes de inteligencia que al comienzo de 1983 se hacían pasar como vendedores ambulantes en la capital de Ayacucho. Muchos de sus integrantes, que durante su estadía en Ayacucho adquirirían gran experiencia en torturas y crímenes, serían en la década del 90 durante el gobierno de Fujimori, cabecillas del grupo paramilitar “Colina”, que actuaba impunemente desde el cuartel central del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) en Lima. La Casa Rosada estaba dirigida por el mayor Carlos Bartoreli Rodríguez, y dos capitanes, uno de nombre Alatriza Ponce y otro de apellido Díaz, este último hermano del general Edwin Díaz, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) en el gobierno de Alan García. Estos tres oficiales del ejército dependían directamente del general Clemente Noel. En esta casa, se planificaba los operativos clandestinos que se ejecutaban cada día para secuestrar y asesinar sospechosos de pertenecer a la guerrilla maoístas o simplemente simpatizantes de ésta.

En apariencia la “Casa Rosada” era una instalación particular y nada tenía que ver con el ejército y menos con el Comando Político Militar de Ayacucho. Era una base clandestina y todos los que vivían en ella eran como fantasmas sin registro alguno en Ayacucho. Usaban nombres

falsos y tenían la cobertura de ser comerciantes, estudiantes o simplemente turistas. Este centro del ejército nunca fue descubierto ni por la guerrilla maoísta ni por las instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Su secreto fue absoluto y durante dos décadas ninguna persona sospechó que al interior había una intensa actividad de tortura y muerte. Para los objetivos contrainsurgentes esta casa era una coartada perfecta y escapaba a cualquier pesquisa de jueces, fiscales y periodistas que al recibir denuncias de las desapariciones en Ayacucho algunas veces inspeccionaron infructuosamente las celdas del cuartel Los Cabitos. Es por esta razón que el general Clemente Noel en una entrevista para la revista Oiga se jactó cínicamente que en el cuartel Los Cabitos no había detenidos ni el ejército estaba desapareciendo subversivos. Como prueba de su afirmación mencionó al fiscal de la Nación, Cavero Ugúsqiza, “quien ha recorrido nuestras instalaciones sin encontrar ningún detenido”. Agregando que en el “cuarte Los Cabitos no hay detenidos. Cómo puedo tener aquí a tantos detenidos. Me crearían problemas de vigilancia, alimentación, etc.”(54). Cuando este militar hacía esas declaraciones, según las denuncias del fiscal Ricardo Pequeño Valdivia, había en Ayacucho un promedio de 6 a 8 personas desaparecidas por día, las cuales nunca serían encontradas con vida.

Tanto en el cuartel “Los Cabitos”, como en la “Casa Rosada”, los métodos de tortura estaban dirigidos a hacer sufrir indescriptiblemente al prisionero. La “colgada”, la “tina”, la “electricidad”, el “vuelo”, la “dieta”, y la “compasión”, fueron de uso corriente en las torturas que inflingieron los militares contra sus víctimas. En el caso de la “colgada”, la víctima era amarrada de los brazos hacia atrás para ser suspendida en el aire. Una vez el aire recibía golpes con objetos contundentes. La masacre duraba hasta que el prisionero perdía el conocimiento. Muchas veces los huesos de los brazos de la víctima se quebraban por el esfuerzo de estar suspendida en el aire o

por los golpes que recibía. El “PALO”, significaba que el prisionero era colgado de los brazos en un travesaño de madera (el palo), y era tirado de los pies hacia abajo hasta casi quebrarle los huesos de los brazos. “Así como se cuelgan a las reses, se colgaba a las personas, a todo sospechoso...y era tan doloroso que la mayoría no aguantaba mucho y hablaba”, dice el agente. El otro sistema preferido por los torturadores era la “TINA”. Esto significaba que el prisionero era amarrado de los brazos y se le sumergía en una especie de tina repleta de agua, que en el mayor de los casos era mezclada con suciedad o con detergente. Todo era calculado para que la víctima al ser sumergida en la “tina” bebiera cantidad de agua hasta vomitar. Sólo era sacada a la superficie cuando sus pulmones estaban a punto de explotar. El plan de tortura era no matar al prisionero en un día y menos en una sólo sesión. Cuando más resistía era mejor para ablandarlo, y quizás soltaba alguna información que interesaba al verdugo. Generalmente hablaban, aunque también habían otros que no hablaban, sino que daban vivas a su partido”. A este por lógica lo mataban en el acto (55).

La “electricidad”, se aplicaba en seco o con el cuerpo mojado. La víctima, mujer u hombre, era desnudada y se le amarraba sobre una “mesa de trabajo”. Las descargas eléctricas se aplicaban de preferencia en los dientes, en los genitales y en el ano. En general los cables de electricidad eran introducidos en heridas abiertas que con anticipación los verdugos habían infringido a los prisioneros. Este método era sumamente doloroso, y muchas veces, cuentan los mismos verdugos, los prisioneros se desvanecían desde la primera descarga eléctrica. El “vuelo” era un método mas sofisticado y se necesitaba, aparte de los instrumentos manuales de tortura, un helicóptero. La víctima en este caso, era torturada en uno de los centros militares, y después de ello era conducida a “dar una vuelta” en helicóptero. El prisionero era amarrado de los pies con cables de nylon bastantes resistentes y en pleno vuelo era

arrojado al vacío. Ahí en el espacio su vida dependía del cable con el cual estaba sujetado y de la resistencia de los huesos de sus pies. Si las amarras que sujetaba a la víctima no estaban bien hechas, y los pies se deslizaban fuera del nudo de la cuerda, era el fin del prisionero. El “vuelo” podía durar el tiempo que determinaban los militares y ello podía ser 5 minutos como también varias horas. El helicóptero militar daba vuelta en redondo encima de altas colinas andinas y la sentencia de muerte podía darse cuando los verdugos decidían cortar los cables que sujetaban la víctima.

Testimonio de Esteban Canchari Cacñahuaray, uno de los pocos prisioneros que salió vivo del cuartel Los Cabitos. Ayacucho 1983. “Al llegar al Cuartel Los Cabitos (...) permanecí cerca de un mes, en que fui sometido a diversos abusos: Me ataron las manos hacia atrás y me colgaban, me golpeaban severamente, me sumergían en una tina con agua, me aplicaron descargas eléctricas en el ano, entre otras clases de torturas. Me maltrataban de dos a tres veces por semana. El tiempo de las torturas era oscilante entre una hora a varias, hasta perder el conocimiento. (...) En dos oportunidades fui colgado de un helicóptero en vuelo, atado con una soga mientras con el pie era balanceado como un columpio. Otro día mientras permanecía preso pude percibir que frente a mi celda había otras personas detenidas, las cuales gritaban y se quejaban de dolor...” (56). Otro sobreviviente, esta vez de la “Casa Rosada”, que sin dar su nombre testimonio para la Comisión de la Verdad y Reconciliación, narra que en abril de 1983, varios encapuchados lo introdujeron violentamente en la camioneta y fue conducido a La Casa Rosada. “Todo el tiempo que estuve detenido fui torturado al igual que todos los que estuvimos allí. Nos sacaban a otro lugar, que era un cuarto más amplio donde había cilindros de agua, una polea con soga, cables de electricidad y otras personas con quienes me confrontaban para que las reconociera. Cada vez que negaba conocerlas, varios oficiales me golpeaban con palo. Además me colgaban

de una polea por espacio de un minuto, me bajaban para golpearme y me volvían a colgar. También trataban de ahogarme sumergiéndome en un cilindro de agua por espacio de dos a tres minutos. Durante todo ese tiempo había una radio que tocaba música a muy alto volumen. En una ocasión, uno de los soldados orinó en mi boca cuando le pedí agua” (57).

La “dieta” era simple, pero tan mortal y dolorosa como los otros métodos de tortura. En este caso el prisionero era recluido en un pequeño espacio oscuro, y aislado completamente del mundo exterior. Durante días y semanas no recibía ningún tipo de alimento y solo tenía derecho a un poco de agua, que en algunos casos expresamente era contaminada con suciedad. Algunos prisioneros que sobrevivieron a este suplicio cuentan que, después de algunos días sin comer y sólo bebiendo agua podrida, perdían cualquier resistencia física y mismo la voluntad de vivir. La diarrea y el hambre era el preámbulo de la muerte final. La “compasión” es un método de tortura psicológica bastante cruel.” Se refiere a torturar a un familiar del prisionero acusado de subversivo. Podía ser la esposa, el hijo, la madre o padre de la víctima quienes eran detenidos y torturados brutalmente para “ablandar” al subversivo preso. El prisionero estaba obligado a mirar y escuchar los gritos y lamentos de tortura que infringían a su ser querido. Frente al sufrimiento de un familiar, dijo un torturador, el prisionero no tiene otra solución que entregar información. El método de la Compasión o algo parecido a ello fue aplicado por primera vez en Perú por los españoles en el siglo XVIII, cuando los colonialistas tuvieron que enfrentar uno de las rebeliones indígenas más grandes del continente americano. El 18 de mayo de 1781, Túpac Amaru, antes de que le corten la lengua, y que lo amarren a cuatro caballos para que lo descuarticen, fue obligado por los jueces españoles a presenciar el suplicio, la tortura y muerte atroz de sus hijos y de su valerosa esposa Micaela Bastidas. También tuvo que ser espectador de la muerte de sus principales jefes de su ejército de liberación.

Un caso más reciente data de julio de 1983 cuando un comando del ejército ingreso violentamente en el domicilio de Edgar Noriega Ascue, ubicado en la ciudad de Huamanga. Casi desnudo lo sacaron de su casa y lo llevaron al cuartel Los Cabitos. Los militares lo acusaron de ser “cabecilla de sendero luminoso”. Desde su llegada al cuartel lo torturaron e incluso lo amenazaron con ejecutarlo inmediatamente si no admitía ser parte de la subversión. “Al llegar al cuartel Los Cabitos permanecí cerca de un mes, en que fui sometido a diversos abusos”, dice este sobreviviente. Cuenta también que le aplicaron la “colgada”, la “electricidad” y el “vuelo”, pero lo más difícil fue cuando capturaron a Olga Gutiérrez, su esposa. Ella estaba embarazada, pero ello no evitó que la torturaran para que Edgar Noriega, “reconociera su militancia en el Partido Comunista del Perú (PCP). El testimonio de Olga Gutiérrez, entregada a la Comisión de la Verdad y reconciliación (CVR), es estremecedor, y señala que fue llevada al cuartel Los Cabitos donde fue torturada varias horas y que “luego de aproximadamente cuatro horas fui sacada y conducida nuevamente al otro cuarto para que me interroguen. Allí ante mi negativa de aceptar los cargos que me formulaban soy golpeada increpándome: «ahora vas a escuchar una voz». En ese momento escucho los gritos de dolor de mi esposo Édgar Noriega Ascue, que era torturado [...] a él le empiezan a interrogar para que acepte la acusación de ser terrorista. Al negarse mi esposo en aceptar dichas acusaciones le dicen con groserías: «ahora vas a escuchar», y a mí me empiezan a torturar con golpes de puño en la espalda y en la cabeza y me rompieron ambos brazos” (58).

Lo métodos de tortura aquí mencionados, no son suficientes para describir el destino que le esperaba a una persona sospechosa de pertenecer a la subversión que por desdicha caía en manos de militares o policías. Hubo otras formas de tortura que es imposible de imaginar. Por ejemplo, el “suero de

la verdad” (en su versión peruana), fue una invención de la insania mental de los militares. Este método estaba dirigido a hacer sufrir al extremo a los prisioneros antes de matarlos. Se trataba de un veneno intravenoso que afectaba el cerebro y las articulaciones. Una dosis bastaba para que el prisionero tuviera una muerte lenta, atroz y dolorosa. Jesús Sosa Saavedra (****), un ex miembro del ejército que participó en los centros de tortura en Ayacucho, cuenta el caso de una de las víctimas. Se llamaba Javier, y era delgado pero sólido. Tenía 30 años y fue capturado en 1984 cuando se dirigía de Lima a Ayacucho. Lo acusaban de ser un enlace entre la dirección del Partido Comunista del Perú (PCP) y las fuerzas guerrilleras en la región ayacuchana. En los primeros días de cautiverio fue torturado, y lo colgaron de los brazos. Casi lo ahogan en una tina de aguas infectas de suciedad, y le pusieron cables eléctricos en las partes genitales. No habló nada, y eso hizo que su estadía en el cuartel “Los Cabitos terminara rápido pero con grandes sufrimientos. El comandante Jorge Contreras decidió probar con este prisionero una inyección letal que según él podía acabar con la víctima en cinco minutos. ¿Me van a matar, dijo el prisionero?. No, dijo el comandante Contreras, sólo te vamos a inyectar esto que es el suero de la verdad, porque queremos saber si nos has dicho la verdad, mintió el militar cínicamente (59).

De acuerdo al relato de Sosa, el “suero de la verdad” fue inyectada en el brazo derecho de la víctima. Las convulsiones comenzaron con violencia, y cayó por tierra. Emitía gemidos y se contorsionaba con dolor. Se arrastraba por el piso en medio de vómitos y alaridos. Había perdido cualquier control de sí mismo, y en ese trance miraba con desesperación. Daba saltos y sus movimientos eran tan violentos que entre todos lo sacaron afuera porque la pieza en la que estaba quedaba chica para sus violentas contorciones. Así estuvo más de 10 minutos y no moría, por el contrario parecía que el sufrimiento cada vez era peor. Jesús Sosa, cuenta que “se acercó al

agonizante. Le buscó el rostro y lo que vio fue una mirada llameante, tan intensa que lo persiguió durante años. Sus ojos sin parpadear, lo buscaban con desesperación. Sus órbitas estaban completamente abiertas mientras seguía sacudiéndose. Sosa, que nunca había sentido compasión con sus víctimas, sacó su pistola y sin pensarlo, le disparó a la cabeza. No hay por que joderlo tanto dijo (60).

Ese no fue el único caso de “inventos” para asesinar prisioneros. Según otro relato de Sosa, era 1984 y él se encontraba en esos momentos en la “Casa Rosada”. Habían capturado a un joven con la pinta de pertenecer a la subversión. Era de estatura baja pero fuerte. La tortura no le hizo ningún efecto y se cerró en un mutismo que exasperó a sus verdugos. A uno de los agentes se le ocurrió usar al prisionero para probar la resistencia de los chalecos antibalas regalados algún tiempo atrás por el ejército argentino. Había dudas de la resistencia y calidad de este producto argentino. La noche era despejada y clara. Trajeron al prisionero y le colocaron un chaleco antibalas color azul. Lo sacaron al exterior de la casa y con una cuerda lo sujetaron a un árbol. El militar que organizaba la “fiesta” contó 25 pasos alejándose desde donde estaba amarrado el joven subversivo. Con el pie hizo una raya en el suelo y señaló que desde ahí dispararían las pistolas. Siguió contando sus pasos, y cuando llegó a 50 dijo que era la marca para las metralletas. La fiesta ha comenzado gritó al mismo tiempo que desenfundaba con rapidez su arma y disparaba.

Eran 8 militares y querían a probar balas de revólver Colt calibre 38 y pistolas Browning de 9 milímetros. Había también fusiles de guerra FAL y HK G3. Como recuerda Sosa, esta ejecución “fue un ejercicio corto. Cuando el primer tirador disparó una pistola desde los 25 pasos, el cuerpo impactado dio un brinco, y la cabeza cayó hacia un costado. Un agente fue hasta el cuerpo vencido del supuesto senderista. Yo creo que este cojudo ya está frito”, dijo. Examinó el chaleco y “vio que

la bala lo había perforado como si fuera un bizcocho”. Jesús Sosa, que también participó en esta orgía de sangre, declaró que los tiradores de pistola siguieron disparando a pesar que el subversivo sacrificado no daba ninguna señal de vida. Los soldados con metralletas no quisieron perder la oportunidad de disparar a un cadáver, y desde los 50 pasos dispararon con placer. Estas armas de guerra de grueso calibre lanzaron ráfagas, hicieron que el cuerpo inerte sin vida bailara de un lado para otro al compás de las balas. La sangre corría por sus pies como serpenteando el suelo. “Estos chalecos argentinos son una mierda” dijo Jesús Sosa, en señal de haber terminado la prueba de los chalecos argentinos y la ejecución del sospechoso de pertenecer a la subversión.

Con las prisioneras había otro trato, pero no mejor al que se daba a los prisioneros varones. Ellas, antes de ejecutarlas, eran violadas en grupo por los soldados. Si alguna prisionera ponía resistencia era violentamente tratada y asesinada inmediatamente. Era mediado de 1984, dice Sosa, y había un grupo de siete mujeres jóvenes prisioneras. Ellas iban a ser liquidadas en los próximos días. Todo había sido planificado con anticipación, incluso se había nombrado a quienes serían los ejecutores y el lugar donde serían enterradas. Un grupo de agentes pidió permiso al mayor Bertarelli, para “tomar” a las prisioneras, “que de todas maneras serían ejecutadas”. Entre los argumentos que dieron al oficial, señalaron que por ellas nadie reclamaría y si lo hacían ya no serviría de nada por que estarían bajo tierra. Bertarelli aceptó, y todas las prisioneras fueron violadas hasta la medianoche. Al siguiente día muy de temprano fueron eliminadas con un tiro en la cabeza cada una. Las enterraron en dos fosas comunes, una de a tres y otra de cuatro (61).

Un testimonio vívido de la brutalidad a la que eran sometidos los prisioneros en el cuartel los Cabitos viene de una víctima de esos horrores. Se llama Canchario, y al momento de su su-

plicio era profesor en Soccus, donde una patrulla de “Sinchis” asesinaron a 69 personas en agosto de 1983. Este testimonio, que hemos tomado de un diario de Lima (62) narra con exactitud los suplicios que padecían los desdichados que llegaban ese cuartel. «Ya no soy normal, no puedo dormir, tengo miedo», dice Canchario. Él fue torturado salvajemente en 1983 en el cuartel Los Cabitos: «Yo era profesor en el distrito de Soccus. Llegaron a mi casa y me sacaron. Me rebuscaron, decían que yo era comunista cuando yo era de Acción Popular (*****). Querían que firmara una declaración echándome la culpa de la muerte de unos policías. Me patearon las costillas, me destrozaron a golpes, me mandaron a lo que llamaban pollos a la brasa, con ganchos, me colgaron y amarraron los pies con sogas y me siguieron castigando hasta que me rompieron la nariz y el brazo izquierdo. Me metieron después a un cilindro y casi me ahogan». Como da cuenta la misma víctima, mientras que estuvo en las instalaciones del cuartel Los Cabitos, “vi cómo violaban a las mujeres y las metían en sacos y se las llevaban en helicópteros para arrojarlas en alguna quebrada”. Canchario al final de cuentas, tuvo mejor suerte que cientos de prisioneros, y fue dejado libre. Un año y medio después, en 1985, su hijo Prisciliano Canchari, apenas de 18 años fue secuestrado por los militares y llevado al mismo cuartel y de ahí nunca salió. Hasta la actualidad él sigue buscando los restos mortales de su hijo enterrados seguramente en algún cementerio clandestino de Ayacucho.

Durante los gobiernos de Fernando Belaúnde (1980-1985), de Alan García Pérez (1985-1990) y de Alberto Fujimori (1990-2000), se ocultó que el cuartel Los Cabitos servía de centro de torturas y de exterminio de prisioneros. Menos se supo de la existencia de la casa “Rosada”, y su utilidad como base clandestina para secuestrar, torturar y asesinar presuntos subversivos. Recientemente algunas investigaciones han arrojado evidencias bastantes claras y confirman que en este cuartel y su anexo la Casa Rosada funcionaban los centros de tortura

y muerte más brutales que en esos momentos tenía las fuerzas armadas en Ayacucho. Según Jesús Sosa, testigo y miembro del grupo de inteligencia de Ayacucho (63) las víctimas de estos centros de tortura, en la mayoría de los casos eran torturadas en la casa Rosada y enterrados en el cementerio clandestino del cuartel Los Cabitos. En el año 2005, Gloria Cano, representante legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) reveló que una reciente investigación en el cuartel Los Cabitos halló los restos humanos de 12 personas, y que las víctimas tenían restos de tela en la cabeza (las capuchas que utilizaba los soldados antes de ejecutar) y que presentaban orificios de bala en el cráneo. Esto dice, la señora Cano, “No hace más que evidenciar la función que cumplía el cuartel como centro de reclusión, tortura, desaparición y ejecución extrajudicial, durante la gestión de Clemente Noel Moral, Adrián Huamán Centeno y Wilfredo Mori Orzo, jefes político militares de Ayacucho entre 1982 y 1985” (64). En junio del 2008, un equipo de 20 antropólogos forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) bajo la dirección de la Fiscalía Supranacional de Ayacucho, reveló que por lo menos mil personas ingresaron detenidas al cuartel número 51 conocido con el nombre de Los Cabitos y que nunca más salieron. Reveló también, que por el momento habían encontrado 81 cuerpos y restos humanos en un terreno al interior del cuartel que servía de cementerio clandestino. De las 81 víctimas tres eran niños entre 4 y 12 años de edad, y tienen las manos atadas atrás y un disparo de bala de revólver en la cabeza. Ahora se puede comprobar, dijeron los investigadores, estas víctimas antes de ser asesinadas con tiros en la cabeza evidencian “signos de torturas, huesos largos rotos. Por lo que se concluye que fueron duramente golpeados y luego eliminados”. Luis Bromley Coloma, responsable del equipo de investigación, dijo que era “escalofriante lo que vamos descubriendo en cada fosa: hombres, mujeres y niños asesinados. Un niño y un no nacido no son terroristas, no hay justificación para sus muertes» (65).

Según el testimonio de un agente que estuvo destacado en la Casa Rosada que fue entrevistado por el diario La República en enero de 1995 (66), los efectivos salían en operaciones cada día entre las dos y cinco de la mañana. El día anterior habían recibido los informes de los agentes “sembrados” en diferentes lugares de la vida civil de esta ciudad. Los blancos eran la universidad San Cristóbal de Huamanga, las barriadas populares y las escuelas secundarias. Para los operativos los agentes iban vestidos de civil y usaban pasamontañas para cubrirse los rostros y el arma preferida eran las pistolas con silenciador. En una noche, si todo pasaba como se había planificado, se secuestraba entre 5 y 6 personas, y como testimonio el agente, “En el camino, cuando sabíamos que era un terrorista declarado, se le eliminaba”. Los sobrevivientes eran conducidos a la Casa Rosada, donde les esperaba las peores torturas, y en mayor de los casos, una muerte segura.

Habo prisioneros que sobrevivieron a la Casa Rosada. No fueron muchos, y la mayor parte de ellos eran personas sin ninguna simpatía por la subversión que habían sido detenidas por error o que falsamente habían sido “delatados” por un senderista arrepentido. Lo que si era seguro es que ninguna persona, ya sea hombre o mujer, considerado militante o simpatizante de la guerrilla maoísta salía vivo de la casa Rosada o del cuartel Los Cabitos. Los pocos que vivieron para poder contar su historia eran en general personas sin ninguna historia política o sindical que los militares dejaban libres cuando consideraban que ello no significaba ningún peligro para sus futuras operaciones. Cuando un prisionero, mismo que se consideraba inocente, pero que resultaba embarazoso para el ejército y sus acciones secretas, se le eliminaba. Los cadáveres de estas víctimas eran enterrados en el cementerio clandestino del cuartel Los Cabitos, o arrojados en las afueras de Ayacucho. Cuando los agentes salían de patrulla a las “bases de avanzada” alejadas de la ciudad, la orden era implaca-

ble: “si encuentran terroristas, los eliminan en el acto y a los sospechosos los traen” al cuartel o a la casa Rosada. Todos esto, tanto las acciones de patrullaje, así como el destino que deparaban los militares a los prisioneros, era de pleno conocimiento del general Clemente Noel jefe del Comando Político militar de Ayacucho, y era el único que podía establecer y modificar los planes contrainsurgentes.

“Con respecto a los cadáveres, el destino dependía del lugar. Si estábamos en Ayacucho, los cadáveres eran llevados al cerro Acuchimay, por donde hay un pueblo joven llamado San Juan Bautista. Por ahí hay una serie de quebradas y pasajes oscuros. Se llevaba a los detenidos de noche y se le disparaba en la cabeza. Todos los tiros eran en la sien, y se les arrojaba a la quebrada. En el cuartel Los Cabitos también existe un cementerio. Al fondo hay una chancheria y un precipicio inmenso donde termina el cuartel. Allí estaba la sala de torturas. Yo también he trabajado ahí. Su construcción era rústica, con calaminas y paredes de cemento. Había un tronco bien fuerte como un travesaño y sogas para colgar a los prisioneros” (67).

Alimentar chanchos con restos humanos de prisioneros no fue una práctica contrainsurgente específica de Ayacucho. En Apurímac, otro de los departamentos convulsionados por el avance de la subversión también se utilizó los chanchos para desaparecer los cuerpos de los presuntos senderistas asesinados por los soldados. En tiempos normales un criadero de chanchos está destinado a ser una despensa de carne fresca de cerdo, pero un sobreviviente de un centro de tortura militar ubicado en el departamento de Apurímac narró que los soldados alimentaban estos animales con los restos mortales de los prisioneros secuestrados y asesinados. Como en Ayacucho esta chanchería estaba ubicada cerca del centro de tortura y muerte de prisioneros. En septiembre de 1989 Edgar Vivanco, fue secuestrado por una patrulla del ejército y llevado al cuar-

tel militar ubicado en el pueblo de Capaya. Este pueblo andino pertenece a la provincia de Aimaraes en el departamento de Apurímac. En ese cuartel permaneció 46 días, y cada mañana a la 5 de la madrugada los soldados lo sacaban de su celda para torturarlo. Desde el inicio lo colgaron de los brazos hasta quebrarle los huesos. Tenía los ojos vendados y lo sumergían hasta casi ahogarlo en un depósito de agua infecta. Según el testimonio de Vivanco, la tortura que más lo hizo padecer de dolor fue cuando sus verdugos le introdujeron en el ano una varilla de metal puntiagudo caliente. Con el mismo instrumento, casi al rojo vivo, le picaron diversas partes del cuerpo hasta hacerlo sangrar abundantemente. Ahí en el cuartel de Capaya, Vivanco presenció aterrado como los cadáveres de prisioneros eran despedazados, cuyos trozos eran entregados a chanchos hambrientos. Edgar Vivanco fue el único que salió vivo de este centro de tortura. Huyó a Lima donde se refugió y ahí fue entrevistado por un canal de la televisión francesa (68).

TORTURA Y MUERTE EN AYACUCHO

El general Noel supervisaba personalmente sus centros de tortura, en particular el que estaba instalado en el mismo cuartel Los Cabitos que le servía de cuartel general de la lucha contra-insurgente en Ayacucho. En testimonio desgarrador, una de las víctimas que pasó por este cuartel y que milagrosamente salió vivo cuenta que una noche pudo reconocer al general Noel, cuando con una linterna miraba los rostros triturados de los prisioneros. Olga Gutiérrez aseveró que en horas de la noche, cuando se encontraba durmiendo, un grupo de oficiales inspeccionó a los detenidos. Alumbrada por una linterna, despertó y saludó a una persona que confundió con un tío suyo. Después reparó en que esa persona era el general Noel Moral, a quien había visto en televisión y en los desfiles que se realizaban en la plaza de armas de Huamanga. Después

de eso, soy llevada encapuchada a otro ambiente, en donde soy nuevamente interrogada pero esta vez con palabras suaves. El militar que me preguntaba era el mismo al que había confundido con mi tío y me hablaba diciéndome hijita. Éste me dijo que en vista que no me habían encontrado nada iba a salir en libertad y mi esposo también ya pronto. En horas de la noche soy subida a un camión y arrojada en una frazada envuelta al frente de mí domicilio, en horas de toque de queda. Cuando logré descubrirme pude ver cuesta abajo que el camión en donde me trajeron a mi casa era un vehículo civil marca Dodge 300.91. A su vez, Édgar Ascue narró que tras permanecer un mes recluido en las instalaciones del cuartel Los Cabitos, fue trasladado a la dependencia de la Policía de Investigaciones de Huamanga. Allí —añadió— permaneció 15 días sin recibir maltrato alguno. Luego fue liberado (69).

CARLOTA TELLO CUTTI EN LA CASA ROSADA

Carlota Tello Cutti, conocida bajo el seudónimo de “camarada Carla” estuvo también en la Casa Rosa. Ella fue junto con Edith Lagos otra joven guerrillera fueron las militantes del Partido Comunista del Perú (PCP) más conocidas de Ayacucho y en todo el país. Carlota Tello o “camarada Carla”, tenía 22 años cuando cayó prisionera el 14 de noviembre de 1984, en un lugar denominado Pangora (provincia de Huamanga). La captura y muerte de esta joven subversiva fue a causa de la traición y delación de un militante de su mismo partido que se convirtió en colaborador del ejército. Como revela Jesús Sosa, en libro Muerte en el Pentagonito (70), el delator entregó al ejército la información sobre la reunión partidaria que se realizaba en Pangora donde se encontraban reunidos 13 miembros responsables de la guerrilla de la región. La redada militar no se hizo esperar y en el sorpresivo ataque que realizó el ejército murieron 6 subversivos y fueron capturados tres jóvenes mujeres y cuatro varones. Una de las mujeres era

la “camarada Carla”, las otras eran Elizabeth Barboza y Clara Elvira Ramírez Aranda, esta última era la responsable del grupo, pero al momento de la captura los militares creían que la dirigente de mayor rango era Carlota Tello. El mismo 14 de noviembre en la noche, la “camarada Carla” y los otros prisioneros, cuenta Jesús Sosa, fueron conducidos al cuartel Los Cabitos. El ingreso a esta base militar fue clandestino y de ahí como era la regla no saldrían jamás vivos. Antes fueron brutalmente torturados y las mujeres, como antesala de la muerte, fueron violadas. Ahí fueron recibidos por el mayor Jorge Contreras quien organizó las sesiones de tortura que duraron 4 días. A los hombres les rompieron los brazos al momento de hacerles “la colgada”. Muchos se quedaron sin dientes por los puntapiés en plena boca. Eran sumergidos en cilindros con aguas pestilentes, desde donde eran sacados solo para que respiren y no se ahoguen en el acto.

Carlota Tello vestía un pantalón y camisa negra, y llevaba sus cabellos negros recogidos en la parte superior de la nuca. Su “mirada era desafiante”, y los militares la “tomaban por el mando más importante en el grupo”, cuenta Sosa. Como narra este miembro del ejército, los encargados de torturarla le pidieron que colaborara para salvar su vida, y su respuesta fue tajante: “No les tengo miedo, y morir es parte de la lucha”. En ningún momento sintió miedo de la muerte próxima, y mantuvo una conducta admirable frente a la tortura y las amenazas de los militares. Se burló de posmilitares y de sus amenazas de hacerla sufrir antes de morir. Su coraje fue ejemplar y los demás prisioneros mantuvieron una conducta digna y valerosa, dice Sosa. “Ustedes no son ciudadanos, ni políticos. Solo son militares. Perros guardianes del sistema”. Ella había comprendido la proximidad del fin de su vida y respondiendo a uno de sus torturadores, dijo: “Yo ya estoy muerta, pero el partido nunca va a morir. Cuando yo esté muerta, el partido lo aniquilará. Además moriré sabiendo que venceremos. En cambio, usted morirá sin saber por qué.Todas las

revoluciones triunfaron en su momento: la francesa, la rusa, la china. Así ocurrirá en el Perú”. La moral y el valor de Carla, se dice en el libro de Uceda, conmovió al mismo Jesús Sosa quien al final de las sesiones de tortura, se preguntó: “¿Yo sería así si estuviera en su pellejo?. Y las dudas le quedaron para toda su vida”. Testimonio del libro Muerte en el Pentágono. Loq cementerios secretos del Ejercito Peruano (71).

La “camarada Carla” era presentada por la prensa peruana como la sucesora de Edith Lagos, otra joven maoísta que murió el 3 de septiembre de 1982 en un enfrentamiento con la policía cuando solo tenía 19 años de edad. El choque con la policía fue en Andahuaylas y sus captores la remataron cuando la tomaron prisionera gravemente herida. Edith Lagos era solamente militante de base del PCP, pero después de su muerte se convirtió en una figura ejemplar de la joven y rebelde mujer peruana. En su entierro el mes de septiembre en la ciudad de Huamanga, participaron cerca de 30 mil personas, lo que convirtió este cortejo fúnebre en la más grande manifestación política de la historia ayacuchana. Ella era estudiante de Derecho en la Universidad San Martín de Porras en Lima, y desde 1980 se vincula a la guerrilla maoísta. Hija de un rico comerciante de Ayacucho no se deja asimilar ni atraer por la burguesía provinciana, y desde muy joven se sintió atraída por el marxismo y por los propósitos de participar en una lucha armada que conduzca a la liberación del país. En marzo de 1982, la guerrilla maoísta, en una acción militar sin precedentes hasta esos momentos, atacó la cárcel Central de Huamanga, y entre la centena de prisioneros de guerra liberados se encontraba Edith Lagos.

El destino de Carlota Tello y de los otros prisioneros de la casa Rosada se definió cuando los militares vieron que nada, salvo las burlas y las expresiones de coraje podían sacar de ellos. Sosa, presente en esos menesteres sanguinarios, narra que el final de esos prisioneros incluida a la camarada Carla

y Clara Elvira Ramírez Aranda, uno de los mandos políticos de la zona, no fue diferente a los cientos de prisioneros que habían pasado por la casa Rosada. Según Sosa, uno a uno fueron llevados al cementerio clandestino del cuartel Los Cabitos. Tenían los rostros cubiertos con una capucha, y a paso lento llegaron a las fosas comunes que de antemano habían preparado los militares para esta ejecución. Ahí al borde de las zanjas fueron acribillados con tiros certeros en la cabeza. Posteriormente el 17 de junio de 1988, a cuatro años después de la ejecución clandestina de la “camarada Carla”, una columna militar de 50 soldados atacó Cuticsa, un poblado ubicado en el departamento de Huancavelica a 120 kilómetros de Ayacucho. En ese pueblo vivía la mayor parte de la familia de Carlota Tello Cutti. En la lógica del ejército el pueblo donde era originaria esta guerrillera, tenía que ser por fuerza zona roja controlada por la guerrilla maoísta, base de apoyo decían. En este ataque los soldados asesinaron a 13 personas, y entre ellas a 7 miembros de la familia de la “camarada Carla”. Un sobreviviente de esta familia, Epitafio Sánchez Cuti, que escapó a la muerte en Cuticsa fue secuestrado y desaparecido por la patrulla militar. De esta manera el ejército aplicaba su estrategia de exterminar al subversivo y todos sus familiares.

ACCION CONTRAINSURGENTE EN EL CAMPO

El terreno de la guerra en el campo abarcó la mayor parte del territorio peruano, tanto en los andes, la selva y en menor grado en la costa. La mayor cantidad de víctimas mortales del conflicto armado se produjeron en las zonas rurales del país, principalmente en las regiones más pobres de la serranía. Los escenarios de mayor intensidad de lucha armada y contrainsurgencia se desarrollaron en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Apurímac, San Martín, Ucayali, Loreto, Junín, Pasco, Puno, Cusco y Arequipa. Lima, la capital del Perú, sede del poder político, de la economía y la produc-

ción industrial, no quedó al margen de la guerra, y fueron sus zonas marginales las que acapararon la violencia represiva de las fuerzas militares y policiales. La guerrilla maoísta, desde el inicio de sus acciones armadas en 1980, había planificado la lucha como una guerra del campo a la ciudad, y basado en este principio de la estrategia de la guerra popular prolongada, había privilegiado lo rural como escenario principal y las ciudades como complemento.

La guerrilla maoísta depositó el éxito de sus planes y estrategias a condición de ganar a su movimiento las masas campesinas. En respuesta a ello las fuerzas armadas respondieron con una feroz acción para impedir que los campesinos se inclinen a favor de la subversión. Ni niños, ni ancianos ni mujeres se salvaron del paso aterrador de los soldados y de las rondas campesinas y grupos de defensa civil organizados por el ejército. Pueblos enteros y aldeas fueron saqueados y borrados del mapa. Las casas más miserables fueron incendiadas y destruidas. En última instancia, se señala en la doctrina militar, el control de la población, será la contienda decisiva entre los “enemigos de la patria y las fuerzas armadas”. Como anota Jorge Rodríguez Beruff, desde 1958, los militares peruanos prestaban suma atención a como enfrentar la guerra revolucionaria y la forma de impedir que la subversión cuente con el apoyo de las masas pobres, principalmente del campesinado (72).

Cuando, en diciembre de 1982, las fuerzas armadas intervienen en la lucha contrainsurgente, ya la guerrilla maoísta se había instalado sólidamente en el departamento de Ayacucho y en otras regiones de los andes peruanos. Los comités populares evidenciaban una nueva estructura política y administrativa opuesta al Estado. Por primera vez los campesinos sentían que sus luchas daban frutos reivindicativos inmediatos. Ya no se trataba de los falsos ofrecimientos que los políticos hacían en cada proceso electoral, y que jamás

fueron cumplidos. Mediante movilizaciones, sostenidas por acciones guerrilleras, las comunidades recuperaban sus tierras y los campesinos expulsaban a los propietarios de tierras. Junto al desarrollo de lo que se llamaba el “nuevo poder” las columnas guerrilleras nutrían sus filas con campesinos pobres, sobre todo de aquellos que luchaban para recuperar sus tierras arrebatadas por gamonales y terratenientes. Las acciones militares y políticas de la guerrilla, servían de eje movilizador de la población campesina y la instalación de las zonas rojas rodeadas de comités populares abierto o clandestino, configuraba una nueva situación en el campo, y sobre todo comenzaba a concretizarse un incipiente poder paralelo al poder del Estado.

“En todas estas zonas, sea a partir de la acción militante de maestros rurales sea por la prédica de jóvenes universitarios que las visitaban, se inicia un trabajo de concientización de la población rural. En él, se enfatiza el anuncio de una nueva sociedad justa y sin exclusiones, la prédica contra el viejo estado que debe ser destruido y contra los terratenientes y gamonales, personificados, según el caso, en empresas asociativas o, a falta de otro sector, en los campesinos más acomodados. En todas estas zonas se construyen primero bases de apoyo a la columna principal del PCP-SL que se moviliza por una zona amplia y, luego, Comités Populares, núcleos de un nuevo estado” (73).

Frente a esta situación las fuerzas armadas, como lo anota la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), “pasaron a la represión generalizada” buscando liquidar las zonas rojas y alejar a la guerrilla de la población campesina. Para este fin, los militares organizaron los grupos de defensa civil y rondas campesinas cuyas acciones contrainsurgentes en las zonas rurales serían tan mortíferas como de las fuerzas armadas. Otra institución peruana especializada en el tema se refiere a esta situación de la siguiente manera: “Es también verdad

que al militarizar a la población, los ronderos se han vuelto agentes potenciales y en algunos casos reales de violación de los derechos humanos...” (74). Estos grupos paramilitares comenzarían a tener importancia militar estratégica durante el régimen de Alan García Pérez en 1985, pero su pleno desarrollo lo alcanzarían a partir de 1991 durante el gobierno de Alberto Fujimori, y en 1995. En esta etapa los miembros de estas rondas sumarian la nada despreciable cantidad de 400 mil efectivos en todo el país. La represión fue mas violenta en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Apurímac, Junín y San Martín. En especial fue Ayacucho donde se concentró el peso de la contrainsurgencia. Según la CVR, en este departamento se produjo el 30% de las victimas en los 20 años de guerra interna. Para 1981 este departamento tenia 503,392 habitantes, y durante la guerra interna (1980-2000) fueron muertos 26,259 personas. La lógica de la CVR es correcta cuando afirma, que si la proporción de víctimas estimadas para Ayacucho respecto de su población en 1993 hubiese sido la misma en todo el país, el conflicto armado interno habría causado cerca de 1.2 millones de víctimas en todo el país.

La guerra contrainsurgente tuvo dos objetivos estratégicos fundamentales en las zonas rurales. Uno quebrar el afluente del campesinado hacia el movimiento subversivo. Con este propósito se militarizó el campo y se reclutó a la fuerza a la población para integrarla a las rondas campesinas y grupos de defensa civil que después serian las “aldeas estratégicas contrainsurgentes”. Se liquidó cualquier vestigio de democracia y del Estado de derecho. Se reprimió brutalmente los pueblos y comunidades sindicadas de sostener o simpatizar con la subversión. Se impuso el secuestro y la ejecución extrajudicial contra los campesinos que se negaron a colaborar con el ejército. Las zonas y regiones, donde se habían implantado los comités populares fueron arrasadas violentamente, y en su lugar se establecieron centros y bases militares desde

donde partían patrullas militares que violentamente asolaron la región. Los militares tenían claro que ninguna guerra revolucionaria puede desarrollarse al margen del apoyo y contribución de las masas pobres y en especial del campesinado pobre. A pesar que la propaganda oficial hablaba de que la guerrilla maoísta no tenía ningún apoyo de masas, la verdad era diferente y eso lo sabían los expertos de las fuerzas armadas que veían con temor que el desarrollo y la extensión del proceso armado estaban vinculados a la participación de los campesinos y otros sectores pobres. Es por ello, que controlar y dominar al campesinado de los andes, constituyó una prioridad para las fuerzas armadas. Refiriéndose al rol del campesinado, el general Adrián Huamán Centeno, que había sido jefe del Comando Político Militar de Ayacucho en 1984, señaló que para triunfar frente a la subversión hay que “ganar a esa gente...hay que tratarla como la chica más linda de la ciudad” (75). Dos, mediante el terror militar se liquidó la estructura de poder y las bases campesinas que sostenían la lucha armada en el campo. Para el ejército no bastaba alejar a las masas de la subversión (dejar sin agua al pez), sino también acabar con la amenaza ideológica política que representaba el establecimiento de una nueva forma de poder los llamados comités populares abiertos o clandestinos, que ha decir de muchos analistas administraba mejor que el Estado la justicia, la producción y distribución de bienes materiales. Para este fin los militares destruyen violentamente los comités (nuevo poder), que como se señalaba en documentos del PCP, estaba representado por el gobierno de los campesinos bajo la dirección del Partido Comunista del Perú.

Si esos dos objetivos estaban diseñados en los planes políticos-militares, ello no era nuevo en la doctrina de guerra contrainsurgente que aplicaban las fuerzas armadas. Quince años antes de 1980 los militares ya habían empleado métodos de extrema violencia contra una fuerza guerrillera, que aunque incipientemente, también se propuso ganar a su lado

al campesinado pobre. Este movimiento guerrillero, si bien es cierto no alcanzó la envergadura de la guerrilla maoísta, si logro implantarse en el sector mas pobre del campesinado de una parte de los andes, en particular en el Cusco. Fue en 1965 cuando los militares peruanos participaron por primera vez en una guerra contrainsurgente propiamente dicha. El escenario de este enfrentamiento fue geográficamente restringido y abarcó solo una parte de los andes y la selva peruana. Como fenómeno social expresó un creciente desarrollo de la lucha de clases y una extrema crisis económica y política del Perú. Antes de 1965 la intervención directa del ejército en problemas sociales solo fue para sofocar revueltas populares espontáneas o sublevaciones en el mismo seno de la burguesía, especificado en golpes militares para tomar el control del Estado.

La lucha armada de la década del 60 estuvo representada por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) liderado por Luis de la Puente Uceda, que se inspiró en la táctica de guerra de guerrillas aplicada durante la revolución cubana. Bajo este esquema inició sus acciones armadas en zonas rurales, bajo el supuesto teórico que bastaba el “foco revolucionario” para crear las condiciones propicias para el triunfo de la lucha por el poder. La coyuntura social en la que se desenvolvió esta lucha armada era favorable, y ello estaba expresado en la crisis del Estado y la aceleración de la lucha de clases. En las ciudades y en el campo las movilizaciones y las huelgas de los asalariados crecían a la misma velocidad que aumentaba la desocupación, el hambre y la miseria. Desde la primera mitad de la década del 50 el Perú estaba convulsionado luchas populares contra la política impuesta por los regimenes militares o civiles. El otro grupo era Ejército de Liberación Nacional (ELN) comandada por Héctor Béjar que tuvo una incipiente actividad guerrillera en la provincia de La Mar en el departamento de Ayacucho. Al ejército le tomó menos de un mes liquidar al ELN. El 25 de noviembre los militares iniciaron los

combates con este grupo, y el 17 de diciembre prácticamente habían liquidado a esta guerrilla. Dos meses después, en febrero de 1966 Héctor Béjar líder de este grupo fue detenido y pocos años después fue amnistiado por el gobierno militar. Después de 1968 este ex guerrillero se convirtió en “ideólogo” y funcionario de la dictadura dirigida por el general Juan Velasco Alvarado e integrada por los mismos altos jefes militares que dirigieron la brutal represión contra la guerrilla en 1965.

El MIR inició sus acciones guerrilleras en junio de 1965 y a pesar de su corta existencia logró considerable apoyo de los campesinos pobres en la sierra central. Instaló su cuartel general en Mesa Pelada (Cusco) y en error de carácter militar creó una “zona inexpugnable” que suponía que las fuerzas represivas no podrían llegar. Con ello se olvidó que uno de los principios de la guerra moderna es la inexistencia de “zonas que no se pueden conquistar” y como se en términos corrientes, donde llega uno llega otro. El 8 de octubre (1965) el cuartel general de la guerrilla cayó en poder de los militares y 15 días después (23 de octubre), la columna Pachacutec dirigida por Luis de la Puente fue cercada y liquidada en la batalla de Amaybamba. En menos de 6 meses las fuerzas armadas acabaron con este grupo armado cuyo surgimiento y desarrollo, expresó una etapa avanzada en la lucha de clases y en la disposición de los campesinos de luchar con las armas en las manos contra el absolutismo del poder de la burguesía y los terratenientes. En la lucha contra la guerrilla del MIR, los militares peruanos aplicaron los métodos contrainsurgentes elaborados y utilizados por el ejército norteamericano en la guerra de Vietnam. “Adoptaron los procedimientos tácticos empleados en Vietnam por las tropas yanquis, se puso en práctica una versión de las aldeas estratégicas reuniendo a los campesinos en verdaderos campos de concentración bajo dos objetivos: de un lado se buscó privar de apoyo de masas a la fuerza guerrillera, y de otro lado, obligar a los campesinos

a colaborar con las tropas en una serie de tareas” (76).

En el enfrentamiento contra el MIR, el ejército empleó brutales actos de crueldad contra los campesinos y los subversivos. Mas adelante, a partir de 1980 en la lucha contra la guerrilla maoísta, estos métodos fueron perfeccionados. Un sobreviviente y miembro de la dirección del MIR en una entrevista a la revista “Punto Final” de Chile, realizada meses después de la derrota guerrillera, denunció el comportamiento criminal de los militares (77). Este dirigente narró que las fuerzas armadas utilizaron “NAPALM”, para bombardear los pueblos sindicados como partidarios de la guerrilla y que los prisioneros, después de ser torturados, los subían a aviones o helicópteros desde donde los arrojaban a las quebradas. Sobre este mismo hecho, un documento “El Ejército y las Guerrillas” publicado en 1965 (publicado en Las Guerrillas del Perú, de Rogger Mercado, Lima, 1967), se anota que el ejército, en la lucha contra la guerrilla del MIR, no sólo lanzó bombas de NAPALM, sino que incendió 14 mil hectáreas de tierras de cultivo, masacró a 8 mil campesinos sindicados de simpatizantes de la guerrilla, a la fuerza cambiaron de ubicación a 19 mil habitantes (los sacaron de sus pueblos) y encarcelaron a 3,600 sospechosos de pertenecer a las fuerzas guerrilleras.

De esta manera, cuando las fuerzas armadas llegó Ayacucho para enfrentar a los maoístas de Sendero Luminoso, todo estaba planificado para reeditar, en forma mas violenta la estrategia contrainsurgente que el ejército había puesto en ejecución contra la guerrilla de 1965. De esa experiencia surgirían las “aldeas estratégicas”, la táctica de aislar a la guerrilla del campesinado, crear terror y miedo entre los simpatizantes de la subversión, y usar a los campesinos como “carne de cañón”. Se militariza los pueblos y comunidades campesinas. Hacer del campesinado fuerzas auxiliares del ejército en la estrategia antisubversivas, se convierte en una actividad medular de los militares. Por ello en el campo, como en ningún

otro escenario de la guerra interna, las fuerzas armadas y fuerzas policiales emplearon el secuestro, la tortura y la ejecución extrajudicial. “Con el ingreso de las Fuerzas Armadas, las ciudades se militarizaron haciéndose visible el cambio y el control de todos los espacios. En el campo, si bien la desconfianza y la distancia cultural entre militares y campesinos no facilitaban las relaciones, se evidenció que el PCP Sendero Luminoso no era la única fuerza y que la oposición a su presencia podía tener respaldo.... A menos de un mes del ingreso de las Fuerzas Armadas, los campesinos de Macabamba y Huaychao —bases de apoyo del PCP-SL en las alturas de Huanta— rompieron con la subversión y dieron muerte a siete de sus miembros en un acto de mucho impacto en la prensa nacional. Éste fue saludado por el Presidente de la República, aunque tuvo terribles consecuencias” (78)

ESTRATEGIA ANTISUBVERSIVA Y TERROR

Hay muchos testimonios de la naturaleza violenta y sin límites de los métodos utilizados por las fuerzas armadas en el campo, sobre todo su actuación en Ayacucho, Huancavelica y Junín. Muchos de estos testimonios contribuyen a comprender la conducta de los soldados y policías en la guerra interna que envolvió al país desde 1980 hasta cerca del año 2000. Un ex soldado, que integró una patrulla militar, narra cómo actuaban las fuerzas armadas. Las acciones violentas de patrullajes eran parte de la estrategia militar para crear terror entre la población civil de la región. Como veremos en este relato la realidad sobrepasó cualquier ficción sobre las guerras y matanzas. Alberto, es el nombre que oculta la verdadera identidad de este soldado. Su narración resume la teoría y práctica que puso en ejecución las fuerzas armadas en la lucha contra insurgente. Este militar entre arrepentimiento y orgullo, entregó su testimonio a una revista peruana en 1991, cuando ya había pasado algunos años de su retiro del

ejército (79). Este ex soldado integró una patrulla del ejército compuesta por 37 militares, entre los que se contaban, un oficial sanitario, un suboficial, un teniente y un capitán. El grupo contrainsurgente estaba instalado en Totos, un pequeño pueblo en las alturas de la región de Ayacucho a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar. El jefe de esta patrulla era el capitán de infantería Santiago Picón Pesantes y su apelativo de guerra era “Chacal”. Este llegó junto con el general Clemente Noel Moral, primer jefe del Comando Político militar de Ayacucho. La patrulla se había apoderado de la única escuela del pequeño pueblo, donde instalaron una especie de cuartel militar. Los soldados acondicionaron un gran espacio que servía de dormitorio de campaña de la tropa, una cocina, y un centro de reclusión y torturas de prisioneros.

Los hechos que narra el ex soldado Alberto transcurrieron durante la administración de Fernando Belaúnde, cuyo gobierno se jactaba de ser irrestricto defensor de los derechos humanos y del sistema democrático. Era el tiempo también del general Clemente Noel Moral y de los horrores cometidos en el cuartel Los Cabitos, de los crímenes en la Casa Rosada y de los cementerios clandestinos en la región de Ayacucho. Además, fue la época en que los peores crímenes cometidos por las fuerzas armadas se encubrían con un aparente patriotismo y la falsa moral del soldado peruano. Por ello, Clemente Noel, al final de su estadía como jefe del Comando Político Militar de Ayacucho dijo sin inmutarse que había: “cumplido con toda responsabilidad la misión” y que no tenía “ningún cargo de conciencia”. El general más explícito aun señaló, “estoy orgulloso, no solo por los resultados, sino por haber tenido la suerte de comandar a hombres como ustedes, quienes afrontaron con hombría, amor a la patria, espíritu de resacrificio y lealtad, la difícil situación planteada por la subversión” (80).

Alberto había nacido en Ayacucho pero fue en Lima donde se enroló en el ejército como recluta cuando tenía 20 años. Era

el año 1982 y las fuerzas armadas reclutaban masivamente a jóvenes peruanos, principalmente aquellos provenientes de los andes donde la guerrilla maoísta seguía extendiéndose exitosamente. Favorecer el ingreso al ejército de jóvenes de origen andino era sustancial en una guerra contrainsurgente, cuyo escenario principal era en las regiones andinas donde gran parte de la población solo hablaba quechua y desconfiaba de los “extraños” que vienen de la costa o de las grandes ciudades. Alberto, narra que entró al ejército empujado por el hambre y la desocupación. A pesar que tenía antecedentes penales por robo, eso no fue una traba para que sin problemas lo acepten en el cuartel de reclutas. Fue adiestrado durante 9 meses en lucha antisubversiva y aprendió técnicas de manejo de cuchillo, bayoneta, fusiles y granadas. En la parte final del curso le obligaron a “luchar” y degollar perros hambrientos y cubrirse el cuerpo con la sangre de los animales sacrificados.

¿Sabes para qué sirve este entrenamiento?, le preguntó uno de los instructores. Es para ir a combatir a los terrucos en Ayacucho, y ahí no serán perros los que tendrás que matar sino senderistas, y ellos tienen armas que matan también, dijo. Sus instructores fueron un teniente y un capitán expertos en lucha antiguerrillera que habían sido entrenados en el Fort Fullick de Panamá a cargo de Comando Sur del ejército norteamericano. En ese cuartel de los Estados Unidos se adiestran la mayoría de los militares criminales y torturados que han operado en Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, y otros países.

Al final de las prácticas en lucha antiguerrilleras, Alberto junto a 37 soldados y oficiales, fue embarcado en un avión portatropa del ejército y llegaron a Ayacucho. Ahí en zona de guerra como decían los militares enviados a combatir las fuerzas maoístas, desaparecían las identificaciones de los soldados. Ahora eran fantasmas, “ya no llevas tu mismo grado ni tu nombre. Desaparece tu grado, y te ponen un alias, un apodo”, cuenta él. El jefe de la patrulla era un capitán que se hacía

llamar “Chacal”. La primera misión que recibió el grupo fue hacer una “batida” (recorrer con fines represivos) la zona de Cangallo. En ese peregrinaje militar no hubo ningún encuentro con los subversivos y de regreso recalaron en el cuartel “Los Cabitos” donde tenía su centro de operaciones el general Clemente Noel.

Alberto, cuenta, que su prueba de fuego ocurrió fue cuando su grupo tuvo la misión de patrullar las alturas de Huancaavelica. Un pequeño pueblo, en las alturas de Acobamba que hace parte de la provincia de Tayacaja, cerca de las minas de Cobriza. La población de este pueblo habla solamente el quechua y son sumamente desconfiados con las personas que no son del lugar. Odiaban a los militares. En los alrededores de dicho pueblo, los soldados tuvieron que enfrentar la ira de un grupo de jóvenes que rechazaban airadamente la presencia de los soldados.

Los jóvenes se habían posesionado de la altura de una colina, y desde ahí les gritaban “ladrones”, “rateros” y “sinchis”. No querían una base del ejército en su pueblo. Arrojan piedras, y así lo hicieron durante dos horas. El grupo de muchachos contaba solamente con un FAL, cuenta Alberto, y de vez en cuando disparaban. “Decidimos atacarlos, subimos y lanzamos granadas. Comenzaron a correr como conejos y se veía que estaban asustados. Bajaron al pueblo entraban despavoridos a sus chozas para protegerse. “Detrás llegamos nosotros y con granadas volamos las chozas con ellos adentro. Al final unas 17 personas quedaron muertas”, dice Alberto. Seguimos caminando, y encontramos a un muchacho acurrucado con una latita de petróleo. Entre los soldados de mi promoción sabíamos que era para prender una fogata, algún mechero, pero el oficial dijo, ¡Agánrrrenlo!. Lo amarramos con una soga y lo llevamos. Más arriba encontramos a otro acurrucado, y el oficial le metió un tiro en la cabeza. “Pobres cojudos, que les encuentre su cacerina llena, yo les meto la mía en su cuerpo”,

gritó amenazadoramente “Chacal”, para mostrar lo que teníamos que hacer con los “senderistas” capturados. Por miedo tuve que disparar al aire y vaciar las balas de mi fusil. Lo que ocurrió en este pueblo nunca se supo, y lo que decía la prensa, es falso porque todo lo tergiversa. “Yo sé, yo lo he vivido en carne propia, yo estuve allá. Matábamos campesinos, a grupos de personas, para ello usábamos granadas, tiros de FAL, con todo, pero nunca decíamos que habíamos matado porque siempre decíamos que había sido en enfrentamiento con la guerrilla”.

Pero si Alberto había tenido su “prueba de fuego” asesinando a 17 personas quemadas en sus chozas de paja y barro, eso fue solo el comienzo. Su grupo siguió patrullando y en otra comunidad tuvieron otro “enfrentamiento” donde capturaron a siete campesinos que antes de matarlos fueron utilizados como bestias de carga. Eran los que llevaban las municiones, la radio y los alimentos de la tropa. Por la altura de Cobriza, cuenta Alberto, la patrulla tuvo un encuentro de verdad con Sendero Luminoso. Nos disparaban de todos lados y no querían rendirse. No podíamos ni avanzar ni retroceder, era un callejón sin salida. “Chacal” agarró a uno de los prisioneros que nos servía de bestia de carga y le dijo: ¡Diles que se rindan o sino van a morir como tu!. Y “Chacal agarraba su Browning calibre 7.65” y le disparaba en la cabeza. Así con tiros secos a la cabeza mato a todos, y de esa manera nos quedamos sin ningún prisionero para que carguen nuestros bultos. “Chacal” estaba enfurecido, y dio la orden de seguirlo. Nos disparaban pero no tenían seguridad en los disparos, disparaban a ciegas. Salimos del callejón y llegamos a la comunidad desde donde seguro habían salido los “terrucos” que nos atacaron. Ahí en la comunidad comenzamos a matar a todo el mundo. Había gente del campo, niños, ancianos, mujeres. “Chacal” decía, ¡fuego carajo! Hay que matar a todos estos indios. Luego hicimos una batida entrando casa por casa y sacamos a todos a la plaza..La gente lloraba con miedo y clamaba al

cielo. ¿Cuántos murieron en este “ataque” del ejército?. Nadie lo supo ni nunca nadie lo sabrá.

¿Y QUÉ PASABA CON LOS PRISIONEROS?

Los entregábamos a una base. En Cobriza por ejemplo dejamos 24 presos. Nos dijeron que eran abigeos y terrucos. Algunos no los entregamos a ninguna base y los torturábamos hasta que nos den alguna información. “Chacal” los agarraba y les cortaba la oreja, les pinchaba los ojos, la cara y les cortaba la lengua. Había algunos presos que lloraban, que se quejaban, se arrodillaban, no sabían que hacían. Pero otros que habían sido capturados con armamento en un enfrentamiento, ya no te decían ni su nombre. No tenían ni documentos, por eso es que deducíamos que eran terroristas de verdad. Entonces los matábamos “Chacal” decía: para que gastar municiones con estos perros, y les metía bayoneta.

Muchos prisioneros eran muertos con bayoneta. “Chacal” exigía que así se haga. En dos o tres ocasiones, “Chacal” me dijo, te lo regalo y tienes que matarlo como sea, entregándome un prisionero. Tenía que cumplir esa orden y tampoco puedes discutir, y así lo hice usando mi bayoneta. Los prisioneros, una vez muertos, los enterrábamos y otras veces los lanzábamos a cualquier acantilado donde nadie los podía encontrar. ¿Y las violaciones?. Eran frecuentes, en todos los pueblos violábamos. Agarrábamos a una chica y éramos cinco o seis para una chica. Había también profesoras que tenían textos de José Carlos Mariátegui, Lenin, Marx y por eso las violábamos. Las agarrábamos por la fuerza, las encañonábamos con el FAL y así pasábamos todo el tiempo. En las violaciones siempre éramos varios con una chica, porque el oficial nos había advertido, que había que tener cuidado y estar entre varios, porque esas chicas podían meterte un cuchillo en el momento del acto sexual.

Entre el 28 y 31 de mayo de 1983, la patrulla dirigida por “Chacal” detuvo a 15 campesinos en los anexos de la comunidad campesina de Quispillacta, distrito de Chuschi, provincia de Cangallo, Ayacucho. Los campesinos, acusados de pertenecer a la guerrilla maoísta, fueron transportados a la base militar de Toctos, donde fueron torturados brutalmente. Después los separaron en dos grupos, y entregándoles picos y lampas, les obligaron a cavar sus propias tumbas, y terminada la excavación fueron eliminados con tiros en la cabeza. A “Chacal” le gustaban las bromas fuertes, cuenta Alberto. Un día llegó a la base un teniente de la fuerza aérea que cumplía la labor de piloto de helicóptero. Este no sabía lo que le esperaba, y los oficiales lo invitaron a desayunar en la base de Toctos. La mesa estaba servida con panes, leche y otros comestibles en torno a una vianda cubierta con un mantel. Los hombres comenzaron a desayunar pero nadie destapaba la vianda, hasta que lo hizo el teniente picado por la curiosidad. Dio un salto hacia atrás, lanzando un grito, cuando apareció la cabeza de un degollado”.

Durante tres meses la patrulla de Alberto comandada por “Chacal”, recorrió los pueblos y comunidades de Ayacucho. En ese tiempo, torturaron y asesinaron a decenas de campesinos. Violaron niñas y adultas. Robaron y saqueaban a los campesinos. Incendiaban casas y mataban indiscriminadamente los animales de los campesinos. Eran atilas de los andes, pero en Lima la prensa los presentaba como los guardianes de la democracia y de la libertad. En su recorrido sangriento, dos soldados habían muerto en verdaderos enfrentamiento con la guerrilla y uno a causa de accidente. Finalmente llegaron al cuartel “Los Cabitos” en Ayacucho, donde el general Huamán Centeno, que recientemente había reemplazado en el comando político militar al general Clemente Noel, les dio la bienvenida de tropa victoriosa. “Estos son los soldados modelos, todos deben seguir su ejemplo”, dijo el general (81).

EL COMANDANTE HERBER AGUILAR

Jesús Sosa en su testimonio (82) cuenta que una ocasión en Cangallo, el comandante Herber Aguilar Díaz, encargado de la base, bebía alcohol con otros militares de la base. Como efecto de la borrachera se le ocurrió burlarse de un teniente de la Escuela de Comandos. En broma desafió al recién llegado de cortarle la cabeza a un terrorista. Todos siguieron tomando litros de alcohol, y nadie se acordó del desafío del comandante al teniente. Pero inesperadamente, el teniente que había bebido tanto como los otros desapareció un momento para reaparecer después delante del comandante. Lo saludo militarmente y le mostró orgulloso la cabeza sangrante de un detenido. Había ganado el desafío. Otro de estos casos, cuenta Sosa, fue cuando una patrulla estaba persiguiendo a un conocido dirigente maoísta. Se trataba de Caszelly, cuyo nombre era Claudio Bellido, cuenta él. Sosa hacía parte de la patrulla cuando esta llegó a una casa, que según un indicador era la vivienda de la esposa de Caszelly. El perseguido no estaba, y solo detuvieron a tres personas. El sargento apresó a uno de los campesinos, tendría 60 años para interrogarle por donde se había fugado. El hombre viejo no quiso hablar, y dijo no haber visto nada. El sargento sacó su cuchillo de comando, y sin decir ninguna palabra de un tajo corto una de las orejas del viejo. La sangre saltó a borbotones. Se disponía a cortar la otra oreja. El pobre hombre gritó: por ahí se fueron indicando con la mano. O sea que sabías, diciendo esto el sargento amenazadoramente exigió que el hombre se coma su oreja. Quiero que te la comas, le dijo. Se la metió en la boca a presión al mismo tiempo que le apuntaba la cabeza con su pistola. La oreja era demasiada grande y dura para comerla de un solo bocado. El prisionero tuvo que morder varias veces para dividir la oreja y poderla pasar. Al final de este rito macabro el hombre fue ejecutado.

EJECUCIÓN DE SONIA MUÑOZ

Era el año 1988 y los secuestros y ejecuciones clandestinas estaban en su pleno apogeo. Gobernaba Alan García Pérez, quien había dicho al inicio de su administración en 1985 que el respeto de los derechos humanos era parte fundamental de su administración. En Huancavelica Sonia Muñoz de Yangali de 35 años y empleada de la oficina del correo fue secuestrada de su casa por un grupo de 8 militares encapuchados que se hicieron pasar como militantes de Sendero Luminoso. Sonia Muñoz madre de 4 hijos, y viuda de Fortunado Yangali Huachaca quien cinco años antes, en 1983, fue secuestrado por miembros de la policía y desaparecido después que fuera conducido al cuartel Los Cabitos en Ayacucho.

Sonia Muñoz, después de ser amarrada fue subida a golpe en un camión portatropa y llevada al cuartel militar de Castropampa. Allí fue brutalmente torturada para que declare su filiación subversiva. Sus torturadores utilizaron corriente eléctrica y la colgaban de los brazos para que diga a quien entregaba las cartas que llegan al correo. El mismo día la trasladaron a un paraje solitario donde fue condenada a una ejecución clandestina. Tres soldados fueron los encargados de la “ejecución” y la llevaron a una quebrada cerca de Churcampá (Departamento de Huancavelica). Ahí Sonia Muñoz fue amarrada y echada al suelo con la cara hacia la tierra y los militares le dieron dos disparos en la cabeza y uno en el tórax. Ella recordó el brillo de las balas de grueso calibre pero no perdió el conocimiento. Retuvo la respiración, se hizo la muerta y los soldados dieron por terminado su trabajo, está muerta dijeron. Antes de abandonarla le pusieron un cartel en el pecho sostenido por una piedra en el cual se leía “Así mueren los soplones”, firmado por Sendero Luminoso. Eran los tiempos en que el ejército ocultaba sus crímenes culpando de los hechos a la guerrilla maoísta.

Sonia Muñoz, no murió y sobrevivió para contar su épica y dramática historia. Las tres balas que recibió, inexplicablemente, no fueron mortales y ella después de 4 días de peregrinaje clandestino por las montañas y cargando con las balas incrustadas en su cuerpo logró llegar a Lima. En la capital fue auxiliada por la Cruz Roja y gracia a ello fue internada en una clínica privada. Se restableció de sus heridas y el 6 de junio narró su historia a la revista SI (83). Ese testimonio, único en su género en tanto provenía de una sobreviviente, fue como dijo dicha revista, una prueba de los secuestros y ejecuciones clandestinas del ejército. Probaba además, que decenas de asesinatos de los militares eran cargados a la cuenta de la subversión, y que para ello bastaba poner un letrero alusivo a “Sendero Luminoso” sobre los cadáveres mutilados de las víctimas de los militares.

El testimonio:

“Han entrado a mi casa vestidos de subversivos. Eran cuatro mayores y cuatro muy jóvenes. Pensé que eran rateros. Empezaron a patear la puerta de mi dormitorio. Me acerqué a abrir y uno de ellos se me aventó a agarrarme del cuello. Soplona, te vamos a matar, carajo, me dijo. Yo me resistí para que no me amarren. Yo no soy una soplona por qué tienen que hacerme esto, les dije. En eso mis hijos se despertaron y comenzaron a llorar. Como yo me resistía para que no me lleven, el otro alto que estaba encapuchado corrió y me dio un puñetazo en la cara. Sacó un revolver y me lo puso como para disparar. Después de una hora de forcejeos me amarraron las manos y me taparon la boca. Me pusieron pasamontañas y me sacaron a patadas.

A empujones me jalaban y llegamos a una bajadita y empezó la balacera y la dinamita en mi casa. Entonces, todos los que estaban de civil habían traído su uniforme, toditos aparecie-

ron con uniforme. Me pusieron al medio de los militares y me llevaban a empujones. Yo iba descalza, y me decían: camino rápido para que no nos mire nadie. Cuando llegamos al cementerio, el jefe, ese capitán, dijo: Mira si hay alguien. Que no se enteren los de la Guardia Civil. Así me hicieron llegar a la base militar de Churcampa, donde me comunicaron que íbamos a dormir hasta las cinco de la mañana y después nos iríamos a Huanta.

Uno de ellos me dijo: dime mamita todo lo que sabes porque mi jefe, el capitán, es medio loco, te va a matar. Después, el teniente avisó que ya eran las cinco, pero el capitán dijo: todavía quince minutos más en la cama. Después ordenó: pongan un colchón (en el camión) para que no se maltrate hasta Huanta. Me subieron envuelta en una frazada y me llevaron hacia el cuartel de Castropampa donde llegamos a esos de las 8 de la mañana.

Avísame a quienes les has entregado cartas. Yo no he hecho nada mi capitán. Yo reparto a militares y civiles igualitos. Nada me creía. Entonces me amarraron las manos y los pies hacia atrás y me colgaron de unos clavos. Así estuve hasta el mediodía. Después me pusieron corriente. Uno de los polos en el estómago y otro en la espalda. Me bajaron los pies. Me dijeron; habla o ahora vas a morir por tu presidente Gonzalo. A quiénes conoces, a quiénes les has dado cartas en Ayacucho. Si no hablas tendremos que matarte, dijo el capitán. Entonces entró el comandante y me dijo: teniendo cuatro hijos te metes en terruquería (de terrorista). Vino otro militar y me dijo: esta será la asesina, la correista (de correo) que llevaba las cartas. Como a la cinco de la tarde, ese capitán dijo: alisten para que vuelvan a Churcampa. Le dijo a otro, quien señaló que tenía compasión de mi porque tenía el mismo apellido que él.

Ese capitán le decía a otro que lo llamaba Ronald; estás viendo como castigo a ésta. Así va a hacer, vas a organizar en los

anexos de Churcampa las rondas campesinas, vas a concienciar y a paramilitarizar a los campesinos. Después de organizarlos todos, van a ir vestidos de senderistas como hemos hecho con esta mujer. Si la gente los recibe bien, mátenlos todos, y si los agarran a pedradas no se dejen atrapar escapan, y aunque sea a uno, mátenlo y que le echen la culpa a los senderistas y así van a tenerles mas odio. Así vamos a exterminar el senderismo. A este muchacho, se refería a otro detenido, lo vamos a tratar bien, lo vamos a tener en el cuartel de Churcampa tres meses y después lo devolveremos a su casa porque si lo entregamos ahora, los compañeros lo matan. A esos de las seis y media de la noche me subieron al carro de regreso a Churcampa. Hay que devolver a esta mujer, van a soltarla, que se vaya a su casa, dijo el jefe de los militares.

Pusieron bultos a mi lado, conservas y galletas y la cama para el capitán Ronald y se subió al carro un técnico, oficial técnico le dicen. Ese estaba con su chullo bien amarrado. También subieron ocho fusiles FAL a mi lado. Pasamos por el puente de Alqumachay y pararon, comenzaron la balacera y después en Pucayacu igualito se paró el carro. Pensé, seguro allí me van a matar. Pasamos todo ese sector de Pacayacu y más allá de Mayocc, en una curva, dijeron: aquí nomás hay que dejarla. Me bajaron esos tres que venían a mi lado, el oficial técnico y dos más. Me dijeron te vas a ir, pero déjate amarrar. Me dijo: échate al suelo, ponte de cuclillas con la cabeza hacia el suelo. Me disparó dos balas en la cabeza, yo vi chispas como candela que saltaban. Después me voltearon y allí en el pecho me tiraron otro disparo. Como casi no podía respirar, aguante, no perdí el conocimiento. El oficial me agarro las venas y dijo: ha muerto ya. Póngale papel subversivo, y lo sujetaron con una piedra en mi estómago. Me espolvorearon tierra y el capitán ordenó irse rápido para no levantar sospechas y se fueron corriendo.

Yo seguía sin moverme pero abrí el ojo un poquito y vi el pa-

pel que me habían puesto. A lo lejos escuché balacera y esperé casi dos horas. Mas o menos a las diez de la noche me levanté y me fue hacia Pichicay y llegue donde una señora. Le pedí que me alojara, y le expliqué lo que me había pasado, pero me dijo que no podía alojarme, porque eso era sumamente peligroso. Así camine, solita, llegue a otra casa y allí me alojaron. No le dije nada de lo que me había pasado. Pero no pude dormir con el dolor, no podía ni apoyarme. Le dije a la señora lo que me había pasado y ella me respondió que ya no podía alojarme. Me fui al monte. Me prestó un par de zapatos viejos y un sombrero viejito. En el vatus (casa de la puna) había otra señora que conocía y le dije: tiéndeme un pellejito que ya no aguanto este dolor. Pasé otra noche ahí.

Como cuenta la revista Si, Sonia Muñoz, permaneció oculta entre cabañas de puna, matorrales y trigales cuatro días. Después, cuando sus esperanzas de encontrar auxilio se agotaban, apareció providencialmente su sobrina Mariela Ochoa Torres, de 25 años. Ella le dio los primeros auxilios para aliviar el dolor causado por las heridas de balas y con valentía, arriesgando su propia vida, la ayudó a llegar a Lima. Sólo después de 6 días viajando oculta en camiones como bulto de carga, y pasando clandestinamente puestos militares en la ruta llegó a la capital. Veinte días después de que fuera secuestrada y “ejecutada” por los soldados fue operada por el prestigioso neurocirujano Esteban Roca en la Clínica Italiana. Ella sobrevivió a ese infierno y pudo contar su dramática experiencia en los andes del Perú, donde la vida la decidían los militares.

Otro caso abominable fue la masacre de 16 personas en una comunidad de Ayacucho. Este crimen fue perpetrado por una patrulla mixta de militares y ronderos. El diario La republica (diciembre 1990) narra que el 22 de septiembre de 1990, “una patrulla combinada de 100 efectivos entre militares y ronderos al mando del sargento de le ejercito Jhonny Zapa-

ta Acuña apodado “Centurión” hizo su aterrado ingreso en la comunidad de Hutunpunguyoq ubicada en las alturas del departamento de Ayacucho. Soldados y ronderos iniciaron una acción vandálica y criminal. Rompían las puertas de las viviendas y saqueaban las pertenencias de los humildes campesinos. ¡Roben, roben, roben! gritaba el cabecilla de la patrulla. Los comuneros que intentaron defender sus pertenencias fueron brutalmente masacrados. Después de tres horas, Centurión dio la orden de abandonar el pueblo. La patrulla se llevo a once adultos y 5 niños como prisioneros, ellos iban amarrados con los brazos hacia atrás”. Los 16 prisioneros de esta comunidad fueron conducidos al cuartel de Castro Pampa en Huanta, y 20 días después del secuestro fueron encontrados muertos en tres fosas comunes en un paraje solitario de Chilqahuayco. Las victimas habían sido torturadas antes de la ejecución con tiros de balas de fusiles Fal.

TELMO HURTADO EN ACCOMARCA

Era el 14 de agosto de 1985, una patrulla del ejército comandada por el subteniente Termo Hurtado llegó al distrito de Accomarca, en Ayacucho. La patrulla militar obligó a un numeroso grupo de habitante a concentrarse en una casa del mismo pueblo. Una vez efectuada la concentración de pobladores los soldados comenzaron a disparar ráfagas de metralleta y a lanzar grandas de guerra. El objetivo era asesinar a mansalva y aterrorizar a los campesinos que apoyaban la subversión. Al final de la masacre quedaron 69 personas muertas, entre ellos niños menores de 10 años, mujeres, hombres jóvenes y ancianos. La matanza se aplicó en cumplimiento del “Plan Operativo Huanyoc”, que tenía el propósito de exterminar las “bases de apoyo” de la guerrilla maoísta. Desde 1983 al 1985 (sólo dos años de la intervención de los militares), las fuerzas armadas habían cometido más de 4 mil asesinatos de campesinos, principalmente en el departamento de Aya-

cucho, Huancavelica y Junín. La matanza de Accomarca fue presentado por el gobierno y la prensa oficial como un caso aislado. Más adelante los militares cometerían una serie de crímenes masivos similares a los de Accomarca. La estrategia contrainsurgente era brutal y se basaba en quemar y arrasarse pueblos enteros.

«Entre los presuntos terroristas capturados habían niños cuyas edades estaban entre ocho años y un año», confesó Hurtado el 16 de septiembre de 1985 al interrogatorio que lo sometió un tribunal militar que solo lo encontró culpable de “abuso de autoridad”.

En 1985, después del crimen de Accomarca, el parlamento formó una “comisión investigadora”, que no sirvió para sancionar este crimen masivo de campesinos, sino más bien para contribuir a ocultar a los verdaderos responsables de este hecho de sangre. Esta comisión personalizó la responsabilidad de esta matanza, y encubrió que esta acción militar era parte de una estrategia global de lucha antisubversiva del Estado y de las Fuerzas Armadas. Esta comisión estaba integrada por parlamentarios del partido apristas, de Acción Popular (AP), y por miembros de Izquierda Unida (IU) que en ese tiempo era la tercera fuerza política parlamentaria. La entrevista Telmo Hurtado-Comisión Investigadora, se realizó en Ayacucho, y se hizo famosa por la respuesta que dio el militar a la interrogante, ¿por qué matar a 69 campesinos?. Hurtado fue contundente y respondió, que mataba para que ellos, los parlamentarios, pudieran seguir confortablemente en sus sillones de disputados y senados. Los comisionados se quedaron mudos, y si volvieron a ocuparse del caso Accomarca, solo fue para ocultar que este crimen masivo de campesinos era parte de la estrategia antisubversiva del Estado y que en ello había responsabilidad directa de los altos jefes militares y Alan García Pérez presidente del Perú. Fue esta una de las razones por la cual Telmo Hurtado jamás fue sancionado como debió

serlo, y al contrario fue ascendido a grados superiores y recompensado por los altos mandos del ejército.

En un informe de la CVR realizado en 2004, se detallan algunos pormenores, hasta ahora desconocidos, de esta sangrienta incursión militar en Accomarca. Según esta versión, los militares llegan a Accomarca y después de haber consumado su abominable crimen, se dedicaron a la acción vandálica de la pequeña comunidad. El espectáculo era dantesco, y los sobrevivientes de la matanza entre lágrimas y miradas de terror, querían recuperar los restos mortales de sus seres queridos. Solo quedaba una casa en llamas y en su interior se calcinaban 69 cadáveres de niños, adultos, ancianos, hombres y mujeres. “Alrededor de las tres de la tarde, cuando se disponían a retirarse, se dieron cuenta que una anciana intentaba apagar el incendio que continuaba en la casa de Gamboa de la Cruz, donde había ocurrido la matanza. Ante esta situación, los soldados empezaron a dispararle a la distancia, pero como no acertaban, decidieron que dos soldados regresaran para matarla, lo que hicieron, dejando su cadáver en el mismo lugar. La anciana era Juliana Baldeón García, de 80 años de edad, madre de Benita Medina Baldeón, esposa del propietario de la casa donde ocurrió la matanza. Ese mismo día fue asesinado también el guía Filomeno Chuchón Ticse, a quien sindicaban como el “camarada Genaro”, puesto que había sido testigo de los hechos. En la noche de este día, Telmo Hurtado se encontró en Accomarca con los integrantes de la patrulla “Lince” 6, que durante la ejecución del “Plan Operativo Huancayoc” se había mantenido en un lugar ubicado a tres kilómetros de la quebrada Huancayoc, desde donde escucharon los disparos. Ambas patrullas permanecieron en el lugar de encuentro hasta el día siguiente, tiempo durante el cual los soldados mataron a los animales de los pobladores para alimentarse y saquearon las tiendas y las viviendas de los pobladores, llevándose todas las cosas de valor que encontraron: dinero, artefactos, ropas, frazadas y otros bienes. Finalmente, el 15

de agosto de 1985 los militares abandonaron Accomarca en dirección a la Base Contraguerrillas de Vilcashuamán donde el SubTeniente Telmo Hurtado informó al jefe de la base que en el operativo únicamente se había intervenido una “escuela popular” y no se había producido ningún enfrentamiento o hecho violento. (Comisión de la Verdad y Reconciliación (84).

Después que los militares abandonaron Accomarca, los pobladores que consiguieron escapar y esconderse, retornaron a Lloqllapampa, para recoger los cuerpos de las personas que habían sido asesinadas cuyos restos mortales habían quedado en distintos lugares. Así, pudieron identificar los restos de Julia Baldeón García, cerca de la choza incendiada por los soldados. Sin embargo, los restos de otros comuneros y comuneras fueron hallados carbonizados, siendo imposible la identificación de las víctimas. Ante esto, los habitantes de la zona decidieron trasladar los restos a una fosa preparada por ellos a diez metros de distancia de la casa donde habían sucedido los hechos. Junto a los restos óseos calcinados, los pobladores hallaron casquillos pertenecientes a los fusiles que habían sido utilizados por los soldados. El mismo día 15 de agosto de 1985, la comunera Emeteria Pérez Baldeón encontró a su esposo, Cornelio Quispe, muerto cerca al cementerio del distrito de Accomarca, junto a él yacía el cuerpo de Rosalino Quispe Palacios. El cuerpo de Cornelio presentaba una herida de bala a la altura del estómago y el de Rosalino tenía un impacto de bala en la frente. Ambos estaban amarrados con una soga. Igualmente, después de tres días, Eulogia de la Cruz Gamboa encontró en el sector denominado Ñuñuhuan-yocc, Lloqllapampa, el cuerpo incinerado del comunero Pastor Gómez a quien enterró en el mismo lugar donde lo encontró. Sin embargo, el ciclo de muerte en Accomarca no había acabado aún. El 8 de septiembre de 1985, efectivos militares dieron muerte a Brígida Pérez Chávez y a su hijo Alejandro Baldeón Pérez, testigos de la matanza ocurrida en Accomarca. Dentro del ataque contra testigos sobrevivientes, el 13 de septiembre

de 1985, fueron encontrados en el cementerio de Accomarca, los cuerpos de cinco personas cuyos cuerpos, aun sangrantes, mostraban huellas de haber sido recientemente victimados a balazos, poco antes de la llegada de una comisión investigadora del Congreso de la República” (85).

El 14 de agosto de 1985, Telmo Hurtado era subteniente cuando dirigió el crimen de Accomarca. Este abominable genocidio no impidió que siguiera su carrera ascendente en el ejército. El cabecilla de esta matanza, fue premiado varias veces por este hecho sangriento. Durante todo el primer gobierno de Alan García (1985-1990) fue protegido por el régimen e incluso lo ascendieron dos veces, a teniente y capitán. En el mismo periodo fue promovido a una agregaduría militar en los Estados Unidos, desde donde se burlo de sus acusadores. En 1994, durante el régimen de Fujimori, el general del ejército Nicolás Hermoza, acusado actualmente de crímenes y corrupción, lo premio con un reconocimiento especial de las Fuerzas Armadas, y le dieron el grado de mayor del ejército. En 1998 era el jefe militar de la Base Militar de San Ignacio, Provincia de Jaén, departamento de Cajamarca. El ejército nunca lo apartó de sus rangos y le dio cuatro condecoraciones después de 1985. Según las investigaciones de diferentes instituciones defensoras de los derechos humanos, Hurtado tuvo la benevolencia y gratitud del ejército y del gobierno, en reconocimiento a su inculpación personal en este crimen, cuyo propósito fue dejar sin responsabilidad a los altos mandos. En 1986, un año después de la matanza de Accomarca, el general Guillermo Monzón Arrunátegui, comandante general del Ejército en ese tiempo, le prometió, a cambio de su autoinculpación, su traslado al extranjero y que recibiría todas las garantías para continuar en la carrera militar sin ningún problema. El 15 de octubre de 1987, aún bajo el gobierno de Alan García, la Sala de Guerra de la Segunda Zona Judicial del Ejército, absolvió a todos los encausados en esta matanza. Telmo Hurtado solo fue acusado por “abuso de autoridad”. Solo en 1992, por pre-

siones internacionales y de varias organizaciones de defensa de derechos humanos, Hurtado fue sentenciado por el Fuero Privativo Militar a la pena de seis años de prisión. Tres años después, en 1995, durante el régimen de Alberto Fujimori, fue liberado en aplicación de una ley de amnistía, que perdonó también a varias docenas de militares acusados de matanzas de pobladores. Lo burlesco en la “sanción penal”, que recibió Hurtado, no fue solamente la irrisoria penas de seis años de prisión que nunca cumplió, sino por el ingrediente que acompañó esta sentencia y que exigía al militar como “reparación civil” pagar 8 soles (dos dólares y medio) por cada una de las 69 víctimas de Accomarca.

CAPITULO SEGUNDO

RONDAS DE LA MUERTE

En las dos décadas de conflicto interno (1980-2000) el ejército logró integrar a su aparato militar contrainsurgente, un contingente de medio de millón de campesinos organizados en rondas y comités de defensa civil. Ellos fueron reclutados a la fuerza o integrados a cambio de un salario u otra recompensa material proveniente del Estado para que luchen contra las fuerzas subversivas. Estos grupos paramilitares estaban instalados en los andes, en la región de la selva y en los alrededores de las grandes ciudades, incluida Lima (1). El accionar represivo de las rondas fue tan mortal como la que impusieron las fuerzas militares y policiales. Para la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) los comités de autodefensa y otros grupos paramilitares que por cuenta del Estado se involucraron en la guerra contrainsurgente, fueron responsables de 6,400 muertos y desaparecidos (8.56%) del total de las víctimas de la guerra interna que significó casi 80 mil personas. “En ningún otro actor de la guerra, la línea divisora entre perpetrador y víctima, entre héroe y villano es tan delgada y tan porosa como en los Comités de Autodefensa (CAD) o rondas campesinas contrasubversivas” (2). Organizar y militarizar, a la población rural y urbana para integrarlos al aparato contrainsurgente fue una de las acciones fundamentales que ejecutaron las fuerzas armadas para enfrentar la subversión. En la parte ascendente de la lucha armada dirigida por los maoístas, más o menos en 1990, el Estado ya había movilizó

a cerca de 400 mil miembros de rondas urbanas y rurales, cifra que aumentó con la militarización del país impuesta por el gobierno de Fujimori.

En 1991, cuando el proceso de lucha armadas se encontraba en pleno desarrollo, un diario de Lima señalaba, que en 15 años de conflicto armado las rondas campesinas habían sido “un elemento decisivo en la pacificación de extensas zonas de territorio nacional” (3). Alberto Fujimori, señalaba en 1992 cuando las rondas habían quedado constituidas como parte del aparato represivo que: “Ya no son sólo los policías y militares sino toda la población la que lucha contra la subversión...ganaremos la lucha interna teniendo a la población de nuestro lado...» (4). Desde el gobierno, o de los sectores de la izquierda legal, o de las ong, se habló de rondas autónomas, pacíficas y democráticas, pero ello no correspondió a la naturaleza violenta de las rondas y al rol contrainsurgente que le asignó el ejército. Fernando Belaúnde Terry, Alan García Pérez y Alberto Fujimori, tres presidentes desde 1980 al 2000, privilegiaron el uso de las rondas como elemento medular de la guerra antisubversiva.

DIMENSIÓN Y CANTIDAD DE RONDAS Y RONDEROS

Hasta 1979, un año antes del inicio de la lucha armada, solo existía una docena de rondas campesinas y ellas estaban ubicadas en la zona de Cajamarca, región norte del Perú. En mayo de 1980 se inicia el proceso subversivo, y ello sería el detonante para el crecimiento vertiginoso de las rondas y grupos de defensa civil hasta alcanzar un papel de primer orden en la estrategia contrainsurgente del Estado. Si su origen fue en el departamento de Cajamarca, su expansión como fuerza paramilitar y contrainsurgente se inició en el departamento de Ayacucho. “Es sabido que esta organización masiva de los

campesinos fue determinante en la derrota de Sendero Luminoso en el campo”, dice un informe de una institución internacional especializada en asuntos militares en América Latina (5). En 1990, a diez años del conflicto armado, se calculaban en todo el país, 120 mil los miembros de los comités de autodefensa, rondas campesinas y rondas urbanas. El 80% de estas rondas estaban ubicadas principalmente en Ayacucho, Huancavelica, Junín, Huanuco, Cerro de Pasco, y San Martín, departamentos de importante implantación de la subversión. En 1992, la fuerza activa de estos grupos llegó a 191,000 personas y gran parte de ellos estaban ubicados, no solamente en los andes y las zonas de mayor conflicto armado, sino también en Lima, la capital del Perú. En diciembre de 1993, una de las etapas mas altas de la actividad guerrillera, las rondas alcanzaron la suma de 370 mil miembros. Un informe del Instituto de Investigaciones para la Defensa Nacional, de marzo 1994, señala que las rondas y comités de defensa civil se habían convertido en la “organización social más masiva en el campo”, y que solo en Ayacucho y Huancavelica, “existían 1,655 Comités de Defensa Civil que agrupaban a 66,200 ronderos y contaban con 6,060 escopetas proporcionadas por el gobierno”. En este crecimiento sin cesar, en 1994 los ronderos aumentaron a 376,027. En 1995 la cifra llegó a 400 mil miembros, y su aumento se vio favorecido por la extrema militarización del país, y por leyes dictadas por el gobierno que legalizó las rondas como fuerzas paramilitares dependientes de las fuerzas armadas. Su pico más alto, según voceros de las fuerzas armadas, fue el año 2000 al final del conflicto armado, cuando se registraron 500 mil ronderos y 8,000 Comités de Autodefensa (CAD) en todo el país (6).

El concepto estratégico militar que comprende la utilización de las rondas en la guerra contrainsurgente proviene de las “aldeas estratégicas” utilizadas en los años 70 por las tropas americanas en la guerra del Vietnam. Las aldeas estratégicas en Vietnam, o “comunidades ejemplares” en otras partes del mun-

do, o también “comités de defensa civil”, en Perú esta definido por la importancia del control de la población y su objetivo de implicar directamente a la población civil en la lucha contrainsurgente. Para este fin, el ejército, organiza a los campesinos o a la población urbana pobre en núcleos armados que se distribuyen en zonas militares que pueden servir de retaguardia o de puestos tácticos de avanzada de las fuerzas militares del Estado. América Latina registra experiencias recientes sobre este tipo de organización paramilitar contrainsurgente donde, a la fuerza o como mercenario, se involucró al campesino. En Guatemala, en 1981 se crearon las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Este aparato paramilitar fue organizado por el general Romeo Lucas García, presidente de este país entre 1978-1982. El propósito fue combatir la guerrilla dirigida por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Los integrantes de las PAC eran campesinos que tuvieron el rango de auxiliares civiles del ejército, encargados de “proteger a las comunidades” contra las incursiones de la guerrilla guatemalteca. Oficialmente se dijo, que estos grupos paramilitares se formaban “espontáneamente” y sus integrantes eran “voluntarios”, pero es conocido que miles de campesinos, contra su voluntad fueron enrolados a estos grupos paramilitares. Entre 1981 y 1995, el número de integrantes de las PAC alcanzó un poco más de 600 mil personas, que resultaba enorme para una población calculada en no más de 10 millones de habitantes en la época.

En Nicaragua adoptaron otra cobertura, y simplemente se les llamó “contras” (contrarrevolucionarios). Estos grupos surgieron después de 1979 cuando los sandinistas tomaron el poder, y fueron organizados por la Guardia Nacional de Somoza y la Agencia de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos. Su objetivo fue luchar contra el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua (1979 -1990). Ronald Reagan, presidente norteamericano en ese tiempo, fue uno de los principales auspiciadores de las “contras”. El dinero

con el cual la administración USA financiaba estos grupos tenía su origen en la venta ilegal de armas que hacía Estados Unidos a Irán (escándalo Irán-Contra). En Colombia han adoptado diversos nombres, y entre ellos se puede señalar a las milicias rurales formadas por los grandes propietarios terratenientes y las fuerzas militares de este país. El origen de estos grupos paramilitares se remontan a 1962, y el eje de su actuación ha sido combatir a los grupos guerrilleros, principalmente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las milicias rurales se convirtieron después en grupos de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en cuya organización han participado el Estado colombiano y la CIA americana. En 2003, los jefes de estos grupos paramilitares firmaron un acuerdo de desmovilización y entrega de armas. Solo 30 mil paramilitares se acogieron a este acuerdo, pero la gran mayoría de AUC, siguen actuando por cuenta del Estado, de la CIA, de los terratenientes y los grupos de poder, incluido el narcotráfico.

ORIGEN DE LAS RONDAS

En sus orígenes las rondas campesinas del Perú, no se plantean otra cosa que dotarse de un cuerpo de seguridad que los proteja de los ladrones de vacas, chanchos y demás animales domésticos. Su objetivo, así lo estipulaban sus estatutos, era luchar contra el abigeo (ladrón de animales domésticos) y otro tipo de delincuencia común que la burocracia e inoperancia del Estado no podía resolver. En los pueblos alejados de la capital, principalmente en el campo, el Estado era inexistente, y no había ni puestos policiales ni representante del poder judicial. Las rondas campesinas, se estructuran como reflejo de la organización social comunitaria del campesino. Las “armas de sus integrantes”, no eran otro cosa que varas de carrizo, látigos de cuero y algunos rudimentarios silbatos. Al inicio se denominaban simplemente patrullas de vigi-

lancia, y los ronderos no utilizaban botas militares sino más bien “llanques” serranos (sandalias fabricadas con restos de llantas de automóviles o camiones). En su estructura de organización, rendían cuenta a la asamblea de la comunidad, y a falta de autoridades del Estado, se convertían en jueces que sin mandato judicial, resolvían litigios de tierras, riñas familiares, y delitos cometidos por los propios campesinos. El propósito de la ronda, en aquella época, no tiene ninguna connotación política ni reivindicativa. No se plantea la lucha contra el terrateniente y la gran propiedad de la tierra. Hasta antes del inicio del conflicto armado en 1980, estas rondas no tuvieron ninguna importancia ni para el Estado ni para las Fuerzas Armadas.

Las primeras rondas, aquellas que antecedieron las rondas contrainsurgentes, aparecieron el diciembre de 1976 en el pueblo de Cuyumalca (Cajamarca, un departamento del norte del Perú) como “patrulla comunal de vigilancia contra los ladrones”. Cuidavacas le decían los campesinos. Surgen vinculadas a la iglesia católica, y sería un alto jefe religioso de la región el que en 1980 serviría de puente entre ronderos y militares. Orin Starn (7), un investigador norteamericano, detalla que en el caso específico de las rondas de Cajamarca, desde sus inicios se vinculan a la iglesia católica, y los primeros dirigentes de las rondas campesinas fueron “catequistas campesinos, entrenados por sacerdotes del lugar”. El mismo investigador anota que fue el obispo de Cajamarca, José Dammert Bellido quien en 1980 “arregló un encuentro entre dirigentes ronderos y autoridades militares”. Ello sería el inicio de una relación militar que va durar cerca de dos décadas entre estos grupos de campesinos y las fuerzas armadas. La influencia religiosa en la conformación de las rondas es notoria y se verá que en los “diez mandamientos del rondero”, se destaca que uno de los principios es “continuar la obra liberadora de Cristo y de Tupac Amaru” (8).

“Con Biblia y Mandamientos del Rondero en mano, don Juan Huamán recorría el valle de Tabaconas trabajando intensamente por consolidar las rondas campesinas. En Jaén y San Ignacio, provincias de Cajamarca, era conocido por su pensamiento de autentico cristiano: continuar la obra liberadora de Cristo, luchando por el cambio social. Su brillante obra como catequista gracias a su capacidad de convencimiento” (9).

Si la iglesia aprovecha las rondas para extender su influencia en la comunidad campesina, sería la izquierda legal la que intentaría sacar ganancias políticas de la movilización de estos grupos. Las rondas, antes de convertirse en parte del aparato contrainsurgente del Estado, se transforman de “cuidavacas”, en instrumentos electorales. Este proceso se vincula al cambio político en el Perú que se desarrolla en 1980 cuando la dictadura militar sede el puesto a un régimen civil mediante elecciones generales. Como anota Orin Starn, en esa coyuntura, un “puñado de activistas del Partido Comunista del Perú “Patria Roja” que participaban en las rondas campesinas de Chota (Cajamarca) “esperó ganar apoyo electoral” en el seno de las rondas. Las rondas norteñas, si bien es cierto, no recibían nada del Estado, pronto se convierten, en activos participantes en las elecciones programadas por el régimen militar que se había quedado ilegalmente en el poder durante 12 años, y que convoca las elecciones generales como una forma de asegurar la continuidad de un régimen sujeto a las fuerzas armadas y a los grupos de poder. Daniel Idrogo, un militante de “Patria Roja”, y miembro de una ronda campesina en Cuyumalca (Cajamarca), se convierte en 1985 en el primer diputado de las rondas de Cajamarca (10). Posteriormente, las rondas de Cajamarca seguirán el mismo destino electoral que la izquierda legal (Izquierda Unida), y en 1985 orientadas por Patria Roja, votaron por Alan García Pérez, y después en 1990 por Alberto Fujimori. Orin Starn, precisa, que la influencia tanto del Apra como la de Patria Roja, «animaron un sentimiento antisenderista en las rondas», y que estas «jugaron

un papel importante para impedir» que la guerrilla maoísta ingrese al campo norteño. Sobre el mismo tema, en 1986 en pleno auge del gobierno de Alan García Pérez, la Federación de Rondas Campesinas de Cajamarca, con estrecha relación con los parlamentarios de Patria Roja, admitía en documento público que buscaban un «apoyo de las autoridades, y que las actividades de las rondas «favorecía a las mismas instituciones policiales y judiciales...» (11).

Hasta que no estalla la lucha subversiva en 1980, el Estado y las fuerzas armadas, no toman en cuenta la existencia de las rondas. Las miran con desprecio y las califican como un asunto de curas locales, y de campesinos asustados por el robo de sus animales. Esta apreciación cambia completamente a partir del inicio del proceso de lucha armada y sobre todo cuando las fuerzas armadas ponen en ejecución sus planes para ampliar su aparato militar con la integración de los campesinos organizados en rondas. El avance guerrillero en el campo presenta un desafío de envergadura nacional al Estado respecto a la necesidad de ocupar militarmente grandes territorios que con sus propias fuerzas militares era imposible hacerlo. Con el inicio del conflicto interno, las rondas ya no serían simplemente organizaciones comunitarias para luchar contra ladrones de vacas, sino más bien grupos armados dirigidos por las fuerzas armadas. A partir de este cambio en la naturaleza de las rondas desaparece la supuesta autonomía campesina y la publicitada “organización democrática desde las bases”. La constitución del Estado de 1979 no le otorgaba ninguna consideración, y simplemente la ignoró jurídicamente. Con el fortalecimiento de la subversión en el campo las rondas adquieren un rol preponderante en la lucha antisubversiva, y si al inicio su uso es solamente en Ayacucho y zonas rurales, posteriormente adquirirían dimensión nacional. Se organizarían en las zonas urbanas de mayor pobreza, incluidas los barrios populares de la capital del Perú. Desde 1985, el Estado a través de los consejos municipales, crea las rondas urbanas

en las barriadas de Lima y otras grandes ciudades. Su objetivo es el mismo que en campo: frenar el crecimiento de la subversión. En los barrios de Lima, dice en 1992 un informe de una ONG peruana, sendero ha encontrado, “terreno fértil de reclutamiento entre sectores juveniles, pauperizados y sin esperanza, lo que le ha permitido crecer de manera significativa” (12).

RONDAS Y MILITARES

El uso de las rondas en la guerra contrainsurgente agudiza la violencia en las zonas rurales, principalmente en las regiones andinas, donde la guerrilla intenta ganar el apoyo del campesinado. En oposición a ello, los militares ponen en acción planes rurales para controlar y militarizar el campo. Para el Partido Comunista del Perú (PCP), el campo es el “teatro principal de las acciones armadas”, en cuyo escenario el campesinado pobre estaba llamado a ser la “fuerza principal de la revolución” (13). Bajo ese principio estratégico, tomado de los postulados teóricos del maoísmo, se aplicaba la táctica de cercar las ciudades desde el campo. Para el éxito de esta estrategia se concebía la implantación de “bases de apoyo” en las zonas rurales, en particular en la región de la sierra.

Si los subversivos, por lo menos al inicio, se nutrían de algunas de las enseñanzas teóricas militares de Mao, las fuerzas contrainsurgentes del Perú buscaron la sabiduría antisubversiva en los más recientes manuales contrainsurgentes redactados por altos oficiales del ejército norteamericano. Los planes que utilizaban los militares peruanos para controlar la población, fueron una aplicación rigurosa de un Manual para combatir la Resistencia preparado en los inicios de la década del 80 por el Pentágono Americano. Según este manual del ejército de los Estados Unidos, para enfrentar la subversión hay que emplear “unidades de autodefensa del lugar”

las mismas que tendrán asistencia y apoyo militar. “El apoyo que usualmente se requiere es el suministro de armas, municiones, alimentos, equipo de transportes y comunicaciones” (14). En dicho manual, convertido en directiva infalible, para el ejército peruano, se reconoce, uno de los principios de la guerra revolucionaria, que significa que las fuerzas subversivas para potencias su área de acción guerrillera, tiene la necesidad de esconderse dentro de la población civil y conocer al milímetro el terreno donde se mueve. En respuesta a ello, explica el manual USA, había que romper la “estrecha relación existente entre la población civil y la subversión”. Dejar al pez fuera del agua se anota. Para este objetivo, se señala, había que intensificar las “centrales militares”, y que para ello era “necesario el traslado de poblaciones enteras, o mover individuos de las áreas alejadas hacia centros mas populosos”. En aplicación de estos lineamientos militares, se intenta dejar sin base de apoyo a la subversión, y cortar cualquier vínculo entre el campesinado y la guerrilla. El propósito es utilizar militarmente al campesino y las comunidades indígenas en la guerra contrainsurgente. Es esta directiva estratégica militar la que sirve de medula teórica para organizar y desarrollar las rondas contrainsurgentes en el campo y ciudades.

Organizar rondas contrainsurgentes, rurales o urbanas, no fue una tarea solamente de las fuerzas armadas y del Estado. Sus auspiciadores provinieron también de lo que se conoce como la “sociedad civil”. En este propósito participaron los partidos políticos, tanto de izquierda y derecha, así como las organizaciones no gubernamentales (ONG), los municipios y la iglesia. Parte del apoyo que recibieron los militares para organizar los grupos de “autodefensa” llegó de los Estados Unidos que desde el inicio de la década del 80 apoyaron con dinero y personal, la accionar contrainsurgente en Perú. Controlar territorialmente las alturas andinas constituía para las fuerzas armadas un elemento esencial en sus planes anti-guerrilleros en las zonas rurales. Ideele, una conocida ONG

peruana, reconocía en 1991, que el “Estado, a través de las Fuerzas Armadas, ha centrado su estrategia en fomentar la organización de autodefensa y repartir armas a todas aquellas que gozan de confianza” (15). Por su parte en 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), decía que las fuerzas armadas, reagrupaban a los “campesinos en núcleos poblados y los organizan en Comités de Defensa Civil” (16).

Los primeros grupos de defensa civil o rondas, son organizados un poco antes de 1983 por los infantes de Marina instalados en Huanta. Fue en Ayacucho durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry que por primera vez los militares y policías utilizaron a los campesinos en la lucha contrainsurgente. En enero de 1983, en dos comunidades de Ayacucho, primero en Huaychao (22 de enero) y después en Uchuraccay (26 de enero) los comuneros actuaron bajo las directivas y los planes antisubversivos del ejército. En el primer caso dieron muerte a 7 jóvenes y niños sospechosos de pertenecer a la guerrilla maoísta, y en el segundo caso, asesinaron brutalmente a 8 periodistas y un guía quienes habían llegado a esa zona precisamente para investigar el crimen de Huaychao. Con estas dos matanzas las rondas campesinas inauguran sus acciones criminales al lado de las fuerzas armadas. A partir de Uchuraccay las rondas darían inicio a sus actividades brutales contra el campesinado, cuyas armas rudimentarias (palos, piedras y huaracas) serían reemplazadas por fusiles de guerra, bombas y otras armas de fuego tan mortales como la que usa el ejército. “Cuando la Infantería de Marina llega a la comunidad en agosto de 1983, logra establecer un comité de autodefensa sobre la base de los grupos de autodefensa que habían surgido a fines de 1982, poco antes del asesinato de los siete subversivos en Huaychao” (17).

Al inicio de los años 80, organizar las rondas y grupos de defensa civil, fue una actividad encubierta y casi clandestina de las fuerzas armadas. Así se constata que el presidente Fer-

nando Belaúnde (1980-1985) negó en muchas ocasiones el uso contrainsurgente de campesinos y de la población civil, pero sin embargo desde los inicios de 1982 los infantes de la Marina destacados en la zona de Ayacucho dan inicio a la organización de las rondas campesinas. En 1981 se presentó ante el parlamento peruano la primera propuesta para que el Estado reconozca a las rondas campesinas. Sería recién en 1986 que se promulga la Ley 24571 que reconoce a las rondas como aparatos “pacíficos, autónomos y de apoyo a la comunidad y a las fuerzas policiales”. De ahí para adelante, entregar armas a las rondas y usarlas en la lucha contra la guerrilla, se convirtió en una actividad oficial y cotidiana. Es famosa la escena del 8 de diciembre de 1989, planificada desde el Gobierno, cuando el presidente Alan García aparece en la televisión y en otros medios de comunicación, haciendo entrega de armas a los ronderos organizados y dirigidos por Javier Pompeyo Rivera, alias “comandante Huayhuaco”. Ese día García, como presidente y “jefe supremo de las fuerzas armadas”, entregó 200 fusiles de guerra a los ronderos. El espectáculo fue en Rinconada, y el “comandante Huayhuaco” fue presentado como héroe de las rondas y Comités de Defensa Civil del valle del río Apurímac. En esa ocasión el “comandante” rondero anunció que si el gobierno le entregaba 100 fusiles FAL o 500 fusiles Máuser “le devolvería la paz al departamento de Ayacucho” (18). Huayhuaco vinculado a la más alta burocracia del gobierno aprista, y los altos mandos del ejército, combinaba su actividad de rondero con sus negocios en el narcotráfico y robos. Pompeyo Rivera, en sus mejores momentos logró ser jefe de varias centenas de ronderos provenientes de 42 comunidades del valle de Sachabamba y 58 caseríos de Huamanga. Para 1989, como reconoce la Comisión de Verdad y Reconciliación, “prácticamente todas las provincias norteñas de Ayacucho, (Huanta, Huamanga y La Mar)”, contaban con rondas campesinas contrasubversivas.

Durante el gobierno de la administración de García se recluta-

ron delincuentes y narcotraficantes como jefes de los rondos. El caso bastante conocido de la relación narcotráfico-rondas, se refiere al “comandante Huayhuaco”. Este personaje, proveniente de los bajos fondos de la sociedad peruana, no se dedicaba solamente a “luchar contra el terrorismo senderista”, como decía la publicidad oficial. Su actividad principal era el narcotráfico, saquear a los campesinos y asesinarlos si ponían resistencia. Las rondas de Huayhuaco, una de las más criminales del valle de Apurímac y de Ayacucho, fueron responsables del asesinato de varias decenas de campesinos. Huayhuaco, siempre tenía a su lado una pistola Star calibre 9 milímetros, que mostraba con orgullo. La pistola, con la que le quitó la vida a muchos campesinos, la había recibido como regalo de Alan García Pérez. En 1990, cuando concluyó el gobierno de Alan García, el “héroe” Huayhuaco, fue arrestado bajo los cargos de tráfico de cocaína, homicidio, usurpación de funciones y abuso de autoridad. Estuvo en la cárcel poco tiempo, y fue el régimen de Fujimori que se encargó de dejarlo sin castigo y ponerlo en libertad. Los campesinos lo conocían con el apelativo de “Atila” de los andes. Como da cuenta la revista *Caretas* en 1991, “Huayhuaco” y sus rondas juntos con la infantería de Marina realizaron una serie de operativos contra la subversión donde decenas de campesinos fueron capturados, pero muchos de éstos fueron desaparecidos y posteriormente sus cuerpos perforados por balas fueron encontrados en el río (19). El diario *Expreso*, un cotidiano que durante el régimen de Fujimori fue financiado por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), calificó en 1993 a Huayhuaco de “precursor de las rondas campesinas en Ayacucho” (20).

El gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), se encargó de hacer de las rondas campesinas grupos paramilitares adscritos a las fuerzas armadas y a la lucha contrainsurgente. En diciembre de 1991, Alberto Fujimori, anunció que la estrategia contrasubversiva que había puesto en marcha el gobierno tenía dos partes: “inteligencia en la ciudad y rondas en el

campo". Si hasta mediados de la década del 80 se decía, para encubrir los fines criminales de las rondas, que éstas se organizaban espontáneamente y en completa libertad, no es así durante el régimen fujimorista que pone a las rondas bajo control absoluto de los militares. En 1990, un alto jefe militar habla de la relación rondas-ejército, y de la importancia estratégica de éstas en la lucha contrainsurgente: "Los comités complementan y apoyan las funciones de autodefensa y desarrollo que cumplen las fuerzas armadas y policiales. Las rondas campesinas se organizan para autodefenderse. Se organizan espontáneamente, pero se subordinan al Ejército. Son rondas de autodefensa bajo el tutelaje militar" (21). La revista *Ideele*, en diciembre de 1993, señala por su parte que la "promoción de las rondas de defensa civil", significó la "herramienta estratégica antisubversiva más poderosa para contener el avance senderista en el campo" (22).

Mediante un paquete de decretos legislativos dictados en 1991, se militarizó el campo y se oficializó la entrega masiva de armas de guerra a las rondas campesinas. En abril de 1991, Alberto Fujimori, con el mismo método publicitario utilizado anteriormente por Alan García, se hizo filmar para la televisión, cuando entregaba 450 fusiles a ronderos del valle del Mántaro. Como parte de la militarización de las rondas se estableció que los Comités de Autodefensa (rondas campesinas, rondas urbanas, y grupos de defensa civil), se integraban al aparato contrainsurgente del Estado, organizado y dirigido por las fuerzas armadas. En aplicación de un dispositivo promulgado por el régimen fujimorista, los comités de autodefensa podían adquirir armas y usarlas en la "defensa de la comunidad". Se estableció también que durante un año mínimo, "los servicios prestados en las rondas por los jóvenes en edad del servicio militar", eran considerados como "cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio" (23). Para el senador Luis Vivanco del mismo partido de Fujimori, "vencer al terrorismo" era una cuestión de lograr una "integración del

aspecto civil y militar, situación que proponía el proyecto de las rondas urbanas y los comités de autodefensa” (24).

EL RECLUTAMIENTO

Durante las dos décadas que duró el conflicto armado, desde el Estado y de otras instituciones se intentó encubrir el carácter compulsivo en el reclutamiento y organización de las rondas. Así se publicitó que los campesinos se organizaban “voluntariamente” y que era para que se defiendan de Sendero Luminoso. La verdad fue diferente, y hay mucha información que prueba que la mayoría de ronderos fueron reclutados contra su voluntad, y miles de comunidades rurales fueron despobladas cuando los soldados a la fuerza se llevaban a los jóvenes campesinos para integrarlos a las rondas. La coerción, el chantaje y la amenaza que podía convertirse en la ejecución sumaria si un campesino se negaba a “colaborar” con las fuerzas armadas, fue el método preponderante que utilizó el ejército para convertir a los campesinos en paramilitares. El campesino que había sido reclutado para integrar las rondas, estaba obligado a abandonar sus tierras, sus animales y le prohibían hacer cualquier tarea en el campo. “Aquellos que no quieren incorporarse a las rondas son asesinados y en otros casos desaparecidos”, denunciaba en 1991 un diario de Lima (25). El 25 de octubre de 1992, campesinos de San José de Churia (Ayacucho), denunciaron que 46 miembros de esta comunidad fueron secuestrados por patrullas del ejército, y llevados a un cuartel de Vilcashuaman para integrarlos a las rondas. Nunca más se supo de ellos. Los campesinos eran masivamente concentrados en grandes cuarteles donde eran sometidos a brutales tratos y a un rigor militar. Les daban alimentos, vestimentas, pero no recibían ningún salario. Comunidades enteras de los andes fueron trasladadas a “centros de reclutamiento”, que más se parecían a campos de concentración donde la vida del rondero dependía de las disposicio-

nes militares. De ahí el campesino solo podía salir cuando lo decidían los jefes del ejército. Era en realidad un prisionero de las fuerzas armadas. Algunos, con riesgo de perder la vida lograron huir de estos centros militares, pero muchos murieron en el intento alcanzar la libertad.

El 14 de marzo en la noche cuatro encauchados irrumpieron en Chuschi, y secuestraron a Manuel Pacotaype. Lo llevaron a punta de golpes a la plaza principal del pueblo. Junto con él fueron detenidos tres comuneros de este pueblo. El mismo día en la madrugada los detenidos fueron embarcados en una camioneta de la policía y llevado lejos del pueblo. Nadie sabe donde fueron asesinados, pero el hecho es que nunca más aparecieron. Cuando los familiares junto con un juez pidieron explicaciones a la policía, estos respondieron, no saber nada de ese operativo. ¿Por qué los mataron?. Simplemente como cuentan los campesinos de Chuschi, porque se negaron a formar las rondas campesinas: “Ellos querían obligarnos a formar autodefensa, nosotros no queríamos”. Tres días después de las detenciones de los comuneros, nuevamente el alférez Bobadilla reunió al pueblo en la plaza. Ahí amenazó y dijo groserías contra todos aquellos que se negaban a integrar las rondas; “¡ Ya ven carajo!, eso les pasa por no formar las rondas de defensa civil. Así cada uno va a desaparecer”. Según los campesinos de Chuschi, narra la periodista Maria Alvarado, muchas comunidades habrían sido presionadas y obligas por otras rondas y el ejército para conformar comités de defensa civil. Junto con la denuncia de los pobladores de Chuschi, se juntaron las denuncias de otras diez comunidades ayacuchanas. Ellas denunciaron que entre comuneros y familiares de estos, por los menos 113 personas, incluido un bebe de un mes de nacido y algunos jóvenes menores de edad, se encontraban en calidad de detenidos y desaparecidos (26).

“Con las rondas contrasubversivas se impone una lógica militar en los pueblos. La vida es organizada en función de la

guerra; cualquier trasgresión de las reglas, que en medio del conflicto tiene mayor trascendencia, es drásticamente castigada. Tiene mayor sanción quedarse dormido o no hacer la guardia que violar a una mujer... En ese tiempo no había ningún juez, sólo los comandos hacían respetar las leyes, también había un teniente, sólo ellos castigaban al que se comportaba mal en la comunidad, lo golpeaban con la culata del arma... Era una vida sacrificada. Los campesinos tenían que abandonar sus chacras y someterse a una vida militarizada, con ejercicios, entrenamientos y caminatas de varios días, solos o al lado de los soldados. Vivir entre murallas que cercaron sus pueblos, hacer vigilancia todos los días en sus torreones, controlar la entrada y salida con pase, realizar la formación diaria e izar la bandera implican la incorporación de un orden militar... Los que asumen el liderazgo son jóvenes ronderos, muchos de ellos licenciados del Ejército Peruano y, en algunos casos, pagados por la comunidad para dedicarse, a tiempo completo, a las tareas de defensa (los llamados tigres), quienes desplazan a toda una generación de autoridades mayores" (27).

En evidencia no todos los integrantes de las rondas fueron reclutados a la fuerza y contra su voluntad. Hubo, un porcentaje menor de ronderos que sirvieron en estos cuerpos paramilitares a cambio de un salario, recompensas y premios otorgados por las fuerzas armadas. Una de estos premios era la protección que recibía para asaltar y saquear pueblos y comunidades campesinas. El rondero mercenario, como lo calificaba la población, provenía del narcotráfico y de los sectores lumpen de las provincias. Estos se comprometían a participar en la guerra contrainsurgente a cambio de un sueldo y de la protección absoluta de parte del Estado. El rondero mercenario, sostenido por el ejército, lograba impunidad en el negocio de la droga, el crimen de campesinos y otros graves delitos comunes. No había leyes ni jueces capaces de sancionar los brutales crímenes cometidos bajo la cobertura

de rondero. Un periodista peruano, denunciaba en 1988, que en la selva de Ayacucho, las rondas dirigidas por narcotraficantes apresaban y torturaban campesinos. En el artículo se anota que: “Una grave denuncia sobre ronderos armados por la Marina de guerra que capturan y esclavizan campesinos y que están comprometidos en el narcotráfico” (28). Mas adelante en 1992, un diario de Lima, hacia público que los “ronderos del valle del Apurímac venden droga a colombianos” (29). El reclutamiento de estos ronderos se hacia entre conocidos abigeos (ladrones de animales) y narcotraficantes de la región donde el ejército necesitaba contingente paramilitar. Muchos de estos ronderos eran campesinos que habían hecho su servicio militar en el ejército, y que se les conocía como “licenciados”. Tanto los licenciados, así como los abigeos y los narcotraficantes, eran los jefes de rondas. Un ejemplo de rondero narcotraficante es el “comandante Huayhuaco” que brevemente hemos descrito en este mismo capítulo. En junio de 1992, un periodista del diario La Republica llegaron al valle de Apurimac, para hacer un reportaje del sexto aniversario de las rondas campesinas de esta región. Narran los periodistas que corrieron el riesgo de ser asesinados cuando descubrieron que los ronderos eran los más grandes productores de coca y de droga refinada de la selva ayacuchana (30)

RONDAS Y DESINFORMACION

Uno de los elementos de la estrategia contrainsurgente del Estado ha sido el recurso de la desinformación. Parte de esta desinformación fue presentar a las rondas, tanto en el campo como en las ciudades, como organizaciones, democráticas cuyo objetivo era defenderse de Sendero Luminoso. La actividad militar de los ronderos fue tan criminal y cruel como la acción misma de las fuerzas armadas. Sus blancos referidos fueron los campesinos y poblaciones que rechazaban la presencia y acción prepotente del ejército, sobre todas aquellas

consideradas “bases de apoyo de la subversión”. “Las violaciones de los derechos humanos, sin duda, representan el lado más oscuro de las rondas contrasubversivas y hay que tener mucho cuidado con generalizaciones”, decía en el 2003 la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). En octubre de 1990, llegó al Perú una delegación de la Comisión Ecuménica Internacional, para indagar sobre la situación de las violaciones humanas en el país. José Antonio Martín Pallin y Charles Harper, dos altos dirigentes de esta institución estuvieron en Tarapoto, Pucallpa y Ayacucho, algunos de los departamentos más violentos del país. Investigaron la actividad del ejército y de las rondas campesinas. Según los comisionados religiosos, en Ayacucho se registraba un alto porcentaje de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y torturas a cargo de la actividad represiva de las rondas campesinas. “Muchos de estos excesos que antes se atribuían al personal del ejército, ahora se atribuyen a las rondas campesinas...Al parecer, las rondas campesinas son una prolongación del ejército y que, por eso, tienen derecho a matar”, denunció José Antonio Martín (31). En un informe sobre la violencia en Perú preparado por Senado de la República del Perú, se anota que durante el año 1990, las rondas campesinas, las rondas vecinales, y otros grupos de pobladores mataron a 115 personas (32). Una institución peruana dedicada al análisis del conflicto armado, denunciaba en 1992, que al militarizar a la población, “los ronderos se han vuelto agentes potenciales y en algunos casos reales de violación de los derechos humanos, frente a otros grupos de campesinos no organizados de este modo...” (33).

Las rondas, para reprimir a la población rural actuaban conjuntamente con tropas de las fuerzas armadas. “Patrullas mixtas”, las llamaban, y sus métodos fueron el crimen, la tortura, violaciones y el saqueo de comunidades que se negaban a pertenecer a las bases contrainsurgentes. Las rondas, cuando fueron integradas al aparato militar, se convirtieron en tropas no convencionales. Su rol fundamental no fue combatir

directamente a las fuerzas guerrilleras, sino más bien reprimir mediante el terror a la población civil que podía mostrar alguna simpatía por Sendero Luminoso. Las rondas se encargaron de liquidar las comunidades que servían de base de apoyo de la subversión, y crear terror entre ancianos, jóvenes y mujeres. Su deficiente preparación militar, su poca moral de combatiente, además de su rudimentario armamento, las convirtieron en fuerzas agresivas y violentas, pero ineficientes para enfrentar directamente una guerra revolucionaria que tomaba en cuenta fundamentalmente la ideologización de sus integrantes. Para Lewis Taylor, las fuerzas armadas peruanas repitieron muchos de los errores cometidos por los militares americanos en Vietnam cuando organizaron las “aldeas estratégicas” para luchar contra los comunistas, Uno de estos errores consistió en la inadecuada preparación que el ejército dio a los grupos de defensa civil, que hizo de ellas presas fáciles para la guerrilla del Partido Comunista del Perú (PCP) que operaba también al interior de la comunidad (34).

“Carne de cañón” fue el calificativo que le otorgó la guerrilla maoísta por el uso que hacía el ejército de ellas, sobre todo cuando estaba obligada a marchar al frente del ejército en enfrentamientos con la guerrilla. Como “carne de cañón”, fueron blancos fáciles de las fuerzas subversivas que en sus mejores momentos estaban organizados en columnas de 100, 200 y 500 guerrilleros equipados con modernas armas de guerra. La muerte de estos ronderos, como parte de las campañas de desinformación, eran presentados por el gobierno y los medios de comunicación bajo los títulos de: “Sendero asesina a campesinos”. Por ejemplo, en 1992 la revista Cambio (35), repetía una información oficial del gobierno donde se señalaba en grandes titulares que el año 1991, la guerrilla maoísta había “asesinado a 317 campesinos”, organizados en comités de defensa civil. La manipulación de la información se hacía con una simpleza rudimentaria y se ocultaba que los 317 campesinos muertos habían sido miembros de las ron-

das campesinas y grupos de defensa civil, lo que significaba que eran parte del aparato contrainsurgente del Estado, y en razón de la guerra interna, estaban expuestos a morir en los enfrentamientos con la fuerzas guerrilleras.

Aquí presentamos un testimonio de la crueldad con la que actuaban las patrullas mixtas de ronderos y militares. Era el año 1991, y los hechos sangrientos ocurrieron en Iquicha, un pequeño pueblo de Ayacucho. “Ustedes iquichanos, no vinieron a ayudarnos cuando nos atacaron esos malditos, es porque todos ustedes son terrucos. Ahora uno por uno van a reconocer la cabeza de este terruco ladrón, seguro que lo conocen”, dijo el jefe militar mostrando la cabeza decapitada del supuesto subversivo. Uno de los testigos que hablo para la revista SI, señala que cuando llegó la patrulla mixta, solo quedaban en el pueblo 13 hombres y un niño de 12 años. “El resto de personas, cuando vieron venir a los ronderos escaparon por los cerros”. Los que no pudieron escapar fueron hechos prisioneros y encerrados en el local de la escuela. Después de haber sido incomunicados durante 48 horas, los soldados abrieron las puertas, no para liberarlos, sino para anunciarles: “Ahora ustedes nos van ayudar a capturar a los terrucos que nos atacaron”. De ahí los llevaron a Uchuraccay. En ese lugar los ronderos y militares decidieron dar muerte a sus prisioneros. Con golpes de piedras y palos en la cabeza, fueron brutalmente asesinados los 13 campesinos de Iquicha. Los ronderos trasladaron los cadáveres a la plaza del pueblo y rociando golosina los quemaron, “dejando sólo cenizas y algunos huesos”. Dijo un testigo. Después de la matanza la misma patrulla mixta regresó a Iquicha desde donde habían llevado vivos a los 13 campesinos que fueron muertos en Uchuraccay. En la tarde del mismo día que llegaron dieron muerte a tres mujeres: Elena Vargas Machca, Anita Figueroa Vargas y a Virgilio Lapa Huamán. Las ejecutaron porque se atrevieron a preguntar por los campesinos que la patrulla había secuestrado y asesinado días antes. Los ronderos y mili-

tares acamparon durante varios días. El 29 de agosto, una anciana se armo de valor y descendió de los cerros donde se había ocultado. Pudo llegar hasta su casa para buscar algunas de sus pertenencias, pero fue reconocida por un rondero. Fue asesinada a golpes de palos y piedras, y su cadáver arrojado a un hueco del cementerio del anexo de Patacancha. Una vez que ronderos y militares abandonaron el pueblo los sobrevivientes de esta masacre denunciaron los hechos sangrientos, y recién el 6 de septiembre de 1990, un juez pudo constatar la veracidad de este crimen cometido por una patrulla mixta de militares y ronderos (36).

RONDAS Y PARTIDOS POLÍTICOS

En Perú, las rondas no fue un asunto solamente del Estado y de las fuerzas armadas. Sin excepción, todos los partidos políticos oficiales, de derecha y de izquierda, contribuyeron a fortalecer el sistema jurídico, de organización y de reclutamiento de las rondas contrainsurgentes. A diferencia de otros países de América Latina donde la izquierda y los sectores democráticos, incluida un sector de la prensa, se opuso a los grupos paramilitares, en Perú la crema de los partidos políticos, así como los medios de comunicación, las ONG y mismo la iglesia, auspiciaron y apoyaron la formación de los grupos de autodefensa que el ejército empleo en la lucha contra la guerrilla. Izquierda Unida que en sus mejores tiempos agrupaba a todos las organizaciones que se denominaban de izquierda (marxistas, leninistas, maoístas, frentistas, guevaristas, y hasta cristianos), asumió la lucha contra la subversión bajo el mismo concepto estratégico planteado por los militares. Movilizar a la población pobre para que luche contra la subversión fue la base de unidad entre las fuerzas armadas y los representantes de la izquierda afincados en el parlamento, municipios y otras instituciones privadas o del Estado. En 1988, Izquierda Unida (IU), agregaba a sus tesis políticas, la llamada

autodefensa y la formación de rondas, bajo los mismos lineamientos militares del ejército. “Las comunidades campesinas han desarrollado una forma autónoma, democrática y colectiva de autodefensa, a través de las rondas campesinas...Esta autodefensa civil y democrática es hoy una referencia válida para el conjunto del pueblo” (37).

El gobierno americano, de la misma forma que lo hizo en Centroamérica, contribuyó económicamente y con armas en la expansión de las rondas campesinas. La embajada de los Estados Unidos en Lima, se involucró con los planes fujimoristas para entregar pertrechos militares a las rondas contrainsurgentes. En junio de 1991, Alberto Fujimori, acompañado de Anthony Quainton, embajador americano en Perú, públicamente hacia entrega de dos mil fusiles de guerra a las rondas campesinas de Chaquicocha en el Valle del Mántaro a 50 kilómetros de Huancavelica, donde el presidente señalaba que las rondas constituían parte del sistema de autodefensa para “luchar eficazmente contra la subversión” (38). Anthony Quayton, experto en lucha antiguerrillera, antes de llegar al Perú como embajador, había sido jefe de la Oficina de Contra-insurgencia del Departamento de Estado Norteamericano. Por su parte, Bernard Aronson, secretario de Estado adjunto para asuntos interamericanos de los Estados Unidos, en marzo de 1992 defendía en el Congreso americano el uso de las rondas en la lucha contra la subversión y anunciaba que “Sendero nos enfrenta no solo por nuestros intereses geopolíticos, pero también por la defensa de nuestros valores morales fundamentales” (39).

La historia de la lucha social demuestra que el Estado, para reprimir violentamente a la población, sobre todo si se trata de un movimiento subversivo, se ve obligado a recurrir al apoyo de las capas mas atrasadas de la sociedad. Mediante el terror, el chantaje o el engaño logran atraer a un sector importante de la población. El general del ejército Sinesio Ja-

rama, considerado uno de los expertos en guerra contrainsurgente de las fuerzas armadas, decía que la batalla mas decisiva contra la subversión la daría el pueblo en unidad con los militares, y que para este fin había que ajustarse a la concepción estratégica que priorice el “empleo de fuerzas y organizaciones políticas y sociales diversas (acuerdo nacional), a fin de quitarle a Sendero Luminoso espacio físico y base social” (40). Un analista peruano conocido por sus simpatías hacia los militares decía durante el fujimorismo que “ni las fuerzas armadas ni las fuerzas policiales están en posibilidad de resguardar todo el territorio. El que el ejército entregue armas a la población civil es un riesgo bastante grande, pero no hay muchas alternativas” (41). En 1992, el diario Expreso, ligado al régimen de Alberto Fujimori, elogiaba las rondas en la guerra contra la guerrilla maoísta. Según este cotidiano, “Largos ocho años tomó para que el país entero reconociera la legitimidad de las rondas campesinas... Hoy ya nadie duda de su valor e importancia, ni de su victoria al haber echado a Sendero de regiones importantes de la sierra” (42). Por su parte la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003), hace un balance de las rondas y señala: “En suma, con el correr de los años, las rondas contrasubversivas se han convertido en temibles oponentes del PCP-SL. Hacia los primeros años de los noventa, el PCP-SL había sido eliminado o desplazado de las principales zonas de Ayacucho, Huancavelica, Junín, Pasco y Huánuco. Los que «sacaron al pez del agua» e iniciaron su primera derrota estratégica fueron paradójicamente los mismos campesinos que, de acuerdo con el libreto maoísta, en un inicio fueron considerados como los principales aliados” (43).

A la fuerza o como mercenarios, importantes capas de la población pobre se integraron a la lucha contrainsurgente. El Perú prueba que este hecho es una regla que se aplica a todas las realidades donde se enfrentan violentamente las clases sociales y que hace peligrar la integridad del Estado. “Solo se podrá vencer a los terroristas si la ciudadanía brinda su

decidido apoyo” a las acciones de los militares, dijo en junio de 1992 Alberto Fujimori (44). Los movimientos armados en su desarrollo aceleran las contradicciones de la sociedad, y cuando alcanzan niveles de envergadura agudizan al máximo la lucha de clases. Generan crisis en los grupos de poder y en el seno de las fuerzas armadas. Salvar el Estado, no importa a que precio, se convierte en el paradigma no solo de la derecha, sino también de aquellos grupos políticos que medran y sobreviven de las prebendas que les otorga el poder de turno. La trayectoria política de la izquierda legal peruana, ilustra en forma clara, como estos grupos políticos que emplean un discurso de izquierda resultan tan reaccionarios como los mismos partidos tradicionales de los grupos de poder. Esta izquierda en las dos décadas que duró el conflicto armado, puso en práctica una conducta ambigua, de conciliación y al margen de cualquier principio político. Al mismo tiempo que hablaba de “defensa de los derechos humanos, se unía con los grupos del poder, y las fuerzas armadas. Esta unidad contrarrevolucionaria se concretizó en los municipios, en las ongs, y otras instituciones en la que participaban miembros de la izquierda legal, y donde hicieron prevalecer, no la defensa de los intereses del pueblo, sino los planes militares del gobierno.

“MADRE CORAJE” Y GRUPOS PARAMILITARES URBANOS

El caso María Elena Moyano, sirve para ilustrar como la izquierda legal se comprometió en la organización de las rondas contrainsurgentes. Ella desde el puesto de teniente alcalde de Villa El Salvador y como dirigente de diversas instituciones ligadas a la izquierda emprendió la tarea de organizar rondas urbanas para luchar contra la guerrilla maoísta. La prensa peruana la llamó “heroína” y “general” de la lucha anti Sendero Luminoso. Fue la revista *Caretas*, la que le otorgó en

1991 el calificativo de “Madre Coraje”. Martha Hildebrandt, una parlamentaria y militante del partido de Fujimori, propuso en abril de 1999 ante el parlamento, declarar a Maria Elena Moyano, “heroína nacional”. El 15 de febrero de 1992 fue eliminada por la guerrilla maoísta, y en su sepelio celebrado el 17 de febrero, se hizo presente toda una gama de políticos, expresidentes y ministros. En la historia del Perú, no se conoce un caso donde la muerte de un “dirigente popular”, se convirtiera en símbolo para las elites políticas del país. Junto a su féretro se juntaron personajes como el ex presidente Fernando Belaúnde, el vicepresidente de Fujimori, parlamentarios de izquierda y derecha, y hasta el represivo ministro del Interior del régimen fujimorista, el general Juan Briones Dávila, actualmente acusado por haber ordenado el secuestro y asesinato de decenas de personas.

La carrera política de la “Madre Coraje” fue vertiginosa y zig-zagueante. Su militancia transcurrió entre la iglesia católica, Izquierda Unida (IU), el municipio y las organizaciones no gubernamentales (ONG). Hasta la primera mitad de la década del 80 fue militante del Partido Unificado Mariateguista (PUM), uno de los partidos de la izquierda legal que integraban Izquierda Unida (IU). De ahí cambio de camiseta y paso a militar en el Movimiento de Afirmación Socialista (MAS), un grupo ligado a la iglesia católica y a organizaciones no gubernamentales (ONG). Los fundadores de este grupo político fueron, Henry Pease, Michel Azcueta, Gloria Helfer y Rolando Ames. Pease fue director durante 20 años del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Desco), una ONG ligada a la iglesia y financiada por los países ricos de Europa. Michel Azcueta, es militante cristiano y trabajaba en el colegio “Fe y Alegría” de Villa El Salvador. Milito también en el PUM, y desde 1983 hasta 1986, por cuenta de Izquierda Unida, fue alcalde en Villa el Salvador. En 1990, fue nombrado por Alberto Fujimori, presidente del Instituto Peruano de Deportes (IPD). Del fujimorismo pasó a integrar el conglomerado elec-

toral de Javier Pérez de Cuellar. Gloria Helfer, basta decir que fue en 1990 la primera ministra de educación de Alberto Fujimori. Rolando Ames, fue uno de los representantes de IU en el parlamento. En 1986 fue nombrado a la cabeza de la comisión parlamentaria que investigó la matanza de los penales de junio de 1986, cuyas conclusiones sirvieron para encubrir la responsabilidad penal de Alan García Pérez en el crimen masivo de 300 prisioneros de guerra.

Maria Elena Moyano desde 1989 fue teniente alcalde de Villa el Salvador, y desde esa institución del Estado peruano se convirtió, como dijo la prensa peruana, en “uno de los generales más efectivos de la lucha contra Sendero Luminoso” (45). Moyano fue en 1984 dirigente en de la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador (FEPOMUVES). En pleno auge de las campañas de “sobrevivencias”, se unió a los Comedores Populares y al Programa del Vaso de Leche. En la organización y promoción de estas instituciones de caridad pública participaban en forma conjunta, el gobierno, los partidos políticos, la iglesia y las Organizaciones no gubernamentales (ONG). Los grandes promotores internacionales de los comedores populares y el programa del vaso de leche fueron los países ricos, y su financiamiento provenía (en la actualidad sigue siendo así) en forma particular de los Estados Unidos y de Europa occidental. Sus patrocinadores principales, fueron la División de Alimentos para el Desarrollo (AID), dirigido por la embajada norteamericana en Perú, el Banco Mundial (BM) que también maneja el gobierno de los Estados Unidos, Caritas (Iglesia católica de los EE.UU.), Ofasa (Iglesia adventista de EE.UU.). Para el año 1990, solo en las barriadas pobres de Lima se contaban 7,070 comedores populares, los mismos que distribuían 1'400,726 raciones diarias de comida. Para el mismo periodo se contabilizaban en Villa El Salvador, teatro de operaciones de la señora Moyano, 1,174 comedores populares y distribuía 428,039 raciones diarias de comida (46).

María Elena Moyano, tuvo una estrecha vinculación con los planes contrainsurgentes del gobierno y los militares. A partir de 1990 su principal actividad fue impulsar las rondas urbanas para enfrentar a la guerrilla maoísta en las zonas populares de Lima. Esta actividad correspondía a la consigna impartida por el partido político al cual pertenecía la señora Moyano (Movimiento de Afirmación Socialista (MAS) y a la practica de Izquierda Unida (IU) frente a la subversión. Rolando Ames, senador de IU y dirigente del Mas, había pedido en 1991, “un acuerdo entre todos los partidos políticos a fin de desarrollar las rondas urbanas como forma de autodefensa” (47). En febrero de 1992, Izquierda Unida (IU), de la cual era parte la señora Moyano, había mostrado su conformidad que la Cámara de Diputados, expidiera una ley (1716) de creación de las rondas urbanas y los comités de autodefensa, grupos paramilitares que tendrían el derecho de tener armas, pero que estarían bajo el control de las fuerzas armadas. “Urge dialogo entre partidos y las fuerzas armadas”, dijo Barrantes en junio de 1992 (48). Por su parte Michel Azcueta, dijo que las fuerzas armadas desempeñan, un papel preponderante en la coyuntura que afronta el Perú” (49). Sobre este mismo tema, Enrique Bernaldes, un senador de IU, calificó como elemento capital para el “éxito de la lucha contra la subversión”, la formación de rondas campesinas y rondas urbanas” (50). Henry Pease, líder y candidato presidencial de IU, abogó por una alianza con las fuerzas militares, y extender a la civilidad los planes contrainsurgentes del Estado. “Para izquierda Unida el gasto que el país sacrificadamente hacen en sus Fuerzas Armadas necesita articularse inmediatamente con una potenciación política del rol de los uniformados en el desarrollo nacional, reclamado por ellos mismo y reconocido en la Constitución y esto en la practica exige la gestación de una nueva relación entre civilidad y Fuerzas Armadas” (51).

En 1991, María Elena Moyano, fue entrevistada por el diario la Republica. En el reportaje reafirma su actividad en la

formación de rondas. A la pregunta de si estaban organizado rondas urbanas, ella responde: “Si. Estamos organizando rondas vecinales. También estamos actuando en nuestras organizaciones, nos conocemos, sabemos quienes somos... Si el pueblo se organiza, centraliza esfuerzos podemos derrotar a Sendero. Las cosas no son fáciles pero tampoco imposibles” (52). Es mas claro aun en 1991, cuando fue invitada a participar en la reunión anual de los empresarios peruanos (Conferencia Anual de Ejecutivos-Cade). En dicho evento anunció y afirmó su compromiso en la “construcción del sistema de autodefensa” (rondas urbanas), como forma de cubrir la ausencia del Estado en materia de seguridad (53). El compromiso de parte de Maria Elena Moyano así como de toda la izquierda legal en torno a la formación de rondas urbanas, fue en la práctica una extensión de las acciones que las fuerzas armadas habían iniciado para reprimir a las poblaciones de los barrios pobres de la capital peruana. A partir de 1990 el ejército puso en ejecución una violenta represión contra pueblos jóvenes y barriadas populares de Lima donde según la policía se protegía a los subversivos. Por mencionar un caso, el 6 de septiembre de 1990, un contingente de 500 soldados tomó por asalto el pueblo joven “Feliz Raucana”. En los primeros días de esta intervención militar, tres dirigentes de Raucana fueron secuestrados y asesinados. A partir de marzo de 1992, el ejército, desarrolló un “plan piloto de organizaciones de rondas urbanas en Lima Metropolitana”. Dicho plan estaba bajo la responsabilidad del general Juan Valdivia, jefe de la segunda región militar. Este oficial del ejército fue el responsable de la matanza de Cayara (Ayacucho), en cuyo pueblo el 14 de mayo de 1988, los soldados asesinaron a 29 campesinos. Posteriormente, las mismas tropas al mando del general Valdivia, secuestraron y desaparecieron a 14 testigos de los hechos sangrientos de Cayara.

La “Madre Coraje”, fue ejecutada por la guerrilla maoísta el 15 de febrero de 1992. Su muerte fue un día después del paro

armado que los subversivos habían decretado en Lima. El mismo día del paro la señora Moyano intentó movilizar a la población en oposición a la medida de fuerza de Sendero Luminoso. Su convocatoria a la marcha fue en vano, y no concurrieron más de 30 personas en un distrito que contaba con 400 mil habitantes. La revista *Caretas*, la denominó “heroína cívica nacional” (54). “La inmolación de la lidereza, señora María Elena Moyano, es el símbolo del valor y la abnegación de nuestro pueblo”, dijo el general del ejército Juan Briones Dávila, ministro del Interior de Fujimori (55). La revista *Caretas*, dijo que “ella desafió a Sendero en varias oportunidades y evitó que esta agrupación lograra una base de apoyo en Villa El Salvador. Si esta es una guerra, el asesinato de la Moyano equivale a la desaparición de uno de los generales más importantes y efectivos de la campaña” (56).

María Elena Moyano, no fue el único caso que muestra como un dirigente popular y de origen social pobre, se transforma, a riesgo de perecer en la guerra interna, en un instrumento de los aparatos contrainsurgentes del Estado. Por ejemplo, Pascuala Rosado, una dirigente del populoso Huaycán, fue para los medios de comunicación del fujimorismo, una heroína de la lucha contra la subversión. Ella, junto al ejército emprendió la tarea de organizar los “Cuerpos de Autodefensa” (rondas contrainsurgentes). Pascuala Rosado alcanzó mucha popularidad en los medios de comunicación adictos al gobierno. Su imagen se publicaba profusamente, en grandes fotos acompañada de Fujimori o de oficiales del ejército, en momentos que presidía “paradas militares y desfiles” de las rondas. Fue ejecutada por la guerrilla maoísta el 6 de marzo de 1996. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha recogido diversos testimonios que ilustran las actividades de la señora Rosado y sus estrechos vínculos con militares y policías. Walter Ortega, ex secretario general de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán, señaló para la CVR, que “Pascuala era una persona visiblemente vinculada al gobierno,

al ejército y a la policía. Existían denuncias públicas de ello. Además, sus actitudes eran más bien provocadoras”. Otro dirigente de Huaycán, Charles Jaime Lastra Domínguez, también habló para la CVR, y señaló que la “señora Pascuala tuvo una oportunidad de salvar su vida. Ella se retiró de acá un tiempo pero regresó acá, y yo particularmente lo veo así, me da la impresión como que eso había sido una especie de provocación porque lo que se dice también de la señora Pascuala es que ella se comprometió demasiado con los organismos paramilitares” Por su parte, el profesor Máximo Ticlayauri, poblador de Huaycán, aseguró que la muerte de esta mujer se debió también a que ella solía aparecer públicamente con los representantes de los aparatos estatales, lo que para él hacía evidente su compromiso con el gobierno (57).

CAPITULO TERCERO

RELIGION Y GUERRA CONTRAINSURGENTE

En 1781, la rebelión indígena que conmovería los cimientos del sistema colonial había sido derrotada. Este hecho doloroso para la independencia quedó concluido cuando Tupac Amaru, junto con su valerosa esposa Micaela Bastidas, su hijo Hipólito, y los principales jefes de la revolución liberadora, fueron sometidos a brutales torturas antes de ser ejecutados sin piedad. La iglesia católica, para celebrar este acontecimiento a favor del imperio español ordenó hacer replicar las campanas desde Perú hasta Argentina. Como dijo la iglesia para dar bienvenida al reino de la paz y de la justicia. El año 1993, cuando la mayor parte de los dirigentes de la subversión maoísta habían sido apresados y desde las prisiones solicitaban un acuerdo de paz que vislumbraba la derrota del movimiento armado, llegó al Perú monseñor Luigi Dossena, Nuncio Apostólico del Vaticano quien al momento de expresar su saludo al presidente Fujimori, dijo que se “ha podido constatar nuevas perspectivas en un proceso que favorece la unión, la concordia, y el camino hacia una nueva sociedad mas justa y fraterna” (1).

Históricamente, las religiones, en especial el clero católico, han sido el soporte ideológico que han utilizado los grupos de poder y las potencias imperialistas para imponer su dominación y sus brutales métodos de explotación. La naturaleza

ideológica antidemocrática de la religión la convierte en un instrumento político estratégico de los grupos de poder. La concepción religiosa del mundo se sostiene en la tergiversación de la realidad circundante, en la debilidad del conocimiento humano y en la superstición. Su sustento filosófico es el subjetivismo, cuya esencia en el terreno de las ideas, es oponerse al desarrollo del conocimiento, y eliminar cualquier visión crítica de la vida material, social y política. Su oposición al conocimiento científico y al desarrollo de la ciencia ha sido permanente en todas las etapas sociales de la humanidad. Durante el oscurantismo religioso ha utilizado la represión, la tortura y el crimen para imponer sus retrogradadas ideas inmutables, y hacer prevalecer sus criterios dogmáticos y anticientíficos del mundo. La religión tiene carácter de clase, y en todas las sociedades divididas en clases sociales se ha identificado con los poderosos y las corrientes políticas más reaccionarias de la sociedad. Una de sus características en su modo de subsistencia ha sido contemporizar con todo tipo de Estado y sistema político. La religión ha sostenido el esclavismo, la feudalidad, el colonialismo y la actual democracia burguesa. Durante toda la historia de la humanidad se ha visto relacionada a guerras imperialistas y a dictaduras militares o civiles. Desde el año 313 de nuestra era, cuando se convirtió en la religión oficial de los emperadores romanos, no ha dejado de sostener las acciones más abominables contra los pueblos oprimidos. En 1933 apoyó el ascenso al poder de Adolfo Hitler, y después cuando las tropas hitlerianas fueron derrotadas en la segunda guerra mundial, fue la iglesia católica la encargada de proteger a los criminales de guerra del Tercer Reich. En 1936 apoyó la acción sangrienta del General Francisco Franco para apoderarse del poder del Estado español. Golpe militar que costaría la vida a miles a miles de personas y que hundiría a España en las tinieblas del oscurantismo militar y religioso. En 1973 la iglesia católica sostuvo el golpe militar de Augusto Pinochet en Chile, y fue cómplice del asesinato de más de 20 mil chilenos. El Vaticano

y los católicos americanos sostuvieron en el 2003 la guerra imperialista contra Irak que a la actualidad tiene un saldo de varios millones de víctimas y un país saqueado y devastado completamente.

Es una fantasía creer que la iglesia puede tomar parte por la causa de los pobres y comprometerse con quienes luchan por un cambio de la sociedad. Las corrientes más “revolucionarias”, progresistas y humanistas de la religión, muestran su lado reaccionario, cuando el curso de la historia es desfavorable a los que manejan el poder del Estado, y sobre todo cuando el aparato religioso ve peligrar sus intereses económicos y políticos que solo puede preservar si se mantiene el sistema de explotación y de desigualdad social. Por ejemplo, Bartolomé de las Casas (2), reconocido defensor de los indígenas americanos en el siglo XVI que con valor denunció las brutales atrocidades y crímenes que cometían los conquistadores, no pudo apartarse de la teoría reaccionaria, que suponía el derecho divino de los reyes para dominar las tierras y los pueblos conquistados mediante expediciones militares-religiosas. Su idea era que se “podía colonizar a los indios” sin arrebatarles sus tierras y sin hacerles daños. El fraile de las Casas, señalaba que la “providencia divina” y la “divina escritura”, habían instituido a los reyes como “padres y pastores del mundo, y era este el fundamento que daba orden al mundo y permitía la continuación del linaje humano (3). Los grandes sufrimientos y la tragedia de los pueblos latinoamericanos están ligados a las acciones conjuntas de curas y militares. El sistema brutal impuesto por los conquistadores a los pueblos de América se ejecutó como una empresa asociativa de fuerzas militares y las más oscuras instituciones religiosas, incluida la Santa Inquisición de la edad media. Desde 1492 la iglesia católica fue aliada divina del conquistador y participó como cómplice del exterminio de la población americana. José Carlos Mariategui, anota, que si la conquista fue una obra militar religiosa, el coloniaje no fue “sino una empresa política y eclesiástica” (4).

La conquista del Perú que se inicia en 1532, con sus sangrientas consecuencias, se realizó en base a la “sociedad” conformada por una trilogía militar, religiosa y empresarial: Francisco Pizarro, Diego de Almagro, y el eclesiástico Hernando de Luque, quien había sido en 1514 vicario y párroco de la recién fundada Panamá. Este último, dice Mariategui, representaba la iglesia y el evangelio. “Su presencia resguardaba los fueros del dogma y daba una doctrina a la aventura” (5).

Hay una secuencia histórica, entre las brutales condiciones de vida impuesta a las poblaciones de Latinoamérica y la influencia de la religión católica en la sociedad. En 1572, el Virrey Francisco de Toledo, no daba un paso en la administración de la colonia sin los consejos de la alta jerarquía católica. Este virrey fue el que instauró la Mita colonial (6), un sistema de esclavitud en las minas de los andes. En aplicación este sistema, los hombres, entre 18 y 50 años, eran obligados bajo pena de prisión o de muerte, a trabajar sin pago alguno en las minas de oro y plata. Los historiadores señalan, que la jornada laboral al interior de las minas era interminable y sin que el trabajador “jamás pudiera ver la luz del sol”. El reposo era solamente para mantener vivo a la víctima sepultada en las cavernas de minerales. En algunos lugares, como en Potosí, las condiciones infrahumanas de trabajo exterminaron a cerca del 80% de la población masculina en una ciudad que el año 1,630 tenía 160,000 habitantes, un poco más que en París y Londres en la misma época. La Mita, como sistema de explotación esclavista, fue la base de todas las riquezas que los colonizadores lograron obtener y transferir a la matriz española.

La iglesia asociada al poder colonial logró grandes beneficios de la Mita y del sistema de esclavitud. En aplicación del llamado “Diezmo”, el 10% de la producción extraída en las minas con el sufrimiento de los indígenas iba directo a la caja de la iglesia Católica. Este tributo fue impuesto por los Reyes

Católicos de España, quienes de esa manera retribuían la participación de la iglesia en la dominación y saqueo de los pueblos americanos. Otro tributo pecuniario, que pagó el indio con su vida, fue el que se consideraba en una “Bula papal” del siglo XVI, que regia para todas las grandes ciudades conquistadas por los españoles. Luis Sánchez, un historiador de la época (1,566), cuenta que en México a mediados del siglo XVI, la codicia de los españoles era el elemento que dominaba las relaciones indios-españoles, y que en la explotación del indígena no se eximia, ni siquiera los representantes de la iglesia. “La codicia es la madre de todas las culpas y de este defecto no exime ni “a los jueces eclesiásticos”, ni a los “clérigos y frailes” ni a los conquistadores y encomenderos” (7).

La iglesia católica, como ninguna otra religión, ha sido cómplice de regimenes brutales durante la etapa colonial y republicana del Perú. Si en el pasado fue soporte espiritual de conquistadores y aventureros, ahora en pleno siglo XXI apoya y sostiene a grandes burgueses, terratenientes, y representantes de las potencias imperialistas. La jerarquía Católica, de la misma forma que las elites políticas usa un discurso de contenido social y de reivindicación popular, pero su practica cotidiana solo ha contribuido a sostener los planes políticos del Estado, y a viabilizar los programas de dominación de los grupos de poder. Desde el pasado colonial, la iglesia fue opuesta a todo movimiento liberador del pueblo. A través de plegarias y de una predica de espiritualidad de sumisión en algunos casos, y en otros con las armas en las manos, ha participado en las acciones militares y políticas para derrotar y liquidar los grandes movimientos de liberación que registra la historia social de la humanidad.

En 1742, 40 años antes de la gran gesta liberadora de Tupac Amaru, estalló la rebelión de Juan Santos Atahualpa, un movimiento revolucionario que duró 19 años (1742-1761) y que se desarrolló en la costa, sierra y montañas andinas. Su centro

de operaciones se estableció en las alturas de las provincias de Tarma y Jauja. En este movimiento participaron unitariamente indígenas, mestizos y la población de origen africana. Su objetivo estratégico fue eliminar el sistema colonial, y terminar con la servidumbre y el esclavismo. En las casi dos décadas que duró esta rebelión, tuvo que hacer frente al ejército realista y las fuerzas de la iglesia Católica. Como dice el historiador Baleslao Lewin: “Todos los que tuvieron ingerencia en la represión del alzamiento de Juan Santos, eclesiásticos y seglares, afirmaron que éste se propuso sacudir el yugo español” (8). Lewin, que a continuación tomamos como la referencia más correcta de esta parte de la historia americana, señala que el movimiento dirigido por Juan Santos no pudo apoderarse de Lima, a causa de la infidencia (soplonería) de la “revelación del confesionario” por un sacerdote quien uno de los jefes de la rebelión confió sus planes conspirativos respecto a la captura de la capital del virreinato. En septiembre de 1750 el Conde de Superunda y virrey del Perú, dirigió una carta al Rey de España, en cuyo texto daba cuenta de los importantes servicios que prestaron los religiosos para liquidar la subversión indígena. El virrey narra, que el 21 de junio de 1750, un religioso le pidió “reservada audiencia”, quien le previno de los planes de los rebeldes. “Aprehendidos los conspiradores, la tremenda venganza no se dejó esperar. En pocos días fue sentenciada la causa por la Sala del Crimen de la Audiencia de Lima, y el 20 de julio notificada la sentencia a los once reos...fueron condenados a ser arrastrados, ahorcados y descuartizados”. La misma suerte corrió, Francisco Inca, otro de los jefes militares de Juan Santos Atahualpa, quien en 1750 fue apresado en Huarochiri (a 300 kilómetros de Lima), cuando los indios azuzados por los curas, entregaron a este revolucionario a manos del ejército realista. Francisco Inca, fue conducido a Lima y ahí fue decapitado con crueldad. Otro caso se dio en 1761 cuando estalló la rebelión encabezada por Jacinto Canek en Yucatán (Mexico). Según, las crónicas de las indias, el primero en dar la alarma y poner en aviso a las

tropas españolas, fue el cura Miguel Ruela, y como lo registra Boleslao Lewin, “gracias a este aviso fue organizada rápidamente una expedición militar de quinientos hombres” que derrotaron al caudillo rebelde. Jacinto Canek fue ejecutado con golpes de barra en la cabeza, y después se “echaron a vuelo las campanas y se cantó en la Catedral solemne Te Deum, con asistencia de ambos cabildos y el gobernador”.

El 4 de noviembre de 1780, nueve años antes de la revolución francesa, Tupac Amaru, un descendiente directo de los incas se puso al frente de un proceso de rebelión popular contra la dominación española. Esta revolución fue en defensa de la nación indígena, la libertad de los esclavos negros, la supresión de la servidumbre, la liquidación de la Mita, y el fin de la autoridad abusiva del virreinato. Figuraba entre las reivindicaciones de la guerra tupacamarista, cortar los privilegios que la iglesia y los curas recibían del Estado colonial. Este movimiento precursor de la guerra de independencia latinoamericana tuvo que enfrentar la actividad espiritual y militar, de sacerdotes, obispos, frailes que hicieron resistencia activa al movimiento anticolonial. Militares y religiosos concretaron una santa alianza para luchar contra la rebelión tupacamarista. Como lo señala Boleslao Lewin, cuando estalló la revolución indígena, el clero católico, tomó partido por le causa realista, y desde el obispado se “formaron destacamentos militares con los sacerdotes”. Un ejemplo dice, fue el cura Gregorio José de Merlos, que convocó “a sus fieles y les proporciono armas para combatir a los enemigos del rey”. Durante todo el proceso del movimiento tupacamarista la iglesia cumplió un rol importante en la defensa del colonialismo. Esta situación conllevó a que los rebeldes reprimieran, incluso con la muerte, a sacerdotes que se pusieron del lado de la esclavitud y el abuso. En noviembre de 1780, Tupac Amaru decreta un bando revolucionario (orden o ley que debía cumplirse), mediante la cual se otorgaba la libertad de los esclavos, y amenaza con severas sanciones a “clérigos, o frailes u otros”, que se opu-

sieran a estas medida”.

La jerarquía católica, sin excepción participó en la derrota y captura de Tupac Amaru en 1781, así como en el exterminio de los jefes tupacamaristas que sobrevivieron a la muerte del jefe revolucionario. Historiadores de la burguesía y de los terratenientes, han intentado a partir de una historiografía oficial, ocultar la posición colonialista de la iglesia durante esta etapa de la liberación americana. Ideológicamente y políticamente la religión fue parte de la estructura de dominación colonial. Si durante el proceso revolucionario, algunos curas se sintieron atraídos por las reivindicaciones de justicia social que el movimiento ofrecía, esto fue transitorio y correspondió a un hecho aislado de la iglesia como institución. Además las contradicciones de carácter secundarias entre la iglesia y el sistema virreinal, concluían en la unidad para defender el sistema de explotación colonial. Así por ejemplo, las contradicciones entre el obispo Moscoso y Peralta y las autoridades del virreinato, concluyeron durante la rebelión tupacamarista, y Moscoso y Peralta cumplió un destacado papel en 1783 para la captura y muerte de Diego Cristóbal Tupac Amaru, primo hermano del precursor y segundo jefe de la rebelión popular, que a pesar de la derrota y muerte de Tupac Amaru, siguió luchando contra los españoles. Según Lewin, el cura Moscoso, había convertido al “clero bajo sus ordenes en una fuerza especial de la causa realista, y que había formado destacamentos militares de sacerdotes”.

La iglesia manipuló la creencia religiosa de los indígenas, y alentó la traición, la delación y la capitulación, en las filas del pueblo. Cuando el proceso de lucha de liberación dirigido por Tupac Amaru fue liquidado y todos sus jefes y dirigentes fueron apresados y muertos, la iglesia ordenó celebrar solemnemente “este hecho grandioso para la paz de las colonias”. El obispo de Argentina, Sebastián Malvar y Pinto, realizó misas en todas las iglesias de su diócesis, y el 26 de junio de

1781, publicó una carta pastoral en la que regocijado decía: “¿Y qué vasallo fiel no se alegrará con el arresto de este rebelde?. ¿Qué español verdadero no concibe en su pecho una excesiva alegría, posnoticia tan plausible?. ¿Qué cristiano no se empeñará en tributar a Dios los más rendidos obsequios por habernos concedido un beneficio tan grande?. Si amados hijos, este suceso es digno de nuestros votos y de las más fervientes oraciones. El amor que debemos al Rey y a la Religión que profesamos, exige exhalemos nuestros corazones en alabanzas y cánticos” (9). Lo mismo hizo, fray José Antonio de San Alberto, obispo de Tucuman, quien tenía fama de “nacionalista argentino”, pero que a la muerte del rebelde peruano, llamó a hacer plegarias en agradecimiento de Dios.

LA IGLESIA EN LA ETERNA REPRESION

Un hecho más reciente que no tiene que ver con la época colonial, pero sí con nuestro tiempo, muestra como la iglesia en todas las épocas contribuye con los planes represivos del Estado y de los militares. Este acontecimiento sucedió en Lima al final de la década del 90 durante el gobierno de Fujimori. El 17 de diciembre de 1996, un comando del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) integrado por 14 guerrilleros bajo la dirección de Néstor Cerpa Cartolini, tomó la embajada japonesa en Lima. En la acción, unas 600 personas, entre los que se contaban, ministros, diplomáticos y jefes militares y policiales, quedaron en poder de los guerrilleros. Uno de los objetivos de los subversivos fue negociar la liberación de una centena de prisioneros del MRTA, y en especial la de su líder Víctor Polay Campos y otros altos dirigentes de esta organización. Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, al frente del gobierno peruano, negaron todo trato con los “terroristas”. Anunciaron que no habría ninguna negociación con los subversivos. Después, en apariencia cambiaron de opinión y formaron una “Comisión de Garantes”, encargada de “buscar

una solución pacífica y negociada” a la toma de la embajada y para la liberación de los rehenes. Dicha comisión de paz, como lo probaron los hechos, nunca tuvo la intención de negociar con el comando del MRTA. Su propósito fue de carácter táctico militar, y solo buscó ganar tiempo para planificar y ejecutar el plan de las fuerzas armadas y exterminar al comando subversivo.

Juan Luis Cipriani, cardenal actual del Perú desde el 2001 y jefe del Opus Dei en este país, a pedido de Fujimori, se integró a la Comisión de Garantes. Este clérigo, conocido por haber apoyado al régimen fujimorista y las acciones de las fuerzas armadas en Ayacucho cuando fue obispo de esta ciudad, se convirtió en el confesor de los rehenes y en el agente secreto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que dirigió el operativo en la embajada japonesa. Cada día, bajo el pretexto hacer plegarias por la paz, y rezar junto con los cautivos, entraba y salía religiosamente de la embajada capturada. Con una biblia entre las manos y un rostro compungido hasta las lágrimas encubría su rol de infiltrado al servicio del ejército. Cipriani, se sabe ahora, fue uno de los personajes claves para el éxito del “Plan Chavin de Huantar”, ejecutado el 22 de Abril de 1997, por un comando de las fuerzas especiales del ejército. Toda la información que logró tener el ejército respecto a la ubicación y moviendo de los guerrilleros al interior de la embajada fue gracias a la labor camuflada de Luis Cipriani. Los militares irrumpieron en la embajada japonesa después de haber pasado tranquilamente por un túnel construido durante varios meses. Los miembros del comando tupacamaristas fueron tomados por sorpresa mientras jugaban un partido de fulbito. Frente al sorpresivo ataque no pudieron usar sus armas ni defenderse. En la acción todos los miembros del comando subversivo fueron asesinados fríamente, cuyos cadáveres fueron filmados y fotografiados como si se trataría de una caza de animales salvajes. Como lo denunciaron diferentes instituciones de defensa de los derechos humanos,

todos los miembros del MRTA recibieron disparos de bala en el cráneo cuando ya se habían rendido y estaban desarmados.

El actual cardenal de los católicos peruanos, mientras se hacia pasar como confesor y “amigo” de los subversivos, introduzco al interior de la embajada aparatos electrónicos de avanzada tecnología, que los militares utilizaron para escuchar y ver milimétricamente el movimiento de los militantes del MRTA. Estas cámaras filmadoras, fueron proporcionadas por la CIA americana al ejército peruano, y su fabricación es especialmente para el uso de inteligencia y de infiltración. Cipriano para camuflar estos aparatos en miniaturas utilizó la Biblia que siempre llevaba entre las dos manos y pegada al pecho, y una guitarra española con la que acompañaba sus plegarias de paz. El libro sagrado era falso y en lugar de paginas tenia una cavidad donde fácilmente se podía ocultar artefactos de alta sensibilidad y poco volumen. Este texto “sagrado” y sacramentado, sirvió de perfecta herramienta contrainsurgente para el triunfo del Plan Chavin de Huantar, que elevo a calidad de “héroes” al presidente Alberto Fujimori, al general Nicolás Hermosa Ríos y a Vladimiro Montesinos. La guitarra, aparte de emitir notas musicales, estaba implementada de minúsculos aparatos de filmación directa que se trasmitían hacia el exterior de la embajada.

Apenas se inicio la lucha armada en mayo de 1980, la Iglesia Católica, a través de sus más altos representantes inició una campaña para condenar el “terrorismo” y sostener a los militares. Su posición contra la subversión y su apoyo a las fuerzas represivas fueron factores que hizo de la iglesia un instrumento de la lucha contrainsurgente. El primero que salió al frente para atacar la subversión fue el cardenal Juan Landazuri, quien en septiembre de 1980 se pronunció para “condenar enérgicamente los actos terroristas”, y convocar a los peruanos a “unirse y mantener el orden y la paz” (10). Por su parte el obispo de Tacna, Oscar Canturias Pastor, en

octubre del mismo año condenó la “violencia y el terrorismo”, y llamó a apoyar al gobierno de Belaúnde (11). Paralelo al desarrollo del proceso armado, la iglesia poco a poco abandonó su discurso de santidad, para ponerse abiertamente a favor del Estado, y participar incluso en los planes contrainsurgentes de las fuerzas armadas. Durante todo periodo de la guerra interna, la iglesia se vio involucrada en todos los aspectos que configuró los planes militares del Estado para luchar contra la subversión. La iglesia hablaba de paz, pero aceptaba con beneplácito que el ejército entregue armas a las rondas y grupos de defensa civil que durante el conflicto armado cometieron cientos de brutales crímenes en los andes. La alta jerarquía religiosa decía que defendía los derechos humanos, pero apoyaba las acciones militares y a las clases políticas. En el discurso auspiciaba la democracia y la justicia social, pero sin embargo sostenía a los regimenes de turno y avalaba los procesos electorales fraudulentos. Tanto Fernando Belaúnde, Alan García Pérez y Alberto Fujimori los tres presidentes de la etapa de guerra interna, contaron con el apoyo de la iglesia católica peruana.

Una prueba bastante evidente de la relación entre jerarquía eclesiástica y poder político, es la conducta del actual cardenal, Luis Cipriani, quien durante 10 años convivió con el régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Los peruanos, sobre todos los familiares de las víctimas de la guerra civil, recuerdan como Luis Cipriani, instalado en Ayacucho desde 1988, defendía el régimen de Fujimori, que en la época estaba considerado uno de los gobiernos más brutales de Latinoamérica. Aún está fresco en el recuerdo de la población como el cardenal se enfrentaba públicamente con periodistas para salir en defensa de ese gobierno que él llamó “legítimo y democrático”. En el tema de los secuestros, desapariciones, torturas y crímenes que diariamente se cometían en el país, Cipriani no ahorró argumentos para justificar la brutal acción del gobierno y las fuerzas militares. Una de esas veces fue

en 1994 cuando rechazó las acusaciones contra los militares y criticó que se “usen los muertos” para hacer oposición al gobierno de Fujimori: “En un contexto violento como el de Ayacucho, las muertes y desapariciones y abusos son parte del enfrentamiento de la guerra. Los defensores de los derechos humanos le llamaron guerra sucia. Y qué quieren, que uno de marcha atrás en la historia. Las Fuerzas Armadas han cambiado su actitud, ¿queremos hurgar entre los muertos y resentimientos de toda esta gente resentida para oponernos al gobierno?. ” (12).

No sólo fue Cipriani que en nombre de la iglesia católica se puso al lado de los regimenes de turno, sin tener en cuenta que estos fueran mafiosos o criminales. En julio de 1992, cuando ya Fujimori había concretado su autogolpe militar (abril de 1992) el arzobispo de Lima, Augusto Vargas Alzamora, pidió a los peruanos a unirse en torno a sus autoridades gubernamentales, y en el mismo discurso deslizó su apoyo a la pena de muerte para los “terroristas”: “de adoptarse podría ser como medida defensiva”, dijo a un diario de Lima (13). Según Vargas Alzamora, la utilidad de esta medida era para “defender la vida de los demás”, y agregando además, que la iglesia como institución no absolutizaba un No en torno a la pena de muerte. Dijo que la iglesia tiene, “una oposición relativa” frente a dicha medida, “no puedo decir que es prohibida por la iglesia”, y que en todo caso era para “defender la vida de los demás. Es como cuando uno se defiende de una fiera que lo ataca. Hay que matarla”, concluyó el obispo (14). De la misma forma, en enero de 1992, Luciano Metzinger, presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social, se pronunció públicamente (diario La República 13 de enero 1992) a favor de armar a las rondas campesinas que el ejército utilizaba en la lucha contrainsurgente. Como se conoce estas fuerzas paramilitares (rondas campesinas, grupos de defensa civil, etc.) dirigidas por los militares, bajo el pretexto de “luchar contra el terrorismo”, cometieron miles de críme-

nes y actos vandálicos contra la población civil. En la misma dirección, el 27 de junio de 1992, el Consejo Permanente del Episcopado Peruano, emitió un documento no para denunciar los crímenes del gobierno, sino para justificar las acciones de policías y soldados “que cumpliendo su deber “eran sacrificados sin posibilidades de defensa”, y para promover un “diálogo para buscar consensos” con el gobierno de Fujimori (15).

Pero la relación Cipriani-Fujimori no es un caso aislado en la política peruana. En toda la historia de la República peruana, ningún gobierno militar o civil, gobernó al margen de la complicidad de la Iglesia de este país. En 1983, el general Clemente Noel, en ese tiempo jefe del Comando Político Militar de Ayacucho y acusado de ser el responsable de abominables matanzas, mantenía cotidianas reuniones de coordinación con monseñor Federico Richter Prada, en la época arzobispo de Ayacucho. En los primeros años del gobierno de Alan García Pérez (1985-1990), el cardenal en ese tiempo, Juan Landázuri Ricketts, tenía entre sus tareas preferidas, echar agua bendita a los vehículos blindados que el gobierno enviaba a la región de Ayacucho y que servían para masacrar miles de campesinos. En 1993, en plena aplicación de la violenta política del fujimorismo, y cuando las fuerzas armadas tenían en su haber más 30 mil asesinatos y masacres, Ricardo Durand, obispo del Callao, vertía halagos a favor del general Nicolás Hermosa Ríos en ese entonces comandante general de las fuerzas armadas del Perú, y en la actualidad en prisión acusado de crímenes de guerra y corrupción. El obispo Durand decía en esa época que, “el general Hermosa tiene el mérito de estar dirigiendo la pacificación, esto es una realidad...Yo creo que el general Hermosa ahora debe ser como el portaestandarte del respeto que las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales deben tener por los derechos humanos” (16). El mismo papa Juan Pablo II, en marzo de 1985 hizo un peregrinaje a Perú, no precisamente para defender a los pobres de las injusticias y atrocidades cometidas por el gobierno de turno y

los militares, sino para condenar a las fuerzas guerrilleras y defender la acción criminal del Estado y los militares.

Era julio de 1983, las fuerzas armadas combatían a la subversión, y era el inicio de la guerra contrainsurgente a cargo de los militares que dos décadas mas adelante dejaría miles de muertos a causa de secuestros, torturas y ejecuciones clandestinas. Gobernaba Fernando Belaunde, y en la lujosa Catedral de Lima, se realizaba el Te Deum en conmemoración del 162 aniversario de la independencia del Perú. En la principal iglesia peruana estaban presentes, el presidente de la República, jefes militares, ministros, parlamentarios y la crema de las elites políticas del país. La homilía estuvo a cargo del sacerdote José Lobatón, quien anunció solemnemente: “combatiremos al terrorismo no solo con la acción de la fuerza” (17). En 1992, el arzobispo Oscar Cantuarias Pastor, hacia un llamado a la población, para “denunciar sin miedo a los terroristas” (18). En 1992, cuando el gobierno de Fujimori había avanzado bastante en su política violenta, el Consejo Permanente del Episcopado Peruano, emitió un documento público, donde anunciaba que era “necesario hacer todos los esfuerzos para detener a los grupos terroristas e imponerles una sanción que merecen” (19).

Desde los primeros años de la década del 80, sacerdotes, frailes y obispos fueron auspiciadores de rondas campesinas y rondas urbanas que el ejército utilizó en sus planes militares para luchar contra la subversión en el campo y en las zonas pobres de las ciudades. Fue la iglesia la que auspició desde un inicio que las rondas fuesen dotadas de armas de guerra y que estén bajo el control del ejército. “Es necesario entonces, que las entregas de armas se hagan con mucho cuidado, y que luego se sometan a los ronderos a evaluaciones y controles permanentes”, decía en 1994, el obispo de Huaraz, Eduardo Vázquez Tarazona (20). Al respecto, monseñor Luciano Metzinger señaló en 1991, que Perú no era como Centroamé-

rica, donde sacerdotes y monjas, participaron directamente en los movimientos armados. “Aquí no hay ninguno que haya dado este paso...Sendero ha dicho que tiene sacerdotes amigos, pero creo que eso no es así...” (21). Los agudos conflictos entre la alta jerarquía religiosa y la guerrilla, fue aprovechada por la propaganda oficial para presentar a la subversión como una fuerza anticlerical. Su objetivo era alejarla de la población pobre, que durante siglos había sido embrutecida y alienada con falsas promesas divinas para salvarlo del hambre y la miseria. En realidad, la guerrilla no esgrimió una práctica antirreligiosa que hiciera blancos de sus ataques a los creyentes. La subversión estuvo en contra de que la iglesia manipulara la religiosidad del pueblo para hacer campaña a favor del Estado y de los gobierno de turno. Algunas veces la subversión ejecutó a sacerdotes que estuvieron involucrados como promotores de grupos de defensa civil o rondas campesinas que utilizaban los miliares como parte de su aparato contrainsurgente. Desde el inicio del conflicto armado la iglesia publicó comunicados y pronunciamientos cuyos textos condenaban a Sendero Luminoso pero nunca adoptó una posición firme contra los crímenes de las fuerzas armadas.

EL EJÉRCITO DE LA IGLESIA

La iglesia peruana cuenta con un importante aparato religioso inserto no solo en las iglesias, parroquias y centros religiosos, sino también en casi toda la estructura social y política de la sociedad peruana. Ha logrado tejer una extensa organización de instituciones dedicadas al asistencialismo de los pobres, cuyo objetivo es controlar las explosiones sociales y ganar adeptos para el dogma católico. Está presente en los “comedores populares”, los “comités de vaso de leche”, en grupos de jóvenes de pueblos jóvenes y en toda suerte de organización que hace de los pobres, masas miserables sin dignidad. Caritas del Perú, fundada en 1955 por la Conferen-

cia Episcopal Peruana, es una de las instituciones mas importantes de la iglesia que distribuye alimentos donados por los países ricos, en particular los Estados Unidos. Universidades, escuelas de diferentes niveles, instituciones financieras, centros de producción, establecimientos de salud, asilos de ancianos, hogares y pensiones para pobres, cooperativas y organizaciones de defensa de los derechos humanos, hacen parte de la gigantesca estructura de penetración que controla el catolicismo en Perú. Caritas del Perú, es una de las instituciones mas importante en la distribución de alimentos en el país, y en esta labor de la mendicidad organizada se ha visto vinculada a los partidos de la derecha peruana. El Fredemo (Frente Democrático) que lideró Mario Vargas Llosa en 1990 hizo su campaña electoral en las barriadas pobres sostenida con la acción de Caritas. Cambio 90 de Fujimori y el Apra de García Pérez cambiaron votos por una bolsa de alimentos que les distribuyó a su cuenta Caritas y otras instituciones de la Iglesia.

El crecimiento del aparato religioso está relacionado a las grandes crisis sociales del país. El auge de la iglesia católica y otras corrientes religiosas tienen su auge a partir de 1980 cuando Sendero Luminoso inicia la lucha armada. A mediados de la década del 70, el personal de la iglesia católica (curas, monjas, obispo y otros) no pasaba de 3 mil miembros. En 1984, en pleno conflicto interno, la iglesia católica estaba integrado por un total de 7 mil 100 personas entre curas, monjas y altas autoridades de la iglesia. En esta suma se consideraban, 2,265 sacerdotes (60% de éstos eran extranjeros). De ellos había 54 obispos activos, y cinco de ellos pertenecían a las filas del Opus Dei. Completaban el contingente religioso 4,835 religiosas y mujeres consagradas a las labores de la iglesia. De ellas, 2,053 eran monjas extranjeras. A este contingente de dios hay que agregar, los civiles que sin ser frailes o sacerdotes, hacen parte de la infraestructura religiosa. En 1988 el personal religioso aumentó a 8, 565 y en 1994 du-

rante el gobierno de Fujimori subió a 8, 902 entre sacerdotes y religiosas. Si en 1991 había en todo el Perú 1,190 templos y centros pertenecientes a la religión católica, estos aumentaron a 4,560 en el año 1993 (22). Aparte de estas instituciones la iglesia mantiene estrecha ligazón con partidos políticos extremadamente reaccionarios. El Partido Popular Cristiano (PPC), que es una especie de estandarte de la vieja derecha peruana, se ha visto favorecido por el apoyo de la alta jerarquía de la iglesia católica. Este partido, durante toda su existencia se ha visto involucrado con los peores regímenes del país. La otra organización ligada a la iglesia es el Partido Renovación que lidera Rafael Rey, un miembro del Opus Dei que sostuvo al régimen de Fujimori y Montesinos.

LA PASTORAL DE LA GUERRA

La demagogia y el doble discurso constituyen un patrón de conducta que viene desde los orígenes de la iglesia católica. En todas las épocas, la iglesia ha usado con maestría las consignas humanistas, de paz y de justicia, solo como cobertura de su verdadero objetivo político. En Perú, partir de 1980, el discurso eclesiástico estuvo estructurado en lo que se conoce como la “pastoral social”, y ello fue la base de su predicación en torno a la paz y la lucha contra el terrorismo. En 1984 el cardenal del Perú Juan Landazuri Ricketts, clamaba al cielo la defensa de los derechos humanos, pero sin embargo era filmado por la televisión del gobierno en el momento que en nombre de Dios bendecía los carros de combate y las tropas de elite que partían a la región de Ayacucho a combatir a la subversión, y que bajo el pretexto de lucha contra Sendero Luminoso asesinaban a miles de campesinos. En 1985, el papa Juan Pablo II estuvo en Ayacucho, y su visita no era para enemistarse ni con el gobierno ni con las fuerzas armadas. En la publicidad que antecedió a la llegada del jefe de la iglesia católica, se dijo que el “santo padre” estaba preocupado por las

violaciones de los derechos humanos, pero sin embargo en su primer acto público, condenó las acciones subversivas, y puso en relieve la valentía de los militares para defender la justicia y la democracia. En su discurso dijo: “En última instancia, el terrorismo se destruirá a sí mismo, pues lleva en su odio ciego y absurdo, el germen de su propia destrucción” (23). En mayo de 1988, el papa volvió al Perú y su peregrinaje tuvo el mismo contenido político que la primera vez. Su propósito fue condenar el “terrorismo”, y apoyar al régimen del aprista Alan García Pérez que se encontraba hundido en una crisis sin fin a causa de su gestión corrupta y de la aplicación de una política de represión brutal contra el pueblo. El Papa en su mensaje de despedida anunció que “todas las ideologías extrañas o adversas al cristianismo”, son incapaces de dar paz y justicia, y repitiendo su discurso en Ayacucho (3 de febrero 1985), pidió a los subversivos “Cambiad de camino, estais a tiempo”, les advirtió (24).

La iglesia ha sido patrocinadora de la “democracia peruana”, y de sus sucesivos representantes políticos. Sostuvo las campañas militares del Estado y defendió las fuerzas armadas, pero hipócritamente declaraba su preocupación por la violación de los derechos humanos. La iglesia católica ha sido una asidua participante del “Consejo Nacional por la Paz” que se formó desde el Estado, no para buscar la “pacificación del país”, como se dijo oficialmente, sino más bien para encubrir el carácter represivo de los distintos gobiernos desde 1980 hasta el año 2000. Este “Consejo por la Paz”, durante el régimen fujimorista estuvo liderado por la jerarquía católica representada por el cardenal Juan Landazuri, el obispo José Dammert Bellido, y otros altos jefes de la iglesia, además del primer ministro de Fujimori. La alta jerarquía católica patrocinó candidaturas electorales (presidentes y parlamentarios), y en su afán de colaborar con los grupos de poder hizo campaña por el entendimiento entre la población, los partidos políticos, los regímenes represivos y las fuerzas armadas. Cada candidato

electoral, estuvo acompañado por un cardenal, por un obispo o por un arzobispo, los que desde iglesia y parroquias hicieron homilías electorales a favor de los más reaccionarios candidatos presidenciales. Si el presidente Fernando Belaúnde Terry (1980-1985), fue apoyado por el cardenal Juan Landazuri Ricketts, Alberto Fujimori (1990-2000), fue apadrinado por la iglesia evangélica y por actual cardenal del Perú, Juan Luis Cipriani. En las elecciones presidenciales de 1990, el Arzobispo de Lima Augusto Vargas Alzadora, apoyó la candidatura presidencial del escritor Mario Vargas Llosa, representante del Fredemo (Frente Democrático), un conglomerado electoral con vínculos con lo más selecto de las clases ricas del Perú.

En abril de 1990, la iglesia evangélica se involucró en la campaña electoral de Alberto Fujimori, que como se conoce desde sus inicios políticos se vinculó al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y a la CIA americana. Los templos evangélicos se convirtieron en lugares de propaganda para la promoción del enviado de Dios y al salvador del Perú. La jerarquía evangélica emitió una carta pública donde llamaba a sus feligreses a votar por el candidato de Cambio 90. Dicha misiva no restringió argumentos divinos para conseguir sus fines políticos, cuyo texto decía: “Estimado hermano en el amor de Cristo: Hoy como nunca antes, el pueblo evangélico tiene la oportunidad de ejercer su derecho ciudadano con toda convicción. Ahora hay una alternativa: el movimiento independiente CAMBIO 90, presente para las elecciones nacionales de este año...” (25). El triunfo de Fujimori catapultó al congreso y a altos cargos del gobierno a buena cantidad de jerarcas de la iglesia evangélica. La segunda vice presidencia de la República fue para el pastor Carlos García García, y el congreso se vio colmado con 17 parlamentarios evangelistas. Entre estos parlamentarios estaba incluido Alcides Salomón Zorrilla, evangélico y abogado del conocido narcotraficante Carlos Lanberg. La iglesia evangélica peruana, a pesar de sus diferencias con el catolicismo papal, hace parte del conglomerado cristiano

que se rige por los mismos principios religiosos de la iglesia católica universal. El mayor auge de la iglesia evangélica del Perú se da durante el régimen brutal de Alberto Fujimori. El censo del 2007 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), muestra que en 1993 los peruanos atraídos por esta corriente cristiana era solo del 6.7% de la población total, pero al año 2007 sus seguidores se duplicaron con 2 millones 606 mil 648 lo que equivale al 12,5% de una población de 28 millones.

Los representantes religiosos, han hecho mucha publicidad para atribuirse meritos en la defensa de los derechos humanos o en la protección de los más pobres del país. Ello es contrario a la verdad y a la posición que adoptó iglesia frente a los grandes crímenes contra la población cometidos por las fuerzas armadas y fuerzas policiales. Durante todo el proceso de la guerra interna la relación entre iglesia católica y el Estado se afirmó más, y constituyó el punto culminante del carácter clasista y reaccionario de la jerarquía religiosa. Desde los primeros años del conflicto armado la iglesia católica, a través de comunicados o de declaraciones de sus mas altos representantes, “tomó posición” sobre el “terrorismo, como era calificada la subversión. El 6 de septiembre de 1982, el cardenal Juan Landazuri, llamó a la “unión de todos los peruanos”, y calificó a los subversivos de terroristas y de ser “malos peruanos no seguidores de Cristo” (26). En 1983, el cardenal Landazauri, volvió a la carga y dijo que la “juventud está siendo conducida por senderos equivocados, por ideologías extrañas a nuestra realidad y a nuestra concepción católica y humanista” (27). Mas claro aun en 1986, el cardenal manifestó estar de acuerdo con la formación de un “Frente común contra el terrorismo”, planteado por Alan García Pérez y demás políticos de la derecha peruana (28). En julio de 1992, el cardenal Juan Landázuri Ricketts propuso la creación de un “comando único de dirigencia antisubversiva para dirigir la guerra contra los grupos alzados en armas”. Según este car-

denal, “si hay un comando único contra la subversión ante la situación que vive el país, queremos que en la practica se materialice y se vea que existe la mencionada agrupación” (29).

En septiembre de 1992, época de oro del de la mafia fujimorista y de los peores crímenes cometidos por los militares y los paramilitares, Vargas Alzadora hablando en una homilía al celebrarse el día de la Virgen de las Mercedes “patrona de las fuerzas armadas”, alabó la “labor desplegada por la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE), que como se conoce fue un aparato policial en cuyas instalaciones los prisioneros eran masacrados, torturados y las mujeres violadas. En las instalaciones de DINCOTE se organizó clandestinamente el comando paramilitar “Rodrigo Franco”, que durante el gobierno de Alan García (1985-1990), secuestró y asesinó a docenas de personas sindicadas como subversivas. En la misma homilía, el ese entonces Arzobispo de Lima, dijo, refiriéndose a los subversivos, “que la iglesia católica estaba dispuesta a regenerar sus vidas...Es un servio a Dios y un servicio a la patria en busca de la pacificación” (30).

En todos los asuntos en la que ha participado la iglesia, ha mostrado su falsa ética y moral, y sobre todo su hipocresía frente a la defensa de los derechos humanos. Su actuación en diversas instituciones y comisiones de derechos humanos, en lugar de servir verdaderamente para proteger a la población y denunciar a los violadores de los derechos humanos, contribuyó a reforzar las operaciones de desinformación provenientes del Estado. La iglesia se vio involucrada en aquella invención fabricada como parte de las campañas de desinformación del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que presentaba la guerra interna del Perú como un conflicto entre “militares y terroristas”, en la que los políticos, el gobierno y todas esas organizaciones que sostienen el Estado y que han sido cómplices directos de masacres y abusos contra el pueblo, eran inocentes y hasta víctimas de los subversivos o de los milita-

res. La Iglesia, de la misma forma que las clases políticas en el poder, señalaba que los crímenes de las fuerzas armadas y fuerzas policiales eran “excesos” de algunos militares, “casos aislados”, dijeron, y que ello no correspondía a una directiva del Estado ni de las fuerzas armadas como institución.

Si en el discurso, la iglesia expresaba su preocupación por las violaciones de los derechos humanos, en los hechos intentó encubrir la sangrienta acción de los militares y la responsabilidad que en ello tenían los gobiernos de turno. A inicio del conflicto armado el cardenal Juan Landazuri, promocionó y sostuvo los planes del gobierno para declarar el estado de guerra en el país, situación que convirtió al Perú en un cuartel militar bajo el control absoluto de las fuerzas armadas. El cardenal desde el inicio del conflicto armado calificó a los subversivos como “traidores a la patria”, y apoyó la creación de los Tribunales Militares que servirían para implantar un sistema penal sin leyes y sin justicia, donde los abogados de los acusados eran o internados en la cárcel o desaparecidos. El diario el Peruano del 30 de junio de 1994, publicó las declaraciones del cardenal peruano, en la que coincidía con la Corte Suprema de tipificar a los “terroristas como traidores a la patria”. Y en la que apoyaba a la instalación de los Tribunales Militares (31). El uso del doble discurso, corriente en los altos jerarcas de la iglesia, dependía del momento político y de las necesidades políticas del gobierno. Así por ejemplo, Luciano Metzinger, obispo y presidente de la Comisión Episcopal de Accion Social, decía en 1991, que el “Evangelio recuerda que no hay paz sin justicia” y que había que “condenar los abusos y la violación de los derechos humanos que se cometen a veces por parte de las fuerzas del orden”, pero contradictoriamente señalaba que ello “no quiere decir que las fuerzas del orden en su conjunto están atentando contra los derechos humanos. Esto es falso y nadie lo ha dicho” (32).

El caso Lanssiers, es otro buen ejemplo de la combinación

eclesiástica entre una supuesta defensa de los derechos humanos y el apoyo a quienes precisamente mataban y asesinaban a la población. En 1994, el Perú alcanzaba su pico más alto en relación a la criminal acción de las fuerzas armadas y de los grupos paramilitares que funcionaban con la aprobación del gobierno. Fujimori, Vladimiro Montesinos y los militares dominaban absolutamente el poder del Estado. En este marco represivo, desapareció la civilidad, y las Universidades habían sido invadidas militarmente. El parlamento era apenas una oficina de palacio de gobierno, y las rondas campesinas estaban bajo control militar. Se había impuesto los tribunales militares, cuyos jueces actuaban encapuchados y dictaban sentencias al margen de las leyes. La dictadura controlaba el poder judicial, y todas las instituciones del Estado. En esa época, el sacerdote Hubert Lanssier, convertido por los medios de comunicación en una especie de héroe de la justicia y de los derechos humanos lanzaba loas y alabanzas a favor de Alberto Fujimori y las fuerzas armadas. En 1994 declaraba su admiración por Fujimori, quien le merecía toda su confianza: “confió en el Presidente de la República. Esto no le hará gracia a un montón de gente...Yo creo en la palabra del presidente, tengo indicios para hacerlo. Ha tomado medidas que probablemente dejaría tiesa a mucha gente que considera que él es totalmente indiferente a este problema”. El discurso de Lanssiers, verdadera apología al cuestionado presidente peruano, pedía la creación de un «organismo anticorrupción» dirigido personalmente por Fujimori, como promesa milagrosa para acabar con los malos manejos del Estado. Este sacerdote pasaba por alto que el mayor corrupto incrustado en el gobierno y en otras instituciones del Estado era el mismo Alberto Fujimori. Junto con propagandizar las virtudes de Fujimori afirmaba que el mayor violador de los «derechos humanos era Sendero Luminoso”. Pero el panegírico del sacerdote Lanssiers, no se quedó en el halago simple al gobierno, y junto expresar su deseo de “entablar conversaciones francas y serias con las fuerzas armadas, minimizó

las brutales matanzas cometidas en por los militares en 1994 en el Alto Huallaga. “Al parecer hubo, por lo menos algunos muertos”, y señaló que en torno a los derechos humanos, las fuerzas armadas, tenían “un deseo de informarse y que daban “indicios de buena voluntad” (33).

El sacerdote Hubert Lanssiers de nacionalidad belga, llegó al Perú en 1964 y cuando Sendero Luminoso dio inicio a la guerra popular en 1980, se declaró enemigo de la lucha armada dirigida por la guerrilla maoísta, y amenazadoramente dijo: «Si ustedes un día toman el poder, me opondré con todas mis fuerzas y me tendrán que matar» (34). El declaraba con orgullo que había participado con el ejército colonialista francés en la guerra de Indochina que se desarrolló entre 1945 y 1954. La guerra de Indochina fue la guerra de liberación de Vietnam, Camboya y Laos contra la dominación imperialista francesa. En esta guerra, las tropas de Francia, hasta que fueron derrotadas por los comunistas y nacionalistas indochinos, cometieron brutales crímenes contra la población civil. “En indochina participé en varias operaciones militares, y conozco un poco la mentalidad militar”, declaraba en 1994, Lanssiers (35).

Lanssiers fue un admirador de los «Tribunales sin rostro», que estableció Fujimori. El 5 de abril de 1992, el presidente Fujimori con el apoyo de las fuerzas armadas disolvió el “gobierno democrático. Liquidó el Congreso y puso el poder judicial bajo el control absoluto del gobierno y los militares. Junto con estas medidas se crearon los Tribunales Militares sin rostro, cuyo jueces nombrados directamente por Fujimori y la cúpula militar actuaban con los rostros cubiertos con una máscara parecida a las utilizadas por el clandestino KKK en los Estados Unidos. Los tribunales sin rostro, constituyeron parte de la ilegalidad constitucional que se estableció en Perú durante el periodo 1980-2000. Mediante estos tribunales antiterroristas miles de peruanos, sin ningún derecho a la defensa

legal, fueron acusados de “traición a la patria” o de actos subversión y condenados a penas de 20 años de prisión y a perpetuidad. Esta modalidad jurídica impuesta por una dictadura que violaba los derechos más elementales fue denunciada por diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se pronunció en setiembre de 1996, exigiendo la supresión de estos tribunales. El año 2000, cuando Alberto Fujimori abandonó el gobierno y huyó a Japón, el nuevo gobierno suprimió los Tribunales sin rostro y sus sentencias quedaron anulados. ¿Cuál fue la posición de Hubert Lanssier frente a los Tribunales sin rostro?. En 1994, hablando para un diario de Lima, señaló: “Si funcionan bien me daría igual” (36). Su posición a favor de estos tenebrosos tribunales fue mas claro en 1996. ¿Los Tribunales sin rostro deben continuar?, le pregunto la periodista Balbi, y la respuesta del sacerdote fue contundente: “Lo que interesa es que administren justicia y sean capaces de fundamentar sus decisiones. Cuando a uno NO SE LE VE, puede actuar con cierta independencia de sus responsabilidades” (37).

Al inicio de 1983 las fuerzas armadas se trasladaron a Ayacucho para hacerse cargo de la lucha contrainsurgente, y de esta manera los militares asumieron el control absoluto de la guerra contrainsurgente. El jefe del Comando Político Militar fue encargado al general Clemente Noel Moral, quien desde el primer día que piso suelo ayacucho, instaló centros de tortura y cementerios clandestinos donde se sepultaban a las víctimas de la represión militar. El objetivo de Noel, como lo señaló el mismo gobierno, era “pacificar” a Ayacucho y exterminar la subversión, no importaba que para este fin se “tendría que comenzar a matar a senderistas y no senderistas. Matar a 60 personas y a lo mejor ahí hay 3 senderistas”, dijo el general Luis Cisneros Vizquerra, ministro de Guerra en 1983 (38). Para “pacificar” Ayacucho, como lo admitió el mismo general Noel, se reunía frecuentemente con monseñor Federico Ri-

chter Prada, quien era obispo de esta ciudad (39).

En 1988, Luis Cipriani Vargas, reemplazó en el obispado a Richter Prada, y con él las fuerzas armadas ganaron un aliado que abiertamente defendió las acciones y los planes militares en la región ayacuchana. Cipriani, combinó su tarea religiosa con una intensa actividad política de apoyo y defensa de la acción contrainsurgente del Estado. En un informe redactado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el 2003 (40), se traza el recorrido del actual cardenal Luis Cipriano y Vicario Regional del Opus Dei. Se señala por ejemplo que el 19 de noviembre de 1997, Cipriani apareció en las primeras planas de los medios de comunicación del país bendiciendo las armas entregadas por los militares a dos mil quinientos ronderos de Ayacucho, que en adelante se convertirían en fuerzas vandálicas y criminales que asolarían la región. Cipriani, dice el informe, era parte del gobierno de Ayacucho, que en ese tiempo dirigía el general jefe del Comando Político Militar del Departamento. En abril de 1993, según la CVR, el diario *El Peruano*, entrevistó a Cipriani, para saber su posición respecto a los grupos e instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Su respuesta fue directa y clara: “Yo creo que estos organismos abusan y manipulan el concepto de derechos humanos....Normalmente estas instituciones utilizan documentos que no tienen ni firma ni identificación de nadie... Lo que yo sostengo es que la proporción de errores o de abusos de los derechos humanos no es tal como anuncian estos organismos. Actualmente hay directivas claras que velan por el respeto a los derechos humanos...Uno ve que existe claramente una campaña, un montaje. Esto no es honrado, no es transparente” (41). Un ciudadano de Ayacucho que vivió los horrores de la guerra durante el fujimorismo, entrega su versión sobre la actividad religiosa-militar del cardenal del Perú. “Monseñor Cipriani apareció muy cercano a los militares en Ayacucho, se desplazaba por el departamento junto con ellos en sus helicópteros, o acompañando al presidente Fuji-

mori. En la puerta del arzobispado, en una pizarra decía: «No se aceptan reclamos sobre Derechos Humanos» (42).

Luis Cipriani Vargas, tiene un extenso historial político solo comparable con la conducta de los políticos peruanos calificados de “tránsfugas”. En 1990, en plena campaña electoral, Cipriani apoyó la candidatura presidencial del escritor Mario Vargas Llosa. Cuando se dio cuenta que este candidato no llegaría a la presidencia de la República, cambio de camiseta, y se subió al carro presidencial de Alberto Fujimori. En 1992 Fujimori apoyado por las fuerzas armadas tomó el control absoluto del Estado. Luis Cipriani apoyó este golpe militar, y estuvo de acuerdo con los tribunales militares sin rostro que la dictadura impuso a partir de 1992. Después tomó parte activamente para sostener la primera y segunda reelección de Fujimori. En las elecciones del año 2000, calificadas como el proceso electoral más fraudulento de la historia política del país, Luis Cipriani movilizó a la iglesia católica para apoyar el montaje electoral, y sostener una nueva reelección de Fujimori. El actual cardenal denunció a través de los medios de prensa del gobierno a las instituciones del Perú y del extranjero que denunciaron como ilegal la reelección de la banda fujimorista. Se puso en primera fila para defender al gobierno en torno a las violaciones de los derechos humanos, y acusó de “gente resentida”, a las personas e instituciones que denunciaron la represión militar. Apoyó el pedido de Fujimori para aplicar la pena de muerte a los subversivos, y justificó los métodos brutales utilizados por las fuerzas armadas para luchar contra la subversión.

Desde 1980 para adelante, Cipriani como obispo o como cardenal, ha sido un valioso colaborador de los regimenes corrompidos del Perú. En la práctica militó en el fujimorismo, y apoyó ese gobierno desde 1990 hasta el año 2000. Cuando este régimen cayó en desgracia a toda prisa abandonó el barco que se fue a pique y buscó renovar sus horizontes en el

nuevo inquilino de palacio de gobierno. Desde el 2001 prestó sus servicios al gobierno de Alejandro Toledo y de su pelirroja esposa Eliane Karp. La posición toledista de Cipriano, se hizo pública cuando anunció que “Desde nuestra posición, la iglesia procura limar asperezas, unir voluntades, comprender y perdonar, para que resurja un país optimista, apoyado en el alma que es la iglesia católica peruana” (43). En el 2006, cuando Alan García ganó la presidencia del Perú, Cipriani se puso la camiseta del Apra y se convirtió en el confesor del nuevo gobernante que a pesar que se ha declarado ateo es un asiduo concurrente de misas y homilías a favor de su gobierno. En cada misa de los domingos ataca sin cesar a los huelguistas y a los “sectores que organizan protestas y manifestaciones”, contra el gobierno del presidente aprista.

El 20 de enero del 2001 Cipriani fue premiado por su filiación política con Fujimori y las fuerzas armadas del Perú. El Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal de los católicos peruanos. ¿Cómo logró obtener esta recompensa?. En junio de 1997, el Papa concedió una audiencia privada a Fujimori la que se efectuó en la Santa Sede en Roma. En dicho conclave entre el jefe de la iglesia católica y el mafioso presidente peruano se discutió como plato fuerte los servicios especiales que Luis Cipriani había otorgado al fujimorismo y sobre todo el rol que cumplió este sacerdote para que los militares pudieran entrar a la embajada japonesa y liquidar al comando del MRTA que desde 1996 hasta abril del 1997 se había apoderado de la embajada japonesa en Lima. La relación de Cipriani con los militares y el fujimorismo se concretó en el “terreno clandestino” y en la “actividad publica” del país. En enero del 2001, la Agencia Perú dio cuenta de un video filmado por agentes del ejercito donde aparecía dictando una conferencia en la Escuela Técnica del ejercito, cuyo auditorio estaba integrado por candidatos al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), uno de los aparatos mas sanguinarios de las fuerzas armadas. En la conferencia decía Cipriani: “Yo comprendo que el Servicio de

Inteligencia tiene que desarrollar espíritus mentirosos. Yo lo comprendo, porque tiene que ser gente que parece que esta en la luna y está siguiéndote de cerca, están informado de todo”. En octubre del 2002, la Procuraduría Anticorrupción y el vocal supremo José Luis Lecaros, citaron al cardenal Cipriani para que declare sobre la acusación que le hizo el ex premier ministro Alberto Bustamante Belaúnde respecto a que este jefe de la iglesia católica había conocido con precisión los pormenores de la matanza de nueve estudiantes y un profesor de la Cantuta en julio de 1992. Según la versión de Bustamante, en julio del 2000 Vladimiro Montesinos le reveló que el general del ejército Luis Pérez Documet; después de la ejecución del secuestro y el crimen de la Cantuta, consultó con Luis Cipriani sobre el destino que debían tener los cuerpos aún sin sepultura.

Si Cipriani daba la cara abiertamente por Fujimori desde Ayacucho, otros altos jefes de la iglesia lo hacían desde otras partes del Perú. Ricardo Duran, obispo del Callao, sindicado por algunos medios de comunicación como el “obispo de los pobres”, es que durante el fujimorismo fue un incondicional de la pena de muerte y de la acción criminal de los militares. En 1993, Duran señaló que no se podía “permitir que por miedo y la cobardía de unos cuantos”, no se apruebe la pena de muerte que había propuesto el régimen militar de Fujimori (44). En 1993 no quedaba nada de la “democracia” peruana y el régimen de Fujimori y las fuerzas armadas, imponían sus leyes militares. Cada día se descubrían cada día fosas comunes clandestinas con decenas y cientos de peruanos asesinados por los grupos paramilitares y los militares. Salían a la luz los centros clandestinos de torturas y crímenes que tenía el ejército en los andes y en la misma capital del país. Ese año, Ricardo Duran, alababa la gestión del general Nicolás Hermosa Ríos, jefe de las Fuerzas Armadas, y defendía la acción contrainsurgente de los militares. Este general, ahora acusado de crímenes de guerra y de robos y otros delitos, fue

el responsable directo de las atrocidades cometidas por los militares durante el fujimorismo. “Yo creo te tenemos que reconocer que en esos momentos las Fuerzas armadas y las Fuerzas Policiales han efectuado en realidad un trabajo notable digno de todo encomio y esto es algo que todo peruano tiene que reconocer y agradecer”, decía el obispo Durand. Y agregaba respecto al general Hermosa Ríos, que “sin duda tiene el merito de estar dirigiendo en este momento la pacificación.... Yo creo que el general Hermoza ahora debe ser como el portaestandarte del respeto que las fuerzas armadas y fuerzas policiales deben tener por los derechos humanos” (45).

LOS CURAS “IZQUIERDISTAS”

La relación entre religión y el poder político en Perú se ha expresado en todas las etapas de la historia del Perú. En la expresión de este fenómeno no hay que culpar solo a los representantes del Opus Dei, y otras corrientes reaccionarias de la iglesia cristiana. El conflicto armado que duró cerca de dos décadas, hizo salir a la superficie la verdadera naturaleza política de la iglesia y de sus representantes. Los curas y obispos que la publicidad ha presentado como “izquierdistas” y que se cubrieron con un barniz de militantes de la justicia social asumieron la misma posición política que aquellos religiosos que sin restricciones apoyaron los más brutales regimenes del país. La distinción derecha/izquierda en el seno de la iglesia católica, no tiene ningún asidero en la doctrina religiosa que por esencia es reaccionaria y sin ningún valor para el cambio de calidad de la sociedad dividida en clases sociales. Para centrarnos en este problema vale remitirnos a los discursos políticos de los religiosos que en Perú han sido convertidos en iconos de la justicia social, del humanismo y de la defensa de los derechos humanos.

Utilizar un discurso sensible a los derechos humanos, pero transcribir plegarias a favor de los militares, fue una regla que se impuso no solamente en la jerarquía religiosa de derecha, sino también en los sacerdotes considerados de izquierda y hasta contestatarios. De esta regla no escapó ni siquiera el sacerdote Gustavo Gutiérrez, uno de los mentores de la Teología de la Liberación, y convertido por la izquierda legal peruana, en un símbolo de cristianismo y de una teología liberadora. En 1994, en pleno régimen de Fujimori y de los militares, Gutiérrez fue entrevistado respecto a los derechos humanos y la acción militar y policial en la lucha contrainsurgente. El filo político de la respuesta de Gutiérrez no fue diferente de las homilías reaccionarias de los curas fujimoristas, y su versión se deslizó para justificar a las fuerzas armadas y exculparlas de sus abominables crímenes. Según Gutiérrez, “lo primero es reconocer que se trata de una tarea muy difícil. Muchos miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional han caído... ellos merecen toda nuestra solidaridad”, afirmando además en la misma entrevista, que denunciar la violación de los derechos humanos, “no implica un aval a los sangrientos atentados terroristas, ni supone tampoco un ataque al importante papel que las fuerzas armadas y Policía Nacional que deben desempeñar en el país” (46).

Caso parecido es la posición que asumió Luciano Metzinger, obispo y presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social en 1992 quien ha estado rodeado de una fama de religioso humanista, y radical defensor de los derechos humanos. Este obispo, en una entrevista realizada en enero de 1992, avaló el uso de las rondas campesinas para la lucha contra la subversión (exactamente como querían las fuerzas armadas), y apoyó que el ejército entregue armas a las rondas. Estuvo de acuerdo también que los militares controlen estas organizaciones que durante el fujimorismo se institucionalizaron como parte de las fuerzas contrainsurgentes. “Si los ronderos deciden defenderse con las armas contra la agresividad

de Sendero Luminoso, tienen todo el derecho de hacerlo... Los ronderos tienen derecho a armarse, pero bajo la protección de la policía, bajo la protección del ejército. Una protección constante”, dijo el obispo (47).

Luis Bambarén Gastelumendi, ex Obispo de Chimbote y ex Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, es otro jefe religioso que se hizo conocido por su vinculación con los sectores populares. Este obispo, como toda la jerarquía católica adoptó posiciones anticomunistas y su acercamiento hacia los pobres, fue la de llevar asistencialismo mendigante y amortiguar las explosiones sociales en un país en crisis permanente. En 1975 la revolución nicaragüense vivía sus horas culminantes de un largo proceso de lucha armada para derrotar de la tiranía de Anastasio Somoza. El sacerdote Nicaragüense, Ernesto Cardenal, poeta y revolucionario, era un destacado participante de este movimiento revolucionario. Bambarén estaba en Perú, y desde ahí escribió un agrio texto de acentuado anticomunismo primario para responder un artículo periodístico de Ernesto Cardenal, donde el religioso de Nicaragua, hacía una defensa de la lucha de clases y de la vigencia del marxismo. Según Bambarén los argumentos de Cardenal pretendían “bautizar el marxismo o utilizar estratégicamente a los cristianos para el avance del comunismo en el Perú y América Latina”. Entre 1968 y 1975, el obispo Bambarén fue un entusiasta seguidor de la dictadura militar del general Juan Velasco Alvarado, y sus contradicciones con el régimen velasquista, fue a partir de la competencia entre iglesia y militares para distribuir alimentos del asistencialismo miserable entre los pobres.

A partir de 1980, el obispo de Chimbote, al mismo tiempo que “defendía” los derechos humanos, promocionaba la formación de rondas campesinas y grupos de defensa civil que al final en la mitad de la década del 90 sumaban más de 400 mil miembros militarizados. Muchas veces indicó que para

contrarrestar la ofensiva de los subversivos se requiere de la participación activa de la ciudadanía, a través de rondas y comités de vigilancia. Sostuvo la acción militar y policial y junto a ello tuvo las expresiones más duras contra las fuerzas subversivas. “Que Dios les arranque el corazón de piedra que tienen y, en su lugar, les coloque uno de carne. Porque no son las armas las que matan, sino el odio que anida en sus corazones” (48). En agosto de 1986, a dos meses de la matanza de los penales que costó la vida a 300 prisioneros de guerra, Bambaren se pronunció para señalar que el país estaba en peligro de liquidarse a causa de la acción militar del ejército y de la subversión. Este argumento fue una gracia de dios para García Pérez, que de esta forma quedaba como víctima de militares y terroristas. Sin equívocos, así lo confirman diversas instituciones del país y del extranjero, la matanza de los penales en 1986 fue planificada en palacio de gobierno varios meses antes de su ejecución. “La violencia senderista por un lado y la represión militar por otro, pueden terminar despedazando al país sino se les detiene a tiempo... cuando un país experimenta la aparición de grupos armados, ya sean terroristas o paramilitares, la situación se torna de suma gravedad. La actuación de estos grupos escapa a todo control del gobierno”, dijo Bambaren (49). En octubre de 1986, volvió a la carga contra la subversión, y comparó a “Sendero Luminoso como el sucesor de Caín, que mató a hermano Abel” (50).

EL PADRE MARIANO, LA CIA Y LOS MILITARES

Su verdadero nombre es Joseph Theodore Gagnon, pero se hacía llamar “padre Mariano”. En 1991, fecha en la que se ubica este recuento, este sacerdote tenía 60 años. Había sido formado en un seminario franciscano en Nueva York, Estados Unidos. De nacionalidad canadiense llegó al Perú en los inicios de la década del 80, y fue por esa época que estableció su misión religiosa en San José de Cutivireni, a orillas del río Ene.

Este pueblo selvático está ubicado en la selva peruana, y en la década del 80 tenía cerca de 3,000 miembros. Esta comunidad hace parte de grupo étnico Asháninkas, que en 1991 tenía una población aproximada de 20.000 miembros, lo que la ubica como la etnia más numerosa de la región amazónica. Los ashaninkas son expertos cazadores y excelentes guerreros. Históricamente han vivido al margen del Estado, y desde 1821 ningún gobierno los ha tomado en cuenta. Solo han servido para la exhibición de un Perú exótico y calamitoso. Hasta la actualidad viven en una pobreza absoluta y están al margen del más elemental derecho social y político. No se respeta ni siquiera sus derechos sobre territorios que ancestralmente han ocupado. Actualmente, cuando la guerra interna ha concluido, están abandonados nuevamente a su suerte, y son víctimas de colonos y grandes empresas madereras que arrasan los campos ashaninkas.

El “padre Mariano”, fue un activo organizador de grupos de defensa civil entre los ashaninkas. Para este fin se apoyó en el ejército y en la embajada norteamericana en Lima. La revista *Caretas* (edición 1101), lo alabó diciendo: “Un cura de armas tomar”. Para 1984, la “misión de Cutivireni se había convertido en una base militar de las fuerzas armadas, compartida por los grupos de defensa civil organizados por el franciscano Mariano y tropas de elite contrainsurgentes. Este mismo año Cutivireni es atacada por una numerosa columna guerrillera. El “padre Mariano, se ve forzado a salir huyendo y es rescatado por un helicóptero de la DEA (Drug Enforcement Administration) de los Estados Unidos. Se refugia en la base militar norteamericana de Santa Lucía en el Alto Huallaga. Desde ahí en coordinación con la embajada USA en Lima y el Comando Político Militar de la zona planifica su retorno a la Misión de Cutivirene. En 1991 intenta varias operaciones militares de reconquista. Su retorno es violento y lo hace resguardado por tropas de élite del ejército, la fuerza aérea peruana y agentes norteamericanos quienes habían puesto a su disposición un

helicóptero artillado. Como narra la revista *Caretas* (edición 1142), el helicóptero norteamericano que debía participar en la operación militar se estrelló, y tuvo que participar un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú. Sus planes de reconquista se concretizó el 10 de abril del 1991. No bien puso los pies en la Misión de Cutivireni, como cuenta *Caretas*, hizo una misa resguardada por fusiles y ametralladoras de los soldados (51). El interés del ejército y de los americanos en mantener la base de Cutivireni, era en razón de que la parroquia miserable de esta comunidad, no era solo un centro para leer el catecismo ni para rezar y hacer plegaria. La parroquia era un centro militar camuflado donde la DEA americana y el ejército habían instalado poderosos equipos de comunicación, y ello hacia de la misión del padre Mariano, una importante base contrainsurgente de esta región selvática, donde la guerrilla maoísta había logrado instalarse solidamente desde mediados de la década del 80. De ahí se explica los constantes ataques de la guerrilla y la cerrada defensa que hacían las fuerzas armadas y los efectivos americanos de la base de Santa Lucía.

A partir de la reconquista de Cutivireni el padre Mariano, se transformaría en el jefe militar que al frente de sus tropas salía a enfrentar a los grupos subversivos. Sus contactos radiales de coordinación militar lo hacia con la base militar contrainsurgente de Mazamari y el Comando Político Militar del Centro. El periodista Gustavo Gorriti narra para la revista *Caretas*, un encuentro entre el grupo de defensa civil bajo la jefatura del padre Mariano y una columna de la guerrilla maoísta. El franciscano se puso al frente de sus tropas para rechazar un ataque de la subversión. El padre Mariano, dice el periodista, “tomó posición con una pistola y dos granadas que le habían dado en Mazamari...Fue un encuentro rápido y brutal...”. El grupo guerrillero fue eliminado, y “Mariano elogio a los guerreros y criticó a uno que había dudado usar su arma de guerra. Ahora el cura era un jefe militar”, dice Gorriti (52). En 1991 la provincia de Satipo donde de estaba ubicada

la base del “padre Mariano”, era parte del Comando Político Militar (CPM) del Frente Mántaro, que dirigía el general Pérez Documet quien se hizo conocido por ser uno de los jefes militares mas sanguinarios de la época del régimen de Fujimori. Este militar esta acusado de ser el responsable de decenas de secuestros y asesinatos clandestinos de estudiantes de la Universidad del Centro. Es también el responsable del secuestro y asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad la Cantuta ocurrido el 18 de julio de 1992. También está involucrado en la matanza de Barrios Altos en 1991, cuando un grupo de elite del ejército asesino a 15 personas entre ellas un niño de 8 años de edad. Este militar fue comandante de la División de Fuerzas Especiales del Ejército (DIFE) y desde ahí participó en las acciones criminales del grupo paramilitar “Colina” que se formó al interior del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

CAPITULO CUARTO

LA IZQUIERDA PERUANA DURANTE LA GUERRA INTERNA

Raramente se ha visto en América Latina o en otra parte del mundo, un caso semejante como el que se registra en el caso de la conducta de la izquierda legal peruana. Mientras las fuerzas armadas reprimían y asesinaban brutalmente a miles de ciudadanos, la izquierda vivía una etapa alegórica y de primavera política sin precedentes. Desde el inicio de la lucha armada en 1980 hasta su derrota en el 2000, en promedio cada año 3,500 personas perdieron la vida a causa del conflicto, lo que hacía que cada día entre 9 y 10 personas eran muertas. Esta realidad sangrienta no impidió que la izquierda legal viviera una etapa alegórica en su existencia. Las década del 80 y el 90 han estado marcadas por un sistema que se llamaba democrático, pero donde se permitía con docilidad, genocidios masivos de prisioneros, centros clandestinos de tortura del ejercito, grupos paramilitares, asesinato masivo de poblaciones, destrucción sistemática de pueblos y aldeas, militarización de la sociedad, violación de las leyes y la constitución, tribunales militares para civiles, imposición de jueces sin rostro, Es en medio de esta democracia aplastada por la corrupción, el crimen y la violencia sistemática, donde la izquierda legal forjó su efímera y floreciente carrera electoral. Un país en guerra interna y de violencia sin límites no influyó en la conducta de colaboración y complicidad de esta izquier-

da con los regímenes de turno y la estrategia de dominación de los grupos de poder. Los éxitos transitorios de la izquierda en el terreno electoral, fueron logrados al margen del sufrimiento del pueblo y se edificó sobre los cadáveres de miles de peruanos masacrados por la acción represiva de las fuerzas armadas y grupos paramilitares del gobierno.

Los grandes discursos de esta izquierda sobre la clase obrera, la lucha de clases, los pobres y la revolución, fue un texto electoral que utilizó para encubrir sus ambiciones políticas y buscar con simpleza un acomodo al lado de las elites políticas del país. Procesos electorales fraudulentos, parlamentos inservibles a los intereses del país, negociaciones con los grupos de poder, traiciones y zancadillas contra el movimiento popular, son elementos principales que han rodeado el camino y la trayectoria política de la izquierda peruana. Un breve recorrido en este terreno pone en evidencia, que esta izquierda, no solo no hizo nada para aliviar los males históricos de la población, sino que fue cómplice de todas las perversiones que impusieron al pueblo las clases en el poder. No hay un solo caso donde la actividad de esta izquierda fue a favor de los asalariados, pero sin embargo hay miles de ejemplos que muestran que la participación de la izquierda en el parlamento, los sindicatos, los municipios, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras instituciones privadas o del Estado, fue en beneficio de las elites políticas del país y de las potencias imperialistas.

Izquierda Unida (IU), desde el parlamentarismo o desde otra actividad fue conservadora y contraria a la acción social para el cambio. En la guerra civil que vivió el Perú durante casi 20 años se puso de lado de los gobiernos de turno y contribuyó con los planes militares ejecutados por las fuerzas armadas. En diciembre de 1991, los partidos políticos de la derecha y de Izquierda Unida (IU), firmaron un “compromiso común para enfrentar el terrorismo”. En el texto se señala que “enfrentar,

desde el Estado, una subversión armada y terrorista” podía ser difícil, y en tanto ello, “las diferentes organizaciones política estamos dispuestos a asumir, desde nuestras diferentes identidades partidarias, un compromiso práctico común, responsable y solidario para el éxito de esta lucha” (*). Esta izquierda, que hasta antes de 1980, se pretendió avanzada y hasta revolucionaria, dócilmente participó en la acción contrainsurgente que desplegó el Estado para derrotar los grupos subversivos. En nombre de una democracia inexistente y de un “estado de derecho”, que en Perú jamás ha tenido vigencia, fue activista de primera línea en la organización de rondas campesinas, rondas urbanas y grupos de defensa civil que utilizaron los militares para detener y derrotar a los movimientos subversivos.

Antecedentes

Hasta mediados de la década del 70, la derecha peruana por prejuicios anticomunistas, desconfiaba de la izquierda legal, y se negaba a integrarla directamente a sus planes estratégicos políticos. Los rezagos de la “guerra fría” y el triunfo de la revolución cubana en 1959 pesaban en la relación entre los grupos de poder y una izquierda que durante años se dijo partidaria de la revolución y el comunismo, pero cuya práctica política la colocaba más cerca de los burgueses que de los trabajadores. A mediados de la década del 60 se extiende en toda América Latina una corriente política, promovida por la administración de los Estados Unidos y algunos gobiernos latinoamericanos, para asociar a la izquierda “no violenta” a los planes políticos de los grupos de poder. Era la época de los procesos armados en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Colombia. Dividir la izquierda entre violentos y no violentos era un método táctico para aislar y debilitar a las organizaciones de izquierda que realizaban lucha armada. En Perú, la moda de incluir a la izquierda legal en los asuntos del Estado, sobre todo como animadores de los procesos electorales, cobra fuerza después de la derrota de los movimientos guerrilleros

de 1965. Anterior a la década del 60, la izquierda, sobre todo el viejo Partido Comunista pro soviético, constituía una fuerza electoral marginal sin ninguna perspectiva política que practicaba un electorerismo simplista, sin representación propia y siempre encuadrada a un personaje, civil o militar, de moda.

La izquierda legal, conocida durante buen tiempo con el nombre de Izquierda Unida (IU), fue el conjunto de partidos y organizaciones políticas que en el discurso se han presentado como partidarias del cambio y de la revolución, pero que en la práctica se movilizaron para sostener el Estado y mantener la sociedad clasista del Perú. Esta izquierda, de la cual nos ocupamos en este capítulo tuvo sus orígenes en 1980 (**), y panfletariamente hizo publicidad a favor del marxismo, el leninismo, el maoísmo y toda suerte de ismos que le sirvió para aparentar distancias con los partidos de la derecha. Hasta un poco antes de 1980 se proclamaban “izquierda revolucionaria”, “vanguardia proletaria”, “socialistas revolucionarios”, “mariateguistas” y “maoístas”. En algunos casos agitaba consignas políticas a favor de la lucha armada y se mostraba partidaria de la vía violenta para tomar el poder. Con facilidad hablaban del “huracán campesino”, de la etapa prerevolucionaria”, de la guerra del campo a la ciudad”, de la “dictadura del proletariado”, y de ambiciosos programas políticos para la conquista del poder y destruir la “democracia burguesa”. Si esta izquierda, por lo menos en el discurso, postulaba hasta antes del inicio de la lucha armada (1980), una posición intransigente y de lucha contra el Estado y las clases políticas dirigentes, ello cambia cuando la burguesía y los terratenientes la integran a su sistema electoral, y le ofrecen ventajas en el parlamento, en los consejos municipales y en otras instancias del Estado y la sociedad oficial.

Recién en 1978 durante la dictadura militar del general Morales Bermúdez la izquierda hace su ingreso por la puerta principal en los corredores del parlamento. En 1980, cuando ya

la izquierda estaba bien encastrada en los asuntos electorales, Manuel Ulloa un alto dirigente del partido Acción Popular (AP), y ministro de Hacienda en esos momentos, formuló la idea de que la burguesía peruana ya no podía gobernar sin el concurso de la izquierda legal y parlamentaria. La opinión de Ulloa, representante de la gran burguesía y del imperialismo, expresaba la necesidad de los grupos de poder de buscar aliados en el seno de organizaciones políticas que se llamaban del campo popular. La inclusión de la izquierda en el aparato del Estado resultaba un movimiento táctico de importancia para los planes políticos de los grupos de poder. En lo fundamental, ello respondía a la necesidad de la burguesía de desactivar las luchas populares en pleno ascenso, y que en el futuro podrían convertirse en una amenaza para el Estado. La alianza burguesía-izquierda, no tenía como fin reformas ni cambios favorables a favor del pueblo, sino más bien reforzar el aparato del Estado y facilitar el manejo del gobierno. A partir del electoralismo, la izquierda abandonó su antigua discusión filosófica sobre el poder, la lucha armada y otros tópicos de la revolución, para integrarse entusiasmada a la acción legal que le ofrecieron las elites políticas del país. De esa manera, ya no fue solo el antiguo PCP pro soviético el animador de los procesos electorales, sino un conglomerado de organizaciones políticas que años antes de 1980 fueron sindicadas de ultraizquierdistas. En el campo electoral, nada les estaba restringido, ni el uso masivo de la prensa (televisión, radio, medios escritos, etc.), ni el apoyo de algunas instituciones del Estado, ONG, universidades, centrales obreras, sindicatos y hasta el concurso de la iglesia.

Cada vez que se inauguró un proceso electoral, la izquierda estuvo en primera fila y no dejó de publicitar sus octavillas partidarias en las que exigía, ¡“una salida democrática y popular a la crisis!”, pero contradictoriamente siempre concluía sosteniendo a uno de los representante de los grupos de poder. En 1985 la izquierda postuló a la presidencia de la Repu-

blica y ofreció en el caso de triunfar en las elecciones, acabar con el hambre y la miseria, pero finalmente apoyó la campaña electoral de Alan García Pérez, un representante de la derecha y del imperialismo. En 1990, la izquierda dijo, “¡Vota por IU para renovar el Perú!”, pero finalmente apoyó la candidatura presidencial de Alberto Fujimori, que como se conoce fue un candidato de los grupos de poder y de la CIA americana. En el año 2000 la izquierda llamó a luchar “por una salida democrática y popular” (1) pero terminó sosteniendo la campaña electoral de Alejandro Toledo, tan reaccionario y pro americano como García Pérez y Alberto Fujimori.

La izquierda legal, desde 1978 no ha faltado a ninguna cita electoral organizada por regimenes civiles o militares. Ha sido infaltable en los comicios electorales más bochornosos y tramposos. No se perdió ninguna de las elecciones fraudulentas organizadas durante los 10 años de fujimorismo. Incluso, una a parte de esta izquierda representada en el Movimiento Democrático de Izquierda (MDI), que encabezó Henry Pease uno de los líderes de la izquierda, participó en las elecciones al Congreso Constituyente Democrático en 1992. Este evento, planificado en el cuartel del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), fue organizado con el propósito de legalizar el golpe militar de Fujimori y Montesinos (5 de abril del 2002). Las elecciones a la Constituyente se desarrollaron en medio de una violenta represión contra los opositores al gobierno. Esta izquierda, durante las campañas electorales o desde el parlamento, se ha autocalificado de “militantes de la democracia y defensores de los intereses de los pobres”, pero eso, como se verá mas adelante fue todo lo contrario. La filiación de esta izquierda con el régimen de Alan García Pérez (1985-1990), con Alberto Fujimori (1990-2000), con Valentín Paniagua (2001-2001), y con el de Alejandro Toledo (en 2001-2006), fue la expresión de una línea política de colaboración de clases, y de coincidencias de intereses con las elites políticas del Perú. Aquí no se trato de movimientos tácticos, como se decía

en las campañas electorales, sino de afinidad estratégica política entre la izquierda y la derecha.

La experiencia histórica de la lucha social enseña que los grupos de poder, no sólo mantienen su sistema de explotación por medio de la violencia y la coerción, sino también a través del engaño y la demagogia. Para este objetivo buscan el apoyo de grupos, partidos e instituciones que se presentan como del campo popular, sobre todo aquellas que se dicen identificadas con la lucha por el cambio social y el socialismo. El Estado recluta, dirigentes sindicales inescrupulosos, políticos oportunistas, ventajistas y toda suerte de personaje y organización útil a sus intereses. Es en este cuadro pervertido donde actúan los individuos y las organizaciones políticas que usan membrete de izquierda, pero que actúan según los planes políticos del Estado. Estos por su ubicación cercana a las masas, constituyen piezas fundamentales en la maquinaria política militar que utiliza el Estado para someter a la población pobre. La izquierda se ha presentado indistintamente como exponente de una posición crítica al sistema, pero al mismo tiempo ha sostenido los gobiernos más reaccionarios, corruptos y criminales de los últimos años. Ha dicho que el “Estado está en crisis y que no da para más”, pero al mismo tiempo ha pedido reformas en ese Estado que dice que ya no sirve para nada. Ha llamado a la “lucha y la movilización popular”, para “cambiar radicalmente la situación del país”, pero inmediatamente ha hecho campaña para que se realicen elecciones generales que los grupos de poder han utilizado en gran forma como válvulas de escape de las explosiones sociales. Ha criticado la democracia formal, pero se alió con los gobiernos de turno y las fuerzas armadas para defender precisamente esa democracia. Se ha presentado como defensora de los derechos humanos, pero sin embargo pidió más represión contra aquellos que el gobierno calificaba de subversivos.

Así por ejemplo, en 1972, algunos años antes del inicio del

conflicto armado, “Patria Roja”, grupo “maoísta” que se autodefine como el partido heredero del Partido Comunista del Perú (PCP) fundado por José Carlos Mariátegui, declaraba su estrategia para “derrocar la dominación del imperialismo, principalmente yanqui, abatir la dictadura de clase de los grandes burgueses y terratenientes, y construir un estado de democracia popular dirigido por el proletariado y basado en la alianza obrero campesino, avanzar ininterrumpidamente en dirección al socialismo” (2). En 1982, a dos años del inicio de la lucha armada y cuando “Patria Roja” ya estaba bien implantada en el sistema electoral, declaraba a través de Rolando Breña Pantoja un alto dirigente y parlamentario de este grupo en ese tiempo, que el gobierno debía “reprimir a Sendero Luminoso porque desestabiliza la democracia alcanzada con tanto sacrificio” (3). El Partido Comunista Revolucionario (Trinchera Roja), otra de las organizaciones radicales y maoísta de Izquierda Unida, decía en 1977, que la “coyuntura que empezamos a vivir nos coloca ante la alternativa de forjar camino independiente mediante la acción directa de las masas o servir de comparsa al carro burgués fomentando las ilusiones constitucionalistas...Las masas piden pan y no constituyente” (4). Después de 1980, Agustín Haya de la Torre líder de esta organización se convirtió en un activo defensor de esa constitucionalidad ilusionista como él mismo decía, y finalmente en 1996 renunció a su antigua militancia de izquierdista para reintegrarse al reaccionario Partido Aprista (APRA). En 1981 Vanguardia Revolucionaria (VR), uno de los grupos fundadores de IU, cuyos líderes, eran considerados “ultraizquierdistas”, emitió un comunicado, donde señalaba, que estaba trabajando para lograr la mas “amplia unidad de fuerzas sobre la base de la alianza obrero-campesina, para derrotar al enemigo común y así conquistar una patria libre encaminada al socialismo” (5). Javier Diez Canseco y Ricardo Letts Colmenares dos dirigentes de VR, pronto se olvidaron de sus encendidos discursos, y junto con propiciar las rondas contrainsurgentes, sostuvieron en 1985 la campaña presiden-

cial de Alan García Pérez. En 1990 hicieron lo mismo con Alberto Fujimori en cuyo gobierno corrompido y represor se instalaron algunos ministros de izquierda. En 1992, Javier Diez Canseco llamaba a crear una “tercera vía” armada” en el seno de las masas para contener el avance de Sendero Luminoso, y sostenía la posibilidad de hacer un “frente político común”, nuevamente con el APRA.

PRIMAVERA ELECTORAL DE LA IZQUIERDA

La primavera electoral de la izquierda se inicia en 1978, cuando después de una década de dictadura militar (1968-1978) el general Francisco Morales Bermúdez convoca a elecciones para la Asamblea Constituyente. La Constituyente encargada de redactar una nueva Constitución, que serviría de base para la realización de elecciones presidenciales en 1980, no fue como se dijo oficialmente para “transferir el poder a los civiles”, y para que los militares “regresaran a sus cuarteles”. Tampoco fue para retornar al “sistema democrático” y al “estado de derecho” como se dijo en la propaganda política. Los hechos demostraron posteriormente, que con el proceso electoral de 1980 las fuerzas armadas nunca abandonaron el poder del Estado, ni el Perú se dotó de un sistema democrático, ni siquiera de carácter medianamente burgués. Dos años después de las elecciones presidenciales y de la “transferencia del poder a los civiles”, las fuerzas armadas volvieron a ser las protagonistas de la seguridad interna, y en la medida que se involucraban en la guerra contrainsurgente retomaron el control absoluto del gobierno y del Estado.

Una década de gobierno dictatorial había hecho odiosa la presencia de los militares en las riendas del Estado. Existía eso que se conoce en términos políticos, un desgaste de la presencia militar, y en razón de ello se acentuaba el rechazo del pueblo contra las fuerzas armadas. La Asamblea Constituyen-

te fue la cobertura que empleó la dictadura militar, para dar la apariencia que el Perú ingresaba a una etapa democrática y de plenos derechos civiles. Su rol estratégico fue utilizarla como instrumento para desactivar una explosión social en desarrollo, cuya causa principal era la crisis social y política que envolvía al Estado y la sociedad. La crisis del gobierno militar alcanzó su pico más alto al final de la primera etapa del gobierno de las fuerzas armadas (1968-1975), cuyo efecto más espectacular del periodo político estuvo referido cuando los mismos militares echaron del poder al general Juan Velasco Alvarado, quien se había declarado “jefe indiscutible de la revolución peruana”. La crisis de los años 70 y la convocatoria a la Asamblea Constituyente, como salida a esta crisis, se relaciona el desastre económico, social y político que envolvió todo el proceso de dictadura militar. Durante el velasquismo se pretendió hacer del pueblo un receptor inmóvil de “reformas” que se presentaban como avanzadas, pero que en los hechos no servían para resolver los problemas históricos fundamentales del pueblo. La demagogia conceptual y política del velasquismo, no resistió el desarrollo de la lucha de clases, y las serias contradicciones entre lo que se decía en el discurso y la política antipopular que se aplicaba en nombre de un falso “antiimperialismo”. Mientras los militares decían que inauguraban una sociedad, justa, solidaria, “ni capitalista” ni “comunista”, el hambre y la miseria del pueblo crecía vertiginosamente, imponiéndose acciones represivas para controlar las luchas y el descontento populares.

La segunda fase militar (1975-1980), encabezada por el general Francisco Morales Bermúdez quien había sido uno de los más caracterizados ministros de Velasco, agudizó aun más la crisis e hizo inevitable una explosión social. La crisis afectó profundamente a la clase trabajadora, que a pesar de los discursos de los militares en torno a resolver las reivindicaciones de los asalariados, la situación social, económica y laboral se agravó aun más, cuya problemática tenía similitud

con la época anterior a 1968. Así por ejemplo, Manuel Iguíñiz, anota que durante el periodo que va de 1970 a 1980, no se puede decir que hubo “una política explícitamente dirigida a resolver el problema del subempleo y desempleo” (6). La expresión más clara de las agudas contradicciones sociales durante el régimen militar se materializó el 19 de julio de 1977, cuando los trabajadores realizaron un Paro Nacional que en Lima y otras grandes ciudades del país que tuvo características insurreccionales. Esta lucha de carácter espontánea en sus orígenes, surgió desde las bases mismas de los sindicatos y organizaciones populares. Las cúpulas burocráticas de sindicatos y centrales obreras, fueron sorprendidas con la acción, y obligadas a participar en último momento, se montaron en la ola de la lucha popular, no para darle una orientación clasista, sino para desorganizarla, desactivarla y finalmente llevarla a la derrota. En este terreno político de aguda lucha de clases aparece la convocatoria a la Asamblea Constituyente, más como una medida de carácter táctico que como una acción dirigida a reponer la democracia en el país. La convocatoria a la Asamblea Constituyente, y la posterior realización de elecciones generales para elegir un presidente civil de derecha, fue la válvula de escape de un proceso de lucha social en pleno desarrollo que amenazaba desbordar la legalidad del Estado. La fiesta electoral y el funcionamiento de la asamblea constituyente logró desactivar las luchas populares y convertir a los trabajadores en masas mendigantes que se movilizaban casi todos los días “pacíficamente” a la puerta del congreso, para implorar solución a sus problemas laborales. La constituyente, en cuyo seno participaban los más radicales representantes de la izquierda, sirvió de cortina de humo para que el gobierno dejara sin solución los reclamos más urgentes de los asalariados.

El aumento general de sueldos y salarios”, la plena vigencia de la estabilidad laboral, no al cierre de las fabricas y centros de trabajo, y la no intervención del gobierno en las univer-

sidades, principales reivindicaciones del paro del 19 de julio, fueron convertidas por la izquierda legal en un programa electoral. Ello sirvió solamente para ganar votos, pero no para resolver los problemas de los trabajadores. Ninguno de esos pedidos, cuyo costo fue el despido de 5 mil dirigentes sindicales, fueron resueltos y la situación económica y social se agravó en la medida que la Asamblea Constituyente, controlada por los militares y el Apra se convertía en el centro político del país. Una versión testimonial de la época anota con agudeza la relación entre Constituyente, planes militares para sofocar la rebelión popular y el oportunismo de la izquierda. Con precisión dice Berthuel Alvarado Malpica: “Era insostenible la dictadura de Morales Bermúdez...El paro fue un éxito. Días después, el generalísimo haría la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Nadie se acuerda ya de los muertos. En el lugar del crimen se erigió un monumento a los caídos, el cual luce sucio y abandonado. Las víctimas no, pertenecían a agrupación política alguna, pero días después de la matanza varios partidos políticos se peleaban los difuntos como propios. Cálculos políticos, que le llaman” (7).

REPRESIÓN CONTRA EL MOVIMIENTO SINDICAL Y CRISIS DE DIRECCIÓN

El año 1978 fue para la izquierda y las elites burocráticas de las centrales sindicales, la época de los grandes arreglos electorales. Se da rienda suelta a las ambiciones para ocupar un lugar preferencial en las listas parlamentaria o en los consejos municipales. Se ve con avaricia un puesto en el comfortable y bien remunerado parlamento, y en otras instituciones del Estado. Si para la izquierda esta etapa es de alegoría electoral, para los trabajadores significa un retroceso en la lucha social y reivindicativa. El régimen militar, utilizó el proceso electoral para negar reclamaciones exigidas en el paro nacional del 19 de julio de 1977. El gobierno volteó la página a los reclamos

que los asalariados habían planteado desde los últimos años de la década del 60. Se cerró cualquier discusión para reponer a sus puestos de trabajo a más de 5 mil dirigentes sindicales y activistas de la huelga despedidos durante la paralización y movilización de julio. Este despido masivo de dirigentes sindicales, el más grande que ha registrado la historia de la lucha sindical en el país, afectó seriamente el futuro del movimiento sindical peruano. Una generación de valerosos jóvenes dirigentes sindicales, junto con quedarse sin empleo, se vieron fuera de la masa asalariada y de las organizaciones laborales. Ello debilitó el movimiento sindical clasista que venía forjándose desde la década del 60 en los principales sectores obreros, en particular en la rama metalúrgica, en la pesca industrial, en el sector minero, estatal y minero.

Con el despido masivo de dirigentes, la dictadura militar obtuvo dos objetivos que en perspectivas fueron estratégicos para los intereses de los grupos de poder, y que se expresaría fundamentalmente en el debilitamiento y destrucción del movimiento sindical clasista en el Perú: Primero, se cortó de un tajo el surgimiento y desarrollo de un sindicalismo aguerrido, que se planteaba como tarea específica la formación de un movimiento sindical nacional fuerte de sólidas raíces con las bases. Uno de los propósitos de este sindicalismo emergente era reorientar la línea sindical de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), cuya cúpula afiliada al viejo Partido Comunista del Perú (PCP) (pro soviético) había convertido esta central en una organización burocrática de compendias con los gobiernos de turno. Por ejemplo, la dirección de la CGTP sostuvo la dictadura del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975), haciendo creer a los trabajadores que en ese periodo las huelgas y movilizaciones reivindicativas eran “contrarrevolucionarias” y que “servían al imperialismo americano”. Durante el periodo militar, la cúpula de esta central cerró los ojos a los planes que puso en ejecución la dictadura para corporativizar el movimiento obrero y popular. Segundo,

con el despido masivo de dirigentes sindicales se despejó el campo para que la vieja burocracia sindical, sobre todo aquella que dirigía la CGTP, retomara posiciones en federaciones y sindicatos. Por ello no fue una casualidad que entre los 5 mil dirigentes despedidos, no hubo ninguno de la CGTP o de alguna federación o sindicato controlado por el PCP (pro soviético).

Tres décadas después de la esta razzia en el sector obrero (1977), el movimiento sindical peruano es una caricatura de fuerza asalariada y un espectro en comparación con el movimiento sindical que comenzaba a tomar cuerpo en la década del 70. Actualmente los trabajadores han perdido sus más elementales derechos sociales y económicos. No tienen estabilidad laboral y ni siquiera derecho a la libre sindicalización. La jornada laboral de ocho horas, se mantiene nominalmente, pero en la práctica ha desaparecido. Se ha regresado a jornadas de 10, 12 y 14 horas por día. Los sindicatos y centrales obreras, son cascarones sin ninguna representatividad y no cumplen ningún papel relevante en la defensa laboral. Hasta 1990 la CGTP tenía 52 federaciones pero 18 años después solo le quedaban 37 y la mayoría de ellas en un estado lamentable de inoperancia. Si en los años 80, dice un informe, había 300 paralizaciones anuales, en la década del 90 descendieron a un promedio de 50 huelgas (8). La crisis del movimiento sindical se expresa en la falta de respuesta organizada de los trabajadores para defender sus más elementales derechos. Si en 1988 se efectuaron 814 huelgas contra las empresas privadas y del Estado, estas bajaron en 1991 a solo 315 paralizaciones a pesar que este año fue una de las etapas mas duras para los asalariados peruanos. El año 1996, cuando Fujimori no tenía ningún respecto por los derechos de los trabajados, solo se realizaron 77 huelgas en todo el país. En 1994, cuando había desaparecido la estabilidad laboral, y los despidos masivos eran frecuentes, solo se efectuaron 60 huelgas, y la mayoría de ellas fueron aisladas y no tuvieron ningún éxito

en la lucha sindical (9).

La crisis sindical, ha ido paralela a la crisis de la izquierda legal, y la causa principal para ello es que las organizaciones sindicales abandonaron la lucha reivindicativa, para convertirse en instrumentos electorales no solo de los dirigentes de esta izquierda sino también de la derecha peruana. Así se ha visto que a todo lo largo de las últimas décadas (1980-2007), las centrales obreras controladas por la izquierda, no ha ido más lejos del “paro cívico nacional”, del “acuerdo nacional”, “marchas por la paz”, frente amplio cívico nacional”, “frente nacional opositor”, y otras modalidades de movilización que sirvieron exclusivamente para beneficio electoral. En abril de 1991, cuando el régimen de Alberto Fujimori daba rienda suelta a su política reaccionaria y antipopular, Valentín Pacho, secretario general de la CGTP y militante del Partido Comunista pro soviético, en lugar de convocar a los trabajadores a defender sus derechos a través de la lucha, planteaba a nombre de los asalariados, una “concertación” con los empresarios y el gobierno, “como el único camino para salir de la crisis”. Junto a este pedido conciliador, que como lo demostró la realidad, no sirvió para nada, Pacho anunció que se formaría una sola central de trabajadores, “reuniendo así a apristas, izquierdistas y de otras tendencias” (11). Juan José Gorriti, secretario general de la GCTP, dice en 1998: “Aceptamos la globalización del mundo, y estamos trabajando por eso...”(10). En julio del 2002, Gorriti fue uno de los que firmaron un “acuerdo nacional” con el gobierno de Alejandro Toledo. El acuerdo estaba firmado por los partidos políticos de la derecha, los representantes de los empresarios, el gobierno y hasta la iglesia católica. El propósito de este acuerdo fue desactivar la protesta laboral y facilitar la aplicación de medidas antilaborales.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), es una muestra de la perniciosa influencia del electoralismo a ul-

tranza en el movimiento obrero popular. Esta central, asumió la lucha sindical, no como una tarea conciente de carácter reivindicativo y de defensa de los derechos de los trabajadores, sino mas bien como un medio para que sus dirigentes, que al mismo tiempo eran militantes del PCP pro soviético, lograran importantes puestos en el parlamento y en otras instituciones del Estado. Desde 1978 para adelante la CGTP se convirtió en un “semillero” de parlamentarios y funcionarios del Estado bien remunerados. Los dirigentes de esta central desfilaron en las listas electorales más inverosímiles del momento. Isidoro Gamarra Ramírez, presidente de la CGTP, y Eduardo Castillo Sánchez, secretario general, fueron los primeros promovidos a miembros de la Asamblea Constituyente en 1978. Después sería el turno, de Gustavo Espinoza Montesinos, otro secretario general de esta central elegido diputado en 1980. A la extensa lista seguiría, Valentín Pacho (senador en 1985), Pablo Checa Ledesma, y otros. Así, la CGTP que de acuerdo a sus normas organizativas y al principio del sindicalismo clasista, su fin fundamental es la defensa de los intereses de sus afiliados, devino en un trampolín para que sus dirigentes ocupen puestos en el parlamento. La ambición parlamentaria de los dirigentes de la CGTP no ha tenido límites respecto a ser candidato de izquierda o derecha. Por ejemplo, José Risco era en el 2001 presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y dirigente de la Federación Nacional de Construcción Civil del Perú, pero ello no impidió que postulara a la segunda vicepresidencia de la derechista Alianza Unidad Nacional que lideraba Lourdes Flores Nano, candidata a la presidencia de de esta organización y presidenta del reaccionario Partido Popular Cristiano (PPC). En el proceso electoral del 2001, Flores Nano, fue calificada por el periodista Cesar Hildebrandt como la “sucesora de Fujimori”, sin embargo tenía en su lista electoral a un “aguerrido” dirigente de la central formada por José Carlos Mariategui (12).

Durante las dos últimas décadas, los dirigentes “históricos”

de la CGTP se convirtieron en constituyentes, senadores, diputados y directores de instituciones del Estado. Por ejemplo, hasta el año 2004, Mario Human Rivera, presidente de la CGTP recibía del Estado 4,500 dólares mensuales en gratificaciones a su participación como representante en ESSALUD (empresa del Estado encargada de la seguridad social y la salud). La CGTP como apéndice del Partido Comunista del Perú (PCP, pro soviético) se convirtió en una sucursal electoral de este partido desprestigiado en el medio político, sobre todo en el campo popular. Ello sería uno de los factores para la crisis y descomposición de esta central sindical, que en la actualidad no cumple ningún rol en la defensa de los trabajadores. Desde fines de los años 70, muchas huelgas, paralizaciones y movilizaciones programadas por la CGTP, sospechosamente se realizaron con bastante cercanía a los procesos electorales en marcha. Por ejemplo, en julio del 2004 la CGTP en alianza con el reaccionario Partido Aprista (Apra), aparecía a la cabeza de un paro nacional cuya reivindicación principal era la convocatoria a una Asamblea Constituyente “soberana” para “reestructurar el Estado”. Históricamente ninguna Asamblea Constituyente ni otro tipo de medida parlamentaria, ha servido para resolver los grandes problemas económicos sociales de los trabajadores. La asamblea constituyente que exigían los dirigentes de la CGTP y del APRA, no era otra cosa que una institución para encubrir la aguda crisis que atravesaba el gobierno de Alejandro Toledo, Contra cualquier norma sindical universal, esta central se convirtió en aparato de propaganda electoral partidaria. En 1985, los dirigentes de la CGTP, llamaron a votar por Alan García Pérez, lo mismo hicieron en 1990 con Alberto Fujimori, en 1995 con Javier Pérez de Cuellar y en el 2001 con Alejandro Toledo. En las elecciones del 2006, apoyaron la candidatura presidencial de Ollanta Humala-Tasso, un comandante del ejército (retirado) que durante el fujimorismo fue uno de los jefes militares en la selva peruana. Este militar está acusado de haber cometido crímenes de guerra.

PROCESOS ELECTORALES Y POBREZA

En el discurso político, tanto los dirigentes sindicales que aceptaban con beneplácito el montaje electoral, y la izquierda legal que flotaba en el paraíso político, declaraban que participaban en los procesos electorales, entre otras cosas, para “defender los intereses” de los trabajadores y del pueblo. Alfonso Barrantes Langan, el principal líder histórico de Izquierda Unida (IU) decía en 1980: “Si yo triunfo voy a ser un representante genuino de los sectores populares” (13). Esta izquierda tenía por costumbre propagandizar en cada campaña electoral, que las elecciones debían servir para impulsar “alternativas populares a todo nivel”, y levantar con “claridad y firmeza nuestro proyecto democrático-nacional y popular en perspectiva socialista” (14). Dos décadas más tarde, cuando han transcurrido varios procesos electorales, y varios presidentes con el apoyo de la izquierda se sentaron en el sillón de palacio de gobierno, las cifras y estadísticas oficiales, sobre desocupación y miseria, muestran que la apología que hacia la izquierda de las elecciones peruanas, eran tan falsos como el discurso demagógico de cualquier partido de derecha. En 1978, inicio del auge electoral de estos grupos, el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, hacia un cálculo de la situación de la Población Económica Activa (PEA), y registraba que el 6.5% de asalariados estaba en condición de desempleados y 52.0% eran subempleados. Un año después, en 1979, en pleno funcionamiento de la Asamblea Constituyente en la cual participaban dos de los más altos dirigentes de la CGTP y 22 parlamentarios de Izquierda Unida, el desempleo aumentó a 7.1% y el subempleo a 51.4%. (15).

En 1980, al inicio del régimen de Acción Popular (AP), que según la propaganda oficial inauguró la democracia peruana, la población atrapada en la miseria llegaba a 6 millones de personas. En 1985 al final de este gobierno los pobres habían

aumentado a 9'400,000 (16). En 1980 la desocupación era el 7% de una PEA calculada en 5'603, 200 trabajadores, lo que significaba que 392 mil 400 trabajadores no contaban con ningún ingreso. En 1983, a tres años del paraíso democrático belaundista, la desocupación ascendió a 564, 600 trabajadores o el 9.6% de una PEA de 6'136,700 (17). En 1985, fecha de las elecciones generales donde salió elegido Alan García con el apoyo de la izquierda legal, el desempleo y subempleo alcanzaron el 11.9 % para el primero y el 54. % para el segundo. En esos momentos de cada 100 asalariado 42 eran subempleados (18). Cinco años después, de 100 trabajadores 79 eran subempleados. Solo en Lima con una Población en edad de trabajar de 1'167,000 había más de un millón de asalariados subempleados y sin salario permanente. Durante el periodo aprista las remuneraciones de los trabajadores se redujeron al 50% de su valor real, y los pobres en Lima ascendieron a 43 % (19). En este periodo (1985-1990), la inflación fue de más de dos millones por ciento y la pobreza aumentó paralelo a la corrupción en el Estado. Para el mismo periodo aprista, los pobres extremos habían aumentado en todo el país a la suma de 11'500,000 personas lo que significaba el 57% de la población de la época. De esa suma 6 millones eran pobres extremos, o mejor dicho personas que no tenían ni trabajo ni ningún ingreso que cubriera sus más elementales necesidades cotidianas (20). En este panorama de calamidad y miseria crónica, la izquierda seguía gritando ¡viva la democracia!, y abajo los conflictos sociales.

En 1990 llega al poder Alberto Fujimori, quien ganó las elecciones presidenciales con el apoyo de la izquierda legal. Al desastre que había dejado el gobierno aprista, se agregó brutales medidas económicas dictadas por el régimen fujimorista, que la IU había calificado de representante de los sectores populares y progresistas. En el primer mes de este gobierno, en cuyo seno había varios ministros de la izquierda legal, la pobreza extrema alcanzó a 13 millones de personas lo que

significó más del 55% de la población peruana. Para los años siguientes, la pobreza, la desocupación y otros males sociales no dejaron de crecer. El año 2000, último tramo de 10 años de fujimorismo, los pobres y pobres extremos bordearon los 15 millones de peruanos lo que significó cerca del 60% de la población (21). En el campo laboral, la situación se presentó dramática para los asalariados. El saldo de 10 años de fujimorismo fue DOS MILLONES Y MEDIO de trabajadores sin empleo y cerca de 9 millones de subempleados. Solo en el periodo que abarcó entre 1990 y 1995, los empresarios y el gobierno echaron a la calle a más de 300 mil trabajadores del sector privado y estatal (22). Junto a esto el gobierno abolió las principales leyes que protegían la estabilidad laboral, el derecho a la sindicalización, el derecho a la negociación colectiva, y sobre todo en la práctica eliminó la jornada de 8 horas de trabajo. En medio de este cuadro de hambre y miseria, la izquierda seguía dando vivas a una democracia que solo ellos y los grupos de poder pueden saborear.

La pobreza y miseria en Perú han seguido un curso accedente paralelo a los grandes discursos publicitarios sobre la democracia y las bondades del sistema electoral. En el 2001, se derrumbó el régimen fujimorista y se instaló un gobierno de transición con la colaboración de la derecha y la izquierda. Se dijo entonces, que el Perú “había regresado a la democracia”, y los partidos políticos vivieron una feria electoral. De esta manera, los políticos y los grupos hacían cálculos electorales, los índices oficiales registraban que más del 50 por ciento de la población del Perú vivía en la miseria total. Esta pobreza era peor en los departamentos con mayor población rural. En Huancavelica los pobres llegaban al 88.0% de la población, en Huanuco a 78.9%, en Apurímac 78.0%, en Puno 78.0%, en Cajamarca el 77.4%, en Cusco 75.3% y en Ayacucho 72.5% (23). Ese mismo año Alejandro Toledo (2001-2006), con el apoyo de la izquierda legal llegó a la presidencia de la República. Toledo no se apartó del modelo económico de la época de Fu-

jimori, y sus resultados sociales fueron los mismos que en el gobierno anterior. En el 2004 mientras el gobierno toledista, que la izquierda lo llamó de “todas las sangres”, hablaba de democracia y crecimiento económico ejemplar, la pobreza a nivel nacional golpeó al 57.7% de la población que en cifras constantes era un poco más de 15 millones de peruanos de un total de 28 millones de habitantes. Para este mismo año, según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Lima y Callao, los dos mas grandes centros urbanos del país con mas de 8 millones de habitantes, la pobreza pasó de 31.8% a 36.6%. Según Farid Matuk, jefe de esta organización para el año 2004 no había un “departamento con nivel de pobreza menor de 20%. «, sin considerar algunos departamentos como Huancavelica, Ayacucho, y otros que registraban índices de pobreza que sobrepasaban el 80% de la población.

AUGE Y BANCARROTA DE IZQUIERDA UNIDA (IU)

Para las tres ultimas tres décadas, la historia de la izquierda legal se relaciona exclusivamente a su participación en los procesos electorales comprendido las elecciones municipales, presidenciales y parlamentarias. Desde 1978 para adelante, con candidatos propios o sosteniendo a políticos de la derecha, estuvo presente en todos los procesos electorales. A partir de su acentuado electorerismo, su destino político quedó atado al terreno electoral y a los límites del sistema burgués-terrateniente. En Perú, como en ningún otro país, los procesos electorales no reflejan la voluntad democrática del pueblo. Elegir un presidente o un parlamentario y cualquier otro representante del Estado, es un asunto de manipulación, fraude y chantaje. Votos falsificados, violaciones de ánforas electorales, trampa en el recuento de votos, prepotencia con el electorado, son hechos comunes en Perú. Los congresistas

se dicen, “padres de la patria”, sin embargo son una carga y una vergüenza para los ciudadanos del país. Con justa razón muchos analistas han denunciado que el parlamento peruano es uno de los principales antros de corrupción del país. Sus representantes están ligados al narcotráfico, a grupos paramilitares, son antiguos criminales de guerra, comerciantes inescrupulosos, tráfugas y toda suerte de estafador político.

El parlamento no es de ninguna utilidad para el bien común, y junto con las fuerzas armadas, son organismos parasitarios de la sociedad. Fue en el parlamento donde se crearon las “comisiones investigadoras”, para encubrir los crímenes y actos de corrupción de los gobernantes, ministros y altos oficiales de las fuerzas armadas. En su momento Alan García Pérez, Alberto Fujimori, altos funcionarios del Estado, y jefes militares y policiales, fueron premiados con una “comisión investigadora” parlamentaria que sirvió para exculparlos de cualquier delito contra la nación y contra los derechos humanos. Un ejemplo reciente de la calidad inmoral del parlamento peruano, es el nombramiento (septiembre 2008) de Martha Moyano, a la cabeza de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Martha Moyano, es una parlamentaria fujimorista que en la década del 90 la conocían en los medios políticos bajo el apelativo de la “perra” de Fujimori, en razón de la cerrada defensa que hacía del mafioso dictador. Ante cualquier crítica contra Fujimori, la “perra” Moyano saltaba al ataque, y en muchos casos agredía con insultos o de otra manera. Moyano, antes de convertirse al fujimorismo, fue militante de Izquierda Unida (IU), y como su hermana María Elena Moyano, era funcionaria de una ONG que distribuía alimentos en Villa El Salvador (Lima). Las elecciones en Perú han estado al margen de las leyes y la constitución, y muchas veces fueron organizados en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y en los cuarteles militares. Por ejemplo, las elecciones a la Asamblea Constituyente de 1992, el Referéndum Nacional de 1993, las elecciones presidenciales de 1995 y del

2000 realizadas durante el fujimorismo, fueron planificadas y dirigidas por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que controlaba Vladimiro Montesinos y la cúpula del ejército.

El despegue electoral de esta izquierda se inicia en 1978 con las elecciones a la Asamblea Constituyente, cuando el conjunto de esta izquierda obtuvo 1,034,286 de votos lo que significó el 29.3% de la votación total. Por el volumen de votos fue la segunda fuerza política después del Partido Aprista Peruano (APRA), que por encargo de la dictadura militar controló la Constituyente. En las elecciones a la Asamblea Constituyente no participó el grupo Patria Roja, que denunció estos comicios como fraude, pero en 1980 se integró al parlamento peruano, que se regía precisamente por la Constitución redactada por la Asamblea Constituyente que este partido denunció como fraudulenta. La alta votación de esta izquierda fue un fenómeno relacionado a la agudización de la lucha de clases y a la tendencia hacia la izquierda de las masas populares que buscaban una dirección política independiente y revolucionaria. El pueblo peruano, fundamentalmente la clase trabajadora, buscaba una salida popular para sus grandes problemas sociales, y en el espejismo de las elecciones identificó soluciones históricas a sus reivindicaciones en el voto que entregó a una izquierda que en poco tiempo quedaría descubierta como falsa (**). El éxito electoral de 1978 infló las esperanzas electorales de esta izquierda, que dio rienda suelta a sus ambiciones para ganar las elecciones presidenciales de 1980. Para este propósito se unieron en la Alianza Revolucionaria de Izquierda (ARI) que lideró Hugo Blanco. Este frente electoral tenía el objetivo de presentar una sola candidatura presidencial, pero el conflicto interno a causa de las “cuotas parlamentarias” (número de senadores y diputados que reclamaba cada organización del frente) lo hizo estallar ante de las elecciones. Después de esta crisis y ruptura, la Izquierda legal se agrupa en varias organizaciones política que separadamente se presentan a las elecciones. La división fue perjudicial para sus

aspiraciones electorales, y en conjunto solo alcanzó el 13.9% de la votación (***)).

Recién en 1985, llega Alfonso Barrantes Ligan, con quien nacía Izquierda Unida (IU) y quien además sería algunos años su líder bien amado y candidato presidencial. En el proceso electoral de este año, la convergencia izquierdista da sus frutos y con el 24.7% (1'606,914 votos) del electorado se ubicó como la segunda fuerza electoral después del Partido Aprista (APRA) de Alan García Pérez. El candidato aprista ganó la presidencia cuando IU desistió de participar en la segunda vuelta electoral, lo que en la práctica significó una entrega ilegal de votos al APRA y una traición al electorado izquierdista. La norma constitucional y electoral de la época, exigía, bajo riesgo de declarar la nulidad de las elecciones, que el candidato presidencial para ganar las elecciones, tenía que tener por lo menos el 51% de los votos emitidos. En el caso referido, el APRA solo había logrado el 45.7% de la votación, y en razón de ello era obligatorio ir a una segunda vuelta electoral en la que dirimiría la competencia con la izquierda legal que se encontraba en segundo lugar. En ese tiempo IU estaba conformada por todos los grupos de la izquierda legal, menos los de filiación trotskista, entre ellos, el PRT de Hugo Blanco que hizo tienda aparte. Los partidos animadores de IU, fueron el PCP pro soviético, Vanguardia Revolucionaria (después cambiaría de nombre y sería PUM), Patria Roja, y otros. Barrantes Ligan se mantuvo en este frente electoral hasta las elecciones generales de 1985, y posteriormente acusado por sus mismos camaradas de estar más cerca del Partido Aprista Peruano (APRA) que de la izquierda legal, fue removido del cargo y posteriormente creó su propio partido.

CRISIS EN LA IZQUIERDA Y CONFRONTACIÓN ARMADA

Para las elecciones de 1990, fue Henry Pease, fundador y gran patrón de DESCO, una de las más importantes Organizaciones no gubernamentales (ONG) del país, quien asumió el liderazgo de Izquierda Unida (IU). Pease llega como el salvador de una izquierda que mostraba graves síntomas de crisis y descomposición, expresada en su baja cuota electoral y su tendencia a la dispersión y a los conflictos internos. Posteriormente, como se verá en este texto, la izquierda prácticamente desaparecerá, sobre todo en el terreno electoral. Para sobrevivir se verá obligada a disolverse y asumir completamente el discurso de la derecha, para finalmente incluirse, como aliada o militante, en los grupos electorales de la derecha peruana. A partir de las elecciones generales de 1990, Izquierda Unida (IU) comienza su descenso a los infiernos y da los pasos culminantes para su desmembramiento como organización política. Alberto Moreno, el líder de “Patria Roja”, decía en 1990 que “Izquierda Unida no está muerta: existe y se rebela contra sus propios errores...” (2). Muchos, sin razones, han pretendido explicar la crisis y bancarrota de IU como causa efecto de liderazgos, ambiciones y falta de unidad orgánica entre sus integrantes. La desunión, las ambiciones, y otros factores anexos, fueron expresión de la crisis, pero no la causa fundamental que originaron dicha crisis. La descomposición de IU se relaciona en lo fundamental a cuestiones de carácter ideológicas-políticas, cuya raíz hay que buscarla en el campo de la lucha de clases, y la posición que asumió esta izquierda en la defensa del Estado, la sociedad clasista y los intereses de los grupos de grupos de poder.

Uno de los factores que aceleró la crisis de la izquierda legal fue el inicio de la confrontación armada en 1980. Las acciones guerrilleras, en su desarrollo influyeron para que las masas pobres elevaran su conciencia política. La insurgencia, como fenómeno político social, fue determinante para dar otra perspectiva a la lucha de los trabajadores. Hay que recordar, que como parte del impacto del proceso armado, a mitad de la

década del 80 algunos sectores del proletariado urbano habían introducido en sus métodos y formas de lucha el paro armado. La modalidad del paro armado, estaba referido a la lucha sindical combinada con acciones armadas ejecutadas por contingentes de la guerrilla maoísta implantados en los centros fabriles donde se realizaba la acción de fuerza. Antes de 1980, el Perú vivía, una etapa sin guerra interna declarada, y la lucha de clases no había alcanzado rigores antagónicos y violentos. En ese terreno de “calma chicha”, a la izquierda le resultaba fácil hablar de lucha armada y de otros tópicos revolucionarios sin arriesgar nada. Eso cambió radicalmente con el inicio del conflicto armado y la aceleración de la lucha social. La izquierda, al igual que la derecha peruana sintió pánico por el proceso armado, y ello la obligó a cambiar de discurso. Si antes que se embarcara en la aventura electoral, hablaba de acumular fuerzas para la revolución violenta, ahora decía con simpleza que había que defender la democracia y la paz social.

La lucha armada fue durante casi dos décadas el fenómeno político fundamental de la sociedad peruana. Ello, junto con contribuir a la toma de conciencia de las masas, dejó al descubierto el contenido falso y demagógico del discurso de la izquierda legal. Antes de 1980, cualquier grupo político de la izquierda, podía hablar de la lucha armada, del comunismo y de la “dictadura del proletariado” como si estaría vendiendo un producto de moda. En el discurso agitativo se decía con facilidad, el “poder nace del fusil” (eslogan de Patria Roja), y cualquier dirigente sin ninguna calidad política se autocalificaba de Mariateguista, marxista, leninista o maoísta. Esta fraseología perdió sentido en boca de aquellos que sentados en el parlamento o cualquier otro puesto del Estado, exigían represión para lo alzados en armas. El electorerismo descubrió la verdadera esencia política de la izquierda legal, y puso al descubierto que su fin como organización política no era, ni el socialismo, ni la defensa de los intereses del pueblo, sino

más bien convivir como aliado menor de las elites políticas y de los gobiernos de turno. La fanfarria electoral, obligó a la izquierda a renegar de su viejo discurso incendiario, y reemplazarlo por uno al gusto de las elites políticas, y sobre todo que en su contenido ideológico expresara la defensa del sistema y el rechazo a cualquier idea de cambio. Las consignas panfletarias de “luchar por el socialismo y el comunismo”, fueron sustituidas, y en su lugar se dijo, “defender la democracia” y “luchar contra el terrorismo”.

Un factor que favorece el crecimiento de Sendero Luminoso, decía en 1991, el Instituto de Defensa Legal (IDL) es la “crisis de legitimidad de las fuerzas políticas en general y, en particular, la debacle de la izquierda que, producto de su división, ha debilitado seriamente su capacidad de representación e interlocución de los sectores populares, dejando un vacío político importante que el senderismo pretende llenar” (25).

El último tramo del drama de IU se inició en las elecciones de 1990, cuando se divide en dos grupos, una parte se aglutina con Henry Pease, y la otra parte hace alianza con Alfonso Barrantes Lingán. El membrete de IU queda en poder de Pease, quien como candidato a la presidencia solo obtiene 8.2% (536,920) de la votación válida. Su slogan electoral es antiterrorista, y anuncia que “El gran derrotado en estas elecciones es Sendero Luminoso, Izquierda Unida se ha convertido en el principal muro de contención del terrorismo” (26). Barrantes Lingán, al frente de Izquierda Socialista (IS), apenas alcanzó el 4.8% (315,541) de los votos para la presidencia de la República. Tanto IU como IS, acabaron apoyando en segunda vuelta la candidatura presidencial de Alberto Fujimori. El gobierno que surgió de las elecciones de 1990, y que contó con el apoyo de IU, aparte de haber sido representante de los grupos de poder locales, estaba vinculado estrechamente con la CIA americana. Fue con el apoyo de los servicios secretos de los Estados Unidos (la CIA y DEA), que el gobierno fujimorista,

hizo grandes negocios con el narcotráfico y el contrabando de armas. Las autoridades americanas cerraron los ojos cuando Fujimori y Montesinos convirtieron al Perú en una caricatura de sociedad democrática, donde no existían leyes ni ningún respecto por la vida de la mayoría de los peruanos.

Henry Pease, convocó a la población a votar por Alberto Fujimori, de quien dijo; «era la alternativa popular de 1990», y que su victoria con los votos de «las izquierdas y del APRA», hacían de este éxito electoral «un triunfo popular» (27). Por su parte Alberto Moreno, líder de Patria Roja, que en su propaganda electoral regalaba fusiles de palo, pidió a sus militantes votar por Alberto Fujimori, a quien calificó de «representante de la pequeña burguesía» y de las masas pobres emergentes. Dijo también que «Cambio 90» (el partido de Fujimori) representaba «una aluvional emergencia populista en el seno de la sociedad». Señalando que el triunfo electoral de Fujimori había significado la «derrota de la gran burguesía peruana» (28). El apoyo de Izquierda Unida (IU) al gobierno de Alberto Fujimori, mostró lo lejos que había ido esta izquierda en su práctica política de acomodarse al poder de turno. Los votos de IU fueron pagados al contado por el gobierno entrante. La izquierda logró que algunos de sus representantes se ubiquen en altos puestos en el gobierno fujimorista. En julio de 1990 Gloria Helfer, juramentó como ministra de Educación y Fernando Sánchez Alvabera como ministro de Energías y Minas. Hasta en la secretaria general de palacio de gobierno y en el instituto nacional de deportes, fueron nombrados representantes de la izquierda legal.

El voto por Fujimori, así como antes fue para Alan García Pérez, fueron actos determinantes para la catástrofe política de Izquierda Unida. Ambos gobiernos, los mas pervertidos que registra la historia del Perú llegaron al poder con el voto partidario de esta izquierda. Ello nunca sería olvidado por las masas que fueron las que sufrieron las calamidades de estos

regímenes antipopulares y reaccionario. El fujimorismo, que en pocas semanas se convertiría en una administración odiada por el pueblo, acentuó al máximo el desprestigio que sentía el pueblo contra la izquierda legal peruana. Tardíamente, de la misma forma que lo hicieron después de 1985 cuando votaron por Alan García, los dirigentes de IU esbozaron una parodia de “autocrítica” que por la gravedad del problema no les serviría para detener su crisis definitiva. Henry Pease, máximo dirigente de Izquierda Unida, dijo que habían sido estafados: “Nosotros y otros más votamos por Cambio 90 en la segunda vuelta...Somos parte de un pueblo estafado” (29). El Partido Unificado Mariateguista (PUM) liderado por Javier Diez Canseco, en un evento interno del año 1991 hace un “balance autocrítico” de su apoyo a Fujimori señalando “... el partido voto por Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones generales...gran parte de la izquierda legal se mantiene paralizada después del grave error de haber autorizado a sus militantes a participar en el co-gobierno con Fujimori...”. (30). Patria Roja otro de los partidos de IU llamó a votar por Fujimori, según este partido, “a fin de bloquear y derrotar los planes de la ultraderecha” (31). Pero Patria Roja, a pesar del desastre político del fujimorismo, intentó hacer de ese gobierno una víctima de la derecha. Más cerca de la fantasía política que de la realidad, dijo que el nuevo presidente peruano y su partido (Cambio 90) eran inocentes de la desastrosa política que se aplicaba desde el Estado. Otros eran los malos, no Fujimori y su partido, que como el pueblo eran víctimas de la derecha infiltrada en el Estado. Era el mes de agosto de 1990, y en nombre de ajustar la economía el gobierno lanzó un paquete económico antipopular que elevó la miseria de 7 millones a 12 millones de personas. Este hecho no disminuyó los ánimos ni la confianza que expresaba Patria Roja en el flamante inquilino de palacio de gobierno, señalando que: “Sería un graso error político tipificar a Fujimori y Cambio 90 como el enemigo principal...Ello implicaría tender un manto y esconder al verdadero enemigo principal del pueblo peruano”.

no” (32).

La historia política del país, muestra que la izquierda legal, no solamente no se opuso al régimen de Fujimori, sino que convivió y colaboró en todo el proceso de instauración y desarrollo de la dictadura implantada desde 1990 hasta el año 2000. ¿Qué hizo la izquierda cuando ya se había consumado el golpe militar de Fujimori en 1992?. Hizo unas cuantas fintas y publicó algunos comunicados en “defensa de la democracia” y del “estado de derecho”. Su “oposición al golpe” concluyó cuando los partidos y grupos de izquierda, juntos con una serie de agrupaciones de la derecha peruana, se movilizaron bajo el propósito de exigir al gobierno “Un Diálogo Genuino” con todas las fuerzas políticas, incluido naturalmente representantes del gobierno de facto. En el “Diálogo Genuino”, se exigió la concretización de un pliego de reclamos que consideraba entre otras cosas, elecciones municipales en 1992, la elección de un Congreso Constituyente y el “reforzamiento de las medidas de seguridad y lucha antiterrorista”, como se dijo en un comunicado publico del 7 de agosto 1992, firmado entre otros, por el PCP, pro soviético, Patria Roja, el Partido Unificado Mariateguista, el APRA. En noviembre de 1992, a menos de 3 meses después de la propuesta de “Diálogo Genuino” de IU, el gobierno convocó a elecciones nacionales para elegir 80 representantes al Congreso Constituyente Democrático (CCD).

Henry Pease y Gloria Helfer, siguieron imperturbables en su carrera política de colaboración con la dictadura, y fueron los primeros que avalaron la constituyente organizada en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). En las elecciones para la constituyente solo votaron 6,237,682, personas lo que significó menos del 50% de una población electoral que pasaba de 13 millones. Jurídicamente, tanto los “constituyentes”, como la constitución que fue redactada en esa asamblea resultaban ilegítimas de acuerdo a las normas jurídicas del país. Henry

Pease, el candidato presidencial del IU en 1990, fue uno de los primeros que se anotó en la lista de postulantes para la asamblea constituyente que la dictadura había programado para legalizar la dictadura y quedarse en el poder por muchos años. Pease lideró el Movimiento Democrático de Izquierda (MDI) que logró 4 asientos en la ilegal Asamblea Constituyente, uno de los asientos fue para Gloria Helfer, la ex ministra de educación de Fujimori. Una de las principales resoluciones de esta constituyente fue extender la reelección presidencial de Fujimori, y entregarle poderes ilimitados a este dictador.

Posteriormente, en 1995 la dictadura en aplicación de la Constitución fraudulenta convocó a elecciones presidenciales. Izquierda Unida fue la primera en ponerse en la fila de este proceso electoral, y si en el año 1992 parcialmente habían cuestionado la Constitución de la dictadura, ahora la aceptaban con gusto. Se lanzaron al ruedo electoral, pero ahora (a causa de su crisis y descomposición interna) participaban en forma marginal en dos frentes electorales. Unos, se alinearon con los retazos de Izquierda Unida (IU) que encabezó Alfonso Barrantes Lingán, otros se prendieron de la cola de Javier Pérez de Cuellar, ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que al frente de Unión por el Perú (UPP) competía en la carrera presidencial. Henry Pease y otros líderes de IU abandonaron el barco y aparecieron como partidarios de Javier Pérez de Cuellar. En estas elecciones IU apenas alcanzó el 0.57% de los votos válidamente emitidos (42,704 votos), y UPP que no era otra cosa que un frente reaccionario controlado por funcionarios internacionales, alcanzó el 21.81% de los votos válidamente emitidos (1,624,441 votos). Pérez de Cuellar ex secretario general de la ONU y hombre de confianza de las transnacionales americanas, se había trasladado de los Estados Unidos al Perú bajo la consigna del gobierno americano de ser eventualmente el reemplazante de Fujimori. A pesar que el ex secretario de la ONU perdió las elecciones, algunos “izquierdistas” lograron enchufarse una

vez más en el parlamento del Perú. Henry Pease fue uno de los parlamentarios apadrinados por el grupo electoral del ex secretario general de la ONU.

En las elecciones del año 2000, Henry Pease intentó con poca suerte una candidatura a la primera vice presidencia de la Republica en la lista que encabezó Máximo San Román, compañero de viaje electoral de Alberto Fujimori en 1990 y vice primer presidente hasta 1992. En el 2001, Henry Pease volvió a cambiar de camiseta electoral, y a apareció como candidato al congreso en la lista del partido Perú Posible que lidero Alejandro Toledo Manrique. Como toledista no le fue mal y nuevamente volvió a ser representante parlamentario, incluso fue nombrado presidente del Congreso.

En las elecciones generales del 2006, nuevamente la izquierda legal, aunque reducida a pequeños retazos, volvió a su habitual costumbre de buscar un candidato de moda para trepar al parlamento, al municipio o cualquier otro puesto del Estado. Apoyó en la segunda vuelta electoral la candidatura presidencial de Ollanta Humala Tasso, comandante retirado del ejército y líder de Unión por el Perú (UPP) y del Partido Nacionalista Peruano, una mezcla electoral integrada por funcionarios del gobierno de Alejandro Toledo, y militares retirados de la época de Fujimori y Montesinos. Este candidato a la presidencia del Perú es uno de los 200 oficiales del ejército actualmente acusados por crímenes de guerra. En los años 90, una de las etapas mas sanguinaria de la política contrainsurgente del gobierno, Ollanta Humala actuaba con el seudónimo de “capitán Carlos”. Era jefe en la base militar Madre Mía (Huanuco-Alto Huallaga), donde según diversas denuncias testimoniales, dirigía operaciones de secuestros y ejecuciones clandestinas de pobladores sindicados de subversivos. El “capitán Carlos”, en recompensa por sus acciones en la sanguinaria guerra contrainsurgente, fue premiado por el alto mando del ejercito. Recibió la nota “sobresaliente” y

ascendido al grado de comandante. El firmante de la nota al merito fue el general Abraham Cano, un oficial del ejercito incondicional de Vladimiro Montesino y del general Hermosa Ríos, en ese entonces comandante general del Ejercito. El general Hermosa, fue el que se hizo declarar “héroe” cuando en diciembre de 1997 dirigió la matanza de los miembros del comando del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), que tomó la embajada del Japón en Lima, junto a cerca de mil rehenes. El 29 de octubre del año 2000 en Locumba (Tacna) (el mismo día y la misma hora de la fuga de Vladimiro Montesinos), el capitán Carlos dirigió una sublevación militar contra la dictadura”, pero muchos analistas han interpretado esta “sublevación” como una cortina de humo coordinada con el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para que Montesinos lograra fugar tranquilamente del país. En pago por su “rebelión”, Humala fue premiado con una agregaduría militar en Paris y Corea, desde donde planificó su campaña presidencial en el 2006.

Las elecciones presidenciales del 2006, dio muchas mas sorpresas y mostró que los sobrevivientes de la izquierda, ya no tenían ningún valor agregado en la política, ni siquiera en el terreno electoral. Aparte de votar por el “capitán Carlos” (en segunda vuelta), fueron candidatos parlamentarios en diferentes listas electorales, cuyos resultados en votos mostró la desaparición de esta izquierda y el rechazo que tuvieron de las masas populares. Hugo Blanco Galdos, fue candidato al parlamento andino, y su campaña electoral la realizó como dirigente campesino, integrado en el Partido Socialista (PS) de Javier Diez Canezco, que de “marxista” “mariateguista”, asumió los postulados políticos de la socialdemocracia europea. Canseco, en su nueva versión política, reniega de su pasado izquierdista y rechaza todo aquello que postule la “violencia revolucionaria” y “destrucción del Estado burgués”, que eran sus slogans preferidos hasta antes de 1980. En esas elecciones, Hugo Blanco, solo alcanzó 49,330 votos, lo que significa

un milésimo porcentaje (0.0001%) de los 6 millones de campesinos peruanos y de los 16 millones de electores en todo el país. Después de su fracaso electoral Hugo Blanco proclamó: “yo llamo a votar por Humala...lo que significa votar por él” (33). Juan José Gorriti, secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú (CGTP), y militante del Partido Comunista del Perú (ex pro soviético), postuló para el congreso en la lista de Patria Roja (Movimiento Nueva Izquierda) y solo consiguió 2,700 votos. ¿Y dónde fueron los votos del millón de afiliados que tiene la CGTP como se dice?. Como se ve el fracaso electoral de Gorriti es el desprecio de los trabajadores peruanos contra dirigentes que han convertido la organización sindical en un vulgar instrumento electoral. Otro dirigente de esta central que aspiró sin esperanzas al parlamento fue Manuel Cortés, quien apenas logró 1,920 votos. Cortés es también dirigente de la CGTP y antiguamente fue uno de los líderes del Partido Comunista Revolucionario (PCR). Rolando Breña Pantoja, uno de los líderes de Patria Roja, como candidato al parlamento en las elecciones del 2006, solo alcanzó la miseria de 1,469 votos.

En el 2006, Alberto Moreno, líder “histórico” de Patria Roja, fue el candidato presidencial del Movimiento Nueva Izquierda (MNI). ¿Cuántos votos tuvo?. Solo 33,918 votos lo que significó el 0.232% de los votos emitidos que sumaron mas de 14 millones de electores. Frente al fracaso electoral, Moreno llamó a votar por el comandante Ollanta Humala. “El Partido Comunista del Perú - Patria Roja, manteniendo en alto sus banderas democráticas, antiimperialistas y socialistas, preservando su independencia e iniciativa política, y apoyándose siempre en el pueblo organizado y luchador, sabrá también en esta oportunidad cumplir con su misión histórica esmerándose por hacer realidad la Nueva Republica... Partiendo de estas consideraciones, el XIV Comité Central decide respaldar la candidatura del Comandante Ollanta Humala, en la segunda vuelta electoral, y fortalecer las relaciones y el propósito

unitario con todos los sectores de izquierda, nacionalistas y progresistas” (34). Otro caso que no se puede dejar de mencionar se refiere al Partido Comunista del Perú (PCP) que desde la disolución de la Unión Soviética vive en ruinas. Lo que queda aún en pie de este partido participó en las elecciones del 2006 acompañando a “Patria Roja” en el conglomerado electoral Movimiento Nueva Izquierda (MNI). El candidato del PCP fue Renán Raffo, secretario de esta organización quien postuló al parlamento andino. Solo obtuvo 24,816 votos y al final convocó también a votar por el comandante Humala. “El Partido Comunista Peruano, hace “un llamamiento a los militantes y amigos del Partido, a los trabajadores, al Frente Amplio de Izquierda y demás organizaciones progresistas del campo popular a votar en segunda vuelta por el candidato nacionalista Ollanta Humala, en firme y consecuente respaldo a los cambios por los que ha votado la mayoría del pueblo peruano” (35).

PARLAMENTARISMO Y LUCHA ANTIGUERRILLERA

En 1982, Sinesio López, director del Diario Marka, que en ese tiempo era vocero de Izquierda Unida (IU), decía que si los “terroristas se atreven a arrojar bombas al mismo palacio de gobierno”, no quedaba otra medida que “entregar la represión política íntegramente a las fuerzas armadas” (36). En efecto a fines de 1982, el gobierno entregó a las fuerzas armadas la conducción, planificación y ejecución de la lucha antiguerrillera en el país, iniciándose con ello una etapa sangrienta en el Perú. Fue el mismo Sinesio López, quien como parte de IU, decía en 1992, que un requisito para lograr la “pacificación del país”, era lograr un “acuerdo básico entre el gobierno (Alberto Fujimori), las Fuerzas Armadas, los partidos políticos y las principales instituciones de la sociedad civil” (37). La izquierda no se restringió a exigir solamente la represión

militar para los subversivos. Tomó parte activamente en la represión contra los grupos armados. En el terreno de la lucha contrainsurgente, de la cual participó en forma encubierta o abiertamente, se movió con ambigüedad y muchas veces aparentaba “defender los derechos humanos”, pero su fin era sostener los planes militares y apoyar a las fuerzas armadas. Así se puede ver que en diferentes ocasiones llamaba a « Movilizar a toda la población en defensa de los derechos humanos para combatir y derrotar al terrorismo de Sendero... », exigiendo al mismo tiempo “fortalecer el desarrollo profesional de las Fuerzas Armadas y afianzar su participación en el desarrollo y la defensa de la soberanía nacional y del orden constitucional » (38).

La participación más directa de la izquierda en la lucha contrainsurgente se hizo a partir de su contribución en la organización de las rondas campesinas, rondas urbanas y otros grupos de defensa civil que los militares utilizaron como parte del aparato antisubversivo. Desde 1980 todos los candidatos de IU a la presidencia de la República y a los consejos municipales, privilegiaron el apoyo a las fuerzas militares y el uso de las rondas en la lucha contra Sendero Luminoso, como ejes publicitarios de sus campañas electorales. Por ejemplo, Alfonso Barrantes Lingán, decía en su campaña electoral para las elecciones de 1985, que Izquierda Unida valoraba la “concepción peruana de seguridad elaborada por las propias Fuerzas Armadas que articula seguridad con desarrollo y bienestar de la población” (39). Henry Pease, otro candidato de IU, anunciaba en la campaña electoral de 1990, que si llegaba la presidencia, terminaría con el “terrorismo senderista, aislándolo, combatiéndolo y derrotándolo, en base a la movilización popular...” (40). En 1988, Izquierda Unida aprobaba por unanimidad sus tesis política en la que señalaba que la “autodefensa es un recurso democrático de la población, que a partir del ejemplo de las rondas...han demostrado no solo eficacia en términos de seguridad, sino que han promovido comporta-

mientos honestos y solidarios en la comunidad”. Las arengas políticas de IU para auspiciar las rondas, coincidían con los planes militares para impulsar las rondas y grupos de defensa civil bajo el objetivo militar de detener el avance subversivo. Era la época que las rondas, ya bajo control del ejército, desplegaban una intensa actividad criminal causando miles de víctimas entre la población campesina.

Desde el inicio del proceso armado la izquierda peruana asumió la concepción estratégica de las rondas, bajo los mismos criterios estructurados en los manuales contrainsurgentes del ejército. En 1990 durante el régimen de Fujimori, las fuerzas armadas distribuyeron un manual con directivas para perfeccionar las acciones de las rondas urbanas. Entre las directivas se consideraba la organización de la población por barrios con un jefe a la cabeza que “debía trabajar con un jefe militar o policial”. Se exigía “hacer un censo de la población” y tener un registro de cada habitante”, y sobre todo se dice en el manual, se debe privilegiar el trabajo de inteligencia, para informar al ejército “todo movimiento y tomar nota de quien entra y quién sale” de la zona adjudicada a cada ronda. “En caso de detectar una persona extraña a algunas de las casas, informar inmediatamente al jefe militar o policial” (41). Humberto Paredes Vargas, militante del Partido Unificado Mariateguista (PUM), y alcalde de Comas (Lima) en 1992, fue uno de los alcaldes de Izquierda Unida (IU) que expuso en forma clara la relación entre los municipios controlados por IU y la concepción contrainsurgente del Estado y las fuerzas armadas.

Paredes acató inmediatamente las directivas de las fuerzas armadas y asumió la tarea de organizar rondas en su populoso distrito. Las “rondas de autodefensa popular” de Comas estaban organizadas en cada barrio, y estaba dirigidas por ex miembros de las fuerzas armadas o de la policía que habían sido reclutados por el alcalde. “Cada ronda estaba equipaba de un sistema de radio, que le permitiría una comunicación

directa con las fuerzas de seguridad acantonadas en el distrito”. Junto con a ello, Paredes anunciaba, “esto es solo el principio, nuestra meta es crear conciencia en todas nuestras organizaciones populares para la formación de las rondas de autodefensa popular”. Agregaba, que para este fin, se había reclutado a un “grupo de vecinos, de preferencia ex miembros de las fuerzas armadas y policiales” (42). La actividad paramilitar de Paredes lo hizo merecedor de elogios de la prensa peruana, que durante el fujimorismo se convirtió en un aparato de manipulación y distorsión de la realidad. La revista *Caretas*, dijo que este militante de Izquierda Unida era “uno de los primeros burgomaestres de los distritos marginales de Lima que ha decidido enfrentar abiertamente a Sendero Luminoso” (43). Javier Diez Canseco, líder del Partido Unificado Mariateguista (PUM) y uno de los fundadores de Izquierda Unida (IU), repetía en 1992, los mismos términos conceptuales contrainsurgentes del Manual de Guerra del ejército. Señalaba que parte de las tareas de las rondas urbanas, era “hacer una labor de información y de inteligencia”, lo cual requiere de un intenso trabajo de organización y de inteligencia de la organización popular en cuestión”. Adjunto a ello, decía Canseco, que el “principal ingrediente militar en el enfrentamiento a Sendero debe provenir del desarrollo de la autodefensa de masas”, y que para luchar contra la subversión había que llegar a un “acuerdo con todos los que quieran enfrentarse a Sendero Luminoso” (44).

“Rondas campesinas versus terrorismo”, decía en 1989 el diario *La Republica* un cotidiano ligado en ese entonces a la Izquierda Unida (IU). Gustavo Mohome Llona, propietario de este medio era al mismo tiempo uno de los dirigentes de la dirección de IU. Según este cotidiano, las “rondas han demostrado largamente ser el dique natural contra la barbarie senderista” (45). El instituto de Defensa Legal (IDL), una ONG controlada por la izquierda legal, decía en 1991, que el elemento central de la estrategia de las fuerzas armadas en

1991, “ha sido la sistemática promoción de rondas campesinas y comités de defensa civil para enfrentar a Sendero Luminoso” (46). Rolando Ames, uno de los dirigentes de Izquierda Unida, decía en diciembre de 1990: “es muy importante aislar del pueblo a los subversivos y que las fuerzas del orden se ganen el apoyo de la población civil...Creo que ya debemos concretar la idea de que la defensa nacional es tarea de todos” (47). Enrique Bernaldes, senador y militante de la izquierda declaraba en 1991, que las entregas de armas a las rondas campesinas, era “propiciar el derecho a la legítima defensa” contra el terrorismo, y que desde los “primeros momentos de la violencia, durante el gobierno de Belaúnde, los representantes de izquierda solicitaron que se facilitara a esas agrupaciones medios para su autodefensa” (48). “Un compromiso de Paz”, así tituló en 1992 una convocatoria pública de Manuel Dammert, diputado y líder del Partido del Socialismo Mariateguista. (En la década del 80 Dammert, fue fundador y líder del Partido Comunista Revolucionario –PCR-). El texto de la convocatoria llamaba a “coaccionar fuerzas en la lucha contra el flagelo terrorista”, y a concretar un “acuerdo nacional del Plan de Pacificación”, integrada en primer lugar por el régimen fujimorista y las fuerzas armadas (49).

Oscar Ugarte, miembro del Comité directivo de Izquierda Unida (IU), señalaba en 1992 que lo que proponía este grupo político era que la “autodefensa” se desarrolle con apoyo estatal, pero que el principal canal de apoyo sean los gobiernos locales (municipios). “Es que organizar la autodefensa, no es solo entregar armas a la población civil, sino que requiere de algo más amplio, desde organización, información e inteligencia”, anunciaba Ugarte, miembro del comité directivo de Izquierda Unida (50). En julio de 1992, cuando ya fujimori había consolidado su régimen civil militar, Yoni Rodríguez militante de IU y alcalde de Villa El Salvador señalaba que para «detener el avance senderista», se requería de una unidad más amplia, de defensa nacional contra el terrorismo. «Hay que unir to-

das las fuerzas, incluidas las fuerzas armadas y policiales...» (51). Por su parte Michel Azcueta, militante de la izquierda legal y ex alcalde de Villa el Salvador, anunciaba en marzo de 1992, que sería el pueblo organizado en las rondas urbanas, el que “derrotará definitivamente a Sendero Luminoso” (52). En 1996, en pleno gobierno de la mafia Fujimori-Montesinos, era mortal que una persona fuese acusada de senderista. Esta acusación equivalía a una sentencia de muerte y el supuesto senderista corría el riesgo de ser secuestrado y asesinado clandestinamente por algún grupo para militar del gobierno o por las fuerzas armadas o policiales. En ese tiempo de violencia sin límites, Michel Azcueta, cristiano y militante de Izquierda Unida, repartía denuncias a los diarios del régimen contra supuestos “senderistas” de Villa El Salvador donde era alcalde en representación de la izquierda legal. El Diario Expreso, que recibía millones de dólares de la caja del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), se encargó de publicitar la “denuncia” que hizo Azcueta, respecto a que “entre 150 y 300 terroristas convictos y confesos habían sido liberados sin motivo por el poder judicial” (53).

Por su parte el diputado de Izquierda Unida, Vladimiro Bezazo, decía en 1992, que la izquierda debe pasar de “las palabras a la acción: mucho se ha hablado y poco se ha hecho en la forja de la autodefensa” (54). El nexo rondas-Izquierda Unida, era una continuación del derrotero político de una izquierda cuya conducta fue girando cada vez más a la derecha hasta llegar a borrar sus diferencias con las clases políticas dirigentes del Perú. Durante el proceso mismo de la guerra civil consolidó sus coincidencias programáticas estratégicas con los grupos de poder y el imperialismo, cuyo interés fundamental era proteger al Estado de una rebelión popular que de no haber tenido fallas fundamentales de concepción ideológica, de dirección y de visión histórica del proceso armado, pudo traerse abajo todo el andamiaje político fundado hace 200 años por burgueses y terratenientes. La izquierda, junto

con auspiciar, y muchas veces ponerse al frente de las rondas, apoyó y protegió a los regimenes de turno. Por ejemplo, Henry Pease, uno de los jefes de esta izquierda, escribía en 1986 a favor de Alan García y decía: que lo evidente en el primer año de gobierno aprista, es que éste “carece de una estrategia alternativa para enfrentar a Sendero Luminoso...Por qué no plantearse que es toda la ciudadanía la que debe tomar la ofensiva política... para tener criterios de prevención y auto-defensa. No creemos que eso reemplace el rol que le toca a las fuerzas militares. Pensamos, sin embargo, que no se le debe cargar todo el problema ni esperar de ellas que derroten en el sentido clásico a un enemigo que no es clásico. Este es un problema de todo el resto del país, sin trastiendas pero también sin concesiones. De nuestra propia posición política, deseamos que este gobierno no fracase...así como Alan García y el gobierno aprista han sido capaces de levantar y estimular la esperanza popular...” (55).

PROMOCIÓN DE LA MISERIA Y “ACCIÓN CÍVICA”

Al frente de centenas de organizaciones no gubernamentales (ONG), o desde los municipios “socialistas”, la izquierda cooperó con los planes de las fuerzas armadas. Apoyó las “Acciones Cívicas” que aplicó el ejercito para controlar las poblaciones pobres. A través de sus investigadores y analistas, se convirtieron en referencias importantes de los militares para ubicar los “terroristas infiltrados” en las universidades, colegios y barriadas de la capital. En la repartición de alimentos (comedores populares) y en la repartición del “vaso de leche”, la izquierda se convirtió en un elemento importante en la estrategia contrainsurgente. Coincidió plenamente con el criterio reaccionario de utilizar la miseria y mendicidad del pueblo para ganar votos y puestos en el parlamento y otras instancias del Estado.

En 1991, una revista limeña informaba que efectivos del ejército en coordinación con el Programa de Asistencia Directa entregaron alimentos a los pobladores de Villa Maria del Triunfo (barrio pobre de los alrededores de Lima). Esta ayuda, según la misma fuente, se hacía en “el marco de las operaciones de ayuda alimentaria a sectores deprimidos”. La información da cuenta también, que desde tempranas horas, doce camiones militares repartieron en forma sostenida víveres a diferentes asentamientos humanos, “cuyos pobladores fueron empadronados previamente por sus dirigentes comunales o por los “clubes de madres” o del “Vaso de Leche” (56) Esta noticia, revelaba la acción contrainsurgente del ejército en los sectores pobres de Lima, camuflada en la aplicación de la “Acción Cívica” que tenía como objetivo controlar la población y evitar que las fuerzas guerrilleras ganaran adeptos y aliados en las barriadas populares. Esta acción del ejército que se desarrolló en medio de la protesta popular tuvo el apoyo de los dirigentes políticos locales (de derecha e izquierda). El complemento directo de la “Acción Cívica” del ejército fueron la mayoría de los “clubs de madres”, el “vaso de leche” y los “comedores populares, que eran organizaciones controladas y dirigidas por los partidos políticos, en particular la Izquierda oficial.

Las acciones cívicas, que resultaron ser la promoción de la miseria para detener las explosiones sociales, proviene de un manual contrainsurgente que los militares peruanos pusieron en práctica en la década del 60, cuando tuvieron que enfrentar el proceso de lucha armada dirigido por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Dicho manual fue diseñado en el Pentágono Americano, y ha sido aplicado en diferentes países latinoamericanos. En julio de 1965, las fuerzas armadas liquidaron brutalmente los grupos guerrilleros que se desarrollaron en el Cuzco, Piura, la selva y otras regiones del Perú. Apenas tres meses les bastó para eliminar un movimiento de lucha arma-

da que había concitado la atención del campesinado y de los trabajadores. Los militares y las clases políticas de esos momentos se sintieron orgullosos por la rapidez y el bajo costo en hombres y recursos materiales empleados para liquidar la subversión. En el balance que hace el ejército de su enfrentamiento con la guerrilla, anota que fueron dos las estrategias ejecutadas para lograr una victoria fulminante. En primer lugar, se dice en el informe, se atacaba “todos los aspectos de la subversión comunista, siguiéndola paso a paso, en cualquier punto del país donde se manifestara” como aparato revolucionario. En ese terreno, se señala, se privilegiaba la represión. La segunda herramienta que puso en ejecución el ejército, se anota en el informe, fue la ejecución de los planes de “Acción Cívica Militar de incidencia directa en realizaciones materiales dando preferencia a las zonas socialmente más deprimidas, donde era necesario eliminar o por lo menos reducir las causas de las que se aprovechan los comunistas para conseguir el apoyo de la población” (57).

Si en 1965 esta estrategia dio buenos resultados, porqué no sería igual en 1980, dijeron los militares cuando tuvieron que enfrentar a la guerrilla maoísta. Es así que el ejército se vio precisado recurrir una vez más a su antiguo plan contrainsurgente y utilizar la repartición de alimentos como ingrediente fundamental en sus planes militares. De esa manera, junto con desplegar una brutal represión, que en dos décadas sumaron cerca de 70 mil muertos, se impusieron las “acciones cívicas” en las barriadas de la capital y otras ciudades. Esto significó entre otras cosas, iniciar una cacería contra dirigentes populares, militarizar y crear terror en las barriadas, con centenas de secuestros, desaparecidos y asesinatos. La “acción cívica”, en la que se vieron comprometidos los municipios, sobre todo aquellos dirigidos por Izquierda Unida, la iglesia, los partidos políticos, muchas ONG, y sobre todo el ejército, buscó detener el avance de la subversión en las zonas urbanas pobres. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo

Internacional (USAID), fue una de las instituciones del gobierno de los EE.UU. que más se comprometió en el financiamiento de los comedores populares y el vaso de leche. “Con las primeras manifestaciones de la crisis económica se organizaron los Comedores Populares (1979) y, posteriormente, a partir de 1984, los Comités de Vaso de Leche, de gran importancia en la alimentación de amplios sectores de la población. Surgieron y se multiplicaron con el apoyo de iglesias, agencias de cooperación internacional, organismos no gubernamentales y el propio Estado”, se dice en un informe de FLACSO/mujeres.

La acción del ejército, combinada con la actividad de los “clubs de madres”, del “vaso de leche”, y otras instituciones con fachada caritativas, buscó hacer de la población de los barrios populares, mendigos, sin espíritu crítico y sin voluntad de lucha. Esta masa indigente, solo tenía que pensar en la ración de comida que “humanitariamente” le entregaban las autoridades y las fuerzas armadas. Mediante la “caridad” y la donación de alimentos se convirtió a millones de personas en parias dependientes de la “acción cívica” y del asistencialismo miserable impuesto desde el Estado y las instituciones de cooperación internacional. Una persona en situación de mendicidad, pierde su moral de hombre digno, y psicológicamente se siente culpable de su extrema miseria. Se aleja de la realidad objetiva y no será capaz de ver la relación entre la distribución de alimentos y los planes contrarrevolucionarios de las fuerzas armadas y del Estado. Pasa por alto que la “Acción Cívica”, constituía parte de la estrategia diseñada por los grupos de poder (causantes de su miseria) para proteger el sistema social impuesto. Sobre todo no se da cuenta que su miseria enriquece a otros, en particular esas organizaciones que se dicen humanistas y de izquierda.

Detrás del “vaso de leche”, los comedores populares y los “club de madres”, se encubre planes y lineamientos militares diseñados por el Pentágono Americano para combatir la lucha

insurgente en América Latina. Estas propuestas fueron planteadas al inicio de la década del 80 en un manual redactado por dos altos militares del ejército norteamericano: el general, G.H. Decker y el mayor general R.V. Lee. En dicho manual se especifica, que la “Acción Cívica” del ejército, incluye la asistencia de la población civil local, y ello sirve entre otras cosas para “suministrar raciones de comida, alimentos, vestimenta y ayuda medica, como en épocas de desastres naturales”. Esta “acción civil”, se anota, se realiza en “cooperación con las autoridades civiles, agencias o grupos destinados a asegurar las mejoras económicas o sociales de la comunidad civil”. Esta acción cívica, según el manual americano, es un “instrumento para fomentar la oposición activa civil contra las fuerzas irregulares (léase fuerzas guerrilleras) y una participación efectiva en el apoyo de las operaciones del ejercito (58).

Entre 1985 y el 2000, periodo de crisis y de guerra civil, los comedores populares alcanzaron su pleno auge y desarrollo en medio del aumento de la pobreza y de la creciente formación de rondas urbanas contrainsurgentes en el campo y zonas urbanas. Durante el gobierno aprista (1985-1990) los comedores populares sumaron un poco más de dos mil. En los primeros años del régimen fugimorista, los comedores populares aumentaron a 7,030, pero en 1995 la cifra creció a 12,000 y la distribución de alimentos aumentó a un millón 200 mil pobladores pobres de la capital del Perú. Para el año 2000 el número creció a 15,000 comedores y diariamente se repartían alimentos para un millón 800 mil personas (59). Alberto Fujimori hace una remembranza de estos comedores, y señala: “...me queda la imagen de aquellas mujeres trabajadoras de Asentamientos Humanos, Pueblos Jóvenes y pueblitos de todo el Perú, dedicadas en estrecha relación con mi Gobierno, a una causa noble: Alimentar a niños y adultos que no tenían los suficientes recursos económicos para pagar un plato de comida”.

Desde 1980, ningún gobierno peruano dejó de utilizar la mendicidad de los pobres y las acciones asistencialistas como elementos principales de sus planes políticos militares. Los programas de repartición de alimentos, comedores populares, y distribución de vasos de leche”, constituyeron herramientas de las acciones cívicas que ejecutaron los sucesivos gobiernos peruanos. Violeta Correa esposa del presidente Fernando Belaúnde (1980-1985), fue una activista de las “cocinas familiares” en las barriadas de Lima. Pilar Nores, esposa de Alan García Pérez, dirigió el Programa de Asistencia Directa (PAD), y desde esa institución del Estado organizó 2,000 “club de madres” que mas adelante se trasformaron en comedores populares. Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos administraron un régimen mafioso ligado a la CIA americana, convirtieron los comedores populares en instrumentos de la militarización de los barrios pobres en Lima y otras ciudades. “El ejercito realiza incursiones de carácter cívico en los pueblos jóvenes, reparte alimentos y presta servicios médicos, en un intento de acercarse a la población” (60). “Ayuda descartable”, es el titulo que le da el periodista Luis Jochamowitz (Vladimiro. Vida y tiempo de un corruptor, 2002), al apoyo a los comedores populares durante la campaña electoral del año 2000, Este apoyo provenía del Servicio de Inteligencia Nacional, y consistía, según la propia versión de Montesinos, en regalar Ollas, y cestos de plástico de baja calidad de poca duración, pero excelentes para ganar votos en los sectores pobres.

La acción cívica no solo fue un ingrediente importante, de la lucha antisubversiva, sino también de los programas electorales de los partidos políticos del medio oficial. Sin excepción, todos los partidos políticos impulsaron sus campañas electorales sobre la base de los “programas de sobrevivencia” o las acciones cívicas, que viene a ser lo mismo. Derecha e izquierda utilizaron el hambre del pueblo y la distribución de alimentos “donados” por los países ricos para ganar votos en sus campañas electorales. En las elecciones presidenciales

de 1985, Alfonso Barrantes Lingán, candidato presidencial de Izquierda Unida (IU), ofreció a cambio de votos un “millón de vasos de leche”. Barrantes, siendo alcalde del consejo de Lima, creó en 1984 el “programa municipal del Vaso de Leche”, y ello fue en perspectiva de su futura candidatura a la presidencia de la República. En 1990, Patricia Llosa Urquidí, distribuía alimentos en las barriadas pobres de Lima como parte de la campaña electoral de su esposo el escritor Mario Vargas Llosa y candidato a la presidencia del Perú. Henry Pease, candidato presidencial de Izquierda Unida en 1990, ofreció en su publicidad electoral, aumentar las raciones en los comedores populares, y se comprometió a otorgar comida gratis para todos los pobres del país. “Ampliaremos inmediatamente los programas de Caritas, comedores populares, cocinas, vaso de leche, asistencia directa y otros, hasta cubrir todos los sectores sociales en emergencia” (61). Alberto Fujimori, en su “lineamiento de plan de gobierno de 1990”, que utilizó como propaganda en su carrera presidencial, ofreció la “ejecución del Programa de Defensa de la vida”, sostenido en los comedores populares, los comités de vaso de leche, y los club de madres (62). El año 2000, Alejandro Toledo y Eliane Karp, sostuvieron su campaña electoral, prometiendo aumentar los comedores populares y los “comités del vaso de leche”. Durante su gobierno (2001-2006), ejecutó un programa de sobrevivencia denominado “Mi Cocina”, que impulsó los comedores populares en las barriadas en forma paralelo al crecimiento de la miseria, y al enriquecimiento de una élite privilegiada.

IZQUIERDA Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG)

El verdadero boom de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Perú comienza en 1980. Su auge se relaciona con el inicio del conflicto armado en el país, y no precisamente con

la pobreza que en Perú es crónica y ancestral. Las estadísticas muestran que en 1970 solo existían 30 ONG en todo el país, y hasta 1979, un año antes del estallido de la lucha armada, se contaban 60. La mayoría de ellas centraban sus actividades en acciones filantrópicas y de investigaciones agrarias casi sin inmiscuirse en los asuntos políticos del Estado, como sería mas adelante cuando lograron un rol importante en la política peruana. En 1984, cuatro años después del inicio de la lucha armada, las ongs aumentaron vertiginosamente a 218 cuyas actividades variaron del filantropismo a tareas políticas, incluido campañas electorales, candidaturas presidenciales, altos puestos en el Estado, ministerios y dirección de frentes y partidos políticos. Al final de la década del 80, cuando la guerrilla se había extendido a casi todo el Perú, las ongs peruanas crecieron hasta alcanzar el número de 703. Para el año 1993 se contabilizaban 1,000 y seis años después, en 1996, estas aumentan a 1,614 (63). Para el año 2006, según el director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional del Perú (APCI), el número de ONG inscritas llegaban a 2.071, sin considerar, como dice este funcionario, una buena cantidad que prefieren mantenerse al margen del APCI (64).

La relación causa efecto entre el explosivo crecimiento de la ONG y los conflictos sociales en los países pobres, no es un fenómeno típicamente peruano. El mismo caso se presenta en cualquier país del mundo donde los grupos de poder y el Estado, tienen serios problemas para controlar movimientos populares, o acciones subversivas de esencia revolucionaria y antiimperialista que por vía violenta proponen cambios radicales en la sociedad. Este es un fenómeno que en la actualidad se puede observar en Colombia, Brasil, Bolivia y otros países de América Latina donde las explosiones sociales están al orden del día o existen conflictos armados. Un ejemplo bastante actual que muestra con claridad la naturaleza estratégica de las organizaciones no gubernamentales lo entrega el caso de los países árabes. En esta región la ongs han crecido al mis-

mo ritmo que la agresión militar imperialista. Hasta antes del inicio de la década del 90, en todo el Medio Oriente se contabilizaban entre 60 y 70 mil organizaciones no gubernamentales (ONG), pero con el inicio de la guerra del Golfo en 1990, estas aumentaron a más de 100 mil. En 1995, cuando ya se había extendido la invasión americana a Irak, las ONG aumentaron a 175.000, para el año 2003 la suma de organizaciones no gubernamentales subieron 225.000.

Las actividades de las ONG responden a necesidades estratégicas de los grupos de poder locales y del capital internacional. Tienen un objetivo fundamental, y se trata de evitar, que una situación de extrema contradicción de clase a causa de injusticias y desigualdad, se convierta en un fenómeno de explosión social insostenible y peligrosa para la estabilidad del sistema. En este aspecto las ongs extienden sus ramificaciones en las organizaciones populares y bajo el pretexto de luchar contra la pobreza, introducen mecanismos para manipular a la población de menos recursos económicos. A partir de ahí, hacen de la mendicidad de las masas, una institución organizada en el seno del pueblo, que sirve en lo fundamental para desactivar las luchas sociales y dar viabilidad al sistema social y político actual. Como parte de sus planes de infiltración en el campo obrero popular, implementan los “comedores populares” y reparten millones de vasos de leche, llevan al seno del pueblo conceptos reaccionarios y manipuladores sobre la “democracia”, “la reforma del Estado”, la “democracia de base”, “asamblea constituyente”, y otros criterios diseñados en los laboratorios de los grupos de poder.

La mayoría de las organizaciones no gubernamentales del Perú están ligadas a grandes ONG de los países ricos como Oxfam (Inglaterra), Cebemo, Icco, Novib, Hivos (iglesia católica y protestante de Holanda), Misereor (obispos católicos de Alemania), Konrad Adenauer (Democracia Cristiana de Alemania), Frederich Ebert (Social Demócrata de Alemania), Fun-

dación Ford, Fundación Rockefeller (Estados Unidos) y otras que tienen sus centros de operaciones en Francia, Canadá, Japón y demás países desarrollados. Según un informe de las Naciones Unidas de 1993 cada ONG de los países ricos maneja un presupuesto anual que puede variar entre 500 y 1,000 millones de dólares anuales, cuyo dinero proviene del sector público y del sector privado. Se calcula que en promedio, dos tercios del dinero que reciben las ongs ricas son contribuciones del sector privado, es decir de las grandes trasnacionales que tienen sus filiales en los países pobres. Según este informe, en 1970, el total de las ONG occidentales contaron con un presupuesto de 1000 millones de dólares y en 1990 esta suma subió a 7,200 millones (65).

Estas ONG, tienen un discurso estructurado que traza sus propósitos políticos ideológicos. Dicen que sus objetivos en el “tercer mundo” son “erradicar la pobreza”, “buscar la equidad y lograr una sana convivencia en la sociedad”, “fortalecer la democracia”, lograr la participación plena de los trabajadores”, “impulsar la formación de auténtica sociedad civil que lleve al logro de la plena democracia”, “buscar la participación ciudadana”, “contribuir al desarrollo social del país y a la promoción social de los pobres”, y otros eslogan sin limites en nombrar la pobreza y la humanización de la sociedad. Este discurso sirve de matriz para el discurso propagandístico de las ong de los países del tercer mundo, que dirán lo mismo a nivel local. El discurso encubre la finalidad, pero en la realidad las cosas funcionan de diferente manera. Intervida, es un caso que muestra la forma inescrupulosa como se maneja el dinero de la solidaridad internacional en las ONG matrices. Esta institución tiene su sede en España, y forma parte de una red internacional de ongs que llevan el nombre de Intervida World Alliance (INWA) con oficinas centrales en cinco países ricos de occidente, y financia ongs en 18 países del tercer mundo. Intervida tiene un ingreso de 90 millones de euros anuales, proveniente de 360 mil padrinos

que aportan mensualmente 21 euros por niño apadrinado en los países pobres. Según Intervida, este dinero sirve, en teoría, para comprar medicamentos, construir escuelas, hospitales, y casas para recibir niños pobres. En abril del 2007, una auditoría de la fiscal Carmen Martín Aragón, de la Fiscalía de Barcelona, descubrió que esta ONG había depositado en los bancos privados 45 millones de euros en operaciones de inversión financiera en busca de beneficios, mientras que los niños de los países pobres no recibían el dinero recolectado para ellos.

Como señaló en 1994 el embajador norteamericano en Perú, la “participación de las ONG en el proceso político crece en todas partes de América Latina, en el Caribe y Estados Unidos. Este es un hecho que no solo es inevitable sino que es también saludable para las sociedades democráticas” (66). Las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) peruanas, son subsidiarias y dependen de las ONG de los países ricos. Aquí también se aplica la relación semi colonial que se establece entre los países del tercer mundo y las potencias mundiales. La cantidad de dinero que recibe cada ONG nacional varía según el tamaño y el peso político que tiene cada una de ellas en el país de origen. Si una ong tiene un ministro o varios parlamentarios, es seguro que tendrá más posibilidades de lograr mayores sumas de dinero del extranjero. Otro elemento que da ventaja a la ONG es la “influencia” que tiene ésta en las organizaciones campesinas, obreras y populares. Adicionalmente a esto, es necesario tener buenos contactos con el gobierno, con la iglesia y con los partidos políticos de los países desarrollados. Por mencionar un ejemplo, el Instituto Libertad y Democracia (ILD) que dirige Hernando de Soto, un político de derecha que colabora con todos los gobiernos de turno del Perú, recibía en la década pasada más de un millón de dólares cada mes. Ese dinero provenía principalmente de los Estados Unidos. En la década del 90 el ILD asesoró al gobierno de Alberto Fujimori, y fue la institución que elaboró para el gobier-

no, los planes para el control de drogas, que como se conoce fue redactado para favorecer el narcotráfico local e internacional. Según Agustín Haya de la Torre, director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), para marzo del 2007, las ONGs nacionales se llevaban una tajada de 210 millones de dólares cada año. Solaris, una ONG que es subsidiaria de Intervida (España). Esta ONG trabaja con niños en las provincias del Perú y según Rafael Puertas, miembro fundador de esta ONG, el presupuesto anual de Solaris es de 22 millones de euros, y a su servicio tiene un personal de 600 personas, entre técnicos, profesionales y administrativos.

El conjunto de las ONG peruanas, manejan un aparato burocrático que puede pasar fácilmente de 20 mil personas a tiempo completo, con sueldos que varían entre 500, 1000 y 3000 dólares mensuales en promedio lo que para un país paupérrimo como Perú resulta un jugoso ingreso, y que convierte a esta burocracia en una elite privilegiada bastante lejana de la pobreza que según las ONGs intentan erradicar. Las oficinas principales de estas ONG están ubicadas en barrios ricos y de clase media en Lima, pero su voluminoso contingente está repartido en las zonas rurales y urbanas populares, y como dicen ellos cumplen tareas de “promoción al desarrollo”, “participación popular”, “educación para el desarrollo”, “apoyo a las organizaciones populares”, “aporte al proceso de democratización”, “autogestión y desarrollo” e impulso del “socialismo democrático”. En sus discursos y publicaciones se refieren sin cesar a una “una sociedad más justa y equitativa, de “convivencia pacífica”, “defender los derechos humanos” y el “estado de derecho”, pero sin embargo la mayoría de estas ONG contribuyen al mantenimiento del injusto sistema social, y apoyan a los peores gobiernos del país.

En 1993, la Asociación de Promotores Sociales del Perú, emitió un comunicado donde denunció como los directivos de las ONG peruanas usufructuaban con la miseria del pueblo y la

ayuda económica internacional. Según este documento, en la ecuación de la pobreza crítica y el financiamiento externo, las ONGs crecían como hongos como si la pobreza fuera una de las condiciones para el enriquecimiento de una elite burocrática. En el informe se denunciaba que “un director tiene uno o dos carros, dos casas en barrios residenciales, una cuenta corriente personal de 5,000 a 10,000 dólares y usufructúan en beneficio personal e individual, de la infraestructura comprada con el dinero que se financian los famosos proyectos de desarrollo social”. Se lee también en la denuncia, que los directores de las ONG, tienen inversiones personales en el sector privado, y que los informes que presentan estas ONGs a sus matrices en el exterior, se realizan en base a información falsa y que todo esto se hace manipulando a la población pobre (67).

ONG Y GUERRA CONTRAINSURENTE

La interacción política entre las ONG y la izquierda legal del Perú es un fenómeno asociado a las nuevas formas que adoptan los grupos de poder para controlar cualquier amenaza al orden establecido. Las ONG, en las dos décadas pasadas (1980-2000) han ocupado el mismo terreno que los partidos políticos. En ese campo, se implicaron en los procesos electorales fraudulentos, contribuyeron en el desarrollo de los planes contrainsurgentes del Estado, y apoyaron los regímenes de turno. La propaganda respecto a que las ONG son instituciones “no gubernamentales”, y que mantienen sus actividades al margen de la política oficial, es tan falso como aquellas arengas electorales que anuncian la defensa del pueblo pero que en concreto defienden a los grupos de poder. Para James Petras, las ONG son “brazos de gobiernos que reciben su financiamiento de los Estados y de instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y de fundaciones como Ford, que tienen vínculos con los grupos

de poder” (68). Un informe de las Naciones Unidas señala que ciertas ONG no son totalmente independientes del gobierno como ellas pretenden. Hay veces, dice esta institución, ellas tienen oficialmente un estatus no gubernamental, pero en la práctica, ellas están ligadas al gobierno” (69). El campo de acción de las ONG fueron los comedores populares, la organización de las rondas (campesinas y urbanas), los municipios, el vaso de leche y en la promoción del sistema “democrático” incluido los procesos electorales y la defensa del sistema.

Las ONG realizan bastante publicidad en defensa de los derechos humanos, pero en ese terreno han estado más cerca de los militares y de los gobiernos de turno, que de las miles de víctimas del conflicto interno. Hipócritamente se pronuncian contra las violaciones de los derechos humanos, pero al mismo tiempo han planteado en diversas ocasiones hacer un “frente común” con los gobiernos que como se conoce son los principales responsables de los crímenes contra la población. Sus declaraciones en “defensa de los derechos humanos”, sirve solamente para camuflar conceptos encubridores de crímenes, secuestros y torturas cometidos por militares, policías y paramilitares. Por ejemplo, es usual en las ONG hablar de los “excesos de los militares”, que en el lenguaje oficial significa que las matanzas masivas cometidas por las fuerzas armadas, nada tienen que ver con la institución militar ni con el gobierno, sino más bien a “excesos” de algunos soldados. De esta manera se oculta que el exterminio de miles de ciudadanos, fue el resultado de una estrategia contrainsurgente planificada en las más altas instancias del Estado y de las fuerzas armadas. Otro eslogan fabricado por las ONG del Perú estuvo referido a conceptualizar el conflicto armado (1980-2000) como una lucha entre los “subversivos y los militares”. El “pueblo entre dos fuegos”, se dijo cotidianamente y ello ha servido únicamente para proteger al régimen de turno y las clases políticas a quienes se deja de lado de cualquier responsabilidad de las acciones brutales de los militares. Mediante

este truco de la desinformación contrainsurgente, la matanza de pueblos enteros en los andes y en la selva, el arrasamiento brutal de comunidades campesinas, los exterminios de prisioneros de guerra, y otras formas de crimen masivo que cometían las fuerzas armadas y fuerzas policiales en aplicación de los planes contrainsurgentes, fueron “excesos” y donde el presidente del gobierno y los altos jefes militares, no tenían ninguna responsabilidad.

En Perú la mayoría de las ONG están controladas por los partidos políticos de derecha e izquierda. La supervivencia económica de una organización política depende en gran parte de la cantidad de dólares que puede obtener en el extranjero la ONG que administra el partido. Esta dependencia es mayor en la izquierda que en la derecha. Muchos líderes y dirigentes de los grupos que integran la izquierda legal peruana, son asalariados de las ongs partidarias. Algunas centenas de ONG, como por ejemplo, Desco, Cedep, IEP, Flora Tristán, Cedal, Cidiag, Ideas, Inpet, Perú Paz, Adec-Atc, y otras, cargan con el costo de las planillas y las campañas electorales de la izquierda en sus diferentes organizaciones. Por el lado de la derecha, la situación es semejante, y desde Alan García Pérez, Alejandro Toledo y hasta Alberto Fujimori, controlan varias importantes ONG. Por mencionar algunos ejemplos, la familia de Fujimori aparece a la cabeza de Apenkai, una ONG que durante la década del 90 hizo grandes negocios con las donaciones del extranjero que recibía el Estado. Alejandro Toledo y su familia aparecen como los propietarios de la ONG Instituto de Investigación y Desarrollo para la Pequeña y Microempresa. Alan García y Pilar Nores, su esposa, son los dueños de la ONG Instituto Trabajo y Familia que ha sido denunciada por el periodista César Hildebrandt (diciembre 2006) de “prestar servicios” al Estado y de estar vinculada a la empresa minera Milpo, una de las mas grandes empresas privadas del país.

Hay decenas de casos que ilustran la utilización de las ongs

como instrumentos para alcanzar puestos políticos en el parlamento, en los municipios y en el gobierno. CEDEP (Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación), se llama una ONG administrada por ex funcionarios e ideólogos de la dictadura militar del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975), y que a partir de 1980 se reciclaron en las filas de la izquierda legal del Perú. Carlos Franco Cortés, jefe de esta ONG fue entre 1985 y 1990, consejero del gobierno de Alan García, Carlos Amat y León, miembro del consejo de esta misma ong fue en 1990 ministro de agricultura de Fujimori. Luis Alvarado, otro miembro de CEDEP fue parlamentario de Izquierda Unida. Rolando Ames, miembro de la ong Instituto Democracia y Socialismo, fue muchos años senador de Izquierda Unida (IU). Enrique Bernales, parlamentario de IU también, era al mismo tiempo uno de los directores de la ong “Perú Paz”. Gloria Helfer, militante de IU y ministra de Educación durante el régimen de Fujimori, controlaba dos ongs: “CEAPAZ” y “Educa”. Carlo Tapia, fue parlamentario y líder IU, es uno de los directores de la ong Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional. Marcial Rubio, miembro de IU y muchos años director de la revista *Quehacer* que publica la ONG Desco (Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo), fue ministro de Educación en el gobierno de transición de Valentín Paniagua en 2001. Fernando Sánchez Albavera, ministro Energía y Minas (1990-91) durante el fujimorismo, fue en la década del 80 uno de los directivos de la revista *Quehacer* y de Desco

Las ONG, ya sea por el dinero que disponen o por la influencia que han logrado en la sociedad, se han convertido en parte de la estructura del Partido. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en la que participaron algunos de los ex dirigentes de Izquierda Unida, hace un recuento del trabajo de las ONG en Villa el Salvador, un distrito populoso de Lima y que durante muchos años fue el “bastión electoral” de Izquierda Unida (IU). Según la CVR, las ongs “desarrollaron diversos proyectos”, como talleres producción, brindaron asistencia a

organizaciones populares, “como los comedores populares y los comités del vaso de leche”. Estos logros, dice la CVR, “ayudaron a fortalecer la hegemonía de la IU (Izquierda Unida) en Villa el Salvador, que de ese modo continuó siendo un importante bastión de izquierda, y una de las principales bases de apoyo para las elecciones presidenciales de 1990” (70). En cierto momento del desarrollo del proceso político la influencia y el poder que podía tener un miembro de la dirección de la izquierda peruana estaba en relación con la importancia, sobre todo económica, que tenía la ONG que controlaba. Por mencionar un ejemplo, el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Desco), una de las más ricas ONG del país, llegó a tener el control de la dirección de Izquierda Unida (IU). Henry Pease, fundador y director de Desco, sin ninguna trayectoria en la lucha social, se convirtió desde 1990 en líder y dirigente máximo de IU, y fue 1990 su candidato a la presidencia de la República.

Las ONG, funcionan como organismos descentralizados del partido, y en cualquier problema del país adoptan la misma posición política del partido. Frente a las rondas campesinas y grupos de defensa civil, asumieron la misma conducta de la izquierda legal. Respaldaron la entrega de armas a las rondas, y estuvieron de acuerdo a que éstas participarán junto con el ejército en la lucha antisubversiva. El Instituto de defensa Legal (IDL), una ONG vinculada a la izquierda, en julio de 1991, halagaba y sostenía la política del régimen fujimorista en la proliferación de las rondas campesinas utilizadas en la lucha contrainsurgente. Según esta ONG, “la experiencia de la organización de Defensa Civil en Ayacucho es aleccionadora en varios sentidos y proporciona elementos de juicio para evaluar la eficacia de la estrategia de organizar y armar a la población civil para enfrentarse a la subversión...En este contexto, la entrega de armas a las rondas debe ubicarse necesariamente dentro de una efectiva estrategia de pacificación integral” (71). Esta misma ONG, en 1992 planteó un cambio

en la estrategia de las fuerzas armadas para enfrentar a Sendero Luminoso, y exigía “mejores remuneraciones para los miembros de las fuerzas armadas e infraestructura adecuada para su labor” (72). Jaime Urrutia, un investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), y miembro de la izquierda, dedicaba en 1992 una extensa apología para convocar a una unidad con los militares y al gobierno bajo el objetivo de derrotar la subversión. “La responsabilidad de la lucha contra Sendero Luminoso no es solo de los soldados expuestos a emboscadas en cualquier parte del país, incluso en barrios e instituciones, mientras los asesinos reglan sus pasos. Todos debemos sentirnos parte de un proyecto nacional mínimo de pacificación y la responsabilidad mayor la tiene el Ejecutivo, que debe convocar a la unidad y no al enfrentamiento” (73).

En el campo contrainsurgente, muchas ongs, se convirtieron en los “expertos”, y “analistas” inequívocos, que cada semana planteaban nuevas formulas para “movilizar al pueblo” contra la guerrilla maoísta, o que alertaban al ejercito de las modalidades de los subversivos para “infiltrar” colegios y universidades. El 18 de abril de 1992, a solo dos semanas del golpe militar fujmorista, el Centro de Estudios y Acción para la paz, y el Centro de Publicaciones Educativas (Tarea), dos organizaciones no gubernamentales (ONG), dirigidas por miembros de Izquierda Unida (IU), publicaron un libro titulado, “La Escuela en tiempos de Guerra”. Esta publicación, en apariencia pedagógica, describe la “infiltración de Sendero Luminoso” en las escuelas ubicadas en las zonas de mayor conflicto armado. Todos los argumentos de dicho libro, sirven para acentuar aún más el poder de las Fuerzas Armadas y de las rondas campesinas en las zonas declaradas en emergencia como medida para frenar el avance subversivo. Plantea la intervención de los militares en la programación y aplicación de la enseñanza en los centros educativos rurales, lo que significaba militarizar aun más el país. En el libro se puede leer: “Las rondas campesinas deberían tener como meta futura, el

intentar integrar y coordinar con otras instituciones, como la escuela, e instancia de organización. En las zonas de mayor violencia política, los programas de educación y de salud, reconstrucción vial, saneamiento ambiental y producción, deben estar articulados y contar con el apoyo y participación de las fuerzas armadas” (74).

Era el 18 de julio de 1992, a solo tres meses de la publicación “La escuela en tiempos de guerra”, tres destacamentos del “Grupo Colina” (comando paramilitar del ejército), ingresaban a la Universidad La Cantuta (Lima) para secuestrar a 9 estudiantes y un profesor sindicados como militantes de Sendero Luminoso. La “Universidad era conocido nido de senderistas”, dijo el diario Expreso (75) un cotidiano que era financiado por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). El “Grupo Colina”, era un aparato paramilitar organizado por Vladimiro Montesino y el jefe de las fuerzas armadas que en ese tiempo era el general Nicolás Hermosa Ríos. Este grupo funcionaba en el Servicio de inteligencia Nacional (SIN), y estaba integrado por oficiales y sub oficiales de elite del ejército. Una vez capturados los estudiantes y el profesor fueron amarrados con alambres, y llevados en una camioneta a un lugar desértico a varios kilómetros de Lima que se conoce como “boca del diablo” en Huachipa. En ese lugar, en horas de la madrugada, el capitán Martín Rivas dio la orden para la ejecución. Los diez secuestrados de La Cantuta fueron obligados a arrodillarse, y uno por uno, recibieron varios tiros en la cabeza. Sus cadáveres fueron arrojados en una zanja común que los mismos rehenes antes de morir, obligados por los militares, habían cavado en el arenal. Posteriormente, fueron desenterrados y trasladados a Cieneguilla, y en un lugar clandestino fueron incinerados. De esta forma el ejército, mediante el secuestro y asesinato clandestino, detenía el avance senderista en los centros educativos, como habían alertado los autores de “La escuela en tiempos de guerra”.

Uno de los autores del libro “La Escuela en tiempo de guerra”, era Juan Ansion, de nacionalidad belga ligado a la cooperación internacional y marido de Gloria Helfer Palacios, ministra de educación de Alberto Fujimori en 1990 y dirigente del Movimiento Democrático de Izquierda (MDI), uno de los grupos afiliados a Izquierda Unida. Helfer, se declaraba “cristiana convicta y confesa” de “identidad de izquierda y socialista”. Hablando de Fujimori, los halagos le salían con facilidad, y decía que el presidente peruano, era “alguien muy convencido de sus ideas, perseverante austero. Le agrada encontrar iniciativas. Es muy renovador” (76). Gloria Helfer, dejó de ser ministra fujimorista pero no cortó sus vínculos oficiales y empresariales con el gobierno de Fujimori. Según la denuncia que formuló en el 2006 Mercedes Cabanillas, la ex ministra fujimorista, había recibido entre 1996 y el 2002, mas de 3 millones 450 mil soles del Estado, que en moneda extranjera fue mas de un millón de dólares. (1,104,707 USD). Esta suma de dinero fue en pago por labores de “capacitación de profesores” en el sector educación. El contrato fue suscrito entre la ONG “Educa” que dirige Helfer y el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Gloria Helfer, como cabeza de lista del Movimiento Democrático de Izquierda (MDI) avaló la Asamblea Constituyente que tramposamente convocó Alberto Fujimori en 1992, para legalizar la dictadura cívico-militar que se instaló desde el 5 de abril de 1992.

“La escuela en tiempos de guerra”, se convirtió en un best seller en los cuarteles militares y en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Meses después de la publicación de este libro, las fuerzas armadas y fuerzas policiales iniciaron una feroz represión en las escuelas secundarias y en las universidades consideradas « rojas » o « subversivas », cuyo saldo trágico fue cientos de estudiantes y profesores secuestrados y desaparecidos. Entre julio y noviembre de 1992, grupos paramilitares y comandos del ejército cometieron una serie de secuestros y asesinatos clandestinos de estudiantes de la Universidad del

Centro (Huancayo). Según Imelda Tumialan, fiscal de la Defensoría del Pueblo, solo en el mes de noviembre de ese año, 20 estudiantes de esta universidad habían sido secuestrados, torturados y asesinados con tiros en la cabeza. Entre enero de 1992 y noviembre de 1993, la lista de estudiantes de la Universidad Nacional del Centro (Huancayo) secuestrados y desaparecidos llegaba a 53 cuyos cadáveres fueron encontrados con señas de haber sido torturados antes de ser muertos (77). En 1993 se había generalizado la represión y crimen, no solo contra estudiantes universitarios, sino también contra escolares de las escuelas secundarias. En Julio de 1993, la Fiscal Imelda Tumialan, volvió a denunciar el secuestro y desaparición de 89 escolares entre 12 y 17 años, muchos de ellos aparecerían después degollados. Todas las pistas de los autores de estos crímenes, denunció la periodista Mónica Vecco (78), conducían a la oficina Regional de Inteligencia del Ejército de Huancayo.

En la situación de guerra interna que vivía el Perú, además de la violenta represión que el gobierno había implantado en las universidades, y escuelas secundarias, un texto como “La escuela en tiempos de guerra”, donde se acusaba a profesores de provincias de enseñar de acuerdo a las directivas de Sendero Luminoso, resultaba, un estímulo y una justificación para que las fuerzas militares continuaran impunemente sus acciones brutales y criminales en el sector educativo. En octubre de 1992, Fujimori anunció que estaba listo un decreto para sancionar con penas de cárcel aquellos “maestros que han sido ganados por el senderismo y que hacen apología del terrorismo” (79). La decisión del gobierno de reprimir a los maestros “senderistas”, no dejaba dudas del impacto del libro mencionado en la guerra contrainsurgente del Estado. Hay que recordar que en mayo de 1991, las fuerzas armadas habían ocupado la Universidad de San Marcos y la Universidad La Cantuta, como parte de un plan que tenía como objetivo “barrer al terrorismo” de las universidades. “El Ejército se

quedará tiempo indefinido en San Marcos”, dijeron los diarios del gobierno cuando los militares se instalaron en la Universidad de San Marcos. Por su parte Fujimori anunció: “Pondremos orden en las universidades” (80).

LA IZQUIERDA Y LOS CRIMENES ORGANIZADOS DESDE EL ESTADO

Si la izquierda legal se subordinó al gobierno en asuntos como las rondas campesinas, la “acción cívica” del ejército, y el parlamentarismo, no fue menos en las actividades planificadas para encubrir y justificar las más atroces matanzas organizadas desde el Estado. En este campo la izquierda cumplió un rol destacado, sobre todo para ocultar a los responsables directos en el exterminio de prisioneros en las penales de Lima y Callao en 1986 y 1992. El 19 de junio de 1986, el régimen aprista ordena una violenta represión en las prisiones de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara. El objetivo fue eliminar la mayor cantidad de prisioneros de guerra sindicados como miembros de la guerrilla senderista. El ejército y la policía por encargo del presidente García “restablecieron” el orden en las prisiones, cuyo saldo fue 300 presos asesinados. La mayoría de ellos fueron ejecutados a sangre fría cuando ya habían dejado de resistir y con los brazos en alto salían fuera de las instalaciones donde se habían refugiado. La acción de los penales se realizó bajo la cobertura de “restablecer el orden nacional perturbado”, pero su verdadero objetivo fue el exterminio de prisioneros y su ejecución se inscribió como parte de la guerra contrainsurgente bajo el propósito político de golpear a la subversión y detener su crecimiento.

“Los internos se dan cuenta que estaban perdidos y empiezan a rendirse. Comienzan a salir con las manos en la nuca. Yo vi salir a varios y conformen salían les decían, tírate al suelo concha de tu madre, y les disparaban. Eran ráfagas de me-

tralleta y de fusil que le daban a todo el que salía. Había un oficial de la Guardia Republicana, alto, de bigotes y un poco grueso y estaba justo parado al lado derecho del boquerón (salida), él solamente observaba, incluso se burlaba: yo oí que decía, oye ¡ese está moviendo! Y seguían disparando”. Testimonio de Pedro Pablo Checa Vargas, quien era enfermero en el penal de Lurigancho. El día de la matanza estaba de guardia, y como testigo excepcional vio como los militares y policías asesinaros a más de 120 prisioneros. El fue amenazado de muerte para que cambie su declaración, y tuvo que refugiarse en España antes que lo asesinen (81).

Máximo Martínez Lira, es general (r) de la policía, y cuenta que el 13 de junio de 1986 en el salón dorado del Palacio de Gobierno, seis días antes de la matanza en las prisiones se realizaba una reunión de alto nivel. Encabezaba la cita el presidente García, y estaban presentes, Agustín Mantilla, vice ministro del interior, los miembros del Comando Conjunto de las fuerzas armadas, los jefes policiales, los jefes del Servicio de inteligencia Nacional (SIN) y del Servicio de Inteligencia del Ejército. García colérico increpó a todos los presentes por no hacer nada para detener la subversión, anunciando que ésta crecía a pasos agigantados. “Es necesario terminar con el terrorismo, y no quiero más presos en las cárceles”, dijo Alan García gritando (82). Este general fue uno de los jefes policiales que participó en la violenta intervención de los penales. Sus declaraciones fueron originadas, no por algún sentimiento de arrepentimiento tardío, sino en venganza por haber sido traicionado (entregado como chivo expiatorio) por los mismos que dieron la orden de matar. El 16 de junio, a solo 3 días de los hechos sangrientos en los penales, Alan García se pregunta y se responde: “¿Qué pasaría si nos tiramos a todos los senderistas?. Nada, absolutamente nada” (83). El 18 de junio, como se registra en documentos de la época, Alan García hace llegar a los dirigentes políticos y entre ellos a Alfonso Barrantes Lingán de Izquierda Unida (IU), su plan para

tomar por asalto las prisiones. Los líderes políticos apoyan la decisión del presidente García y con docilidad se inclinan favorables al exterminio de prisioneros.

Izquierda Unida (IU), fue la encargada de limpiar las culpas del presidente García. Para este fin, el senado de la Republica controlado por los partidos de la derecha, incluida el APRA, conformó una Comisión presidida por el senador Rolando Ames Cabán, “uno de los representantes más destacados de Izquierda Unida”, como dijo la propaganda del gobierno. En dicha comisión participó también Jorge del Prado, en ese tiempo secretario general del PCP pro soviético y Agustín Haya de la Torres, un diputado de IU. Se dice en una de las conclusiones de esta comisión que fue un error entregar los “penales a los militares” y repitió lo que habían propagandizado los medios oficiales respecto a que Sendero Luminoso pretendió aprovechar la reunión en Lima del Congreso de la Internacional Socialista que reunía a representantes de más de 70 países, como una ocasión propicia para alcanzar sus objetivos de publicidad y caos. Ames y su comisión, acusó a García Pérez de hechos colaterales pero no fundamentales referidos a falsear los hechos, y mal cálculo de la orden para “debelar el motín de los penales. El informe no dijo nada sobre los planes y preparativos anticipados que hizo Alan García, sus ministros y los militares para llevar a la practica el exterminio de prisioneros de guerra. En 1987, un año después de este crimen masivo de prisioneros, Rolando Ames anunció en una revista de Lima, que Alan García Pérez, no tenia ninguna responsabilidad política en la matanza de los penales, y que su única falta en estos hechos, es “haber arriesgado, con algún grado de conciencia, muertes que no eran necesaria para debelar los motines de los penales...Este es el mínimo grado de responsabilidad que tiene Alan García. No estamos señalando que dio orden de ejecución de rendidos; no tenemos para ello una evidencia que nos permita señalarlo. Quiero creer, por el contrario, que cuando el presidente de la Republica denunció

en Lurigancho estas ejecuciones fue, precisamente, porque nada tenía que ver con ellas” (84).

Pero no fue solamente en el parlamento donde Izquierda Unida justificó la matanza de prisioneros y defendió la inocencia del presidente García. Días después de los hechos sangrientos de los penales, el Comité Directivo Nacional de IU emitió un comunicado en el que junto con encubrir la responsabilidad penal de Alan García, condenó y rechazó la provocación de los militantes del Sendero Luminoso y pretendió hacer recaer toda la responsabilidad en la acción militar y policial que se realizó «sin que agotaran los recursos disuasivos normales». La revista *Quehacer*, cuyos directivos eran Henry Pease y Marcial Rubio, que después se convertirían en dirigentes de Izquierda Unida, dedica una edición completa para justificar la matanza de los penales de junio de 1986. Para esta revista, no había dudas que Alan García era una víctima de los maquiavélicos senderistas, y si las fuerzas armadas habían actuado con violencia no quedaba otro camino. Además, dijo la revista, la matanza de 300 prisioneros, había sido una táctica maléfica de Sendero para golpear el sistema democrático. En todo esto, *Quehacer* que juzga a García inocente en este crimen masivo, llama a todos los que están por la democracia, a “tener lucidez suficiente” para estructurar un amplio “frente de defensa contra el terrorismo, sin sectarismos y con apertura sincera”. “Los que nos dejó ese 18 de junio”, dice la revista, es que Sendero tenía como objetivo incentivar la represión, para que el gobierno aparezca ante todo el mundo “como un gobierno impopular y genocida”, y así Alan García cayó en la trampa, que le colocaron las dos minorías extremistas del país, Sendero y los militares, dice la revista (85).

Quehacer, hace una defensa de antología para exculpar a García de los hechos sangrientos de los penales. Responsabiliza a los militares y alabó que García haya ofrecido esclarecer este crimen masivo de prisioneros. Este crimen nunca fue esclare-

cido, y al contrario, Alan García Pérez el principal responsable, hizo alianza con sus acusadores que le facilitaron el retorno a la presidencia del país. La revista acusó a la subversión de no tomar en cuenta para nada la vida de los seres humanos, menos las de sus militantes. Señaló que la operación en las prisiones, se habría realizado al margen de las órdenes dictadas por el gobierno. “Es indiscutible que el Perú y su sistema democrático han sufrido un duro golpe...para el senderismo, la vida propia o ajena no son valores respetables; en suma, lo que para Sendero Luminoso cuenta es la toma del poder a cualquier precio...Frente a una fuerza subversiva significativamente organizada y fanatizada, nuestros gobiernos han actuado con una imprevisión realmente deplorable...Entonces, lo que quedaba al gobierno era utilizar la energía de su poder para sofocar el motín...Lo que ha vivido el país durante esta semana, ha sido la pura estrategia senderista de violencia, enfrentada por la no menos violenta estrategia contrasubversiva de los manuales especializados con que trabajan nuestras fuerzas armadas y policiales...”. Quehacer no se queda en pequeñas conjeturas y defiende la inocencia de Alan García, y dice que con los acontecimientos de los penales, “pierde el gobierno, que ha retrocedido gravemente el camino que había andado, nacional e internacionalmente, como defensor de los derechos humanos y líder tercermundista (86).

Durante muchos años después de este crimen de prisioneros, se persistió en la idea de que Alan García no tenía ninguna responsabilidad en ello. Para este fin se repitió muchas veces, que la matanza de 1986 fue un juego diabólico de Sendero Luminoso, y que en ese caso García se convirtió en una especie de “rehén del senderismo”. Hasta la actualidad, bajo el objetivo de seguir encubriendo la responsabilidad penal del actual presidente peruano, se dice que el genocidio de 1986, había sido una táctica del Senderismo para dejar mal al gobierno aprista. Hace poco (2003), la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), desempolvó viejos argumentos para anunciar

que Alan García Pérez no tuvo ninguna responsabilidad en el exterminio de presos acusados de pertenecer a Sendero Luminoso. Según la CVR, los “hechos posteriores demuestran que no existió una voluntad real por parte del Poder Ejecutivo de agotar los esfuerzos para una salida pacífica a los motines” (87).

En 1989, en Perú reinaba el terror impuesto por el “Comando Rodrigo Franco”, un grupo paramilitar que funcionó durante la época del gobierno aprista. Este grupo se manejaba desde el ministerio del Interior y la policía antiterrorista (Dincote). Para nadie era un secreto que el “Rodrigo Franco”, era dirigido por Agustín Mantilla, ministro del interior y brazo derecho de Alan García. Si para todos los ciudadanos peruanos era claro que este grupo contaba con el apoyo del gobierno, no era así para Enrique Bernales, senador de IU, que públicamente daba la cara para negar la relación entre el gobierno aprista y este grupo de asesinos. Para ello declaraba que la información era “contradictoria”, y que decir “Rodrigo Franco” era un genérico en el que cabían todos y muchos grupos, y que podían ser “delincuentes comunes hasta efectivos uniformados que al margen de su institución actúan ejerciendo vendetta” (88). Enrique Bernales Ballesteros, en representación Izquierda Unida, presidió en 1990, la Comisión Especial de Investigación y Estudio sobre la violencia y alternativas de pacificación, del congreso. Uno de los dictámenes mas controvertidos de esta comisión fue aquella que estuvo dirigida a exculpar a los gobiernos de turno (Fernando Belaúnde y Alan García Pérez) de la brutal guerra contrainsurgente que las fuerzas armadas y fuerzas policiales ejecutaron desde 1980. Para este fin el senador izquierdista decía, que no existía “ninguna evidencia que señale a los gobiernos del periodo, de haber deliberadamente, acordado y ejecutado un plan de violación masiva y sistemática de los derechos humanos” (89). El mismo Bernales, declaró en mayo de 1992 en el diario La Republica (14-05-92), que la intervención de las fuerzas armadas en el

penal de Canto Grande (6 y 9 de mayo de 1992), donde fueron asesinados cerca de 100 prisioneros, “era una situación que no podía continuar por mas tiempo. Lo lamentable es la tardanza y que la intervención se haya producido sin la participación de observadores internacionales”.

El 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos ejecutan un golpe militar y establecen un régimen civil-militar. Se liquida el parlamento, el poder judicial y se establecen los tribunales militares con jueces encapuchados. Es una etapa dramática para Perú, y la mayor parte del país vivía en estado de emergencia. Los Comandos Políticos Militares se habían convertido en el poder absoluto en las regiones en emergencia. El poder civil había desaparecido y los militares decidían con violencia la vida y el destino de millones de peruanos. Este año, diversas organizaciones internaciones de defensa de los derechos humanos, consideraban a las fuerzas armadas del Perú, como las más criminales del mundo. El movimiento popular se moviliza contra el golpe militar de Fujimori, pero Carlos Tapia uno de los dirigentes de la izquierda legal, propone abandonar las discrepancias con Fujimori bajo el objetivo de hacer una unidad para combatir la subversión y “salvar la democracia”. Tapia dice, “la contradicción que existe entre la nación y Estado peruano contra sendero es superior a las contradicciones que existen entre la democracia constitucional y el golpe del cinco de abril. Esto me parece que es fundamental; y por más discrepancias y oposición al golpe militar del cinco de abril, saber que en la lucha contra el senderismo tenemos que estar juntos” (90). El 17 de septiembre de 1992, bajo el régimen fujimorista, las “fuerzas políticas democráticas”, firmaban un comunicado publico para llegar a un “acuerdo nacional en aras de la pacificación”. Esta “pacificación” no era viable si los mismos “pacificadores”, eran los principales responsables de los graves crímenes que se cometían contra la población. En este acuerdo nacional se incluía en primera fila al gobierno, cuyo partido (Cambio 90)

aparecía como uno de los patrocinadores junto con el Partido Popular Cristiano (PPC), el APRA, Acción Popular (AP), Cambio 90, Unir de Patria Roja, Izquierda Unida, el Partido Comunista del Perú (ex pro soviético), y otros grupos de izquierda.

OPERACIÓN MUDANZA I

Sólo había pasado un mes del autogolpe del 5 de abril de 1992, y el 6 de mayo de 1992, Alberto Fujimori ordena se ejecute el operativo “Mudanza 1” en el penal Castro Castro (Lima). El pretexto era trasladar a más de 100 prisioneras a la cárcel de Santa Mónica en Chorrillos. Cerca de 600 efectivos del ejército y la policía ingresan violentamente en esta prisión y asesinan, entre hombres y mujeres, cerca de 100 prisioneros de guerra. Según un testimonio, presentado a la Comisión Interamericana, era “alrededor de las 4:30 a.m. militares y fuerzas de élite de la policía peruana empezaron a atacar el pabellón de mujeres donde había aproximadamente 131 prisioneras acusadas de ser miembros del Partido Comunista del Perú. Las fuerzas del gobierno destruyeron el edificio utilizando armamento de guerra de grueso calibre, que incluía artillería pesada, armas automáticas, morteros, cohetes instalaza, granadas, dinamita, explosivos plásticos, cohetes lanzados desde helicópteros artillados, cañones, armas incendiarias y gases asfixiantes que atacan el sistema respiratorio causando un dolor atroz. El asalto duró hasta el 9 de mayo y concluyó con la destrucción del pabellón 4B donde las prisioneras habían buscado refugio. Este pabellón albergaba alrededor de 460 prisioneros acusados de ser militantes de Sendero Luminoso. El 9 de mayo, cuando los sobrevivientes salían del pabellón 4B, las fuerzas de seguridad empezaron a ejecutar selectiva y sumariamente a los prisioneros” (91).

Santiago Martín Rivas, jefe operativo del grupo paramilitar Colina, cuenta que la planificación para el ingreso mortal al

penal de Canto Grande se hizo en el SIN (Servicio de Inteligencia Nacional). El plan contó con la aprobación y apoyo del presidente Fujimori y de los altos mandos de las fuerzas armadas. El objetivo, dice Martín Rivas, fue “terminar con la Luminosa Trinchera de Combate y restaurar el principio de autoridad y darle un golpe mortal a Sendero”. Todo se había calculado en términos militares, y fue el mismo Martín Rivas que dirigió el grupo de elite. Los integrantes de este comando tenían los rostros cubiertos con pasamontañas, y el que dirigía el grupo (Martín Rivas) llevaba en las manos una lista de los dirigentes de Sendero Luminoso que serían asesinados. Cuenta Rivas, que parte del plan era que después de la matanza, Fujimori tenía que aparecer ante los medios de comunicación como el gran vencedor del terrorismo. «Se estableció inclusive un acto final propio de una guerra no convencional: una vez Fujimori tenía que aparecer en el lugar para dar el mensaje al enemigo: ‘la autoridad vuelve al gobernante, ya empecé a luchar y a derrotarte’» (92). Hay que recordar que después de la matanza, Fujimori que portaba chaleco antibalas y rodeado de un sequito de guardaespaldas se hizo presente en Canto Grande. Ahí en medio de los escombros del bombardeo y la sangre fresca de los prisioneros se hizo filmar para la televisión del Estado, imágenes que fueron difundidas en señal de victoria antiterrorista. Este cuadro dantesco fue una repetición, del espectáculo que protagonizó Alan García Pérez, el día siguiente de la matanza de prisioneros en el penal de Lurigancho el 19 de junio de 1986, cuando también filmó su triunfo contra el terrorismo en medio de humo y sangre de sus víctimas.

EXTERMINO DE PRISIONEROS EN CANTO GRANDE

Quizás los funcionarios de las ong y medios de comunicación de la izquierda legal, pensaron que nunca se iba a conocer

la verdad sobre la matanza de Canto Grande. Por ello, días después de este hecho sangriento, irresponsablemente usaron los mismos argumentos del gobierno, para ocultar las razones contrainsurgentes de este abominable hecho. Olvidaron que unos años después, en el 2003, Santiago Martín Rivas, mayor del ejército y jefe operativo del grupo paramilitar “Colina”, narraría minuciosamente la forma como se planificó el exterminio de los dirigentes de la guerrilla maoísta presos. Según el testimonio de Martín Rivas, la acción fue prevista con anticipación y la idea para eliminar a los prisioneros la planteó Montesinos, quien incluso presentó a Fujimori la lista de los fundadores de Sendero Luminoso y cercanos colaboradores de Abimael Guzmán Reinoso, presos en Canto Grande que serían asesinados, dice Martín.

La izquierda legal, tergiversando los hechos o repitiendo la propaganda estructurada en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para encubrir la planificación de este crimen masivo de prisioneros, cumplió el mismo rol cómplice que tuvo durante el exterminio de prisioneros en 1986. Bajo este propósito utilizó los mismos argumentos del gobierno para justificar el ingreso sangriento de las fuerzas armadas y fuerzas policiales. Con el objetivo de preparar el terreno para la ejecución de la operación “Mudanza 1”, se propagandizó que los “terroristas” se negaban a ser trasladados a otras prisiones”, que usaban las instalaciones para “adoctrinar y dar ordenes de muerte”, que se habían atrincherado y que contaban con abundantes armas de guerra. La izquierda, en coro con la derecha peruana, negó que la matanza de Canto Grande, fuera una obra planificada fríamente por Fujimori, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y las fuerzas armadas, para liquidar a los dirigentes presos de la guerrilla maoísta. La forma y los métodos utilizados en Canto Grande en 1992, tuvo similitud con los hechos sangrientos ocurridos en junio de 1986 bajo la presidencia del aprista Alan García Pérez. El plan militar para asesinar a los prisioneros y justificar una matanza que

se inscribió como parte de la guerra contrainsurgente, fue un objetivo del gobierno después del 5 de abril de 1992, cuando las fuerzas armadas tomaron el control absoluto del Estado. Según Martín, el asesinato de dirigentes resultó clave para la posterior derrota de la guerra subversiva dirigida por el PCP, y descarta que el fin del Partido Comunista del Perú (PCP) se iniciara en setiembre de 1992 cuando fue capturado el jefe del grupo subversivo. «Es falso cuando se dice que la captura de Guzmán trajo abajo a Sendero. Fue al revés. Guzmán cayó porque hubo una acción clave, la muerte de sus trece dirigentes. Se quedó sin cuadros. Se quedó solo. Fue un mazazo para la organización senderista» (93).

Resumen Semanal que edita Desco (la ONG de Henry Pease), dijo con beneplácito, que el 9 de mayo a la 18.20 horas, había “caído, el reducto senderista tras un asalto frontal ejecutado por comandos de la policía...luego de mas de un ultimátum exigiendo la rendición” (94). Pilar Coll, vinculada a la iglesia católica y a la izquierda legal, estuvo en los alrededores de Canto Grande el mismo día de este hecho. En ese lugar, la televisión oficial no la buscó al azar, y en su discurso televisivo dio sus razones para encubrir las causas verdaderas de este crimen masivo en esta prisión. Acusó a la corrupción “en los aparatos del Estado”, que habían permitido que los prisioneros “se atrincheren con tanta efectividad e incluso que tengan armas automáticas...Nos parece absurda la negativa de las reclusas que se niegan al traslado” (95). Pilar Coll coincidía con Fujimori, quien en los preparativos de la acción de Canto Grande había declarado que “Habrá gran matanza pero será por las armas de los terroristas” (96). Señalar que los prisioneros acusados de subversión “tenían armas” y que se había a “atrincherado en la prisión”, fue parte de la propaganda que antecedió el operativo “Mudanza 1”. En esta campaña de desinformación participaron activamente los medios de comunicación que servían de portavoces de Izquierda Unida (IU). “Frustran fuga masiva de terroristas”, y en Canto Grande se

“adoctrinan a sediciosos mañana tarde y noche”, dijo con anticipación el diario La Republica, que dirigía en ese entonces Gustavo Mohome Llona, uno de los dirigentes de IU.

Marco Del Maestro, un investigador de la ONG Desco, copió la versión del gobierno, y dijo que las cárceles no solo se habían convertido, en “centros de reafirmación subversiva, terrorista y de adoctrinamiento, sino que inclusive se dirige y organiza lo que se considera hoy el delito que produce mayor temor”. Junto a estos argumentos, el investigador de Desco, señaló que si la población había “resistido pacíficamente, con el silencio y la negación cómplice al terror (de sendero luminoso) y a la incorporación exitosa de percepciones ideologizadas de la realidad, contrarias a lo que es un orden democrático”, ahora se había hastiado y aceptaba que maten a todos los prisioneros (97). La revista SI, era una publicación que defendía la línea política de IU, en cuya dirección habían tres conocidos militantes y patrocinados de esta izquierda (Ricardo Uceda, Santiago Pedraglio, Iván Degregori), decía el 17 de mayo, que el “operativo de reubicar a las detenidas...no solo se halla dentro de las atribuciones evidentes del gobierno, sino que responde a la necesidad de descongestionar el penal de Canto Grande, donde Sendero Luminoso tenía dos pabellones como territorios liberados...”. La revista de Uceda, defiende a Fujimori y para ello hace una comparación fantasiosa de los hechos de 1986 con los de 1992. “En 1986 se trató de un premeditado genocidio...En esta ocasión el objetivo no ha sido exterminarlos y es evidente que el control gubernamental y militar evitó excesos de la magnitud de hace seis años. Es difícil, en estos momentos, precisar si...hubo desmanes de las fuerzas del orden...Fujimori hizo mejor las cosas que Alan García” (98). ¡Bravo dijeron desde el gobierno y las fuerzas armadas!.

Mónica Feria Tinta, no lo podía creer, se dice en el testimonio. Ella, “estaba encima de varios cadáveres quemados y, al igual

que ella, cubiertos de sangre. Intentaba salir de los pabellones A1 y 4B de la cárcel llamada “Miguel Castro Castro”, en Lima, Perú. Los fogonazos anaranjados aparecían y desaparecían constantemente en medio del estruendo de las bombas y granadas, y de los disparos provenientes de todos lados. Cada bomba demolía las paredes de la cárcel donde estaban hacinados como 133 mujeres y 400 hombres sospechosos, acusados de ‘comunistas’. Los que asomaban la cabeza por la ventana recibían un preciso tiro en la cabeza. Otro reo, Luis Ángel Pérez, pensó que estaba en el infierno porque todo se le volvió color naranja. Sentía que en cada estallido moría para darse cuenta de que aún estaba allí, rogando por morir. Una y otra vez, una y otra vez, incansablemente. Miembros elite de la policía, la marina y el ejército, apoyados con helicópteros artillados, tanques, morteros, y francotiradores que utilizaban rifles con balas de alta velocidad, atacaron esa prisión desde la madrugada del 6 hasta el 9 de mayo de 1992” (99).

Mónica Feria no murió, y sobrevivió para narrar su odisea en la prisión de Canto Grande. Fue liberada y en busca de seguridad partió a Europa para residir en Inglaterra. Como víctima y sobreviviente de Canto Grande hizo una denuncia penal contra el estado peruano. La denuncia fue presentada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica. En Perú sobrevivir a un exterminio es un grave delito, y más aún si este sobreviviente acusa a sus verdugos. Mónica Feria fue perseguida internacionalmente por el Estado peruano. En diciembre del 2007, acusada de “apología” y terrorismo” fue detenida por la INTERPOL en el Aeropuerto de Colonia (Alemania). Irá a la cárcel”, dijeron los jueces peruanos, que a pesar que no se cubren los rostros con capuchas como en la época de Fujimori, siguen siendo tan corruptos como antes. El gobierno exigió su extradición, y el mismo Francisco Soberón, director de la Asociación Pro-Derechos Humanos del Perú (APRODEH), una ONG que recibe millones de dólares del extranjero para “defender los derechos humanos”, dijo públi-

camente que se acelere la extradición de la terrorista en manos de la policía alemana. En los primeros días de septiembre del 2008, el poder judicial de Alemania rechazó el pedido de extradición que había formulado el Perú contra la abogada Mónica Feria. Este caso ilustra la inmoral conducta de las ong bajo control de la izquierda legal peruana. No solo son cómplices de las atrocidades que diariamente se cometen contra miles de ciudadanos, sino que como en el caso de Mónica Feria, son comparsas de campañas represivas de los gobiernos de turno.

En el balance de los hechos que hace el Instituto de Defensa Legal (Ideele), su primera preocupación fue que el operativo militar en Canto Grande, terminara favoreciendo a la guerrilla maoísta, es decir como se difundió con destreza maquiavélica desde el sector oficial, que la “inmolación senderista” (muerte de los subversivos), servía a los planes guerrilleros, y que ello había sido calculado fríamente por Abimael Guzmán. En esta dirección Ideele, dice “un desenlace con tanta violencia, con tantos muertos y tantas acusaciones contra el gobierno, puede terminar beneficiando a Sendero”. Para Ideele, de la misma forma que para el gobierno, lo que venía ocurriendo en el penal de Canto Grande “era inaceptable”, y que era evidente que en “ningún país del mundo, sea cual fuera su régimen político hubiera permitido que esto ocurra. Realmente es un escándalo, ver, a través de videos y fotografías exhibidos por diversos medios de comunicación, que los senderistas decidían quienes podían entrar a su pabellones, que tenían toda una organización autónoma para su alimentación y asistencia medica y que en los muros habían hecho pintas y dibujos enormes y trabajos, alusivos a sus acciones lideres, que podían verse, incluso, desde el exterior”. Lo único que faltó que diga Ideel, era que los senderistas, tenían el control de las fuerzas armadas y fuerzas policiales.

En esas imágenes, dice esta ONG de la izquierda legal, se les

veía también perfectamente uniformados con camisas rojas, llevando banderas del mismo color, realizando sofisticadas marchas, operas china y montajes en los que se representaba hasta asesinatos de policías y militares. Por ello, desde diferentes sectores se venía exigiendo al gobierno que tomara las medidas para que las cárceles dejaran de ser “trincheras de combate...”. Para Ideele, no hay dudas, “los senderistas tenían armas de fuego y otras rudimentarias, además de explosivos caseros, también contaban con generador eléctrico, huerta, granja, sistema de almacenamiento de agua, palomas mensajeras, material de imprenta..”. (100).

CAPITULO QUINTO

DOS DECADAS DE LUCHA ARMADA

Usar la propaganda, como elemento de la guerra y vencer en este terreno al contrincante y redimensionar la imagen de las propias fuerzas, es un método clásico y tan antiguo como el origen mismo de las guerras. El nuevo Observador una revista francesa (marzo 2008), da cuenta de la propaganda hitleriana en los inicios de la segunda guerra mundial. El avance de las tropas alemanas en 1940, dice esta revista, iba acompañado de 1,500 periodistas, camarógrafos, cineastas y toda suerte de publicista, cuya tarea específica era presentar la “epopéyica” marcha de las tropas nazis como si fuera un paseo campestre. Para este fin los rubios soldados del III Reich, de acuerdo al libreto de Goebbels ministro de propaganda de Hitler, eran guerreros épicos, esbeltos, ágiles y felices, mientras que los soldados franceses eran cobardes, decadentes, sucios, indisciplinados que cargaban en sus filas negros y árabes (1).

Cuando las tropas del ejército pisaron Ayacucho en diciembre de 1982, los más altos jefes de las fuerzas armadas anunciaron la inevitable proximidad del fin de Sendero Luminoso. Las poderosas fuerzas militares, decían los voceros del gobierno, han ingresado a combatir el terrorismo, y frente a ellos no habrá fuerza capaz de resistir apenas unos días y quizás unas semanas. Cuatro terroristas mugrientos no eran contrincantes valederos para un ejército con más de 200 mil efectivos y pertrechados con las mejores armas de guerra de

la industria bélica del momento, dijeron ministros y altos jefes de las fuerzas armadas. En diciembre de 1982, cuando dejó de ser un secreto que los militares tomaban la conducción de la lucha contrainsurgente, el general Luis Cisneros Vizquerra, apodado el “gaucho” y ministro de guerra en esos momentos, afirmó que a “Sendero Luminoso solo le quedan 24 horas de vida”, y que ese grupo acabaría con el año que se iba (2). Un mes después, en enero de 1983, el general Oscar Brush Noel, flamante ministro de guerra (había reemplazado al “gaucho”), aparte de calificar a los subversivos de “simples terroristas y asesinos”, anunció que antes del año nuevo, “el terrorismo sería definitivamente solucionado” (3).

Desde el inicio del conflicto armado en 1980, el gobierno utilizó todos los medios publicitarios a su alcance para presentar a la guerrilla maoísta como una banda de desarraigados sociales, terroristas y otros calificativos con los cuales se pretendió minimizar el fenómeno subversivo y dimensionar las fuerzas militares, a quienes se presentaba con una aureola de salvadores de la nación, soldados valientes y dignos. La enorme publicidad caló hondo en la opinión pública, sobre todo en el seno de las clases políticas del país. La misma Izquierda Unida (IU), no resistió hacer sus pronósticos para anunciar que Sendero Luminoso no duraría mucho en un enfrentamiento con los militares. Toda la operación será al parecer, rápida, decía Sinesio López desde El Diario Marka. Según este izquierdista, las fuerzas armadas habían calculado que un mes sería suficiente para pacificar la zona convulsionada. Para López, cuya versión reflejaba el sentimiento en la izquierda legal, los militares no tenían “interés alguno en desempeñar por mucho tiempo el rol de represores que no les corresponde, que distrae sus energías y que las desgasta y desprestigia” (4). En junio de 1983 fue el general Carlos Briceño, comandante general del ejército y presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien anunció que los “días del terrorismo en el Perú están contados” (5). Para el general Clemente Noel

Moral, el primer jefe del Comando Político Militar en Ayacucho en 1983, la subversión en Ayacucho “estaba prácticamente controlada y pacificada” (6).

EL CAMINO INEDITO DE LA SUBVERSION

Sobre si la subversión maoísta alcanzó algunos de los objetivos que se propuso se tejieron diferentes conjeturas y muchas de ellas sumamente contradictorias. Los críticos de Sendero Luminoso, en especial aquellos que se vincularon a los planes contrainsurgentes del Estado, intentaron negar cualquier avance militar a la guerrilla maoísta. Sin embargo fue este movimiento el que dominó la vida política del país durante 20 años. Si bien es cierto que los diferentes gobiernos, sin ningún resultado intentaron ignorarlo al inicio, fue este fenómeno el que en la práctica determinó el curso de lo que tenían que hacer y no hacer los representantes del Estado. La militarización del país, la abolición de derecho civil, la instauración de tribunales militares con jueces encapuchados, la supresión del “estado democrático”, y la supremacía del poder militar frente al poder político, se originaron en consecuencia al avance de la subversión. Desde el ataque a Chuschi en Ayacucho, hasta los días culminantes de la lucha armada (1980-2000), este proceso tuvo un desarrollo en curva ascendente tanto en lo militar como en lo político. En los inicios de la década del 80 los cuadros y militantes del PCP no pasaban de algunas docenas como lo han afirmado algunos de sus mismos dirigentes. Esa situación cambio en el transcurso del desarrollo del proceso armado, y con la dimensión histórica social que alcanzó dicho movimiento.

La mayoría de los estudios y artículos que se han abordado el problema subversivo en Perú, han mostrado una trama común, cuyo eje fue minimizar la envergadura del proceso armado. Junto con acusar a la guerrilla maoísta de terroris-

tas, de ser la perversidad de la humanidad, negaron cualquier avance y éxito a las fuerzas guerrilleras del PCP. En este terreno no faltaron los cálculos especulativos y las conclusiones subjetivas en el análisis de la subversión. Así por ejemplo, para Carlos Tapia, un “senderólogo” peruano, solo el Comité Regional principal de este partido (Ayacucho, Huancavelica y Apurímac), tenía en enero de 1990, 1,795 escuelas populares con un contingente de 16,865 miembros. Tapia anota que el número de efectivos del Ejército Guerrillero Popular (EGP) en la región era de 12,975 combatientes (7). Sin embargo, para el diario La Republica, en 1991, Sendero Luminoso solo tenía 3,570 militantes en todo el país (8). La diferencia entre la versión de Tapia y de La Republica resulta bastante diferente. De la misma manera para Federico Salazar (9) el PCP era en 1992 “el partido más importante del país”, y según sus cálculos, la guerrilla maoísta contaba con cinco mil militantes, sin considerar los periféricos. Pero para la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en su conclusión final del 2002, en las filas del PCP “siempre fueron pocos”, y al momento de dar inicio a la lucha armada en 1980 eran “520 entre militantes del partido y simpatizantes más cercanos” y solo “alrededor de 2,782 hacia 1990”, cuando este partido estaba en pleno auge y “su mayor extensión e intensidad (10).

No fue el número de militantes y de combatientes lo que determinó la dimensión de la guerrilla y del proceso subversivo. Sin dudas las fuerzas armadas, fuerzas policiales y diferentes grupos paramilitares que constituyeron el aparato contrainsurgente del Estado, fueron numéricamente hablando, superior a las fuerzas subversivas. En su mejor momento la fuerza militar del Estado concentró 627 mil efectivos considerando soldados, policías, y grupos paramilitares (rondas, grupos de defensa civil, etc.). La consistencia de la subversión radicó en un conjunto de factores, sociales, políticos y militares, que condicionaron un proceso armado al sentimiento general de liberación de un pueblo. La lucha armada, como expresión

objetiva de este proceso logró acelerar el ritmo de la lucha de clases y desencadenó en el pueblo una fuerza incontenible en busca de justicia y de sanción contra los responsables del hambre y la miseria del pueblo. Su fuerza fundamental se relacionó a la expectativa que este proceso generó entre los pobres, y sobre todo porque constituyó una esperanza para resolver definitivamente el hambre y miseria del pueblo. Cuando la guerrilla entraba a un pueblo andino, y después de doblegar a las autoridades sancionaba con rigor al juez o alcalde corrupto, era una forma práctica y sin equívocos de ganarse a su favor a la población. Mientras mantuvo esta línea de acción sostenida en conseguir reivindicaciones históricamente negadas por el Estado, la guerrilla creció hasta alcanzar niveles que aterrorizaron a los representantes del Estado. Durante el tiempo que el PCP se acercó a las masas, sin estrabismos ideológicos o imposiciones mesiánicas, el proceso se desarrolló con celeridad y fuerza.

Un campo poblado por millones de campesinos empobrecidos sin tierras y explotados en un sistema semifeudal, una clase obrera con salarios de hambre, y una clase política corrompida y en decadencia total, fueron factores objetivos para que la guerrilla lograra implantarse solidamente en todo el país. Para. La Guerra Popular Prolongada, es una obra teórica militar escrita en 1938 por Mao Tse Tung, durante la guerra de resistencia contra Japón. Esta teoría, según Mao, tiene tres etapas; la primera se refiere a la defensiva estratégica de la revolución (ofensiva del enemigo); la segunda es el equilibrio estratégico (la guerrilla equipara sus fuerzas con las del enemigo) y la tercera es la ofensiva estratégica de la revolución y la retirada estratégica del enemigo (11). En esta misma obra teórica Mao desarrolla sus tesis sobre la guerra de guerrillas, y la estrategia militar denominada el camino de “Cercar las ciudades desde el Campo”. La Guerra Prolongada se conduce bajo estrictos principios revolucionarios que tienen que ver con la construcción de Bases de Apoyo en el campo y la parti-

cipación directa de las masas, en particular la intervención de las masas campesinas.

Una guerra por el poder no se decide solamente en el campo militar, enseñan los manuales de estrategia militar. El pensamiento marxista ha aportado enormemente a comprender este problema, y anota que un movimiento armado que se plantea la conquista del poder, es antes que una fuerza inserta en la dinámica de la lucha de clases cuya base objetiva para su desarrollo es la crisis del Estado y la descomposición del sistema político impuesto durante siglos. En este aspecto, la fuerza subversiva, representa las aspiraciones históricas de las masas populares. En este sentido la guerrilla maoísta, a pesar de sus desparpajos ideológicos que serían causa fundamental para su derrota, atrajo hacia ella, un sector importante de la población. Por ejemplo, el antropólogo francés, Henry Favre, anota que en el sector de la población urbana apoyaba lo que se revelaba progresivamente como una verdadera insurrección. Esto estaba reflejado dice Favre, en la cantidad de slogans a favor de la lucha armada escritos en las paredes de las barriadas y en la frecuencia con la que aparecía en la noche, “en lo alto de las colinas aledañas, resplandecientes hoces y martillo” (12).

Si las crisis son permanentes en las sociedades divididas en clases sociales, los procesos armados agudizan aun más este problema endémico, sobre todo en los sistemas de capitalismo subdesarrollado mezclados con latifundismo como es el caso peruano. Esta crisis, que tiene su base material en el sistema económico, se reflejó en el campo político y la vida cotidiana de la población. Durante las dos décadas que duró el proceso armado, los partidos políticos de la burguesía y terratenientes, incluidos las representaciones de izquierda, se convirtieron en taparrabo de los militares y abandonaron cualquier reivindicación nacional o popular. La elección presidencial en 1990 de Alberto Fujimori, un oscuro personaje

sin organización política y carente de cualquier antecedente en la lucha social, es una de las pruebas del desprecio que sentía la población hacia los partidos del medio oficial, incluida la izquierda oficial. Un elemento de esta crisis se refiere a que durante dos décadas, más del 50% del territorio nacional los Comandos políticos militares reemplazaban a la administración civil y ello sirvió para convertir el Perú en inmenso cuartel militar donde los soldados decidían el destino de los ciudadanos. La militarización del país fue en forma creciente, y se relacionó al aumento de la fuerza subversiva. En 1991, el 48.7% de los peruanos (mas de diez millones de habitantes) vivían en zonas declaradas en emergencia, pero en 1995 es el 58.0%, es decir cerca de 12 millones de peruanos los que tenían que vivir en territorio declarado en guerra interna (13). El predominio militar se mantuvo hasta cerca del año 2000 y esta situación solo cambio cuando la subversión dio muestras de agotarse como proyecto revolucionario, hasta convertirse en una caricatura de movimiento armado.

Las fuerzas armadas no escaparon al desmoronamiento moral y político de la sociedad oficial peruana. Los síntomas de desmoralización y temores en la fila de los militares crecieron paralelo al fortalecimiento de la subversión. Deserciones en sus filas, robos de armas para ser vendidas a la subversión, solicitud de retiro de decenas de oficiales, vínculos con el narcotráfico internacional, corrupción general en sus más altos rangos, desempolvamiento de viejos y rancios discursos, fueron algunos de los síntomas de la crisis en el aparato militar. En 1991, el general Víctor Malca, ministro de Defensa de la época, junto con respaldar al gobierno de Fujimori, convocaba a la juventud “el sentido de Dios y Patria”, para que no caiga victima del terrorismo“(14). Enrique Obando, un antropólogo peruano señalo en 1991, que las fuerzas armadas estaban “mal pagas y mal pertrechadas”, y que en esas condiciones no podían tener éxito en la lucha contra la subversión. Dijo Obando, que a causa de esto una gran cantidad de “oficiales

de las fuerzas armadas se habían retirado de los cuadros del ejército” (15).

AVANCE SUBVERSIVO. PÁNICO EN LA ORILLA DEL ESTADO

La revista *Si*, que nadie habría podido dudar de su antisenderismo, decía en 1987: “Silenciosamente, Sendero Luminoso está ganando la guerra. Mientras tanto, los militares se mueven en un peligroso péndulo, que va de la matanza, que no deja heridos ni permite investigaciones, al acuartelamiento mas hermético” (16). “Perdemos la guerra”, decía esta misma revista en abril de 1988, y en forma alarmante anunciaba, que si hasta 1982, las fuerzas de la guerrilla maoísta, estaban concentradas básicamente en el departamento de Ayacucho, “hoy en día su radio de acción abarca la mayor parte del territorio nacional”. De acuerdo esta publicación, desde 1980, y “perdiendo 2 militantes por día, Sendero consiguió implantar bases en todos el país” (17). El general del ejército Adrián Huamán Centeno, quien había sido jefe del Comando Político Militar de Ayacucho en 1984, decía que no se requería ser “estratega para darse cuenta de lo que estaba pasando”, y que la ausencia de democracia y de autoridad estaba siendo llenada por Sendero Luminoso (18).

En 1990, el diario *Expreso*, un medio bastante comprometido con el régimen de Alberto Fujimori y las fuerzas armadas, daba un grito de alarma señalando que nada paraba el avance de la subversión. Lejos de retroceder, decía este diario, “esta avanzando. Las estadísticas muestran que cada día Sendero Luminoso protagoniza un numero mayor de acciones y que su presencia viene ampliándose en el territorio nacional, asesinado o expulsando autoridades locales para reemplazarlas por las de la dictadura senderista” (19). En 1990 para el general Adrián Huaman Centeno, el Estado perdía la guerra en

todos los frentes. Sendero Luminoso estaba en capacidad de tomar el poder en 1990. “Pero si ya esta acá cerca. Ya están en Lima”, dijo este alto militar peruano (20). Fernando Rospigliosi, periodista de la revista *Caretas* y antiguo militante de Vanguardia Revolucionaria (VR) que durante el gobierno de Alejandro Toledo se convirtió en ministro del Interior, señalaba en 1992, que la proximidad de Sendero Luminoso en Lima hacia “temer a muchas personas que la subversión puede ganar la guerra” (21). El pánico era extremo en la versión de Rospigliosi, que argumentaba que Brasil y “obviamente los Estados Unidos”, intervendrían en caso de un deterioro total de la situación en el país. Para el general Sinesio Jarama. “En 1992 Sendero Luminoso logró desarrollar un nivel de organización política importante, bastante consolidado... También han consolidado lo que ellos llaman el Ejército Guerrillero Popular...”(22).

A modo de comparación histórica se puede buscar puntos de referencia entre las acciones del Estado para enfrentar la guerrilla de 1965 y las acciones aplicadas para detener la lucha armada iniciada en 1980. En la guerra contrainsurgente de 1965 el Estado movilizó 5 mil efectivos militares para hacer frente al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y al Frente de Liberación Nacional (FLN), dos grupos subversivos que basaron sus acciones armadas en la experiencia revolucionaria de Cuba en 1959. A las fuerzas armadas solo le bastó 6 meses para liquidar completamente la guerrilla del MIR y la del FLN. El ejército tomó a cargo la lucha guerrillera en julio de 1965 y en diciembre del mismo año ya había acabado con las últimas columnas guerrilleras, mientras que para derrotar a la guerrilla maoísta requirió casi 20 años. Para enfrentar la guerrilla del Partido Comunista del Perú (PCP), el Estado movilizó 627 mil efectivos considerando militares, policías, y grupos paramilitares (rondas, grupos de defensa civil, etc.). En la guerra contrainsurgente contra el MIR y el FLN las fuerzas represivas solo tuvieron, según cifras oficiales, 32 bajas

considerando 15 militares y 17 policías (Las guerrillas en el Perú y su represión. Departamento de relaciones publicas del Ejército. Ministerio de Guerra del Perú 1966). En la guerra contra la guerrilla maoísta, según cifras oficiales, las fuerzas armadas y fuerzas policiales perdieron 1,674 miembros. En esta cifra no se contabilizan miles de efectivos de rondas campesinas, rondas urbanas, grupos de defensa civil y otros grupos que participaron en la lucha antiguerrillera bajo la dirección de los militares, y que fueron muertos por las fuerzas guerrilleras.

DE CHUSCHI A LIMA

A la distancia de la derrota del proceso armado dirigido por el Partido Comunista del Perú (PCP), que algunos han denominado Sendero Luminoso, y con la claridad que otorga el tiempo es posible hacer un breve balance de ese movimiento social que durante dos décadas puso en peligro la estabilidad Estado peruano. Ese proceso armado constituye uno de los hechos sociales más importantes de la historia peruana. Sus huellas, en el campo militar y político, perduran en la memoria histórica del pueblo. Reflexionar sobre este movimiento y las causas que la generaron lleva a revisar algunos de los elementos de carácter ideológico y político que rodearon veinte años de lucha de clases. Las épocas revolucionarias son las que ofrecen más datos que cualquier tratado antropológico o histórico, dicen las ciencias sociales. Para Marx y Engels, en su interpretación dialéctica materialista de la historia, el análisis de la lucha de clases constituye una fuente inagotable de la verdad objetiva y de comprensión de la sociedad. La lucha armada que estalla en 1980, y que se prolonga consistentemente hasta cerca del año 2000, constituye un acto sorprendente de la revolución social en Perú. En su desarrollo mostró, la fortaleza de las clases mas pobres, y los sacrificios extremos que pueden hacer los oprimidos cuando hastiados del sistema que

los oprime, luchan con las armas en las manos para cambiar el curso de la historia. Este proceso representa una experiencia única en la lucha del pueblo peruano, y la derrota a causa de la traición de sus dirigentes, no le resta méritos históricos. Por el contrario, en el futuro de la lucha por el socialismo en Perú; esta guerra iniciada en 1980 se deberá tomar en cuenta, no para repetir sus errores, sino para rescatar las enseñanzas que dieron los campesinos, los trabajadores, los estudiantes y demás masas pobres con su trascendental participación como combatientes armados o sin armas.

Este proceso, no fue como se ha dicho en la propaganda oficial, una lucha entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas, donde el campesinado y otras clases pobres eran víctimas de ambos bandos. “El pueblo entre dos fuegos”, constituyó una fabricación de la estrategia contrainsurgente del Estado, que en su aplicación fue sostenida por las ONG, la iglesia y los partidos políticos de derecha e izquierda. Así por ejemplo el Instituto de Estudios Peruanos, una ONG de la izquierda legal promocionó un estudio que se tituló: “Entre dos fuegos”, en el que argumenta que el “problema de la sociedad civil peruana atrapada entre dos fuegos...”, es la violencia senderista y la respuesta de las fuerzas armadas, generadoras de verdadero pánico. (Michael L. Smith. Entre dos fuegos. ONG, desarrollo rural y violencia política. Editado por el Instituto de Estudios Peruanos, marzo de 1992). En este tipo de formulación simple para analizar la violencia en Perú, el Estado y sus clases políticas, están exculpadas de los crímenes y violencia aplicada como parte de la guerra contrainsurgente. Están al margen de cualquier responsabilidad penal y política, y sobre todo que son presentadas como víctimas de Sendero Luminoso y las fuerzas armadas. Esta invención tuvo el objetivo de presentar a la guerrilla aislada del pueblo y justificar la acción criminal de las fuerzas armadas, que había tomado el control y dirección de la guerra contrainsurgente sustentada en la represión brutal de la población civil. En Perú o en cualquier

parte del mundo, un proceso armado que se enfrenta a un Estado sostenido por las grandes potencias mundiales, no podrá desarrollarse ni mantenerse mucho tiempo, si no cuenta con el apoyo de una parte considerable de las clases oprimidas. El proceso armado dirigido por el PCP, no hubiera podido salir de los límites de Ayacucho y extenderse a todo el país, si no habría tenido la capacidad de concitar la atención favorable de amplias masas pobres de todo el país, sobre todo del campesinado de origen andino que desde el inicio del conflicto armado se mostró como extraordinario combatiente y que durante el proceso alcanzó una dimensión épica en la lucha contra el Estado y sus fuerzas represivas.

EL VOTO DINAMITERO DE SENDERO LUMINOSO

El 17 de mayo en las primeras horas de la noche de 1980, un día antes de las elecciones generales para elegir un presidente civil, la guerrilla maoísta inició el movimiento armado que se prolongaría durante dos décadas. Esta acción se efectuó en Chuschi, un pequeño y alejado pueblo del departamento de Ayacucho ubicado a 2,680 metros sobre el nivel del mar. Pocos peruanos conocían la existencia de este pueblo, casi una aldea, perdida en medio de las altas cumbres andinas. El objetivo guerrillero fue tomar el local del registro electoral y destruir las ánforas y padrones electorales que debían utilizarse al día siguiente en las elecciones organizadas por la dictadura militar. El grupo de atacantes pertenecientes al Partido Comunista del Perú (PCP), no eran más de cinco, y sus “armas de guerra” eran rudimentarios palos y algunas punzantes herramientas de metal que utilizan los campesinos en las faenas agrícolas. La acción, no tuvo ninguna resistencia de la población que fue tomada por sorpresa y los flamantes subversivos no tuvieron problemas para destruir el aparato electoral local. No se registró ninguna pérdida humana y no hubo heridos

de ningún lado. Algunos días después cuatro miembros del grupo que atacó Chuschi fueron capturados cuando dormían tranquilamente en una choza no muy lejos de este pueblo.

La acción armada a Chuschi fue planificada y ejecutada por Comité Regional Principal de Ayacucho una de las bases regionales más importante del PCP. A este Comité pertenecían conocidos miembros de este partido como el conocido intelectual Hildebrando Pérez Huaranca, el médico Carlos Mata, y las estudiantes Edith Lagos y Carlota Tello Cuti, y otros que morirían en combate o asesinados en las prisiones. Abimael Guzmán y Augusta La Torre, número uno y dos de este partido, estaban en Lima cuando se inició el ataque a Chuschi. Se enteraron de la acción armada al medio día del 17 de mayo de 1980, cuando se estableció el contacto telefónico entre Ayacucho y Lima. Según el testimonio inédito de Delia La Torre, su hija Augusta y Abimael Guzmán se encontraban en Lima cuando ocurrió el ataque en Ayacucho. Según Delia La Torre, Augusta entró corriendo a la sala principal de la vivienda y gritó a viva voz, “¡ Ya se inició la revolución!”. Detrás de ella Guzmán caminaba lentamente y con una expresión de plena satisfacción movió la cabeza para reafirmar lo que decía con ahínco su joven esposa (23) Guzmán, que unos años después se convertiría en el “presidente Gonzalo”, y Augusta cuyo nombre de militante era “Nora”, vivían desde 1979 en la casa de Carlos y Delia La Torre Carrasco, los padres de Augusta y suegros del jefe del PCP. La vivienda era el número 510-B y estaba ubicada en la avenida Pershing cerca de la Residencial San Felipe en Jesús María. Durante 20 años se elucubraron las historias más inverosímiles sobre la participación de Gonzalo en tal o cual batalla guerrillera. No faltaron lo que vieron a Gonzalo al frente de una poderosa columna guerrillera atacando cuarteles militares en los andes y en la selva. Gonzalo a diferencia de Mao Tsetung a quien tanto pretendía imitar, nunca participó en acciones armadas o confrontaciones directas con la policía y el ejército. Desde el

inicio del proceso armado, hasta su captura en 1992, estuvo viviendo clandestinamente en zonas de clase media en Lima.

Un alto jefe de la policía en la época recuerda el ataque a Chuschi de la siguiente manera: “La subversión de Sendero Luminoso cogió de sorpresa a todo el mundo; no estuvieron preparados para acometer, enfrentarse a este problema ni los mandos militares ni los mandos policiales ni los dirigentes políticos... Yo recuerdo que fue en los años ochenta cuando precisamente se inició en Chuschi, la acción terrorista de Sendero Luminoso ... Esa acción de Chuschi y las que vendrían después, el atentado en la Municipalidad de San Martín de Porres, a la tumba de Velasco, la aparición de cuatro perros colgados en La Colmena, fueron los primeros datos que recogimos. Y lo cierto es que, en ese momento, no se le dio, pienso, la importancia debida. Luego ya recibimos informaciones de Ayacucho de algunas incursiones donde el problema iba tomando una dimensión mayor” (24). Para Gustavo Gorriti “la guerra ya había comenzado y uno de los bandos (el gobierno y los militares) no lo sabía. Dice el periodista que la atención, en ese entonces, estaba puesta en la “trasferencia del gobierno...” (25).

Con esta acción guerrillera bastante rudimentaria se inicio lo que mas adelante seria el conflicto armado más sobresaliente de la historia social peruana. En el campo de los partidos políticos y del gobierno, el ataque a Chuschi no tuvo ninguna repercusión política inmediata importante, y si su objetivo había sido boicotear las elecciones presidenciales, ello no fue así. El proceso electoral se efectuó sin mayores sobresaltos. El 28 de julio, sin ningún contratiempo, los militares entregaron el gobierno a los civiles y las elites políticas dieron inicio a una “primavera democrática” que 20 años mas adelante costaría al Perú cerca de 70 mil muertos en una guerra interna sin precedentes en la historia de este país. El gobierno y los partidos políticos minimizaron esta acción y con desprecio

la calificaron como una actividad de bandidos o de abigeos (ladrones de vacas y otros animales domésticos). Se eligió un presidente civil, y el parlamento se vio concurrido por un nutrido grupo de representante de la izquierda legal que desde sus confortables butacas forradas con terciopelo exigirían, cuando vieron que la subversión crecía y que amenazaba la estabilidad del Estado, represión contra los “terroristas” que no respetaban el “orden constitucional”, la “democracia representativa”, y las leyes del Estado. Para el Partido Comunista del Perú (PCP), esta primera acción marcaba el “inicio de la guerra de guerrillas”, y atizaba “las siempre vivas llamas de la guerra popular” (26). En agosto de 1980, a solo 4 meses después de la acción del 17 de mayo de 1980, el PCP reúne a su Comité Central y hace su primer balance de la guerra que había iniciado. “Brillante y rotundo éxito”, además de la “gran repercusión histórica que había obtenido el partido”, se dice en la conclusión (27). El balance consideraba el ataque a Chuschi y otras que se ejecutaron en el departamento de Ayacucho, Junín y Huancavelica. Según cifras del gobierno, en los cuatro primeros meses de conflicto armado se contabilizaron 99 acciones militares de la guerrilla maoísta.

“El 28 de julio, mientras el general Morales Bermúdez entregaba el poder al presidente electo, fueron dinamitados los Concejos Provinciales de Cangallo y Huancapi. En Cerro de Pasco fue asaltada la compañía minera Atacocha, sustrayéndole más de 350 cartuchos de dinamita. A día siguiente, en otro operativo similar, se sustrajeron 2,200 cartuchos del Ministerio de Transportes en Pomabamba, Ayacucho” (28).

AYACUCHO, DEL HAMBRE A LA LUCHA ARMADA

El cuadro social que registraba el Perú en 1980, era dramático para las masas populares. Los años 1976-1980, dice Javier

Iguíñez, constituyen una de las etapas más duras de la historia social peruana. “Es probable que nunca antes se haya experimentado un deterioro tan profundo y expansivo en el nivel de vida de la población peruana” (29). Del conjunto de la miseria del Perú, Ayacucho ocupaba el segundo lugar de los departamentos más pobres del país. Un rasgo de la pobreza ayacuchana estaba configurado por su baja contribución al producto nacional bruto (PBI). En 1972 con 3% de la población nacional solo producía el 1.67 del PBI nacional, y en 1981 su contribución al PBI bajaba a 1.01 (Fuente INEI, agosto 2002). En 1972, el producto bruto interno per capita en Ayacucho era de 7,782 soles, mientras que el PBI per capita para todo el Perú, alcanzaba 26,661 soles. El 69.3% de la población económicamente activa (PEA) estaba empleada en la agricultura, y de ese porcentaje más del 40% del campesinado trabajaba bajo un régimen laboral semifeudal mediante contratos extralegales y recibía en lugar de “salario” productos agrícolas que el mismo tenía que producir en las tierras de los “patrones”. Solo el 17.7% de la población con trabajo fijo tenía un salario que apenas pasaba del ingreso mínimo vital. Este departamento registraba las tasas más altas de analfabetismo del país (27% en las zonas urbanas y 55.2% en el sector rural (30).

Luis Lumbreras Salcedo, es un eminente antropólogo peruano y es originario de Ayacucho. Entre marzo de 1960 y febrero de 1996, fue profesor de la Universidad San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho). El habla de la situación económica social que encontró la guerrilla maoísta cuando inicio el proceso armado. Para Lumbreras, el Ayacucho que encontró en 1980 Sendero Luminoso, era una tierra convulsionada por grandes movilizaciones de los campesinos, y donde seguía existiendo el “pongaje” (el campesino semi ciervo) y el yanacónaje (31). Según Lumbreras, en Ayacucho, la pobreza y la injusticia, era parte “indisligable del desarrollo sincrónico y sincrético que se da a lo largo y ancho de este país. Pero el antropólogo va

más lejos, y anota que las condiciones que se encuentran en Ayacucho, “son condiciones que están conectadas o que se asemejan a situaciones que se encuentran en el Cuzco o al sur, o en Huancayo o en el norte” (32).

Los problemas sociales más inmediatos que rodearon el estallido de la lucha armada en 1980, fueron las grandes movilizaciones campesinas desde los primeros años de la segunda mitad de la década de 60 y toda la década del 70. En estas luchas destacan las movilizaciones de los campesinos en Andahuaylas y Apurímac en los años 1973 y 1975, cuando los campesinos debieron enfrentar la política agraria corporativa del régimen militar de Velasco Alvarado. El eje de estas luchas fue tomar las tierras de los gamonales y recuperar las tierras que las comunidades campesinas habían perdido durante el desarrollo de la propiedad terrateniente y las empresas capitalistas mineras. El campesino se opuso al proyecto corporativo del régimen velasquista, que en base a las tierras agrícolas pertenecientes a las grandes haciendas, había organizado las cooperativas agrarias de producción (CAP) y las sociedades agrícolas de interés social (SAIS con el propósito de bajar la tensión social en el campo, pero cuyos resultados fueron un fracaso y no sirvió para disminuir la lucha de clases en el campo. Cobraron notoriedad, por la violencia de sus acciones, las luchas campesinas de Lucanas (Ayacucho), en el departamento de Ancash, Piura, Cañete, Cuzco y otras regiones donde los campesinos se movilizaban para reconquistar sus tierras, apropiadas ilegalmente. Si el objetivo de la reforma agraria promulgada en 1969 por la dictadura militar del general Velasco Alvarado, fue desactivar una explosión social en el campo y disminuir el fuego de la lucha de clases en este sector, estuvo bastante lejos de lograr su propósito. Para el historiador Luis Lumbreras Salcedo, el régimen velasquista incluida su reforma agraria, que algunos sindicaron, de “revolucionaria”, fue en el mejor de los casos “un intento contrarrevolucionario a su manera; en otras palabras, una contrainsurgencia...el

gobierno de Velasco condicionó elementos y promesas en la conciencia social que al no cumplirse generaron demandas mayores de las que existían” (33). Para José Matos Mar y José M. Mejía, la reforma agraria velasquista, fue concebida como una respuesta adecuada a los agudos problemas de “seguridad interna” y como alternativa para “evitar una revolución popular”, pero no resolvió los “problemas de atraso económico del agro y marginación social y político de la mayoría de la población campesina” (34).

Un acontecimiento popular bastante cerca al inicio de la lucha armada en 1980, fue la lucha del pueblo de Ayacucho contra la dictadura militar velasquista. El 4 de marzo de 1969, el régimen “revolucionario” de las fuerzas armadas expidió un decreto supremo (DS 006-69) mediante el cual se suprimía la enseñanza gratuita. El Frente Único de Estudiantes Secundarios de Ayacucho decreta una huelga indefinida contra la decisión de la dictadura militar. Inmediatamente la lucha es asumida por el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, que exige el reestablecimiento de la gratuidad de la enseñanza. La lucha estalla en la ciudad de Huamanga el 13 de junio y se prolonga hasta el 22 de este mes. Esta lucha que en pocos días se convierte en una rebelión popular, fue reprimida brutalmente por los “Sinchis” (cuerpo antisubversivo de la policía), cuyo saldo dejó 20 personas asesinadas, entre ellos campesinos, niños, ancianos, estudiantes y mujeres. Esta lucha alcanzó su máxima expresión en Huanta, provincia del departamento de Ayacucho. Esta rebelión popular sin precedentes en los once años de dictadura hizo retroceder al régimen militar que, ante el temor que el ejemplo de Ayacucho se extienda a otras regiones del país, fue obligado a dejar sin efecto su decreto abusivo que señalaba que los alumnos que desaprobaban un curso como mínimo, perdían la gratuidad de la enseñanza, debiendo abonar la suma de cien soles mensuales durante el año escolar.

“Miles de personas se amotinaron en Ayacucho y en la vecina ciudad de Huanta. Las marchas de protesta y las huelgas de estudiantes, profesores y trabajadores fueron disueltas con gases lacrimógenos y cachiporras. Hubo arrestos y las multitudes se volvieron mas violentas. La policía fue atacada con bombas molotov Dos niños murieron a balazos por arrojar piedras; otra niña murió por una bala perdida y cuando su cadáver estaba siendo llevado hacia la camisería de Ayacucho los que cargaban la difunta fueron ametrallados. Las carreteras fueron bloqueadas, las líneas telefónicas derribadas y los puentes destruidos. El prefecto fue tomado como rehén. En Huanta bajaron olas de campesinos para unirse a la marcha. Una anciana campesina a la cabeza de la multitud fue de pronto ametrallada por la policía. En medio de una gran carnicería, la multitud inflamada tiro bombas incendiarias contra la camisería y obligó a la policía a que se retirara. En el momento en que la multitud iba a tomar la Plaza de Armas, llegaron refuerzos policiales y dispararon al azar sobre la masa. Ahí murieron por lo menos 14 personas y hubo 55 heridos”...(35)

El régimen velasquista, a través de una distorsión de los hechos, intentó desvirtuar la esencia social de la lucha del pueblo de Ayacucho. Bajo este objetivo, se inventó como era la costumbre en la época militar, cargar esta rebelión a factores externos, y no a la injusticia y a la lucha de clases. Se dijo entonces, que la CIA americana en alianza con el “ultra izquierdismo, “pretendía traerse abajo el gobierno revolucionario y antiimperialista”. Como cuenta Simon Strong, el Partido Comunista Peruano pro soviético, enganchado a la dictadura velasquista, se puso a la cabeza de la campaña para distraer la opinión publica mediante la farsa que los sucesos de Ayacucho habían sido propiciados por la CIA, los trotskistas, la ultrazquierda, y otras fuerzas contrarrevolucionarias. Durante la primera etapa de la dictadura militar (1968-1975), se hizo costumbre que frente a cualquier movimiento de lucha sin-

dical o popular, se culpaba a fuerzas contrarrevolucionarias que actuaban en forma coordinada desde el interior y exterior del país. Así para los incondicionales del régimen velasquista, entre ellos el viejo partido comunista liderado por Jorge del Prado, una de las dificultades de la “revolución” era la “acción concertada de los grupos antirrevolucionarios”, sobre todo de la “ultra izquierda dependiente del extranjero” (36). Ricardo Dolorier, un profesor ayacuchano perennizó el levantamiento popular en Ayacucho con la canción “La flor de retama”, huayno que recoge en sus letras el hecho épico y sangriento en 1969 en este pueblo que en los últimos 200 años ha llenado gloriosas paginas de la historia popular del Perú

La flor de Retama

*Vengan todos a ver hay vamos a ver
 en la plazuela de Huanta, amarillito flor de retama
 amarillito amarillando flor de retama.
 Donde la sangre del pueblo hay se derrama.
 Allí mismito florece amarillito flor de retama
 amarillito amarillando flor de retama.
 Por cinco esquinas están, los sinchis entrando están
 van a matar estudiantes, huantinos de corazón
 amarillito, amarillando flor de retama
 van a matar campesinos ,huantinos de corazón
 amarillito amarillando flor de retama
 La sangre del pueblo tiene rico perfume.
 huele a jazmines violetas geranios y margaritas
 a pólvora y dinamita
 a pólvora y dinamita! ¡carajo!!*

DESDE AYACUCHO A LIMA

El año 1980 (mayo-diciembre) culminó con 219 acciones subversivas, pero ello no influyó para modificar el discurso oficial del gobierno cuyos representantes siguieron tratando con desprecio a los guerrilleros y minimizando el crecimiento de los alzados en armas. Según un documento de 1990 de

la guerrilla maoista, el primer año de lucha armada que se denominó “Plan de Inicio”, culminó con 1,062 acciones. Al final de este año la actividad guerrillera se había extendido fuera de los límites de las regiones andinas, y ellas se hacían sentir incluso en Lima. Desde un inicio las acciones armadas estaban concebidas coherentemente, no para restringirse a los andes, sino para desarrollarse a todo el país, incluida la capital, considerada con razón, el centro medular de la vida política, económica y militar del Estado peruano. Recién en diciembre de 1980, José María de la Jara, ministro del Interior, se vio obligado a reconocer que la actividad guerrillera era intensa. El ministro anunció que las fuerzas policiales habían capturado a más de 100 subversivos, entre ellos a la joven estudiante universitaria Edith Lagos Sáenz, que más adelante se convertiría en una leyenda y en ejemplo de generación revolucionaria. El general de aviación, José Gagliardi Schiaffino, ministro de Aeronáutica en esos momentos, declaró que si la escalada “terrorista se acentúa” y escapa de las fuerzas policiales, las fuerzas armadas tendrían que intervenir en la lucha contra la subversión (37).

En 1981, las acciones guerrillas fueron más contundentes y aumentaron en todo el país. Según cifras del propio gobierno, ese año culminó con 715 acciones armadas. Esta situación obligó a los representantes del gobierno modificar la propaganda antusivbersiva, y junto con seguir minimizando el proceso armado, se acusó a Sendero Luminoso de hacer parte de una conspiración internacional. En septiembre de 1981, Fernando Belaunde, presidente del Perú, en un discurso público señaló, que los actos subversivos eran parte de una conspiración internacional, de “ahí deducimos” dijo, “se trata de un plan armado en el exterior, dirigido y financiado en el exterior” (38). Eduardo Ipinze, un alto jefe policial de la época, aseguro que había una conexión entre Sendero Luminoso y el narcotráfico internacional. En el campo de la subversión, este periodo marcaba una etapa de avance y de consolida-

ción en las zonas rurales del país. Como da cuenta un texto de la organización guerrillera, esta etapa había fortalecido el “camino de cercar las ciudades desde el campo”, y que se vislumbraba con mayor nitidez “el glorioso camino de la guerra popular” (39). Por el lado de las Fuerzas Armadas la situación era inquietante y la alta jerarquía militar presionaba al gobierno para que le otorgue luz verde para tomar las riendas de la lucha contra Sendero Luminoso. En esta dirección, el general Rafael Hoyos Rubio, Comandante General del Ejército, anuncio que los militares actuarían en la lucha contra el terrorismo cuando así lo decidiera el gobierno (40). Este general fue uno de los militares de confianza del general Juan Velasco Alvarado, y antes que se produzca el golpe militar de octubre de 1968, era jefe del Servicio de Inteligencia del ejército. Desde ese alto cargo militar estuvo involucrado la masacre de los guerrilleros de 1965 que lideró Luis de la Puente Uceda, fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Hoyos Rubio fue durante el régimen militar velasquista (1968-1975) ministro de agricultura y era sindicado como el “militar más izquierdista” del velasquismo.

Por el lado de la izquierda legal, bien instalada en el parlamento y en los municipios, el problema de la subversión creaba pánico en sus filas y hacia peligrar sus “conquistas” en el sistema “democrático”, y ponía en riesgo las dadas que había recibido de los grupos de poder y de los partidos burgueses. La lucha armada alejaba sus pretensiones de sentarse alguna vez en el sillón presidencial como lo habían anunciado en discursos y documentos electorales. Veía aterrorizada el avance de la subversión, a la que calificaba de “terrorista” y aliada de la derecha. Para Ricardo Letts, uno de los fundadores y dirigente de Izquierda Unida, las acciones de “Sendero Luminoso era el camino del fascismo” (41).

Para la izquierda legal, el avance de la subversión, aparte de debilitar sus posiciones junto a los partidos de derecha, la

desenmascaraba frente a las masas populares que durante años le había estafado con un discurso sobre la lucha de clases, el socialismo y otros tópicos de la revolución social. La izquierda legal, con bastante anticipación se alió al poder de turno y llamó a combatir a quienes se atrevían a atentar mediante acciones armadas contra la sagrada democracia peruana. En 1981, Víctor Hurtado, desde El Diario de Marka, vocero de Izquierda Unida (IU) en ese entonces, dijo que de “todas las fuerzas políticas, Izquierda Unida es la mas perjudicada por los atentados. IU debe ser por principio y por política, la organización que se ponga al frente de la condena contra el terrorismo”. Hurtado, en nombre de IU, exigió que la “lucha contra el terrorismo” debiera ser una de las principales banderas de los partidos de izquierda y de los gremios clasistas. La condena del terrorismo bien merece un mitin de Izquierda Unida”, dijo el articulista de IU (42).

En 1982, las acciones aumentan a 891 acciones (cifras oficiales), y en el aspecto militar el gobierno que durante mucho tiempo había hablado de los “cuatro gatos”, para referirse a la subversión, reconoció que las fuerzas policiales con más de 100 mil efectivos no habían sido capaces de detener el avance de la guerrilla. Los “Sinchis”, una especie de “Boinas Verdes” a la peruana, entrenados por militares americanos y considerados “rambos” de la lucha contrainsurgente, no fueron suficientes para detener una guerrilla que crecía al mismo ritmo del hambre, la miseria y el descontento en el país. Para la organización subversiva, en este periodo la lucha armada era victoriosa, y señalaba que el “gran camino está iniciado, será largo y difícil pero el triunfo es decisivo, pues “Salvo el poder, todo es ilusión” (43). Para el PCP, el “Plan de Despegar” (abrir zonas guerrilleras) que abarcó dos años y medio concluyó con 5,350 acciones guerrilleras (44). El plan de inicio, abarcó desde mayo de 1980 hasta diciembre de 1982 cuando las fuerzas armadas asumieron la planificación y conducción de la guerra contrainsurgente.

El 3 de marzo de 1982, la guerrilla maoísta realizó una acción espectacular en los andes. Atacó la prisión de Huamanga capital del departamento de Ayacucho con más de 100 mil habitantes y una docena de puestos de la policía y bases militares. El cuartel militar “Los Cabitos”, que en los años siguientes se convertiría en centro de torturas y exterminio de prisioneros, solo se encontraba a 2 kilómetros de esta ciudad. En el ataque que comenzó con los primeros rayos de luz del amanecer fueron liberados 247 presos, entre ellos 78 prisioneros de guerra que estaban recluidos desde el inicio de la lucha armada. Entre los subversivos liberados estaban Edith Lagos, y Hidebrando Pérez Huaranca. Para este ataque la guerrilla movilizó un contingente de más 100 combatientes, todos armados con modernos fusiles de guerra arrebatados a las fuerzas policiales. La acción fue militarmente planificada hasta en el más mínimo detalle. Era la primera vez que la guerrilla maoísta atacaba una prisión fuertemente protegida por la policía, considerada de “alta seguridad”. Desde la madrugada del 3 de marzo, los atacantes bloquearon y neutralizaron todos los puestos de la policía cercanos a la prisión de Huamanga. En el ataque participaron una docena de camiones y otros vehículos que habían sido confiscados para esta acción. Al siguiente día de este ataque, que significó un duro golpe para las fuerzas policiales y sobre todo para el gobierno que se negaba a tomar en cuenta la dimensión del problema subversivo, un grupo de policías en busca de venganza ingresó violentamente al hospital Central de Huamanga y asesinó a tres militantes de la guerrilla y dejaron gravemente herido a un joven estudiante acusado de subversivo que torturaron y que dieron por muerto. Estos jóvenes sindicados como militantes de Sendero Luminoso habían sido internados en este hospital cuando fueron heridos una semana antes en un primer intento fallido del ataque a la prisión de Huamanga.

EL EJERCITO EN AYACUCHO

En diciembre de 1982, el gobierno decidió que las Fuerzas Armadas intervieran en la lucha contrainsurgente. En los últimos días de este año, clandestinamente los militares se trasladaron a Ayacucho donde establecieron su cuartel general antisubversivo. En enero de 1983, el gobierno anunció públicamente la participación de los militares en la lucha contra la guerrilla maoísta. El mismo mes de diciembre el presidente de la República, Fernando Belaunde Terry, lanzó un ultimátum a los subversivos, y los conminó a que se rindan y que se entreguen a las autoridades. La respuesta de los subversivos fue una andanada de atentados y ataques guerrilleros. El *Diario Marka*, diciembre 1982, publicó en primera página: “Sendero responde a Belaunde: rechaza ultimátum y dice, a más represión, más acción guerrillera” (45). A partir del año 1983 el conflicto armado alcanzó otras características, y tanto la represión así como los enfrentamientos armados fueron más violentos y continuos. Ahora las fuerzas subversivas tenían que enfrentar, no solamente a la policía, sino a las fuerzas armadas que se habían trasladado masivamente a Ayacucho donde iniciaron una violenta y brutal represión contra la población. A pesar de ello las acciones guerrilleras crecieron a 1,123 ese año. En el mismo departamento de Ayacucho, donde se habían concentrado las tropas de elite del ejército, las acciones tuvieron un crecimiento vertiginoso, y ello demostró que el ingreso de las fuerzas armadas en la guerra contrainsurgente, no modificó las perspectivas de la subversión. El número de acciones en Ayacucho aumentaron, y si en 1980 se realizaron 48 acciones en 1981 estas aumentaron a 150. En 1982 cuando la subversión ya había derrotado a las fuerzas policiales se contabilizaron 323 acciones guerrilleras. En 1983, ya en guerra con el aparato militar, las acciones guerrilleras fueron 460 y la mayoría de ellas fueron enfrentamientos directos con tropas del ejército.

El año 1984, una de las etapas más violentas de la guerra interna, la actividad guerrillera alcanzó la suma de 1,760 acciones. Para 1985, la subversión logró 2,050 acciones armadas, y cada vez fueron de mayor contundencia en el aspecto táctico militar. El primer periodo de 5 años de la lucha armada (1980-1985) se cierra, según cifras oficiales del Ministerio del Interior y de Defensa, con 6,758 acciones guerrilleras. Estas cifras, referenciales como toda información proveniente del Estado, son diferentes a las cifras contabilizadas por las fuerzas guerrilleras. Para el Partido Comunista del Perú (PCP), las acciones subversivas admitidas por las autoridades eran manipuladas y solo reflejaban un tercio del total de las acciones ejecutadas por la guerrilla maoísta. Respecto a este periodo, en 1985, el PCP hace un balance de los primeros cinco años de subversión, y anota que en el primer quinquenio de lucha armada (1980-1985) habían ejecutado más de 20 mil acciones guerrilleras. Señala también que en este periodo habían “multiplicado por muchas veces su militancia”, y que había aumentado el prestigio del partido “dentro y fuera del país”. “Hemos construido un Ejército Guerrillero Popular de miles de combatientes, y lo más importante, se han formado cientos de Comités Populares, pugnado por desarrollar bases de apoyo y avanzar en la formación de de la Republica Popular de Nueva Democracia” (46).

En los primeros años del conflicto armado, la expansión de la guerrilla fue su rasgo más importante. Sobre esta situación la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), al margen de su antisenderismo, reconoce que a “pesar de los golpes recibidos entre 1983-1985, el PCP-SL no sólo mantuvo su presencia en lo que consideraba su frente principal, en Ayacucho, sino que logró proyectarse hacia otros espacios en la sierra peruana y, con renovada confianza en sus fuerzas, desplegó a partir de 1986 una expansión que puso a la defensiva al estado peruano” (47). Para los años posteriores, el desarrollo de la subversión seguiría en ascenso, y a pesar que los distintos

gobiernos anunciaron muchas veces el fin del “terrorismo”, la guerrilla maoísta siguió creciendo hasta convertirse en la principal organización política del país y en una amenaza creciente para el Estado. Para el periodo que va entre mayo de 1980 y julio de 1986, el senado peruano consideró 5880 acciones atribuidas a la guerrilla (48). Solo en 1986, el segundo año del régimen de Alan García Pérez las acciones guerrilleras fueron de 2, 549, y ello exasperó al gobierno y a las fuerzas armadas, cuya respuesta fue brutal. El 19 de junio de este año, la administración aprista, bajo el propósito de golpear y detener el avance subversivo, puso en ejecución su plan de exterminio masivo de prisioneros. En tres penales (Lurigancho, Santa Barbra y El Frontón) las fuerzas armadas y fuerzas policiales por el orden del presidente García asesinaron a 300 prisioneros acusados de pertenecer a la guerrilla maoísta. En 1987 la guerrilla realizó 2,489 acciones.

En 1988, las acciones fueron 2,415. El año 1989, considerado “el año más violento” de todo el periodo de la lucha armada, se efectuaron más de 2, 700 acciones guerrilleras, lo que para diferentes organizaciones especializadas en el tema, se “había agudizado la violencia armada” proveniente de Sendero Luminoso. Este año según el general Sinesio Jarama, criticaba quienes desde el gobierno y de las fuerzas armadas, no entendían el fenómeno de la subversión, y que pensaban que aquellos que dinamitaban torres, destruyen vagones con minerales, son una “partida de locos, desadaptados sociales, una banda de criminales que siembran la muerte y desolación en el campo y también en la ciudad”. Este militar criticaba también aquellos que confundían subversión con terrorismo, y desde su punto de vista, hacia la diferencia entre terrorismo puro y terrorismo como método de lucha de una fuerza revolucionaria. Así el general Jarama, señalaba, que la diferencia entre terrorismo y subversión, consistía que el “terrorismo es una modalidad de acción en el marco de la subversiva...El terrorismo es una técnica destructiva que la

subversión utiliza para perturbar y hacer caótica el orden establecido, para destruir la estructura del sistema democrático del país”. De esta forma decía el general Jarama, la subversión debe considerarse como un “fenómeno políticos ideológico y social” (49).

UCHIZA NUNCA MÁS

El ataque subversivo se inicio a las 5.15 de la tarde y era el 27 de marzo de 1989. Transcurría el último año del desastroso gobierno administrado por Alan García Pérez. En esos momentos nada presagiaba que la calma selvática de Uchiza (50) se convertiría en un infierno con balas, bombas y muchos muertos y heridos. Como narró un policía sobreviviente, en el sorpresivo ataque participaron una numerosa columna integrada por 300 guerrilleros aparte de varias centenas de pobladores que sirvieron de apoyo en la retaguardia de la acción armada. « Los terroristas eran trescientos sin contar a alrededor de seiscientos pobladores que estaban rodeando Uchiza para apoyar a los que nos atacaban ». El blanco de la guerrilla fue el cuartel de la policía con 57 efectivos, entre ellos 35 miembros de la División de Operaciones Especiales (Does), instalados en el centro de la ciudad. La patrulla policial, en la que se contaban tres oficiales, fuertemente armada con armas de guerra de grueso calibre, estaba dividida en tres grupos de 17 hombres cada una, y ocupaban estratégicos puestos en las entradas de la ciudad y alrededor del puesto policial.

Un documento del Partido Comunista del Perú (PCP), señala que el ataque al cuartel policial de Uchiza, era parte de la tercera campaña militar de este partido, y el objetivo era tomar y destruir el cuartel policial DOES, “punto fuerte de la reacción en la selva”. En un discurso promisorio, los subversivos habían dicho, que irían a Uchiza para “arrancar al enemigo el armamento y demás medios” que el gobierno de Alan

García les había enviado recientemente para que combatieran en mejor forma a la subversión. Demostraremos, dijeron los subversivos, que los efectivos de la policía “no son sino soldados de chocolate, valientes para matar, cobardes para morir, valientes para oprimir al pueblo, para torturar, para cometer genocidios, cobardes para enfrentar al glorioso Ejército Guerrillero Popular”.

Los guerrilleros llegaron en cinco camiones que el día anterior habían confiscado a una empresa maderera. Una vez en la entrada de Uchiza la columna subversiva se dispersó en varios grupos, y atacaron desde ocho puntos distintos. Un contingente importante de subversivos tenía la misión de concentrar el fuego en el puesto policial y obligar la rendición de los efectivos parapetados en su interior. El objetivo fue liquidar y que no quede “piedra sobre piedra” de este cuartel policial, cuyos efectivos al verse atacados se replegarían a su local donde almacenaban abundantes municiones, grandas, metralletas y otras armas. Y ahí desarrollaron los combates más sangrientos y decisivos. El ataque a Uchiza había sido planificado con precisión, y nada se dejó al azar. Los accesos principales que conducían a este pueblo habían sido bloqueados con grandes árboles que fueron derribados y que en su caída atravesaban la carretera. Ningún vehículo podía pasar, y en prevención de apoyo militar o policial a pie, habían ubicado varios grupos de francotiradores que escondidos en la jungla tenían la orden de eliminar cualquier apoyo externo. Para contrarrestar alguna sorpresa que podía llegar por aire, ubicaron en las entradas del pueblo varios comandos especializados en guerra tierra-aire cuya misión era abatir cualquier helicóptero del ejército o la policía que intentará acercarse al lugar de combate. Estos comandos estaban solidamente armados con potentes fusiles lanza cohetes de gran poder destructivo, y metralletas de grueso calibre. Uchiza estaba rodeado de varias guarniciones policiales y militares. La base del Unidad de Patrullaje Rural (Umopar) de la policía estaba ubicada en

Santa Lucia, a 20 minutos en carro y a solo cinco minutos en helicóptero. En esa localidad se encontraba uno de los cuarteles militares más importantes del Alto Huallaga. Cerca de ahí, en Tocache se encontraba también las unidades mixtas de la guardia civil y de la guardia republicana. Esta base estaba a 7 minutos en helicóptero y poco más de 35 minutos en vehículo terrestre.

La noche comenzó a hacer su aparición en Uchiza y ello sirvió para que avancen los subversivos hacia su objetivo de tomar por asalto el cuartel policial. Los combatientes guerrilleros, que portaban también modernas armas de guerra, no tuvieron muchos problemas para liquidar los puestos de vigilancia que la policía había instalado en la entrada del pueblo. Casi a las 10 de la noche habían rodeado el edificio policial convertido en el último reducto de la llamada fuerza del orden. De acuerdo a testimonios de pobladores de Uchiza, los guerrilleros intentaron infructuosamente ahorrar muertes en vano, y para ello conminaban en voz alta para que la guarnición policial se rinda. Los subversivos decían a viva voz: “¡Ríndanse hijos de puta!. ¡Ríndanse perros!, y serán perdonados”. Finalmente doblegada el contingente policial llegó la hora de la rendición, y ello ocurrió a la 10.30 de la noche cuando los policías habían perdido toda esperanza de recibir refuerzos del ejército o de la misma policía instalada cerca de Uchiza. “Un grupo de terrucos entró con linternas, con pasamontañas, y nos sacaron apuntándonos con sus armas en nuestras sienes. Nos sacaron al frente del cuartel....Nos mantuvieron parados y con el puño en alto nos hicieron darle vivas a su partido...Los oficiales también tuvieron que dar las vivas”.

Dejen sus armas y salgan uno por uno con los brazos en altos, ordenó el jefe de la columna subversiva. Los primeros en entregarse a sus captores fueron los subalternos quienes con rostros asustados y llorosos salieron seguidos de los tres oficiales. Los policías capturados fueron divididos en varios

grupos. Los heridos a un costado quienes fueron atendidos inmediatamente. Les dieron los primeros auxilios medicales y les proporcionaron algo de comida y bebidas. Los subalternos a un lado y los oficiales por su lado. Según el testimonio policial, el jefe de la columna subversiva anunció que los policías subalternos serían perdonados a condición de que pidan su pase al retiro de las fuerzas policiales. El subversivo en forma amenazante, anunció que en el caso de encontrarlos en otros combates serían eliminados sin compasión. “Ustedes tienen que pedir su baja. Si los encontramos en cualquier ataque a un puesto, en donde sea, porque nosotros estamos en todo el Perú, van a ser los primeros en morir. Están advertidos”, dijo el subversivo antes de dejarlos libres. Los oficiales, un mayor, un capitán y un alférez, tuvieron diferente destino que el de sus camaradas de menor rango. Fueron amarrados con las manos hacia atrás, y en el mismo lugar se organizó un “juicio popular” expeditivo contra ellos. Acusados e crímenes de guerra y abusos contra la población, la sentencia fue implacable y los oficiales fueron fusilados públicamente.

Las patrullas del ejército legaron a Uchiza a la 7 de la mañana en dos helicópteros artillados, cuando ya los subversivos habían abandonado la ciudad, llevando con ellos un jugoso botín de guerra. Los guerrilleros confiscaron todo el dinero de dos bancos instalados en la ciudad, además, de 28 fusiles ametralladoras AKM-47, varias cajas de municiones, 13 metralletas HK-G3, con abundante munición de 7.62 milímetros, 4 ametralladoras RPD y mucha municiones, 2 lanzagranadas HK (Api), varios visores nocturnos infrarrojos, además de pistolas, granadas y otras armas de guerra. Lo único que quedaba de los combates del día anterior, era un puesto policial en cenizas y 10 efectivos policiales muertos. Este ataque subversivo se hizo famoso, no solo por la contundencia subversiva en el Alto Huallaga, sino también por dialogo radial entre el jefe de la guarnición policial de Uchiza y Armando Villanueva del Campo, líder aprista, primer ministro y ministro del Inte-

rior en ese tiempo. Para saborear este resumen del dialogo es bueno recordar que durante todo el tiempo que duró el combate en Uchiza hubo una intensa comunicación radial entre el ministro y los oficiales de esta guarnición. Por radio, casi llorando el mayor Carlos Farfán en comunicación con Villanueva del Campo, le pedía refuerzos militares o policiales para rechazar el ataque subversivo. Están matando a mi gente, decía el mayor Farfán, y el ministro aprista respondía, “cálmese mayor. Estoy haciendo las coordinaciones con el ministro de defensa. El ejército les va prestar ayuda. Nosotros, el Perú, la democracia está con ustedes. Hay que mantener la calma...”.

Entre gritos el mayor Farfán responde al ministro aprista. “Ya tengo cuatro muertos ministro. No, no me dicen que ya son seis. Tengo un montón de heridos. Que se apuren. Que se apuren”. Villanueva retoma la conversación y dice: “Mayor, usted tiene que calmarse. Eso es lo primero que hay que tener. Calma, calma...En esos momentos, interrumpió el capitán Walter Moscoso Cárdenas, otro de los jefes del grupo policial cercado por los subversivos. El oficial grita en la oreja de Villanueva: ¡Calla zapatón concha de tu madre!. Tu nos pides calma porque no estas aquí. Te quiero ver aquí junto a todos esos imbéciles del gobierno que dicen defender la Patria”. El “zapatón” (Villanueva) interrumpe para señalar: “Entiendo por qué me hablas así muchacho. Los entiendo...”. La respuesta del capitán fue peor: “Tu que entiendes zapatón. Que puedes entender tú y todos los apristas. Concha de su madre”. Otro policía cogió la radio, y amenazó de muerte al ministro aprista. “Ya te jodistes zapatón, te vamos a matar, te vamos a matar concha de tu madre”.

El epilogo de esta dramática conversación, fue cuando el mayor Farfán llorando suplicó la ayuda militar que nunca llegó a pesar que el ministro Villanueva le prometió varias veces y que incluso había dicho que una patrulla del ejercito estaba en ruta. Por favor la ayuda, dijo, “yo tengo hijos. Ten-

go esposa, tengo familia, carajo, por qué no responden. Ya no tenemos municiones. Nos atacan con morteros, con granadas. Donde mierda esta el ejercito. Puta madre, vengan a ayudarnos. Tengo familia, tengo hijos”. Esta batalla que duro un poco más de 10 horas, y que concluyó con la derrota y rendición de la guarnición policial, creó zozobra y desmoralización en las fuerzas contrainsurgentes del Estado. Así la revista *Caretas* (edición 3 de abril), en forma dramática dijo: “Uchiza; ¡Nunca mas!”. Este medio de comunicación hablo de los “inexplicables vacíos de la lucha antiterrorista”, y acuso a Villanueva del Campo (primer ministro y ministro del interior) y al general Enrique López Albuja, ministro de guerra de no haber hecho nada para salvar a los policías sacrificados de Uchiza. Para el Instituto de Defensa Legal (IDL), una ONG de la izquierda legal el sentimiento fue similar a la expresada por el gobierno. Hablando de este hecho, anotó que el ataque a Uchiza había conmocionado al país por la crueldad con que se hizo y la incapacidad del Estado para reaccionar militarmente”. Según esta ONG, lo ocurrido en Uchiza mostró al país la dimensión del problema y que se había “hecho evidentes otros problema que arrastraba el gobierno en su estrategia antiterrorista nacional: la decisión política y la unidad del mando”.

En 1990 las acciones guerrilleras fueron 2,779, y como señaló este año un estudio de la Corporación RAND, una institución norteamericana que trabaja para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, este movimiento estaba “firmemente atrincherado en la sierra y tiene ya una presencia permanente en Lima y sus alrededores. Su crecimiento no ha sido rápido, pero si constante. Sendero goza ahora de una importante base social en el campo y ha empezado a reclutar activamente entre la fuerza de trabajo urbana y la masas desempleada del país” (51). En 1991, segundo año del gobierno de Alberto Fujimori y cuando en el Perú la guerra contrainsurgente del Estado envolvía toda la vida social y política del

país, las acciones crecieron a 3,040 lo que significó que Sendero Luminoso seguía en desarrollo.

LA GUERRILLA ENTRE LA REPRESION Y CAPITULACION

En 1992, Abimael Guzmán y la mayoría del Comité central del PCR, fueron capturados por la policía antiterrorista, pero este golpe a la subversión no disminuyó la cantidad de acciones guerrillas. Este año se ejecutaron 2,995 acciones lo que representaba 249 acciones cada mes. El ascenso de la guerra popular impactó fuertemente en los grupos de poder del Perú, y ello repercutió en el mismo Congreso de los Estados Unidos. El 13 de marzo de este mismo año, Bernard Aronson secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos de los EE.UU., decía en el Congreso americano que “Si triunfa Sendero veremos el tercer genocidio del siglo”. Aronson señaló en esta oportunidad, que Sendero Luminoso era distinto a “cualquier otro grupo insurgente terrorista que jamás haya operado en América Latina”. En esta dirección, este funcionario del gobierno USA, junto con proclamar su apoyo al presidente Alberto Fujimori, anotó que este presidente es “uno de los más decididos y profundos reformadores en la generación actual de líderes latinoamericanos”. Aronson concluyó su panegírico a favor del gobierno peruano, planteando la formación de un “Grupo de Apoyo de donantes” que se habían comprometido entregar 1,100 millones de dólares para la lucha contra Sendero Luminoso (52).

En mayo de 1992, un mes después que Fujimori aboliera el parlamento y el poder judicial, se puso en práctica el operativo “Mudanza I”, planificado por el gobierno fujimorista para eliminar a los prisioneros de guerra en la prisión de Canto Grande (Lima). En este operativo fueron ejecutados 100 prisioneros, la mayor parte de ellos, considerados por el Ser-

vicio de Inteligencia Nacional (SIN) “dirigentes de Sendero Luminoso”. El operativo sangriento se inició el 6 de mayo de 1992, cuando tropas del ejército intentaron ingresar al penal de Canto Grande donde estaban reclusos, entre hombres y mujeres, unos 700 presos acusados de pertenecer a la guerrilla senderista. El choque entre las tropas del ejército y los prisioneros fue una lucha desigual, y finalmente el 9 de mayo los presos dejaron de resistir. Al salir con los brazos hacia arriba en señal de rendición, fueron eliminados con tiros en la cabeza disparados por atrás.

Asesinar prisioneros de guerra, como recurso brutal para detener el avance de la subversión, fue una constante que se aplicó en Perú desde los inicios del conflicto armado. Mediante este método de la guerra contrainsurgente, el Estado busca a través del exterminio de prisioneros, mostrar un rostro diferente a la derrota parcial que le inflinge la guerrilla. Busca también la venganza y elevar la moral de sus fuerzas de seguridad. En esta situación, los prisioneros, como en todas las guerras, tienen que afrontar la ira de sus captores. En 1982, la guerrilla atacó exitosamente la cárcel de Ayacucho y pudo liberar a la totalidad de sus prisioneros en ese campo de concentración. Al día siguiente, una patrulla de la policía asesinó a 4 prisioneros heridos y reclusos en el hospital central de Ayacucho. En 1985, la guerrilla alcanzó un nivel elevado de la lucha armada y ello enfureció al gobierno y a sus fuerzas represivas. En respuesta a ello, el 4 de octubre de 1985, bajo el gobierno de Alan García Pérez, 30 prisioneros de guerra reclusos en la cárcel de Lurigancho (Lima) fueron quemados vivos. En 1986 y 1992, la matanza masiva de prisioneros, se ejecutó cuando la lucha armada había alcanzado niveles que atemorizaban al gobierno peruano y a la administración americana.

Ni la matanza de prisioneros en Canto Grande ni la capitulación de Abimael Guzmán, interrumpieron el ascenso cons-

tante de las acciones armadas. En 1993, cuando ya Abimael Guzmán, jefe de este grupo subversivo había capitulado y redactado desde la prisión las “cartas de paz”, las acciones aumentaron a 3,760 lo que configuró que cada mes hubo 305 acciones. Las “cartas de paz” y la propuesta de buscar una “solución política a los problemas derivados de la guerra”, fue una construcción del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) en amalgama con la gestión traidora de la dirección del PCP recluida en prisión. Desde el cuartel del SIN y sostenida por la prensa peruana, las “cartas de paz” constituyeron uno de los factores fundamentales para la derrota del proceso armado en Perú. Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, utilizaron en gran forma las cartas de paz, no solamente con fines electorales, sino también para aplicar una política sangrienta contra la población peruana.

En 1994 las acciones descendieron bruscamente a 1,299 y ello reflejaba la crisis interna de la organización maoísta (PCP), cuya causa principal era la conducta de sus dirigentes que desde las prisiones, con el apoyo del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y de Vladimiro Montesinos hacían campaña para firmar un acuerdo de paz con Alberto Fujimori. Junto con propagandizar el “acuerdo de paz”, se convocaba a los militantes a dejar la lucha armada y buscar una “salida pacífica y negociada a los problemas de la guerra”. Ese problema tuvo sus raíces en profundos problemas ideológicos cuyos elementos no estuvieron fuera del partido sino más bien en su interior, y particularmente en el pensamiento Gonzalo que sirvió para dar inicio a la lucha armada y para poner fin este proceso revolucionario. El factor policial represivo pudo ser un ingrediente de importancia, pero no el determinante en la forma de actuar de los dirigentes de este partido. El culto al jefe y el manejo unipersonal de la organización partidaria, son algunas de los problemas de fondo de esta situación. No se puede concebir un partido revolucionario que lo maneje una sola persona y menos desde la prisión como ha sido el

caso del PCP. En la guerra revolucionaria, los partidos tienen una estructura de conjunto que los hace irreductibles frente a la reacción. Cada militante, cada cuadro y cada jefe hacen un conjunto de dirección. Ningún partido revolucionario, y menos si se consideran marxista, puede exigir a su militancia juramento y “sujeción plena e incondicional” al jefe del Partido, como ha sido el caso de esta organización auto denominada “marxista-leninista-maoísta”. En 1995, el declive siguió la misma tendencia y las acciones bajaron a 1,232 lo que hizo 102 por mes. El 22 de marzo de este año fue capturada Margie Clavo Peralta, conocida con el seudónimo de “Nancy”, uno de los últimos miembros de la dirección partidaria que junto con Oscar Ramírez Durand (Feliciano) dirigían el “Comité Central de Emergencia” que se formó en 1992 cuando Abimael Guzmán fue detenido. El golpe a la guerrilla no fue tanto por la captura de esta dirigente, sino por su repentino cambio de posición política. Margie Clavo hasta el día de su captura había sido partidaria de seguir desarrollando la lucha armada y consideraba las “cartas de paz” como un montaje y patraña del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y de la CIA americana. Después de algunos meses en prisión el SIN que dirigía Vladimiro Montesinos auspició un encuentro en la base naval del Callao entre ella y Abimael Guzmán. Los resultados de este conclave clandestino fueron conocidos a través de la prensa oficial, cuyos alcances principales estaban referidos al llamado de la “camarada Nancy” para abandonar la lucha armada y aceptar la “sujeción” a los planteamientos capituladores de Guzmán. Su discurso para aceptar el acuerdo de paz y su arrepentimiento de la lucha armada se resumen en el siguiente texto que fue redactado en el SIN:

“He hablado con el Presidente Gonzalo y con la c. Miriam y los, he encontrado más firmes, más sagaces, más lúcidos que nunca. No es patraña, la petición de conversaciones para un Acuerdo de Paz deriva del establecimiento de una nueva línea política general. No comprendimos porque nuestro derechos-

mo, nuestro oportunismo se desbocó y entonces conformamos un bloque e escisionista de caudillos, puestistas, yo soy una puestista que pegada por el poder personal me aglutiné con caudillos, el c. Feliciano es un caudillo, me aglutiné con anarquistas. Así conformamos un bloque escisionista de caudillos puestistas y anarquistas, usurpamos la dirección del Partido y lo hemos levantado contra el Presidente Gonzalo y el Comité Permanente Histórico, de esa manera se da la apariencia falsa que es el Partido el que desacata el llamamiento a terminar la guerra mediante un Acuerdo de Paz y eso no es así, lo que sucede es que ese bloque escisionista del cual fui parte ha usurpado la dirección del Partido; por eso es importante lo que estoy aclarando, ese bloque escisionista debe ser derrocado, porque se opone a que la guerra termine mediante un Acuerdo de Paz, sin fundamento alguno” (53).

FELICIANO Y EL ARREPENTIMIENTO DE LA LUCHA ARMADA

El año 1996, se cerró (oficialmente), con 612 acciones guerrilleras, que en términos comparativos se había regresado al nivel guerrillero de los primeros años del proceso armado. En 1997 fueron 662 guerrilleras. En 1998, siguió la crisis del PCP y las acciones siguieron en caída. Solo se ejecutaron 508 acciones. El año 1999 fue peor y solo se ejecutaron 166 acciones armadas. Esta situación se agravó aún más cuando en julio de este año fue capturado Oscar Ramírez Durand, el “camarada Feliciano”, que en los hechos era el último de los miembros del Comité Central que se encontraba en libertad. Feliciano había sido desde la mitad de la década del 80 el responsable militar del PCP, y estaba considerado como uno de los dirigentes más cercanos de Abimael Guzmán. Desde septiembre de 1992, cuando Gonzalo fue capturado en Lima, éste se había encargado de la dirección militar del PCP, y en él descansaba toda la marcha de la guerra popular. Unos meses después de

su captura, Feliciano se arrepintió de la lucha armada. Llamó a dejar las armas, y por voluntad propia se comprometió colaborar en los planes contrainsurgentes. Pidió a la policía y al ejército acompañarlos a los andes y a la selva a “cazar” los últimos rebeldes que seguían haciendo acciones armadas. Feliciano rechazó las “cartas de paz” de Gonzalo, pero lo hizo desde una posición más de derecha de aquellos dirigentes que asumían los conceptos reaccionarios del acuerdo de paz con Fujimori. El arrepentimiento de este dirigente y su radical cambio de posición sirvieron para enturbiar aun más el terreno minado al interior del PCP. Feliciano promocionado por los medios de comunicación controlados por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), convirtió sus desavenencias políticas con Gonzalo en una telenovela melodramática repleta de arrepentimientos, insultos y solicitudes de perdón. Junto con tratar a Gonzalo de “psicópata”, “oportunista”, “cobarde” y otros calificativos, rechazó la lucha armada y renegó de su pasado como militante y dirigente del Partido Comunista del Perú (PCP).

Sobre el ‘acuerdo de paz’, usted sabe que nunca hubo tal; Montesinos engañó a Guzmán como a un bebé de pecho. Éste se vendió a la dictadura a cambio de que le permitieran vivir con su mujer en la cárcel. (...) La dictadura nunca quiso dialogar con quienes seguían en armas porque les convenía tener un pretexto para seguir saqueando las arcas del Estado y mantener la legislación antiterrorista para reprimir al pueblo (54).

En el 2000, la guerrilla convertida en retazos de lo que fue en la década del 80 y 90, solo hizo 59 acciones y la mayoría de ellas fue bajo la consigna de luchar por un “acuerdo de paz” con el gobierno. Desde octubre de 1993, la capitulación en las filas del PCP fue en cadena y ello determinó que en pocos años no quedara ningún dirigente, preso o en libertad, que no asumiera las “cartas de paz”. Ello contribuyó grandemente a que

la lucha retrocediera en derrota parcial al inicio y posteriormente en derrota definitiva. En esta situación, la guerrilla fue reducida a un pequeño grupo atomizado en las partes altas de los andes y en la selva, sin ninguna perspectiva de poder. Con la capitulación de Gonzalo, seguida de todo el Comité Central el proceso armado quedó sin rumbo, y ello se agravaría mucho más cuando la policía capturo primero a la “camarada Nancy”, y posteriormente a Feliciano. En estas circunstancias de crisis partidaria, hizo su aparición “Artemio”, un cuadro regional de segundo orden en los rangos de esta organización. Este continuó el ejemplo de Gonzalo y hasta antes del 2000 intentó varias veces negociar con el gobierno de Alberto Fujimori. Ha avalado las “cartas de paz y ello lo condujo al campo de todos aquellos dirigentes del PCP que desde 1993 desde las prisiones capitularon. Artemio concentra sus acciones guerrilleras en la región selvática del Alto Huallaga, y tiene poco interés en ampliar su radio de acción hacia otras regiones del país. Cada acción armada que realiza este grupo, sirve para insistir sobre la propuesta de “buscar una salida pacífica y negociada a los problemas de la guerra” (55).

Este planteamiento, sin validez y fuera de un contexto que le de validez como una verdadera lucha armada, no ha tenido interlocutor con ninguno de los últimos gobiernos (Alberto Fujimori Valentín Paniagua, Alejandro Toledo y el actual régimen aprista). En esta dirección él ha declarado: “nosotros emprendimos las acciones armadas con el objetivo de exigir al gobierno y al Estado una salida política negociada”. Bajo este propósito en febrero del 2000 publicó una carta donde llamó a concentrar esfuerzos para “defender la Jefatura de Gonzalo, y tomar posición por un Acuerdo de Paz (54). En septiembre del 2005, Artemio fue bastante propagandizado por la prensa peruana y en una entrevista declaró, “sujetarse a la dirección del presidente Gonzalo”, y que la “posición actual del partido en general es de luchar por una solución política a los problemas derivados de la guerra interna”, reafirmando que

ellos (los del Comité Regional del Huallaga) reivindicaban la lucha armada como “una posición de luchar por una solución política y negociación global a los problemas derivados de la guerra interna” (56).

LA GUERRILLA Y EL NUEVO PODER

A través de las acciones guerrilleras se explica una parte del conflicto armado peruano, pero ello no expresa todo el contenido político social de un proceso que en teoría se inició con el objetivo de tomar el poder del Estado a través de la guerra. Las acciones armadas, que en su desarrollo fueron ejes movilizadores de importantes columnas subversivas integradas por 20, 50, 100, 200 y 300 guerrilleros, fueron parte de una estrategia de mayor alcance. El problema militar en el proceso peruano, constituye un aspecto fundamental, pero analizado al margen de otros elementos, resulta insuficiente para explicar el fenómeno de guerra interna que se desarrolló desde 1980 hasta el 2000. Hay cuestiones fundamentales que es necesario analizar para comprender el contenido histórico político del proceso armado dirigido por el Partido Comunista del Perú (PCP). Uno, se refiere a la relación de este movimiento con las masas pobres, en particular el campesinado. Dos, se trata de ver hasta donde llegó este partido en su proyecto político que denominó “Nuevo Poder”, concretizado en los “Comités Populares” (abiertos y clandestinos).

LA SUBVERSIÓN Y LAS MASAS

“Sendero contra las masas”, o “Sendero esta aislado de los trabajadores” o “Sendero recluta a la fuerzas a los campesinos”, fueron ejes de las campañas de desinformación que desplegó el ejército y el gobierno como aplicación de la doctrina de seguridad nacional y de la guerra contrainsurgente.

Mediante esta propaganda publicitada profusamente por los medios de comunicación, se pretendió ocultar y negar el vínculo de la subversión y las masas populares. En este terreno es importante observar la relación que logró establecer la guerrilla con las masas y la concretización de los comités populares (bases de apoyo revolucionaria). Es evidente que el PCP se acercó a las masas, no con fines electorales como es vieja costumbre en Perú, sino para atraerlas al campo del proceso armado. En el seno de las masas se libraron grandes batallas ideológicas políticas entre la subversión y los defensores del Estado, principalmente con las organizaciones políticas que se llamaban de izquierda. En el campo popular, la guerrilla no solo tuvo que enfrentar a las fuerzas de seguridad del Estado, sino también a cientos de Organizaciones no Gubernamentales (ONG), a la iglesia, y una rama de instituciones de fachada de los países ricos, que fueron aparatos de penetración de los grupos de poder y del imperialismo.

Un movimiento armado, equivocado o no, sin apoyo de los pobres se convierte en una banda errante sin ningún futuro, y en su aislamiento sucumbe al primer disparo del enemigo. No hay proceso armado, ya sea democrático o revolucionario, que pueda mantenerse y desarrollarse sin el concurso y el aprecio de los pobres. Hay bastantes pruebas que muestran que el movimiento senderista, desde sus inicios en los primeros años de la década del 60 tuvo una intensa actividad en el seno del pueblo, primero en Ayacucho y después en otros departamentos y regiones. En 1973, siete años antes que se de inicio a las acciones armadas, se realizó el Tercer Pleno del Comité Central de este partido. En ese evento se acuerda formar los organismos generados de la revolución, que como se conoce se construirían en el sector obrero, en el seno de los campesinos, en el sector estudiantil y en los pueblos y barriadas pobres que rodean las grandes ciudades. “Fundirse con las masas”, fue uno de los slogans permanentes de este movimiento, y ello expresó la importancia que tuvieron las

masas en el proceso armado.

Es a partir de 1980, con el inicio del conflicto armado que los denominados “organismos generados de la revolución” van a tener una importante presencia en la escena política del país. Uno de los factores que contribuye para que las fuerzas subversivas logren introducirse en el seno de las clases populares, es la crisis y descomposición de las organizaciones sindicales y populares controladas burocráticamente por los partidos de la izquierda legal. El caso de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Confederación Campesina del Perú (CCP), y diversas federaciones de trabajadores y sindicatos ilustran la situación calamitosa que atravesaba el movimiento sindical en los inicios de la década del 80. Estas centrales, al subordinar su línea sindical o popular a los dictados políticos de la izquierda legal, se convirtieron en sucursales electorales, y en la práctica se convertirían en organizaciones de membrete sin ninguna capacidad de convocatoria en el movimiento obrero popular. Desde 1980 para adelante, estas centrales permitieron que los gobiernos de turno liquidaran impunemente fundamentales derechos sociales y económicos de los trabajadores, incluyendo las ocho horas de trabajo, la estabilidad laboral y el derecho a la sindicalización. Es en este terreno, abonado por la crisis del reformismo y oportunismo, surgen los organismos generados contruidos en relación directa con la lucha armada, las tomas de tierra y otras reivindicaciones populares. Si en la actualidad estos organismos han desaparecido de la escena política es a causa de la derrota del movimiento armado.

Los organismo generados, de acuerdo al PCP, eran aparatos semiclandestinos que combinaban el trabajo de masas con acciones militares. La estructura de estos organismos era militarizada y su dirección estaba bajo la responsabilidad de un mando político y un mando militar. Estos organismos eran parte de lo que el PCP calificaba las “tres patitas en el trabajo

de masas” (organismos generados, escuelas populares y la coordinadora metropolitana). Un ejemplo de organismo generado militarizado era Socorro Popular del Perú (SPP), que funcionaba en base a tres objetivos: movilización, defensa y apoyo. Este organismo desarrollaba tareas específicas para sostener a los prisioneros de guerras. En ese terreno era responsable de coordinar con organismos encargados de la defensa legal y proveer a los presos medicamentos esenciales, vestimentas y otros requerimientos materiales. Era responsable de las acciones de prensa y de las coordinaciones con el Comité de Familiares de Prisioneros. Las tareas militares en la que participaba Socorro Popular podían ser acciones guerrilleras o ejecuciones selectivas. Un organismo generado tenía estrecha ligazón con el Partido y las masas populares. La línea política estaba decidida por la más alta instancia del PCP, y tenía plena autonomía respecto a otros organismos generados de este partido. En un principio, los organismos generados, dice la revista SI (junio de 1989), empezaron a trabajar a niveles globales, y no pasaban de ser rótulos. “Luego se inició una campaña base por base, sindicato por sindicato, organización por organización”, y así dice esta revista, lo que fueron “organismos huecos”, comenzaron a “operar con bases que se adherían a sus principios... (57). Estas organizaciones, desde 1980 hasta el final e la lucha armada en el 2000 ocuparon un rol de primer orden en la lucha armada. Una breve relación de estos organismos es el siguiente: Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas (MOTC), Movimiento de Campesinos Pobres (MCP), Movimiento Clasista Barrial (MCB), Frente Estudiantil Revolucionario (FER), Frente Revolucionario Estudiantil Secundario (FRES), Movimiento Femenino Popular (MFP), Movimiento Juvenil Popular (MJP), Movimiento Intelectual Popular (MIP), Movimiento de Artistas Populares (MAP), Socorro Popular del Perú (SPP), el Movimiento Revolucionario de Defensa del Pueblo (MRDP), este último se construyó en las grandes ciudades del país, incluida Lima. Sendero Luminoso, dice la CVR, “se impuso como tarea la captación

de pobladores a través de los “organismos generados” como el MFP, MOTC, Movimiento Magisterial, Movimiento Intelectual Popular (MIP), Movimiento de Artistas Populares (MAP).

La capitulación de Gonzalo y la falsificación del marxismo, que tomó cuerpo en su “pensamiento” no invalidan el desarrollo del proceso armado y sus aciertos en el terreno de la lucha de clases. Para citar un ejemplo valedero, hay que referirse al paro armado, que es sin dudas una de las formas de lucha que utilizó la guerrilla maoísta para desarrollar la guerra popular. Esta forma de movilizar a los asalariados planteaba la lucha en el campo sindical y en el terreno de la lucha armada. En esta acción se combinaba la lucha reivindicativa de los asalariados con acciones armadas. Los voceros del gobierno y de los partidos de la izquierda legal intentaron minimizar los paros armados. Para este fin propandizaban la idea de que la participación de los trabajadores en esta acción era por «presión del terror impuesto por Sendero». El paro armado, sirvió para confrontar no solo al gobierno, sino también a los partidos reaccionarios y a las organizaciones de la izquierda legal. Un ejemplo de este tipo de lucha es el paro armado del 14 de febrero de 1992 en pleno auge del régimen fujimorista. La medida de fuerza fue convocada en Villa el Salvador (un fortín de la izquierda legal y de cientos de ONG), y su propósito era hacer frente las medidas antipopulares del gobierno. María Elena Moyano, que más adelante sería calificada por la prensa oficial con el nombre de “madre coraje”, era teniente alcalde del Consejo Municipal y en oposición al paro armado, convocó el mismo día una “movilización popular” en la que casi nadie participó. El paro fue contundente, y al día siguiente, María Elena Moyano, fue ejecutada por un comando maoísta que la acusó de ser cómplice del reaccionario régimen fujimorista. Otro paro armado de renombre, por su impacto político en la capital del país, fue el de julio de 1989. Este paro armado de 24 horas en Lima fue contra las medidas antipopulares del gobierno de Alan García Pérez, que

en cuatro años de administración del Estado había agudizado al extremo el hambre y la pobreza en Perú. Esta convocatoria, el cuarto paro armado en Lima desde 1980, resultó una contundente acción de fuerza. Para contrarrestar esta acción dirigida por la guerrilla el gobierno movilizó a las fuerzas armadas y más de 40 mil efectivos de las fuerzas policiales. El numeroso contingente de seguridad no evitó los resultados de ese paro que logró paralizar la ciudad de Lima. La prensa dijo que “nadie había acatado el paro”, pero sin embargo el gobierno anunció que el ejército y la policía, habían “eliminado a siete subversivos”, y apresado a 8,500 personas sindicadas como agitadores del paro armado.

“Siete guerrilleros murieron y otras 8.500 personas fueron detenidas ayer en Lima durante el paro armado de 24 horas convocado por Sendero Luminoso. La capital peruana registró diversos enfrentamientos entre fuerzas policiales y guerrilleros. La Prefectura de Lima informó ayer de la detención de 8.500 sospechosos e in documentados en redadas llevadas a cabo por soldados y policías. 17 de ellos fueron entregados a la Dirección Contra el Terrorismo. El paro armado -método intimidatorio bajo amenaza de muerte para quien no lo acate-presentó al principio de la jornada dificultades imprevistas en el transporte en las zonas periféricas de la capital peruana, al igual que problemas en el suministro eléctrico urbano, tras una serie de atentados contra la central eléctrica del valle del Mantaro. Los atentados dejaron sin energía amplias áreas al norte y sur de la ciudad” (58).

LOS COMITÉS POPULARES REALIDADES O FICCIÓN

Los Comités Populares, de acuerdo al concepto político utilizado por el Partido Comunista del Perú (PCP), fueron concreciones del “Nuevo Estado”. Tenían la responsabilidad de

dirección, planificación y organización. El conjunto de comités populares, dice esta organización subversiva, constituían la “Base de Apoyo” de la revolución. Estos comités estaban administrados por 5 comisarios, elegidos en Asamblea de Representantes. “Dirigidos por el Partido aplicando los tres tercios: un tercio de comunistas, un tercio de campesinos y un tercio de progresistas”. (Línea de Construcción de los tres instrumentos de la revolución. Sobre la Construcción del Nuevo Estado. 1988). De esta manera se establecía, dice este partido, la dictadura democrática popular. En orden de importancia estos comisarios eran los siguientes: El Comisario Secretario, responsable político del funcionamiento del comité, el Comisario de Seguridad encargado de “planificar la seguridad y defensa del Comités, el Comisario de Producción encargado de planificar y organizar las siembras y cosechas colectivas y distribuye las semillas. El Comisario de Asuntos Comunales aplicaba la justicia interna en la comunidad, y el Comisario de organizaciones populares, “organizaba los organismos generados en los pueblos. Estos comisarios eran quienes aplicaban los principios políticos e ideológicos del Partido. Así el PCR, dice que “... con la formación de los Comités Populares, damos otro paso establecer nuevas relaciones de producción, siembra colectiva, trabajo, colectivo, cosecha colectiva. Una cosa es repartir tierras y otra el trabajo colectivo” (58).

En las campañas de desinformación provenientes Estado, los comités populares fueron simples elucubraciones de los terroristas, pero la abundante información sobre este tema, muestra que el desarrollo de estos comités, fueron una realidad en las zonas rurales y urbanas, incluida Lima. En este terreno la guerrilla maoísta logró dar forma un incipiente poder político paralelo al Estado que en muchos aspectos fue superior a la administración oficial. Esos comités, muchos de existencia efímera, surgían y desaparecían al mismo ritmo del avance o retroceso temporal de la lucha armada. Estos comités, lograron ahí donde no se impuso la represión del Estado, tener una

importante gravitación en la vida social de los pueblos donde lograron instalarse en forma encubierta o abiertamente. En el campo, los comités populares cumplieron amplias funciones políticas administrativas. Planificaban la producción agrícola, organizaban el trabajo colectivo y se encargan de la distribución equitativa de los bienes materiales. Administraban justicia sobre la base de nuevos conceptos jurídicos-morales y sobre todo resguardan la unidad y la integridad de la comunidad. Por ejemplo, el periodista y escritor inglés Simon Strong, señala que a partir del establecimiento de los comités populares en el Alto Huallaga en los años 80, la guerrilla se convirtió en “protectora de los campesinos cocalleros y liquidó el cruento imperio de los barones colombianos” y estableció su “propia versión de la ley y el orden en el valle. Eso, dice Strong, le ganó a “Sendero Luminoso considerable buena voluntad popular” (60).

Para el PCP, el establecimiento de los comités populares, era una prueba del desarrollo y expansión de la guerra popular, y señalaba que ello significaba un “trascendental paso hacia la conquista del poder en todo el país”. Esto, decía la organización subversiva, tenía que ver con el vacío de poder que la guerrilla había comenzado a reemplazar ahí donde el Estado desaparecía o era insuficiente (61). (En un estudio de 1990 de la Corporación RAND, se anota que en los lugares donde Sendero Luminoso logró acentuar su presencia proporcionaba “un nivel de seguridad y orden civil que el gobierno rara vez ha proporcionado” (62). Sobre el mismo tema, un informe de la National Defense Research Institute (USA) de 1992, señalaba que Sendero Luminoso, basándose en la movilización campesina y a la falta de interés del gobierno para resolver los problemas históricos de los campesinos, había construido un “contra Estado armado” que desafiaba al poder central (63). “Creo que hay algunas zonas del país en que Sendero ya está gobernando en forma incontestada”, decía en 1990 Gustavo Gorriti. (Sendero ya está gobernando. Gustavo Gorriti, La Re-

publica, 2 de diciembre de 1990). El Perú es un país ingobernable, decía Sinesio López en 1992, para referirse al retiro del Estado en diversas partes del país. Según este analista, en ese tiempo uno de los dirigentes de Izquierda Unida (IU), había un Estado en emergencia, “porque Sendero es otro Estado... En esos lugares que me refiero no se sabe quien manda...La guerra subversiva ha hecho replegar al Estado a zonas urbanas. El campo está abandonado (64).

Casos destacados y concretos de ligazón subversión-masa pobre se dio en el campo y en las zonas urbanas. Para este análisis hemos indagado los casos más conocidos que ni los mismos antisederistas ni los representantes del Estado lo han podido ocultar y borrar de la memoria histórica del Perú. La participación de un sector de la población de pueblos jóvenes y barriadas populares en los planes de construcción planificados por la subversión, es un ejemplo que puso en vigencia la teoría de llevar la guerra del “campo a la ciudad”. Con ello se concretizó lo que se conoció como “Comités Populares” (abiertos o clandestinos). «Sendero cerca Lima», se alarmaba la prensa peruana en los inicios de 1990, cuando los maoístas mostraban su presencia en los pueblos jóvenes de la capital. O como decía una ONG (Instituto de Defensa Legal-IDL), con los efectos dramáticos del régimen fujimorista, “Sendero Luminoso ha encontrado terreno fértil de reclutamiento entre sectores juveniles y pauperizados y sin esperanza, lo que les ha permitido crecer de manera significativa. Ello es visible en casi todos asentamientos humanos” (65). Un caso bastante conocido se refiere al pueblo joven “Félix Raucana”, a escasos kilómetros del centro de Lima.

RAUCANA

Raucana está ubicado en el distrito de Ate-Vitarte, a 8.5 kilómetros de Lima. Su existencia como proyecto revolucionario

hace parte de la historia de la lucha armada iniciada en 1980. Es lo que se llama en Perú un “Pueblo Joven”, que en otras palabras quiere decir, un pedazo de tierra abandonada invadido por cientos de familias pobres de los alrededores de Lima. Buscar un techo es el objetivo de esta gente. El terreno, donde está instalado este pueblo, aparecía como parte de la propiedad de Antonio Isola de Lavalle un rico empresario italiano. El nombre de “Raucana”, le viene de un mártir de esta invasión asesinado por la policía el día de la toma de la tierra. Jorge Félix Raucana, que fue acribillado por la policía en la madrugada del 28 de julio de 1990 cuando cientos de peruanos “pobres sin techo” tomaron posesión de este campo árido y despoblado. Con este crimen Alberto Fujimori inauguró su brutal gobierno que durante el periodo que va desde 1990 al 2000, se convertiría en una de las administraciones más sangrientas de la historia peruana. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), dice que Raucana fue desde 1990, un “Comité Popular Abierto que existió en Lima”. La mayoría de los “invasores” de este terreno eran originarios de Andahuaylas, uno de los departamentos donde la lucha armada era intensa. Para la CVR la toma de estos terrenos y la fundación de Raucana, fue el “punto culminante de todo un trabajo previo que realizó el PCP-SL entre los asentamientos humanos” de Lima. Era, dice, una acción de gran envergadura realizada por el PCP-SL, buscando consolidar su protagonismo político en Lima” (66). Para Quehacer, una revista publicada por Desco (Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo) este asentamiento humano, era una “experiencia piloto de Sendero en su nueva estrategia de creación de comités populares abiertos en Lima Metropolitana”. Aquí dice esta revista, el adoctrinamiento era intenso, y la vida social era totalmente controlada. Una mayoría de esta población, anota Quehacer, “está integrada a un estilo de vida colectivo: comen, hacen las faenas, hacen ejercicios militares y actividades políticas en común” (67).

Raucana, a diferencia de otros pueblos jóvenes de Lima no fue víctima de aquellas organizaciones inescrupulosas que han hecho de la miseria un negocio rentable con grandes utilidades económicas y políticas. Cientos de organizaciones no gubernamentales (ONG), millonariamente financiadas desde el extranjero, además de instituciones internacionales como Caritas, Ofasa (Agencia para el desarrollo y Recursos Asistenciales de la Iglesia Adventista), AID (Agencia para el Desarrollo Internacional) y otras que tienen sus sedes en los países ricos, han convertido a las poblaciones pobres que rodean Lima en masas mendigantes, carentes de dignidad propia, que tienen que arrastrarse por una ración de comida o canjear un pedazo de pan por un voto electoral. Si en otros pueblos, se estableció la mendicidad y las acciones asistenciales como norma y conducta, en la población de Raucana la situación fue completamente diferente. En este pueblo se privilegia el trabajo colectivo, la solidaridad, la disciplina y la iniciativa para resolver los problemas de la pobreza y la escasez. Se aplicó normas internas de producción y de distribución comunal auto sostenida sin intervención del Estado ni de organizaciones de caridad pública. La prensa y el gobierno la sindicaron muchas veces como “Comité Popular Abierto” de Sendero Luminoso y ello sirvió para facilitar los planes militares y de represión contra esta población. La misma Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), tan adversa a la guerrilla, ha admitido que la presencia de los maoístas en este terreno, en términos sociales y de organización, fue altamente positiva para la población. “El PCP-SL no sólo se preocupó de las acciones defensivas contra el desalojo, sino que organizó casi todos los aspectos de la vida diaria de los pobladores y respondió a sus expectativas para desenvolverse frente a los retos cotidianos con relativo éxito. Más aún, a diferencia de las habituales invasiones y de los traficantes de terrenos, los senderistas establecieron relaciones de confianza con los pobladores” (68).

Si la mayor parte de los 6 o 7 millones de habitantes pobres que rodean Lima, sufrían (aun no acaba este sufrimiento) escasez de agua y tenían que recurrir a los negociantes y traficantes del líquido elemento, la gente de Raucana buscó el agua bajo el suelo donde habían construido sus casas pobres. Organizaron grupos de trabajadores incansables que con lampas y picos hicieron profundos huecos en el suelo. A 20 metros bajo tierra encontraron enormes reservorios de agua que les sirvió para el uso cotidiano, y además para los cultivos de legumbres y otros productos agrícolas para la alimentación cotidiana. Con el esfuerzo propio construyeron pozos de agua en cada perímetro de la ciudad, y se dotó de agua suficiente a la población. Se organizó el trabajo social, y se instituyó jornadas laborales para todos los ciudadanos (dos o tres horas por semana). El trabajo comunal se realizaba en los huertos, jardines, parques y otras instancias en beneficio de la población. Con el trabajo voluntario y por turno se construyeron escuelas, caminos y otras obras que servían para el bien común. Los dirigentes y líderes populares de Raucana no tenían ninguna ventaja de carácter personal, y nadie se enriquecía ni sacaba provecho del bien común como sucede en las instituciones asistencialistas cuando se implantan en los pueblos jóvenes. Gran parte de la alimentación de este pueblo provenía de la producción agrícola en los huertos comunales, cuyos sombríos estaban tratados con métodos biológicos sin ningún ingrediente químico. Se construyó una red de modernos y grandes posos higiénicos (silos) que resolvieron el problema del desagüe, de higiene y salubridad.

“El trabajo en estos espacios productivos también se realizaba por turnos controlados a través de padrones levantados en cada sector. La central había planificado incluso lo que debía sembrarse. La etapa de las ollas comunes fue quedando atrás y empezaron a organizarse los comedores comunales, uno por cada sector, donde se destinaba todo lo producido en las áreas agrícolas. Nada se vendía, y todo era destinado a los co-

medores. Al inicio, se usaban latas de aceite vacías para que las mujeres cocinaran y los hombres recolectaban leña para los fogones; poco a poco cada sector empezó a organizar actividades para la implementación de los comedores y cocinas... Pese a lograr altos niveles de autosubsistencia, Raucana no podía satisfacerse de otros productos de primera necesidad (arroz, azúcar, aceite). Además, no siempre lo sembrado pudo ser cosechado de manera exitosa” (69).

SEGURIDAD EN EL SENO DE LAS MASAS POPULARES

Resolver los problemas sociales fue una prioridad en Raucana, pero no fue menos el trabajo de seguridad interna. Sobre todo cuando múltiples peligros acechaban desde el gobierno y los cuarteles militares. La disciplina entre los pobladores fue esencial en la organización de un sistema de seguridad propia que se estableció bajo normas del bien social y de protección de la familia, en particular de los niños y ancianos. Se crearon comités de vigilancia interna por sectores de vecinos cuya labor de vigilancia se realizaba las 24 horas del día. Se adiestro a la población en la autodefensa y se extendieron enseñanzas prácticas bastantes efectivas para hacer frente un ataque de la policía, de paramilitares o de cualquier grupo peligroso para la paz y tranquilidad de la población. La movilización rápida y masiva en caso de agresión desde el exterior se convirtió en un acto de defensa compacta y de fuerza. Se seleccionó experimentados pobladores, quienes como responsables de un número determinado de personas, actuaban de jefes militares en cualquier acción de ataque o defensa. Se construyeron gruesas murallas en torno al perímetro de la ciudad y se instalaron torres de control en las principales entradas del pueblo. El 21 de agosto de 1991 un grupo de seguridad de Raucana capturó a 3 agentes del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que por orden de Vladimiro Montesinos se habían infiltrado

entre la población. Estos agentes eran, el capitán de la policía César Basauri García, el capitán del ejército Luis Vílchez Vera y el suboficial del ejército Richard Carles Talledo, este último pertenecía al criminal grupo paramilitar “Colina” que tenía su cuartel principal en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Los agentes, amarrados con los brazos hacia atrás y resguardados por pobladores que se habían cubierto los rostros por seguridad, fueron presentados a los medios de comunicación, y a través de la televisión millones de peruanos fueron testigos de la existencia de Raucana y su ejemplar organización social.

Se estableció un Comité de orden y disciplina interna, que administraba justicia en la vida cotidiana de la población. Se reprimió cualquier intento de organizar pandillas de delinquentes, como abundan en otras poblaciones pobres de Lima. Se sancionó el robo, maltratos a las mujeres de parte de los maridos, no se admitía la drogadicción, la irresponsabilidad familiar, y otros delitos. Los pobladores que infringían las reglas de conducta interna eran sancionados, y dependiendo de la falta, el castigo podía ser, una cantidad de azotes, el corte (rapado) de los cabellos, doble tarea comunal, paseo público con un cartel acusador pegado al pecho y a la espalda, etc. “El que robaba a un pobre era severamente castigado”, y en algunos casos la sanción sin piedad era la expulsión del pueblo” . (Testimonio de un poblador de Raucana, que desde 1992 reside como refugiado político en un país de Europa). En Raucana, dice en su informe la CVR (70) “como en otros sitios donde el PCP-SL tuvo presencia, se estableció una suerte de código muy simple, rígido y con castigos ejecutados mediante procedimientos sumarísimos Este rol sancionador, por un lado, sirvió para engrosar los atestados acusatorios de algunos de los dirigentes, cuando fueron apresados; pero, por otro lado, fue visto por la población como algo muy positivo -por su eficacia- dado el contexto de altísima inseguridad en que tenían que desenvolverse. No solo eso: el éxito del PCP-

SL en este sentido tuvo relación directa con la percepción de inoperancia de las instancias públicas que debían prevenir y sancionar los delitos”.

El prestigio de la seguridad interna implantada en Raucana se hizo conocido en los pueblos jóvenes que rodean Lima. Raucana sin delincuentes, sin alcohólicos y sin traficantes de droga, fue una fama que corrió como un reguero de pólvora. Los pueblos jóvenes que sufrían la plaga de la delincuencia común, en lugar de recurrir a la policía o al ejército para resolver este problema, solicitaban ayuda a los pobladores de Raucana. Un ejemplo de esto es narrado por un poblador que fue entrevistado por la CVR. Según este testimonio, una vez los dirigentes de Raucana fueron contactados por teléfono desde el pueblo joven Ceres. Querían dice este testigo, que le ayudemos a capturar una banda de ladrones que venía asolando a la población. Se aceptó el pedido de colaboración, y se les envió un grupo de seguridad integrada por 10 personas expertos en “cazar ladrones”. Una vez atrapados los malhechores fueron llevados a Raucana donde los hicieron pasar un “callejón oscuro”, les cortaron los cabellos, y con un cartel en la espalda y pecho, como si se trataría de un sándwich los paseaban por las calles (71).

Este parte testimonial, es apenas un ejemplo de la organización de seguridad que se habían dotado los ciudadanos de Raucana. Sin duda, este tipo de seguridad colectiva, no se parecía en nada al servicio que daban las fuerzas policiales, cuya naturaleza institucional en nada la diferenciaba de las bandas de criminales y de delincuentes comunes. En Perú, la policía en lugar de ser un elemento de seguridad de la población, es un peligro permanente. Es conocida la convivencia de la policía con la delincuencia común y la corrupción. Muchos delincuentes cometen sus fechorías en combinación con los miembros de la policía. El crecimiento del narcotráfico, el aumento de las bandas de secuestradores que canjean a sus

victimias por una cantidad de dinero, y otras lacras sociales, se ve favorecida con la corrupci3n en las fuerzas policiales y en el poder judicial.

No solo fue en Raucana donde se encuentran este tipo de hechos testimoniales. Como narra Simon Strong, en su libro sobre Sendero Luminoso, un elemento que ayud3 a la guerrilla fortalecerse en la selva peruana, es cuando “estableci3 su papel de protecci3n de los campesinos coccaleros”. Dice este periodista ingl3s, que los drogadicctos, las prostitutas, los ladrones y estafadores fueron tratados con sumario rigor. A partir de ello anota el escritor, bajo el nivel de delincuencia, y que por ello la poblaci3n reclamaba la “presencia del Partido en todas partes, la gente se siente protegida por 3l y cree m3s en su justicia que en la polic3a, que por un poco de dinero libera a los delincuentes y los hace trabajar como soplones. Es ante los comit3s populares, donde la poblaci3n se queja de los ladrones”. Seg3n Strong, un abogado de Tingo Maria, se quejaba con raz3n que Sendero Luminoso le hab3a hecho perder todos sus clientes del campo. Antes, narra el abogado, “ven3an por los robos y los problemas de las tierras o la familia, pero ya no viene nadie. Tienen su propia forma de justicia, y es l3gico, porque la justicia oficial es cara, quita mucho tiempo, es lenta, corrompida e indeficiente. La polic3a est3 mal pagada y pide dinero del agresor y la victima y el resultado es que no pasa pr3cticamente nada. Sendero Luminoso educa al campesino, le da disciplina, le enseña respeto por el trabajo y le ofrece una justicia eficaz en ausencia de la justicia oficial” (72). Para Henry Favre, la “Justicia Popular” que implant3 Sendero Luminoso, “se mostr3 verdaderamente despiadada con respecto al robo y al abigeato”. En suma, dice este antrop3logo franc3s, “los senderistas hac3an reinar el orden, un orden igualitario, el del ideal colectivo campesino, bajo el cual parecer3an que resurg3an antiguas estructuras comunitarias erosionadas...proteg3an mucho mas eficazmente que el gobierno a la comunidad” (73).

Raucana como proyecto político social del Partido Comunista del Perú (PCP) o como simple iniciativa revolucionaria de sus pobladores, fue el resultado del proceso de lucha armada que se inició en 1980. Su existencia, en plena capital del país, era una espina que molestaba enormemente al gobierno y a todas esas organizaciones que trafican con la miseria de la población. Este pueblo era una isla cercada por un sistema implacable, y su supervivencia estaba íntimamente relacionada al triunfo o la derrota de la lucha armada. El Estado, y sobre todo sus representantes políticos, no podían dejar crecer un modelo de sociedad administrado con eficacia por sus propios pobladores, y que además era superior al orden social oficial. Destruir Raucana y su modelo de organización se convirtió en un objetivo político militar inmediato del Estado. El 6 de septiembre de 1991, cuando ya Fujimori se había lanzado a “conquistar” por vía militar los barrios pobres que rodean Lima, el ejército tomó por asalto Raucana. La acción militar fue brutal y la población respondió con coraje, pero las tropas militares que pasaba de 1,500 efectivos, armados con metralletas y tanquetas blindadas, lograron doblegar violentamente a la población. Al frente del operativo militar se encontraban el general César Ramal Pesantes y el general Luis Pérez Documet, el último de los nombrados fue el responsable de una centenas de crímenes de guerra, entre ellos el secuestro y el asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta en julio de 1992. Los soldados anunciaron que su ingreso a esta “zona roja”, como la denominaba la prensa, era para desarrollar “acciones cívicas” del ejército. El saldo fue 6 pobladores asesinados y más de 8 dirigentes secuestrados por los militares. Al final de la batalla los soldados reunieron en el centro del pueblo a toda la población y bajo amenazas de ametrallar a los que aun resistían, los obligaron a izar la bandera del Perú y cantar el “himno patrio”. Así comenzó la invasión de Raucana, y así se inició el sistema militar draconiano que implantaron las tropas militares en este pueblo

joven. Inmediatamente los militares reclutaron mercenario y organizaron las “rondas urbanas” bajo la jefatura de las fuerzas armadas.

Un testimonio de estos acontecimientos fue recogido por la Comisión de la Verdad y reconciliación (CVR). “No me acuerdo la fecha exacta, llegó una mañana, las que más se deben recordar son las viudas porque ese día hubo 6 muertos, ese día entraron los militares. Nosotros nos cuidábamos más que entren por la avenida Esperanza, por San Antonio o por San Gregorio, pero nunca nos imaginábamos que iban a entrar por Amauta. Me acuerdo que era las 9 de la mañana, yo había mandado a mi hijo a la escuela porque estudiaba cerca, estaba en mi casa preparando el almuerzo y en eso los vecinos gritan ‘¡alerta!, ¡alerta!’, salimos y nos dicen ‘miren vecinos’, miramos al frente en el cerro y vimos sobre un asentamiento que se llama Fátima, sobre Fátima había bastantes soldaditos, estábamos rodeado de militares, todos nos asustamos, había rumores de que Raucana tenía que desaparecer. Entraron hablando con megáfonos que se iba a hacer acción cívica, no se asusten, decían” (74).

La prensa peruana, presento esta agresión militar como una acción bienaventurada y pacífica y de “ayuda” a la población. El diario La Republica, cuyo propietario era Gustavo Mohome, parlamentario y uno de los dirigentes de la Izquierda Unida (IU), dijo que las tropas del ejército “incursionaron pacíficamente” en el asentamiento humano Félix Raucana, para “apoyar con planes de acción cívica y distribución de alimentos, medicinas y agua potable. “En el asentamiento humano Félix Raucana de la carretera central, que presuntos miembros de Sendero Luminoso pretendieron convertir en refugio para sus actividades sediciosas, flameará la bandera roja y blanca del Perú” (75). El diario Expreso, que era financiado con dinero del narcotráfico que le entregaba Vladimiro Montesinos, dijo, “el gobierno ha tenido el acierto de enviar a las

Fuerzas Armadas a realizar una operación de pacificación a la localidad de Raucana...que se había convertido en una ciudadela fortificada en manos de Sendero Luminoso... Era un abierto desafío al Estado democrático...” (76). El asalto militar de Raucana fue aplaudido por la izquierda legal y demás partidos políticos del medio oficial. Se impuso el “toque de queda” a partir de la 7 de la noche, y se prohibió, bajo amenazas de drásticas sanciones, caminar libremente por las calles. Se implantaron severas medidas represivas, y cualquier protesta individual o colectiva se pagaba con torturas y muchas veces con la muerte. A los sospechosos de pertenecer a la subversión los conducían amarrados como animales a la División de las Fuerzas Especiales (DIFE), en Chorrillos, donde eran torturados. En las madrugadas, que siguieron a la invasión militar, comandos del Servicio de inteligencia Nacional (SIN) con los rostros encapuchados hacían redadas clandestinas para secuestrar pobladores acusados de pertenecer a Sendero Luminoso. Se realizaban permanentes operaciones de “rastri-llaje”, y los soldados aprovechaban de esta acción para robar y maltratar a los pobladores. El ejército se quedó 9 años, y se retiraron recién el año 2000 cuando Fujimori salió huyendo del Perú.

“Teníamos miedo porque en la noche entraban y podías desaparecer, el que no ha hecho nada no teme nada, pero de todas maneras la gente comentaba que a los inocentes se los estaban llevando, que esto, que el otro, teníamos miedo de que en la noche podían entrar y nos podían desaparecer cuando empezaron a llevar a otros vecinos, a los vecinos los llevaban, ya no amanecían, nosotros con temor dormíamos también. De allí poco a poco ya no actuaban ya... (77).

CAPITULO SEXTO

MRTA, LUCHA ARMADA Y CAPITULACIÓN

La versión de arrepentimiento mas reciente de Víctor Polay el líder preso del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) corresponde a mayo del 2008, cuando desde la prisión habló para la revista Caretas. En la entrevista reiteró lo que había dicho el 2003 para la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Volvió a pedir perdón al pueblo por las acciones armadas. Pero en esta ocasión fue más preciso en su planteamiento político. Sentenció, que la lucha armada ya no tiene futuro político, y que la “ola insurgente y guerrillera” en Latinoamérica se había terminado. Ahora se podía aspirar a cambios sociales vía triunfos electorales, dijo. Señaló también, que ahora estaba dispuesto a “defender sin ninguna ambigüedad la frágil democracia peruana, y que el futuro del MRTA era ayudar a construir un movimiento que se plantee ganar las elecciones presidenciales en el 2011. Aconsejó, para el caso del movimiento armado en Colombia, resolver este conflicto a través del diálogo (1).

Las últimas horas del Movimiento Revolucionarios Tupac Amaru (MRTA) se iniciaron en diciembre de 1996, cuando un grupo de tupacamaristas integrados por 14 guerrilleros tomaron la embajada japonesa en Lima junto con 900 rehenes. Alberto Fujimori, hizo amagues de negociación, pero en verdad

ganaba tiempo, para lanzar la estocada criminal. Todo concluyó en abril de 1997, cuando un comando del ejército ingresó por un túnel a la embajada cautiva, y sin piedad exterminó a los atacantes. Con ello como dice el propio Polay, concluyó la lucha armada que había iniciado el MRTA en 1984. Si esa fue la última acción del MRTA, cuáles fueron las anteriores, y que comportamiento han tenido sus líderes y jefes, durante el proceso armado que vivió en el país. El MRTA, como ningún otro movimiento político, se envuelve en una historia poca santa, de alianzas con los gobiernos de turno, desviaciones, y acciones en apariencia revolucionarias, pero que en los hechos servían a las clases políticas y al Estado. En el 2003, Polay utilizó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) para arrepentirse de sus veleidades guerrilleras. Fue entrevistado por esta comisión, y llamó a defender la “democracia” dirigida en ese tiempo por Alejandro Toledo, que como mostraron los hechos fue la continuación del fujimorismo. Manifestó que «con la misma convicción» con la cual se habían levantado en armas, apostaban ahora en el camino democrático que permitía construir “un Perú nuevo en un mundo nuevo... Sé que ahora se mantienen las causas o muchas de las causas que dieron base a la insurgencia armada, pero también sé que el Perú y el mundo han cambiado, y sé que ahora es posible buscar nuevas vías, nuevos caminos, en lo cual podamos resolver los problemas que aquejan a nuestra Patria... considero personalmente de que la tarea de ahora, la responsabilidad de todo peruano consciente, es defender esta democracia que tanto ha costado a nuestra Patria» (2)

De los dirigentes históricos del MRTA, no solo ha sido Polay el que ha renegado de sus antiguas ideas subversivas. Peter Cárdenas Schulte y Alberto Gálvez Olaechea, si antes de 1990 podían tener diferencias con Polay, estas han desaparecido ahora que con “convicción como dicen ellos, apuestan a favor del camino democrático que permitirá construir un “nuevo Perú”. Gálvez Olaechea, es otro conocido dirigente que en el

2003, señaló que el marxismo no tenía ninguna validez, y que había demostrado su falsedad como teoría política. La “idea del Marxismo como una verdad universal ha demostrado ser falaz”. En 2003 también, Peter Cárdenas Schulte, otro dirigentes del MRTA, sin ningún remordimiento de por medio, se arrepintió y se declaró partidario de la “reconciliación nacional”. Pidió perdón al pueblo, y rechazó cualquier idea sobre acciones armadas. Alabó el sistema democrático que según él se había instaurado con la caída de Fujimori (3).

EL SURGIMIENTO DEL MRTA

En 1978 Víctor Polay Campos deserta del APRA, y se une al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), “el militante”, uno de los tantos pequeños grupos que bajo este membrete se sentían herederos político de Luis de la Puente Uceda, dirigente histórico del verdadero MIR que en los años 60 se puso al frente de un movimiento guerrillero. El MIR el militante, era dirigido por Hugo Avellaneda Valdés, un personaje solitario y desconocido en los círculos políticos del país. Avellaneda vive actualmente en Francia en calidad de refugiado y alejado de cualquier actividad política. Polay y Avellaneda conforman una dupla que comienza a frecuentar sin ningún éxito los reducidos de la izquierda legal. Para muchos militantes de esta izquierda, el «chino» Polay seguía siendo un matón del partido aprista, y lo miraban con desconfianza. Algunos creían que era un infiltrado del partido de Haya de la Torre que quería hacer un trabajo de zapa en las filas de la izquierda que en ese tiempo estaba entusiasmada en su éxito electoral.

El 1980 el chino Polay se relaciona con Luis Varesse Scotto, un joven dirigente del Partido Socialista Revolucionario-Marxista-Leninista (PSR-ML), que se planteaba con sinceridad iniciar la lucha armada en Perú. Varesse era un antiguo partidario del general Juan Velasco Alvarado, y acababa de retor-

nar de Nicaragua donde había vivido la caída de Anastasio Somoza. Este junto a otros dirigentes del PSR-ML tuvieron su experiencia guerrillera en el Frente Sur Sandinista y habían visto de cerca las hazañas de Edén Pastora, el «comandante Cero», uno de los jefes sandinistas, que después trabajaría para CIA americana. El partido de Varesse salió de una división del «Partido Socialista Revolucionario» (PSR) fundado en 1977 por el general Leonidas Rodríguez Figueroa. Este general fue uno de los cabecillas de la dictadura militar de Velasco Alvarado, y era considerado el militar más de izquierda del gobierno velasquista. Fue jefe del Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS) creado en junio de 1971 por la dictadura. El SINAMOS, pretendió ser el «partido político» de los militares en el poder. Su objetivo principal estaba dirigido a corporativizar y controlar el movimiento obrero y popular. Luis Varesse Scotto fue funcionario de este organismo y durante el velasquismo fue un colaborador cercano de Leonidas Rodríguez. Tanto Leonidas Rodríguez, como Varesse, salieron del SINAMOS en 1975, cuando el general Morales Bermúdez arrojó del poder a Velasco Alvarado.

Recién en octubre de 1982, el PSR y el MIR-El Militante dan nacimiento al MRTA. En los inicios la dirección partidaria recae en un triunvirato integrado por Luis Varesse, Polay Campos y Hugo Avellaneda que no se despegaba un milímetro del chino Polay. En 1984, cuando faltaba un año para que concluya el gobierno de Fernando Belaúnde, el MRTA hace sus primeras acciones armadas. Estas acciones no tenían ninguna envergadura político militar, y solo estaban referidas a pequeñas actividades sonoras pero sin ninguna incidencia para el gobierno. Este mismo año estalla un agudo conflicto entre Varesse y Polay, cuyo origen tenía que ver con el control de la flamante organización subversiva. Polay, experto en zancadillas internas (lo había aprendido en el APRA) se impone y gana la contienda. Para ello utiliza métodos coercitivos y violentos propios del aprismo. Se hace reconocer como

«comandante» y Varesse es expulsado, acusado por Polay de cobardía y deserción. Es apresado por la policía y encarcelado en una cárcel de Lima. Estuvo un corto tiempo en prisión, y a los pocos meses es liberado por el gobierno. Para evitar caer asesinado por el grupo de Polay viaja al extranjero. Se refugia en México y posteriormente en Nicaragua

El contexto político que rodea el surgimiento del MRTA está marcado por el desarrollo de la lucha armada dirigida por el Partido Comunista del Perú (PCP). En esos momentos, el problema fundamental a resolver por el Estado era liquidar la guerrilla maoísta y pacificar el país. En esa coyuntura las clases sociales exponían entre sí sus máximas contradicciones. Los partidos oficiales, incluidos los llamados de «izquierda» habían iniciado un acelerado proceso de descomposición. En el plano gubernamental, el régimen dirigido por Belaúnde Terry fracasaba en todo los terrenos, incluyendo el campo militar. En esa coyuntura aparece el MRTA, cuyas acciones tenían mucho de publicidad, pero no servían para hacer avanzar el conflicto armado. Desde el inicio proclamó ser «la forma más avanzada de la lucha político-militar» del pueblo, y que buscaba organizar a todo el movimiento popular para una guerra revolucionaria victoriosa».

EL DOBLE JUEGO POLÍTICO DEL MRTA

Si en la propaganda el MRTA publicitaba la guerra revolucionaria para tomar el poder, en el plano práctico político, repetía los viejos planteamientos de las organizaciones políticas que en Perú integraban la Izquierda Unida (IU), que desde hace más de medio siglo se han opuesto a cualquier cambio revolucionario y progresista de la sociedad. Este grupo armado se alió a la izquierda legal y en ese terreno, su actividad guerrillera se asoció, a los proyectos políticos legales para sostener el sistema y para contribuir con la afirmación política de los

representantes de los grupos de poder. Las coincidencias entre el MRTA y esta izquierda se manifestaron en diversos aspectos, principalmente en el terreno electoral y en la lucha contra la guerrilla maoísta. El MRTA asumió la misma posición que esta izquierda en cuestiones fundamentales como la iglesia, los militares, los partidos burgueses, las rondas campesinas contrainsurgentes, el problema del Estado, y otras cuestiones vitales respecto a la sociedad peruana. Las acciones armadas de los tupacamaristas y las acciones legales y electoreras de la izquierda, fueron una combinación para sostener al gobierno de turno que “democráticamente” provenía de elecciones fraudulentas.

En julio de 1985, Alan García Pérez, líder y candidato del APRA, gracias a los votos de la izquierda legal, gana el sillón presidencial. Un mes después (16 de agosto), el MRTA anuncia en una publicitada «conferencia en la clandestinidad» una «tregua» unilateral al recién instalado régimen aprista. Este grupo no reclama nada, y dice que respetaba la “voluntad popular, que se había expresado en las urnas”. La «tregua» que ofrecía el MRTA al gobierno, resultaba un poco ridícula, en razón a que la guerrilla de Polay, no pasaba de pequeñas acciones contra puertas y ventanas de desguarnecidos bancos privados. La principal actividad de los tupacamaristas se restringía a enviar notas de prensa a los medios de comunicación. El mismo Polay se encarga de justificar esta tregua, y señala que “con el cambio de gobierno se abre una nueva situación política en el país... Se atraviesa una nueva situación política, se abre una oportunidad histórica.... Nosotros no queremos que haya una guerra civil, queremos evitarla si es que se consigue la justicia previamente. Y ahora existe una oportunidad histórica». En la misma conferencia, el jefe del MRTA proclama: «nosotros sabemos y creemos que en el gobierno aprista existe una voluntad de cambio, por lo menos se han comprometido con el pueblo a cambiar. Nosotros queremos dar esa oportunidad, nosotros vamos a creer en lo que

haga el APRA, y la primera es por ahora no hacer acciones contra el gobierno ni contra el Partido Aprista».... Respetuoso de esta mayoría el MRTA no realizará acciones militares contra el APRA y el nuevo gobierno mientras éste no ataque al pueblo» (4).

Cuando Polay anunciaba que el MRTA no realizaría «acciones militares» contra el APRA, «mientras éste no ataque al pueblo», el gobierno ya tenía en su haber un estudiante asesinado a consecuencia de la brutal represión policial en una barriada pobre de Lima. El mismo mes de agosto, mientras el MRTA anunciaba que en el gobierno aprista había una voluntad de cambio, una patrulla militar ingresaba al poblado de Accomarca (Ayacucho) asesinando a 69 campesinos. El 27 de agosto casi simultáneo con las declaraciones de paz de Polay, el ejército exterminaba a cerca de 70 pobladores de Umaro y Bellavista (Ayacucho). Ninguno de estos crímenes de guerra hizo cambiar de opinión a Polay, quien no se quedó en simples alabanzas y esperanzas solamente para el gobierno. Las hizo extensivas a las fuerzas armadas, que como se conoce desde 1980 habían cometido miles de secuestros, torturas, y asesinatos contra poblaciones andinas y en los barrios pobres de las ciudades: «frente a las fuerzas armadas, nosotros consideramos que ellos tienen una tradición y un pasado muy rico. Las fuerzas armadas nacieron con la constitución de los montoneros, de la guerrilla que lucharon por la independencia. ... sí sabemos que dentro de las fuerza armadas, el ejército y la marina, existen sectores consecuentes, a los cuales apoyamos y tenemos expectativas....”, dice Polay en una entrevista el 16 de agosto 1985.

Los intentos dialogantes del MRTA son múltiples durante el régimen aprista. Para mencionar los más publicitados. El 26 de marzo de 1989, los tupacamaristas envían una carta al cardenal Juan Landázuri en la que piden que interceda ante el gobierno para establecer el diálogo y poner fin a la guerra.

En julio de 1989, nuevamente retoma la iniciativa el MRTA. En esta oportunidad secuestra al aprista Demetrio Tafur, presidente de la Corporación Regional de Desarrollo del Departamento de San Martín. El «secuestrado» es liberado y se convierte en vocero del grupo subversivo. Anuncia que el MRTA pide como mediadora a la iglesia para «dialogar y abandonar las armas».

EL FESTÍN ELECTORAL DE LOS TUPACAMARISTAS

En 1990 el MRTA, se incluye en el festín electoral y participa en las elecciones donde fue elegido Alberto Fujimori. Impulsó sus propios candidatos o apoyó a los de Izquierda Unida (IU). Para el grupo de Polay Campos, el pueblo “vio en Fujimori su propia imagen, la de los sectores tradicionalmente marginados del poder” (5). En 1990, era la segunda vuelta electoral donde se dirimiría el sillón presidencial entre Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori. El MRTA, en un comunicado, firmado por Cerpa Cartolini, líder de la dirección de este grupo, anunciaba sus preferencias por Alberto Fujimori, a quien calificaba de ser un personaje al “margen de la politiquería criolla”, y que con Fujimori el pueblo rechazaba el continuismo aprista y de la derecha (6). En julio de este año, Fujimori gana la presidencia con el voto de la izquierda, en la cual participaba el MRTA. Dos meses después (setiembre) los tupacamaristas reeditan sus virtudes negociadoras y plantean el diálogo con el nuevo gobierno. El estilo es el mismo empleado con Alan García. El despliegue publicitario corre a cuenta del aparato oficial. El MRTA, para esta ocasión «secuestra» al diputado Gerardo López, militante del partido de Fujimori (Cambio 90). Después de algunos días, el diputado «secuestrado» fue puesto en libertad y a partir de ahí se convierte en el emisario de los tupacamaristas. Gerardo López, anuncia que el MRTA «tiene voluntad de dialogar e incluso de deponer las armas».

Respeto a este periodo electoral, es el mismo Polay Campos quien relata sus ambiciones electorales: «Las elecciones presidenciales en cambio despertaron una gran expectativa... Nuestra posición en esa primera vuelta fue compleja, por que era compleja la realidad. Reconocimos y respaldamos un abanico que iba desde el voto viciado y en blanco hasta el apoyo a los candidatos consecuentes en las listas de IU... Varios parlamentarios electos pertenecen a los sectores más avanzados de IU» (7). Los dirigentes del MRTA se sintieron reconfortados y orgullosos de haber sostenido a los «candidatos consecuentes en las listas de IU» (8). Pero este grupo, no sólo negoció la lucha armada, y dio validez a los procesos electorales organizados en los cuarteles militares. Se comprometió también a la formación de las rondas campesinas y grupos de defensa civil (grupos paramilitares) que el ejército utilizó en gran escala en la guerra contrainsurgente.

El criterio político que manejó el grupo tupacamarista sobre los procesos electorales, no fue diferente a la forma de actuar de Izquierda Unida (IU) y de los partidos de la derecha peruana. Su concepto sobre «democracia» «elecciones» y «terrorismo», fue copia de la que utilizó el Estado para sustentar sus campañas de desinformación y la guerra contrainsurgente. Polay estaba al frente de un movimiento que hacia acciones armadas, pero creía en las bondades de las elecciones, que con fraude, falsificación de firmas, y otras ilegalidades, se organizaban periódicamente desde el Estado para camuflar el sistema corrompido y antidemocrático. Desde 1984 hasta 1997, el MRTA se asoció al carro electoral de la izquierda legal del país. Con candidatos propios a apoyando a sus socios de Izquierda Unida, los tupacamaristas, estuvieron presentes en todas las elecciones, ya fuesen presidenciales, parlamentarias, o simplemente municipales. Por mencionar un ejemplo, para las elecciones municipales de 1989, Víctor Polay Campos señaló que de “un lado la derecha reaccionaria con el FREDE-

MO a la cabeza, con alternativas antipopulares: por otro lado, la Izquierda Unida y el MRTA” (9). En estas elecciones, la guerrilla maoísta decretó un boicot contra las elecciones municipales. Para este propósito, intensificó sus acciones armadas en todo el país. El MRTA, como lo dijo el mismo Polay, salió a enfrentar las intensiones boicoteadoras de la subversión. “El boicot que convocó Sendero Luminoso ha sido un rotundo fracaso. El pueblo peruano rechazó la política del terror y amedrentamiento que desarrolló S.L. Es que algunos miles de activistas senderistas no pueden ni podrán imponer su voluntad a más de veinte millones de peruanos” (10).

El antisenderismo del MRTA y su vinculación a cada proceso electoral, convirtieron este grupo en un elemento importante en los planes para reforzar el sistema político del país. La unidad electoral y «antisenderista» entre el MRTA y la izquierda oficial, configuró una tarea estratégica para proteger y salvaguardar la estabilidad del Estado y asegurar la continuación del sistema político del Perú. El MRTA, abierta o encubiertamente, apoyó la organización de las rondas campesinas (paramilitares), y participaron directamente en combates contra la guerrilla maoísta. “No es verdad que todas las rondas enfrentadas a SL sean contrarrevolucionarias” (11), decían en 1990 los tupacamaristas negando que las rondas que participaban en la guerra contrainsurgente estaban organizadas y dirigidas por las fuerzas militares. El mismo Polay reconoce que su organización cumplió un rol importante para combatir a Sendero Luminoso en los andes. El señala que el MRTA “ayudó a las comunidades a rechazarlos, les ocasionamos como 20 bajas” (12). Polay hace uso de la terminología de la guerra de desinformación para desprestigiar y calumniar a Sendero Luminoso, de la misma forma que lo hace la derecha y los medios de comunicación del gobierno. Repite las campañas fabricadas por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para golpear a la guerrilla maoísta en el campo de la información y opinión pública. En 1992 decía que su partido había acordado

“apoyar el impulso de las rondas campesinas y vecinales para enfrentar la guerra sucia del Ejército y de Sendero Luminoso contra el pueblo... Sendero plantea, en la práctica, una dictadura del Partido Comunista del Perú sobre el conjunto de la sociedad ... En el curso de la guerra no respetan las leyes y los principios consagrados en los tratados y convenciones de Ginebra, y utilizan el terror como arma indiscriminada” (13).

Es una constatación clara que el MRTA nunca se planteó seriamente luchar por una verdadera guerra por el poder. Sus acciones espectaculares fueron dirigidas a buscar acuerdos y pactos con los gobiernos de turno. “Nosotros no queremos que haya esa guerra civil, queremos evitarla.... Los dolores los sentimos todos, hay que alumbrar esta nueva sociedad, hay la oportunidad que se haga a través de una guerra civil o a través un entendimiento”, decía Polay en agosto de 1985, cuando recién se había instalado el gobierno de Alan García (14). Cuando el jefe del MRTA le decía al régimen aprista «evitar la guerra civil», el proceso armado dirigido por Sendero Luminoso, tenía cinco años de desarrollo y la propia dinámica de este conflicto agudizaba la lucha de clases. Por ello, no era casual la propuesta de paz del MRTA, ni su afán de evitar la guerra civil, que como lo reconocían los representantes del gobierno y de las fuerzas armadas, se conseguiría únicamente con la derrota de la guerrilla maoísta. «Las condiciones mínimas que nosotros exigimos para pasar a un proceso de pacificación, necesariamente, tiene que pasar por la derrota de Sendero Luminoso. Una entrega de las armas en las condiciones actuales desarrollaría más violencia porque provocaría el crecimiento de Sendero... En este contexto, estamos dispuestos a derrotar política y militarmente a Sendero Luminoso, como lo hemos hecho en esta zona donde hemos eliminado a más de 60 mandos de Sendero. Esta sería nuestra contribución a la pacificación del país...”, decía en 1991 un alto dirigente del MRTA (15).

Con el MRTA se confirma la apreciación política, respecto a que no todo proceso de lucha armada es revolucionario. El MRTA aplicó un doble discurso y una doble conducta política. Por un lado decía, que dirigía una guerra revolucionaria para alcanzar el socialismo, pero elegía sus aliados en el campo de los aliados de los grupos de poder. Durante toda su trayectoria sus existencia, no dejó de afirmar que era un “movimiento revolucionario que preferiría evitar la guerra” (16) Sus alianzas eran en los sectores adictos al poder oficial y que estaban en contra de cualquier tipo de cambio revolucionario en Perú. Intenta su legitimización en el seno de la izquierda legal. Pacta abiertamente con el APRA y con «las bases» del fujimorismo. Se pone a la cola de figurones políticos y reaccionarios como Pérez de Cuellar (Ex jefe de la ONU). Mediante subterfugios construye puentes de unidad con el ejército, la policía y la reaccionaria iglesia peruana. Toda esta «unidad», como decía Polay, servía para oponerse a la dictadura propuesta por «Sendero Luminoso». En 1992, en pleno régimen corrupto y criminal de Fujimori, el jefe del MRTA señala que en el Perú, a “pesar de la profunda crisis moral económica que existe, hay importantes fuerzas sanas y democráticas al interior de los partidos políticos, tanto en los tradicionales (derecha) como en los de izquierda, así como al interior de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. Creemos que la Conferencia Episcopal debe jugar un papel importante. Así mismo, figuras relevantes como Javier Pérez de Cuéllar pueden desempeñar un rol de mediadores para iniciar un proceso de discusión, de diálogo en diversos planos, y llegar a ciertos acuerdos” (17).

El carácter de un proceso armado, depende del contexto histórico, de las fuerzas que participan en ella, y de la realidad en la que se desenvuelve. Un fenómeno de lucha armada, dependiendo de su filiación de clase, y de sus objetivos estratégicos, puede definirse como revolucionario, progresista, nacionalista, proimperialista, fascista y contrarrevolucionario. Para determinar la autenticidad y la esencia política del proceso

armado es necesario analizar con rigurosidad tres cuestiones fundamentales: 1) Cuál es el sustento ideológico de la organización que dirige el proceso; 2) Cuáles son sus objetivos estratégicos políticos y; 3) A qué clase sirve y representa. A partir de estos tres factores, y tomando como referencia la trayectoria del MRTA desde 1984 hasta 1997, es fácil ubicar el carácter y contenido político de este grupo que combinó una práctica guerrillera con actividades políticas dirigidas a mantener el Estado, que en el discurso pretendía destruir.

HISTORIA APRISTA DE VÍCTOR POLAY

Víctor Polay Campos, conocido con el nombre de «comandante Rolando», fue formado y moldeado ideológicamente en el seno de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), un partido de negra trayectoria política. Cuando tenían 7 años (1958) sus padres militantes del APRA, lo inscribieron en la CHAP (Chicos Apristas Peruanos). Este organismo es una especie de «guardería infantil» ideologizada, donde niños y niñas de 7 a 14 años, son moldeados políticamente. Cuando aún vivía Víctor Raúl Haya de la Torre, eran los «chapistas» (niños del CHAP) los encargados de dar un ambiente angelical a los festejos públicos que organizaba cada año este partido en el onomástico del «jefe» aprista. Polay fue un destacado chapista, y vestido como un duendecillo, entregaba ramos de rosas y violetas a Víctor Raúl Haya de la Torre. En ese partido ocupó altos cargos en la cúpula intermedia del partido y fue uno de los militantes predilectos de Víctor Raúl Haya de la Torre.

El APRA es un partido de la derecha peruana y del imperialismo. Fue fundado en diciembre de 1924 por Víctor Raúl Haya de la Torre. Este personaje, hizo del anticomunismo una de sus principales actividades políticas. Haya de la Torre, conocido como el «jefe» acumuló un abultado expediente de

componendas, traiciones y oscuros pactos políticos con militares golpistas y sátrapas civiles. El APRA, desde su fundación pretendió presentarse como del campo popular, para ello utilizó una retórica en apariencia de izquierda y popular. Doctrinalmente, el APRA, es una mixtura de populismo burgués de esencia anticomunista, acompañada de una práctica neofascista. Este partido, por su verticalidad en su sistema de organización (obediencia ciega al jefe), y por su práctica violenta, nunca fue una fuerza política democrática, ni siquiera desde el punto de vista burgués. Durante toda su existencia fue enemigo de los campesinos, obreros y otras clases oprimidas. Hizo alianzas con terratenientes, burgueses y potencias extranjeras, en particular con los Estados Unidos. Haya de la Torre, su fundador vivió en Berlín a mediados de los años 20, época del inicio y apogeo del nazismo hitleriano. De ahí copió los esquemas organizativos, los métodos violentos, y la fanfarria fascista que durante toda su historia y hasta la actualidad caracteriza al APRA. Brazo izquierdo en alto con la mano extendida, para saludar al jefe del partido, y los lemas, "Fe, Unión, Disciplina y Acción", son algunas de las costumbres que importó Haya de la Torre de la Alemania hitleriana. El APRA es un partido de las transnacionales, y mantiene estrechos lazos con organismos de penetración de los Estados Unidos. A través de la Confederación de Trabajadores del Perú-CTP, un organismo sindical burocrático y amarillo, desde hace más de 50 años mantiene una estrecha relación con organismos controlados por la CIA americana.

Julio Antonio Mella, destacado militante comunista cubano asesinado en 1928, acusó al APRA de ser un nuevo «fascio» que se encubría con un ropaje «antiimperialista», pero que su objetivo fundamental era luchar contra la influencia marxista en América Latina. Haya de la Torre fue un intolerante enemigo de la República Soviética dirigida en aquel entonces por Lenin. Hizo alianzas con los más feroces anticomunistas de América para enfrentar a los partidos y fuerzas de la terce-

ra Internacional Comunista. El APRA acuñó la frase: «ni con Washington ni con Moscú sólo el aprismo salvará al Perú». Después de la segunda guerra mundial apoyó la doctrina Truman y el Plan Marshal. Negó la necesidad del partido de la clase obrera y planteó el partido de los «trabajadores manuales e intelectuales», bajo la conducción de los últimos.

En 1968 Polay Campos fue secretario de relaciones exteriores del «Comando Universitario Aprista» (CUA). Este organismo, temido y odiado por los estudiantes, sembró el terror durante 30 años en las universidades peruanas. Muchos universitarios pagaron con sus vidas la audacia de haberse enfrentado a las huestes asesinas del APRA. Los miembros del «Comando Universitario» están estructurados y funcionaban como grupos paramilitares. Su línea y acción política se nutría, y aún es así, de un anticomunismo primario. Este comando, para cometer sus fechorías, siempre contó con el apoyo de la policía. La década del 60, «época de oro» de Polay es recordada como la etapa más violenta en el medio universitario. El APRA a través de sus brutales «búfalos», llegaron a controlar las principales universidades del Perú. Es aquí que se hace conocido el «Búfalo Pacheco». Avezado delincuente común que dirigía un «comando» de 40 o 50 matones apristas y que armados de revólveres, metralletas, cachiporras, manoplas, etc., sembraron el terror en las universidades, sindicatos y barriadas populares. A partir de 1985, primer gobierno del aprista Alan García Pérez, el «Búfalo Pacheco» apoyado por las fuerzas policiales, intensificó su acción vandálica. Muchos ciudadanos pobres fueron asesinados por las hordas de este matón del APRA. Finalmente, en 1990, el «Búfalo Pacheco», ex camarada de Polay Campos fue emboscado y aniquilado por un comando guerrilleros del Partido Comunista del Perú (PCP).

POLAY EL PREFERIDO DE HAYA DE LA TORRE

En 1970, Polay saltó del «Comando Universitario Aprista» al «Buró de Conjunciones» (Escuela de cuadros del APRA). Esta instancia partidaria está encargada de «seleccionar» y «preparar» a los futuros líderes de este partido. Los escogidos para este organismo eran los jóvenes predilectos de Haya de la Torre. Al «Buró de conjunciones» ingresaban solamente los militantes de mayor confianza de la cúpula partidaria, y sobre todo aquellos que habían destacado en acciones anticomunistas. De este organismo salió Alan García Pérez que en 1985 llegó a la presidencia del Perú.

En 1972, Polay Campos pasa del «Buró de Conjunciones» a secretario general del Comité Ejecutivo del APRA en el Callao (principal puerto del Perú). El mismo año es detenido por la policía. Lo acusan de haber participado en los sangrientos sucesos ocurridos en Lima en febrero de 1970, donde murieron en acciones vandálicas más de 200 personas. El APRA negocia con el régimen militar la libertad de Polay y de otros apristas comprometidos. Víctor Polay logra un exilio dorado en lugar de la prisión. En 1973 Polay Campos viaja a Europa con una «beca de estudiante». Primero llega a Madrid (España) y después a Francia donde formaría un dúo de cantantes callejeros con el futuro presidente del Perú Alan García Pérez. En 1978, Polay regresa al Perú, cuando el APRA había afianzado su convivencia con la dictadura militar que encabezaba el general Morales Bermúdez. El APRA se constituye en la principal fuerza política en las elecciones a la Asamblea Constituyente convocada por el régimen militar. Logra la mayoría en la Asamblea Constituyente y Víctor Raúl Haya de la Torre gana la presidencia de la misma. Con el triunfo del APRA en la constituyente, los apristas en exilio dorado hicieron sus maletas para regresar al Perú. Es aquí que Polay, así como Alan García y otros retornan al país, donde el terreno estaba listo para convivir con los militares y los grupos de poder.

Casi al finalizar la década del 70, Víctor Polay Campos, se aleja «oficialmente» del APRA. El factor principal que influyó para que Polay renuncie a seguir en las filas del aprismo, fue el declive político de Víctor Raúl Haya de la Torre. El jefe del APRA, anciano con más de 84 años a cuesta se encontraban al fin de su vida. Sin ninguna capacidad mental, había perdido el control de su partido. Su asistencia a la Asamblea Constituyente, que él presidía, era solo para balbucear palabras incoherentes y hacer la siesta en medio de las sesiones de esta asamblea. Polay Campos, sin padrino y abandonado a su suerte, quedó fuera de carrera partidaria. No pudo hacer frente al repunte de Alan García Pérez, Carlos Roca, Barba Caballero, Abel salinas, Luis Negreiros, Javier Valle Riestra y otros que eran denominados como la «nueva generación aprista». Alguna vez un viejo militante del APRA dijo de Polay; «el chinito (Polay) es bueno para la bronca, para la agitación callejera, es voluntarioso, pero le falta talento y agudeza política. En el APRA ya no tiene futuro».

CAPITULO SÉPTIMO

GONZALO ENTRE EL MITO Y EL OPORTUNISMO

Gonzalo es un personaje poco común de la historia política peruana. En pocos años logró mas poder que todos los partidos y personajes juntos de la política peruana. Durante muchos años en torno a él se tejieron toda suerte de historias y leyendas. Se le calificó de Inkarri, aquel mítico rey inca, hijo del sol despedazado por los españoles que a los 500 años de la tragedia volvería a la tierra para salvar a su pueblo de la injusticia y el oprobio. Otras veces le concedieron el don de la obicuidad, eso de estar en muchos lados y en ninguno, algo así como el espíritu santo que podía transportarse como la antimateria a cualquier parte del planeta. Lo veían en Ayacucho dirigiendo sus huestes subversivas, y en el mismo instante hablaban con él en otro lado a 2,000 kilómetros de distancia. Un día estaba muerto otro día estaba vivo, y era como el nictálope que combatía a sus enemigos en la impenetrable oscuridad de la noche, y donde él solamente podía ver como si se tratara de la luz del día.

Ninguno de los líderes de la burguesía o de la izquierda legal pudo competir con su celebridad que acechaba súbitamente sus fortines políticos. Ni siquiera el cardenal de los católicos osó ponerse en su camino, y prefirió aliarse con los militares. Desde los primeros años de la década del 80 todos los medios de comunicación del país, utilizaron en promedio un tercio de

sus espacios cotidianos para hablar de Sendero Luminoso y de su enigmático cabecilla. Ahí entre odios y miedos, estaban buscando la primicia detrás de una acción subversiva. Muchas veces las revistas especializadas de Lima lo ubicaron en los más altos rangos de los “hombres con mayor poder en Perú”. En 1992, Bernard Aronson, secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos norteamericano, en un informe que hizo en el Senado de los EE.UU. lo presentó como el más peligroso enemigo de los Estados Unidos en el hemisferio latinoamericano. (1.) Su ascensión política fue rápida como la pólvora y se equilibró con el avance de la guerrilla y la debacle del Estado. Nunca antes en Perú un personaje político había concitado tal expectativa en la población. En julio de 1988 El Diario le hizo una entrevista en la clandestinidad, la misma que fue publicada bajo enormes peligros pero con grandes éxitos periodísticos y de ventas. El extenso reportaje de 12 horas ininterrumpidas al jefe senderista cubrió tres ediciones integrales de cerca de 50 páginas de este cotidiano y las ventas fueron de 220 mil ejemplares en dos ediciones seguidas que se agotaron a las pocas horas que fueron descubiertas por el público. En estas ediciones no se considera la ilegal confiscación policial de 100 mil ejemplares (tercera edición) que fueron a parar a los almacenes subterráneos de la policía antiterrorista. (*)

Gonzalo es un dirigente atípico si se le compara con las grandes cumbres del pensamiento revolucionario mundial, que a diferencia de él desde muy jóvenes se inclinaron por la lucha revolucionaria. Gonzalo tiene cerca de 30 años cuando comienza a moldear su carrera política, pero José Carlos Mariátegui (**) tenía 23 años en 1918 cuando “nauseado de política criolla”, se orienta hacia el socialismo. En 1926 tiene 31 años cuando funda el periódico Amauta, un medio de comunicación que se convertiría en una herramienta fundamental de las luchas populares en el Perú. Por esta época ya Mariátegui era autor de unos veinte extraordinarios libros sobre la polí-

tica peruana, la escena contemporánea mundial, y cultural, filosofía e historia. En 1928 tiene treinta y tres años cuando publica *Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana*, obra cumbre de análisis marxista de la sociedad peruana. Este mismo año crea el Partido Comunista del Perú (PCP), que por razones de carácter táctico se llama Partido Socialista. Mao Tsetung a quien Gonzalo pretendió reeditar en una versión peruana, tenía 21 años cuando junto a otros revolucionarios chinos funda el Partido Comunista de China. En 1927 Mao tiene 34 años cuando redacta el *Análisis de las Clases de la sociedad China*, que sería el más extraordinario trabajo de investigación social que sustentó el trabajo en el seno de las masas de los comunistas chinos en la revolución democrática popular. En 1934 tiene cuarenta y un año cuando juntos a miles de campesinos, obreros y comunistas inicia la Larga Marcha que lo llevaría al poder. En 1935 tiene 42 años cuando publica su obra *Sobre las Contradicciones*. En 1949 tiene 56 años cuando al frente de millones de soldados del Ejército Rojo ingresa a Pekín y toma el poder para establecer la República Popular de China.

Abimael Guzmán tiene 19 años en 1953 cuando ingresa a la Universidad San Agustín de Arequipa, y estudia derecho y filosofía durante cinco años. Concluye las dos carreras en 1959 cuando tenía 25 años. En todo el periodo de universitario no se involucra ni en las luchas estudiantiles ni populares que en ese tiempo abundaban en el país. Como lo relata el mismo en la entrevista que le hiciera *El Diario* (2), solo observa las luchas pero no participa en ellas. Al contrario de la mayoría de los estudiantes contestatarios de la época había sido un universitario modelo y buen amigo de los profesores. Al final de su carrera universitaria se afilia al Partido Comunista del Perú (PCP) en su filial regional de Arequipa. En esa época este partido dependía completamente de la Unión Soviética y aplicaba como catecismo la línea internacional impartida por Nikita Jrushov en el XX Congreso del Partido Comunista de la URSS

realizado en febrero de 1956, y asumía dogmáticamente las tesis de la vía pacífica al socialismo que impulsó Jrushov a nivel internacional. En 1962 Abimael Guzmán tenía 28 años cuando se traslada a Ayacucho para trabajar como profesor en la Universidad San Cristóbal de Huamanga reabierta en 1957. Fue invitado por Efraín Morote, rector de esta universidad (3). Ingresó como profesor de ciencias sociales, y ello constituía su primer trabajo fijo. Sus planes en Ayacucho son bastante modestos, y como señala en la entrevista a *El Diario*, solo pensaba quedarse “un corto tiempo”.

ABIMAEEL GUZMAN EN AYACUCHO

Cuando Gonzalo aterriza en Ayacucho en 1962 no se plantea ninguna perspectiva política que valga la pena y su proyecto no iba más lejos de permutar su militancia en el Comité “José Carlos Mariátegui”, una base regional del PCP sin ninguna importancia. La regional ayacuchana de este partido, reflejo de una organización en crisis, estaba inactiva desde hace muchos años. Sus raleados militantes se reunían esporádicamente solo con fines festivos y conmemorativos de alguna efemérides local. No tenía ninguna influencia en la vida política de esta ciudad, y menos en la Universidad donde trabajaban algunos de sus integrantes. Uno de los dirigentes de este comité era Carlos La Torre, que más adelante será el suegro de Abimael Guzmán cuando éste con 30 años auestas contrae nupcias en 1964 con Augusta La Torre Carrasco, una joven estudiante de 19 años de edad. Sin embargo su carrera en la universidad ayacuchana sería reluciente, y alcanzaría los puestos de mayor responsabilidad y jerarquía profesional. En poco tiempo fue catapultado a titular de la facultad de Educación, y a partir de 1963 asciende a Director del ciclo Básico de Estudios generales. Posteriormente en 1970 dará un salto más alto y será Director de Personal Académico Administrativo de la universidad. Esta fulgurante carrera concluye

en 1975 cuando es separado definitivamente de la lista de académico de esta universidad. Sin ninguna responsabilidad profesional ni trabajo fijo, se aleja para siempre de Ayacucho. Se instaló en Lima junto a sus suegros, y al inicio de la lucha armada en 1980 abandonó la casa familiar para pasar a la clandestinidad. Casi todo el proceso armado y hasta su captura en 1992 se ocultó en residencias de clase media de la capital desde donde dirigía el Partido Comunista del Perú.

Gonzalo reconoce en la entrevista que concedió al Diario que recién en Ayacucho empieza a “entender” al presidente Mao Tsetung, “avance a comprender el marxismo”, lo dice él mismo. Admite que tuvo que viajar dos veces a china, en 1965 y 1969 para saborear la fibra marxista de Mariategui. En 1970 tiene treinta y seis años y aún no había podido salir de las fronteras políticas de Ayacucho y su fortín seguía siendo la Universidad de Huamanga, donde era entonces jefe de personal. En cuanto a pergamino carcelario, requisito indispensable en esa época para lograr un lugar en la dirección del movimiento político y popular, solo se le conoce dos ingresos sin mayor importancia. En junio de 1969 es encarcelado en seguridad del Estado. Es acusado de ser uno de los cabecillas del movimiento popular en Ayacucho que se opuso a la reforma educativa de la dictadura militar del general Juan Velasco Alvarado. Otra segunda detención es en los primeros días de enero de 1979, cuando la policía lo arresta en Lima en la casa de sus suegros ubicada en la avenida Pershing. Es acusado, de ser uno de los instigadores de las luchas populares que se desarrollaban contra el régimen militar del general Francisco Morales Bermúdez. El 11 de enero es liberado rápidamente, como han dicho algunos analistas, gracias a las gestiones que hicieron altos jefes militares amigos de Carlos La Torre, su suegro. Entre 1977 y 1978, en Lima y las provincias se efectúan grandes movilizaciones y acciones directas de los asalariados y sectores populares. Estas luchas anti dictadura militar son recuperadas de manera oportunista por la iz-

quiera pequeño burguesa y en particular por los dirigentes del Partido Comunista del Perú pro soviético que mantenía el control de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Por esta razón, lógica desde el punto de vista de los conflictos ideológicos, Gonzalo y la “Fracción Roja” que ya funcionaba como Sendero Luminoso toman distancias de estas movilizaciones obreras.

Cuando Gonzalo inicia su carrera política en Ayacucho, el PCP estaba corroído por agudas luchas internas. Era la época de la definición política entre “moscovitas” y “pro chinos”. En ese terreno el recién llegado a la Universidad de Ayacucho, no tuvo que hacer muchos esfuerzos para tomar partido con la tendencia más radical. Se alineó con el grupo que encabezada Saturnino Paredes, y sus primeras luchas contra el grupo de Jorge del Prado lo hizo a la sombra de este. Paredes era un dirigente político que al inicio se declaraba seguidor del pensamiento Mao Tsetung, pero posteriormente fue enemigo del maoísmo y se convirtió a las extravagantes ideas de Enver Hoxha, secretario general del Partido del Trabajo de Albania. Paredes conformó su propio partido y en 1978 organizó el Frente Democrático Popular (FEDEP) cuyo propósito político fue participar en el proceso electoral para la Asamblea Constituyente que la dictadura militar había programado como parte de su plan para “restituir el sistema democrático”. En esas elecciones el grupo de Paredes se unió con el Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (FOCEP) liderado por Genaro Ledesma un personaje político que en la década del 80 sería uno de los dirigentes de Izquierda Unida (IU), conglomerado electoral que durante las dos décadas de guerra interna convivió con los regímenes de derecha del Perú. Después de estas elecciones, el partido de Paredes (Partido Comunista del Perú-Bandera Roja) intentó con poca suerte participar en otros procesos electorales. A mediados de los años 80, tanto Saturnino Paredes así como “Bandera Roja” y el FEDEP, desaparecieron del mapa político del Perú.

CONTIENDA ENTRE MOSCOVITAS Y PRO CHINOS

La lucha entre “moscovitas” y “pro chinos” estalla en enero de 1964 durante la IV Conferencia Nacional. Los partidarios de Mao Tsetung estaba integrado por 4 facciones que actúan juntos bajo el objetivo de enfrentar a la línea del grupo dirigido por Del Prado y que en esos momentos constituía el “enemigo principal” al interior de la organización fundada por Mariátegui. Los “pro chinos”, eran denominados así, en relación a las simpatías que mostraban por la revolución china y por las ideas políticas de Mao Tsetung. Este frente estaba integrado por Saturnino Paredes, Abimael Guzmán, José Sotomayor Pérez, Jorge Hurtado Pozo (Ludovico), y otros. En la otra orilla se encontraban los pro soviéticos dirigidos por Jorge Del Prado y Raúl Acosta Barrios. La vía armada o vía pacífica para alcanzar el poder político, fue una de las discusiones centrales de la coyuntura. Parlamentarismo o revolución, línea independiente o línea de colaboración de clases, y otras cuestiones teóricas que se planteaban al ritmo de la contienda internacional entre las posiciones del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) bajo la dirección Nikita Jruschov y el Partido Comunista de China (PCCH), bajo la dirección de Mao Tsetung.

En la IV conferencia los pro chinos “expulsan” al grupo de Jorge del Prado y formar otro Comité Central, bajo la dirección Saturnino Paredes como secretario general y Abimael Guzmán en el cargo de secretario de organización. José Sotomayor un dirigente pro chino de la época narra en 2004 esta situación de la siguiente manera. “Hace 40 años, en enero de 1964, se realizó la IV Conferencia Nacional del Partido Comunista Peruano, con asistencia de delegados marxistas leninistas del interior del país, rigurosamente seleccionados, con pocas excepciones. Fue la respuesta obligada a la ofensiva desplega-

da del revisionismo jruschovista que la camarilla dirigente del PCP puso en práctica en octubre de 1963 en el XVIII Pleno del Comité Central, haciendo aprobar con ayuda extranjera, todas las tesis traidoras del XX Congreso del PCUS” (4). Era una época de crisis de dirección política en la izquierda, caracterizada por su grado extremo de atomización y fragmentación de los partidos políticos. En esos tiempos era una costumbre corriente resolver las discrepancias internas por medio de expeditivas expulsiones. En ese contexto Jorge del Prado y sus partidarios no tomaron en cuenta esta “expulsión” y como si nada hubiera pasado siguieron controlando el aparato partidario, edificios, imprenta, locales, y dinero. La “expulsión” no debilitó la relación de Jorge del Prado con los soviéticos que se encargaban de la parte material del partido y llenaban la olla (dinero, modernas maquinarias de imprenta, viajes de vacaciones, etc.) en nombre del “internacionalismo proletario”. Incluso la prensa oficial peruana y los partidos políticos de la burguesía, siguieron “reconociendo” a Del Prado como el “auténtico” secretario general del PCP, mientras que sus contrincantes fueron tratados despectivamente de “ultras” y de pequeños grupos antidemocráticos y fanatizados.

La lucha interna no concluyó en la IV Conferencia, y está se agudizó en la fila de los pro chinos. Las divisiones y expulsiones se pusieron a la orden del día, y se inició con “Patria Roja” de Jorge Hurtado (Ludovico) y Rolando Breña Pantoja. Este grupo desde 1968 se estructuró como organización aparte, y desde 1980 para adelante dejó de vociferar consignas a favor de la lucha armada para integrarse en el sistema parlamentario y hacer parte de la izquierda oficial y electoral. Después vino el turno de los que se llamaban Partido Comunista del Perú-Marxista-leninista. Su líder fue José Sotomayor cuyo grupo siguió actuando hasta cerca de los inicios de la década del 80. Saturnino Paredes, llegó hasta la VI Conferencia en 1969. Después de este evento se constituyó en grupo aparte y adoptó el nombre de “Partido Comunista del Perú-

Bandera Roja”. Entre los desatinos políticos de Paredes no solo se cuentan sus ataques a Mao Tsetung, sino también sus erradas interpretaciones de la obra de José Carlos Mariátegui. En 1982 le negó cualquier mérito político y no reconoció su rol histórico en la formación del Partido Comunista del Perú (PCP). De esta manera repitió la propaganda burguesa que desde 1930 señala que Mariátegui no formó el Partido del proletariado, sino más bien el Partido Socialista. Lo acusó de no haber ido más lejos de las ideas demoliberales, y de haber tenido una débil formación marxista. Lo sindicó de revisionista y de haber estado influenciado por la filosofía idealista, y de no haber conocido el materialismo histórico. Dijo que había sido simplemente un anarco sindicalista y que en su formación política fue influenciado por intelectuales burgueses. En la tergiversación fue lejos, y señaló que Mariátegui había mantenido una posición racista frente a la lucha de clases y a la revolución peruana. Un trozo de la epístola anti Mariátegui de Paredes es la siguiente:

“En tiempo de la constitución del Partido, con el nombre del Partido Socialista del Perú, el propio Mariátegui no había concluido aún su formación marxista-leninista y su nivel ideológico acusaba fluencias muy claras del idealismo ideológico y del anarco-sindicalismo, así como en cuanto al materialismo histórico aún no lo había asimilado, pues, tenía concepciones imprecisas y erróneas....sus obras pueden ser calificadas como demoliberales, lo que fue reflejo de su débil formación marxista...Mariátegui no comprendía bien lo que es el revisionismo porque en realidad sus propios puntos de vista toman mucho del revisionismo....”(5).

RAVINES, JORGE DEL PRADO Y GONZALO

El contexto partidario en el que surge Gonzalo esta determinado por la aguda crisis política del PCP y por la conducta

política de los dirigentes de este partido quienes durante más de 50 años extinguieron en esta organización cualquier manifestación de marxismo y revolución. El 16 abril de 1930, prematuramente muere José Carlos Mariátegui. Este hecho repercutió gravemente en el futuro político y en la historia de este partido. Desde Eudocio Ravines hasta Jorge del Prado, esta organización desciende a sus más bajos niveles políticos y de desprestigio. En teoría y práctica, había abandonado la línea política revolucionaria desarrollada por su fundador. La desaparición física de Mariátegui, es sin ninguna duda, una de las causas fundamentales para que esta organización navegara durante muchos años en el oportunismo de todos los matices. Eudocio Ravines, que llegó desde Francia, reemplazó a Mariátegui en la dirección del partido, y hasta 1937 hizo de esta organización un remedo de partido comunista, caricaturesco y sin línea política revolucionaria. Impuso una práctica ultraizquierdista y dogmática (partidario del establecimiento de los soviets peruanos) que llevó al desprestigio y al aislamiento al PCP. La etapa de Ravines concluyó cuando éste se pasó a trabajar directamente con los grupos de poder locales y el imperialismo yanqui. Hasta su trágica muerte en México ocurrida en la década del 70 fue un connotado agente de la CIA americana.

La expulsión de Ravines de las filas del PCP en 1937 no resolvió el problema de dirección política. Los que lo reemplazaron en la cúpula partidaria siguieron agudizando la crisis de este partido. Con Jorge del Prado se afirmó un oportunismo sometido internacionalmente a la Unión Soviética. Su existencia política era miserable y su actividad estaba restringida íntegramente a la legalidad del sistema oficial. Dependía exclusivamente de las concesiones que recibía de los gobiernos de turno. De esta manera un gobierno burgués, era calificado de democrático o reaccionario, no por su política frente al pueblo y los trabajadores, sino más bien por las concesiones que hacía para que el PCP pro soviético pudiera o no actuar con libertad

en la política oficial del Perú. Bajo el pretexto de “acumular fuerzas” se unió a los partidos políticos de la gran burguesía y terratenientes, y el discurso de izquierda solo sirvió como plataforma electoral. Bajo el pretexto de poner en práctica el llamado “Frente Único” de moda antes y después de la segunda guerra mundial, colaboró con los partidos políticos burgueses y sostuvo las candidaturas presidenciales de los grupos de poder y el imperialismo. Una versión de esta etapa la entrega “Patria Roja”, que hasta antes de convivir en el parlamento con el grupo de Jorge del Prado y la izquierda legal, denunciaba que “El izquierdismo furibundo de Ravines dio paso al derechismo furibundo de los Prado, Terreros y Mathews. El izquierdismo preparó el terreno para el paso al derechismo” (6). Según Patria Roja, “el oportunismo del Partido Comunista Peruano (Unidad)” era tan acentuado que en el pasado Jorge del Prado se había esmerado en calificar de Stalin peruano al oligarca y ultrarreaccionario Manuel Prado. “En sus propósitos liquidadores, la camarilla del Prado-Acosta nunca vaciló en convertir los eventos partidarios, desde el primer Congreso de (septiembre de 1942) y la primera Conferencia Nacional (septiembre 1944) en adelante en tribunas para imponer sus tesis revisionistas basadas en la colaboración de clases y el sometimiento del proletariado a la burguesía...” (7).

Después de la segunda guerra mundial, este partido se convirtió en una de las organizaciones comunistas que en América Latina se alineó con las posiciones del Partido Comunista de los Estados Unidos liderado por Earl Browder. El líder de los comunistas norteamericanos interpretó las relaciones diplomáticas que establecieron Stalin, Roosevelt y Churchill, como el advenimiento de una nueva era social en el mundo. A partir de esta interpretación política sobre la “unidad de los tres grandes”, Browder afirmó que la humanidad, había ingresado a una etapa de paz celestial y duradera, en cuya realidad ya no se justificaba la lucha entre el proletariado y la burguesía. Predecía el fin de la lucha de clases a nivel in-

ternacional, incluido en los Estados Unidos. Señalaba también, que la tarea de la clase obrera y demás clases oprimidas era “trabajar junto a la burguesía”. El Partido Comunista de los Estados Unidos en acuerdo con la burguesía de ese país se disolvió, pero Earl Browder siguió llamándose marxista-leninista. La etapa browderiana en la dirección del Partido Comunista del Perú (Unidad) se expresó en la posición que adoptó este partido en los sucesivos procesos electorales que se desarrollaron desde 1936 hasta 1962, y en su línea política de abierta colaboración con los gobiernos de turno y el imperialismo. En las elecciones generales de 1936 este partido sostuvo la candidatura electoral de Manuel Prado Ugarteche, representante de la derecha peruana y del imperialismo. En las elecciones generales de 1945, acuñaron la idea de que los “obreros tenían en conjunto la tarea histórica de luchar por una alianza con la burguesía”, agregando que la tarea del partido era de “convertir a miles de campesinos e indígenas en electores conscientes”.

En 1962 sostuvo la candidatura electoral de Fernando Belaúnde Ferry, líder Acción Popular (AP) uno de los partidos de la gran burguesía peruana y del imperialismo yanqui, a quien catalogaron de “representante de la pequeña burguesía”. El pretexto para sostener la campaña electoral de Belaúnde fue una supuesta “alternativa para acumular fuerzas” y la cacotomía de escoger entre el mal menor. Gustavo Espinoza miembro de la Comisión Política del PCP (Unidad) junto con del Prado, dijo en 1977, que el “año 1962 las fuerzas mas revolucionarias apoyaron a Belaúnde...Se planteó que esa era una alternativa que iba a posibilitar la acumulación de fuerzas, que iba a servir para aglutinar el frente antiimperialista y para crear mejores condiciones par la lucha de la clase obrera...con el propósito de forjar una alternativa popular y democrática” (8).

Como señalan diversos analistas de la época la candidatura

de Belaúnde “estaba protegida por la Junta Militar” (en esos momentos el gobierno estaba en manos de los militares), y la solución electoral correspondía a un plan estratégico para evitar una explosión social que brotaba del descontento popular. Lo acertado de esta versión fue comprobado por el estallido de las acciones guerrilleras que se iniciaron a un año de la elección presidencial de Fernando Belaúnde. Estas fuerzas guerrilleras dirigidas por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) liderado por Luis de la Puente Uceda, y el Frente de Liberación Nacional (FLN), al margen de su concepción estratégica militar foquista, expresaban la agudización extrema de la lucha de clases y el deseo de las masas pobres, principalmente del campesinado, de luchar en otro terreno que no sea el electoral. ¿Qué dijo del Prado y el PCP (Unidad) frente a la lucha guerrillera de esa época?. Este partido publicó un manifiesto, no para apoyar a los guerrilleros que valerosamente se enfrentaban a las fuerzas armadas, sino para advertir al gobierno, mediante un comunicado público, que ellos nada tenían que hacer en estas acciones armadas. “No se trata de un movimiento comunista como afirman los voceros de la reacción puesto que el Partido Comunista Peruano no interviene en él”. Agregaron además, para exculparse de todas culpas, que no existía “una situación revolucionaria que justifique actualmente la consigna de insurrección general (léase lucha armada)” (9).

En octubre de 1968, Fernando Belaúnde fue sacado del poder por un golpe militar encabezado por el general Juan Velasco Alvarado. Jorge del Prado y su partido cerraron filas con el golpista del candidato que ellos habían sostenido en 1962. El general Velasco, se declaró “revolucionario” y “antiimperialista”, pero había sido uno de los altos jefes del ejército que planificaron y dirigieron las operaciones antisubversivas que liquidaron brutalmente las luchas guerrilleras que se desarrollaron entre 1963 y 1965. Mientras la dictadura velasquista asesinaba obreros y corporativizaba la sociedad, intentando

liquidar las organizaciones laborales clasistas de los trabajadores, liquidaba la libertad de expresión, perseguía a los luchadores sociales, etc., los “comunistas” dirigidos por del Prado festejaban la revolución y gritaban “pueblo y fuerza armada” unidos venceremos. Algunos ejemplos de la política represiva y antipopular impuesta por la dictadura militar se refiere a la matanza de mineros en Cobriza en 1971, asesinato de campesinos en Andahuaylas 1970, brutal represión contra estudiantes y profesores en Huamaga (Ayacucho) en 1969, represión contra los levantamientos de campesinos en las cooperativas agro-industriales del norte, violenta represión contra las huelgas y movilizaciones de los maestros, los asaltos violentos de sindicatos y barriadas populares, y otras acciones para controlar por la fuerza a la población.

Corresponde a del Prado, la peregrina idea expuesta en 1973 de que las fuerzas armadas eran la “vanguardia de la revolución socialista” en Perú. Se dijo, sin ninguna razón, que Velasco dirigía un proceso revolucionario y antiimperialista con el apoyo de los trabajadores, campesinos y todos los oprimidos del país. Esta apreciación, fue asumida por una casta política que ha hecho del oportunismo una doctrina del acomodo y la colaboración con los gobiernos de turno. Existen abundantes pruebas que muestran que mientras Velasco hablaba de revolución y antiimperialismo, los yanquis y las grandes transnacionales americanas se afincaban más en Perú. Un hecho importante que deja sin sustento las historietas que se han contado respecto a Velasco y su revolución, fue la posición de las clases populares del país cuando a mediados de 1975 Velasco Alvarado fue echado del poder por las mismas fuerzas armadas que lo había sostenido desde 1968. Lo paradójico en este caso, sobre todo para sus partidarios, fue que frente al “golpe militar” contra Velasco, ningún trabajador ni organización popular, movió un dedo a favor del militar defenestrado. La historia es rigurosa, y no registró ningún movimiento de luchar popular contra el general Francisco Morales Bermúdez

que había reemplazó por la fuerza al “revolucionario” Velasco. El pueblo no se movilizó para defender, “hasta la muerte”, como se decía en la propaganda oficial, un gobierno que hablaba de revolución pero que seguía gobernando para los grupos de poder.

VELASQUISMO: REVOLUCION O CONTRARREVOLUCION

¿Cuál fue la verdad en torno a que Velasco era antiimperialista?. En 1967, un año antes del golpe militar “revolucionario” de Velasco, la salida al extranjero de capitales por ganancias de las transnacionales, principalmente americanas fue de 712 millones de dólares. En 1968, primer año de gobierno “revolucionario” las transnacionales exportaron a sus metrópolis la suma de 749 millones de dólares suma que resulto mas alta que el régimen burgués anterior. Durante todo el proceso que duró el régimen velasquista (1968-1975) la remisión al extranjero de las ganancias de las transnacionales fueron mas altas que durante todos los anteriores gobiernos declarados abiertamente proimperialistas. En 1970, en pleno auge del “antiimperialismo velasquista”, las grandes empresas aumentaron sus ganancias a 744 millones de dólares. Esta suma fue de 859 millones de dólares en 1973, y creció a 900 millones de dólares en 1974, subiendo a más de mil millones de dólares el año 1975. Hay que anotar que estas exportaciones de ganancias se efectuaron mientras los trabajadores y el pueblo en general acentuaron su miseria y pobreza (10).

Pero el “antiimperialismo” velasquista no quedó desmentido solamente por las inmensas ganancias de las transnacionales, sino también por el pago de la deuda externa. Mientras Velasco y sus seguidores hablaban sin cesar de la lucha antiimperialistas, la deuda externa crecía sin limite. Como explica Hugo Cabieses y Carlos Otero (11), la deuda externa paso de

797.4 millones de dólares en 1968 (15.4% del PBI) a 3,169.3 millones de dólares en 1975 (22.2% del PBI). Lo más interesante de la información que entregan estos especialistas, es que la inversión directa norteamericana y los ingresos de capitales por endeudamiento público externo en la época velasquista fueron de 1,638.1 millones de dólares. Los mismos economistas señalan que en 1968 se pago 140.4 millones de dólares por concepto de amortización e intereses de la deuda, este pago subió en 1975 a 492.2 millones de dólares. Señalan también que en el periodo 1968-1975 el flujo neto de capitales por endeudamiento externo fue de 1,908.2 millones de dólares, y que en el mismo periodo salieron del país (por concepto de amortizaciones e intereses de la deuda) la suma de 2,473.8 millones de dólares.

Cuando la dictadura de Velasco fue reemplazada por otra dictadura, los llamados velasquistas, incluido a del Prado y el PCP pro soviético se hicieron los cojudos como se dice en Perú. Si durante años, oportunistamente habían dicho “Velasco contigo hasta la muerte”, prefirieron subirse al carro del nuevo inquilino de palacio de gobierno. A “Rey muerto rey puesto” dijeron y sin ningún escrúpulo por delante anunciaron su “apoyo critico” al nuevo dictador que según ellos “respetaba” las “reformas revolucionarias” del velasquismo. Morales desde el primer día de su gobierno desvalijó y desarmó todas las supuestas “medidas revolucionarias”, incluidas las estatizaciones de empresas, y sobre todo devolvió los medios de comunicación a sus antiguos propietarios. Junto al “apoyo critico” difundieron la idea de que mas valía “no hacer olas” (no hacer huelgas ni luchar por reivindicaciones) porque “existía el peligro de un golpe militar tipo Pinochet”, y que Morales Bermúdez era una barrera para cualquier aventura pinochestista semejante al golpe militar de setiembre de 1973 en Chile.

LA UNIÓN SOVIÉTICA EN EL PARTIDO COMUNISTA

Jorge del Prado Chávez nació el 15 de agosto de 1910 y murió en el 2005 a los 95 años de edad. Su historia no es diferente a la historia de todos aquellos dirigentes “comunistas” de América Latina que hicieron carrera política a la sombra y con millonario apoyo material de la ex Unión Soviética (URSS) y del “campo socialista”. Del Prado Chávez, fue uno de los más antiguos dirigentes del Partido Comunista Peruano (Unidad). Sus partidarios lo han presentado como uno de los discípulos aplicados de José Carlos Mariátegui pero ello no corresponde a la verdad. José Carlos Mariátegui lo calificaba solamente como un “joven pintor” en referencia a su vocación profesional de pintor, como se registra en una carta del fundador del PCP el 21 de noviembre de 1929. (12). En el proceso de formación del PCP (partido Socialista o partido comunista) no tuvo ningún rol destacado. Una prueba de ello es que fue Eudocio Ravines, quien a pedido de Mariátegui, llegó desde París para asumir la dirección del partido. Después de que Ravines capitulara en 1937 y se convirtiera en un agente de la CIA americana, se inició el ascenso de del Prado en la dirección del PCP. Fue secretario general entre 1946 y 1948 y luego de 1960 a 1991, cuando fue reemplazado por Renán Raffo Muñoz.

El Partido Comunista que lideró Jorge del Prado, dependió exclusivamente de la URSS. Su línea política y su actividad, no tenían relación con los intereses de los pobres del Perú y de la nación, sino más bien con los planes estratégicos elaborados por la Unión Soviética para América Latina. Una prueba de esta situación lo entrega Andrés Sosa Chanamé, conocido con el seudónimo de “Madero”, quien fue miembro de la Comisión Política del Partido Comunista del Perú (pro soviético) y dirigente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), organización controlada por este partido. Su desgracia comenzó el 31 de marzo de 1989, cuando se reunió con

Jurgen Macht, responsable político para el Perú del Partido Socialista Unificado Alemán (PSUA). De esa reunión casi en secreto, resultó un Informe, redactado por Madero y entregado el 19 de abril de 1989 a Jorge del Prado, secretario general del partido. En el informe Madero da cuenta de la conversación sostenida con el comunista alemán Jurgen Macht, cuyo contenido lo había dejado perplejo. Según Madero, Jugen Macht sabía al pie de la letra todo lo que ocurría al interior del PCP, y tenía información interna de este partido que solo podía haber adquirido de informes detallados redactados y entregados periódicamente por los dirigentes. Madero cuenta que según Macht, en la embajada alemana en Lima se había decidido la forma y como debería resolverse la crisis interna del PCP, y que la disposición era que Gustavo Espinoza Montesinos, en esos momentos miembro de la Comisión Política y hombre de confianza de los alemanes, tenía que reemplazar a Jorge del Prado que según Macht, “tendría que ser conciente que ya su ciclo estaba terminado, y que todo esto era de conocimiento y aceptado por otras embajadas”. El camarada Macht me contestó, dice en su informe Madero, que “ellos no veían ninguna otra cabeza que la del c. Gustavo Espinoza, y lo recocían como tal, para hacerse cargo de la Dirección del Partido y que la embajada sabía esto perfectamente y que estaban trabajando económicamente y políticamente para lograrlo, y que ellos, los del PSUA, iban a influir en todo lo que estuviera a su alcance para que esto sea así” (13).

El valor del testimonio de Madero, es que muestra desde el interior de ese partido, los entretelones de la ingerencia extranjera en los asuntos partidarios en una organización supuestamente comunista. Probablemente, este texto publicado en la revista *Caretas*, constituye una prueba sin discusión del sometimiento de este partido comunista al aparato internacional que manejaba la URSS en América latina, y donde el Partido Socialista Unificado de Alemania era un enlace de primer orden. Ahí se ve que los problemas internos de este par-

tido eran resueltos, no en los congresos, conferencias, ni en otra instancia partidaria, sino más bien en las embajadas de los países “socialistas”. Eran los rusos o los alemanes lo que decidía quien o quienes podían ser dirigentes de esta organización que después de los años 50 fue un partido manejado por los oscuros lazos que tejió la Unión Soviética en América Latina.

Después que la revista *Caretas* (24 de abril 1989) publicara este informe Andrés Sosa Chanamé, fue expulsado de la Comisión Política del PCP, y acusado por Jorge del Prado, de filtrar información a la prensa con acusaciones falsas sobre la relación del PCP y la embajada soviética en Lima. Amenazado de muerte prefirió ponerse al margen como disidente de este partido. El mismo año 1989 fundó una organización denominada Frente Patriótico de Liberación (FPL), cuya existencia fue efímera y culminó cuando se disolvió para unirse al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). En este grupo guerrillero, las cosas no estaban mejor que en el PCP y pronto tuvo que hacer frente una lucha interna con Víctor Polay Campos y la cúpula del MRTA. En 1990, sin llegar a un rompimiento con los emerreteístas organizó lo que se denominó el Bloque Popular Revolucionario cuyos conflictos internos en torno a puestos electorales, agudizó la lucha entre él y Polay. En dos ocasiones fue amenazado por los sicarios de los tupacamaristas quienes le advirtieron que a causa de sus contradicciones con la dirección, lo habían “sentenciado a muerte”. El 25 de enero de 1992, se cumplió la sentencia y fue asesinado por un comando de esta organización. Como informó la prensa peruana, Andrés Sosa fue secuestrado de su domicilio a las 7.20 de la mañana. Sus verdugos, tres individuos encapuchados al estilo de los grupos paramilitares del ejército y la policía, lo golpearon violentamente. Lo sacaron a rastras de su casa para embarcarlo en una camioneta Nissan. A 300 metros de su vivienda lo hicieron descender del vehículo y le dieron tres balazos en la cabeza y uno de “remate”

en el cuello.

En 1978 del Prado fue elegido a la asamblea constituyente convocada por la dictadura militar para desactivar la aguda lucha de clases en el país. En 1979 apareció como uno de los firmantes de la Constitución sacramentada por las fuerzas armadas y la gran burguesía peruana. Esta “carta magna aprista”, como es considerada hasta hoy, fue supervisada y redactada por Víctor Raúl Haya de la Torre, jefe del pro imperialista partido Aprista que controlaba la Asamblea Constituyente. Entre 1980 y 1992, el Perú vivió una brutal época represiva, dictatorial y de completa militarización de la sociedad civil que culminó con cerca de 70 mil muertos a causa de la guerra contrainsurgente aplicada por las fuerzas armadas. Sin embargo ello no impidió que en el mismo periodo Jorge del Prado escalara puestos en el parlamento. Fue varias veces elegido senador de la república (1980-1985, 1985-1990, y 1990-1992). Del Prado de la misma forma que todos los “izquierdistas” que transitaron por el congreso peruano fueron parte de un sistema parlamentario corrupto que sirvió solamente para legalizar los regimenes criminales y mafiosos del Perú.

A partir de 1980, el PCP que dirigía del Prado era una de las organizaciones integrantes de Izquierda Unida (IU) liderada por Alfonso Barrantes Lingán, quien se declaraba mariateguista y marxista, pero sin embargo durante el tiempo que duro su liderazgo al frente de IU apoyó los planes políticos reaccionarios del régimen aprista. En 1985, Izquierda Unida, incluido el PCP (Unidad) sostuvo la candidatura de Alan García representante del Apra. IU renunció a la segunda vuelta electoral para favorecer al candidato del Apra. “Un partido fascista, que representa los intereses de los grandes monopolios y del imperialismo”, como había señalado en 1977 Gustavo Espinoza dirigente de este partido y camaradas de ruta de Jorge del Prado (14). Unos años después, Espinoza como

secretario general de la CGTP y miembro de la dirección del PCP pro soviético, llamó a votar a favor de ese partido fascista como él lo calificaba. En 1987, cuando el régimen aprista implementaba una política brutal de hambre y miseria, nuevamente el partido de Jorge del Prado anunció en forma de balance histórico, que: “El triunfo electoral de García Pérez (con apoyo de IU), tuvo un “significado histórico de que por primera vez triunfó un conjunto inmensamente mayoritario de fuerzas populares” (15).

En 1988, a tres años del gobierno aprista, cuando nadie en Perú dudaba del carácter reaccionario y corrupto de la administración de García, nuevamente Jorge del Prado hacia genuflexiones para distraer y cambiar el rumbo de las luchas populares. Para del Prado, el gobierno aprista resultaba una víctima de las fuerzas “fondomonetaristas”, y no era el enemigo contra quien había que apuntar y luchar: “En este contexto, el principal obstáculo por remover es determinar quién es el enemigo principal y mas peligroso que Izquierda Unida (IU) tiene que reconocer para derrotarlo en primer termino: ¿es el gobierno aprista?, ¿es la derecha fondomonetarista que se esta recuperando y pasando a la contraofensiva?, si subestimamos este ultimo peligro, como lo hacen algunos compañeros...eso puede llevarnos a perder el papel de alternativa actual, poniendo en riesgo la propia existencia de nuestro frente” (16). A finales de 1989, se inicio el proceso de auto-destrucción interna del Partido Comunista Peruano (Unidad) y el fin de la carrera política de Jorge del Prado. Ello coincidió con la desintegración de Izquierda Unida (IU), y otros frentes electorales organizados por la izquierda legal, como por ejemplo la Asamblea Nacional Popular (ANP) que demagógicamente los dirigentes de IU pretendieron erigirla en una alternativa de poder popular. Las causas de esta crisis no solamente hay que buscarlas en la ato liquidación de la Unión Soviética en 1990, o en la caída del muro de Berlín, sino sobre todo en la conducta política de estos partidos políticos que desde

una aparente posición marxista-leninista se convirtieron en soportes sociales de los grupos de poder y del imperialismo. Un factor de suma importancia para la desaparición de la izquierda oficial fue la agudización de la lucha de clases, la creciente movilización popular expresada fundamentalmente en la contienda armada dirigida desde 1980 por las fuerzas maoístas. En 1990 los integrantes de IU gritaron: “sálvense quien puedan”, y cada grupo y partido escogió un padrino entre los partidos y frentes de la derecha. Por ejemplo, en 1995 Henry Pease “histórico” líder de IU, apareció como candidato a diputado en Unión por el Perú (UPP) que lideró Javier Pérez de Cuellar ex secretario general de la ONU y consejero de importantes transnacionales americanas.

Después de Alan García, el partido de Jorge del Prado apoyó en 1990 la campaña electoral de Alberto Fujimori, quien implementó una administración controlada por los militares y la CIA americana. Este hecho agudizó la situación interna del PCP (pro soviético) que ingresó a una debacle definitiva. Este partido se dividió en varias fracciones, y Jorge del Prado fue acusado por sus propios seguidores de “reformista electorero”, y de no tomar en cuenta la coyuntura y las grandes definiciones políticas del momento. En marzo de 1990, a través de un comunicado, firmado por algunos dirigentes de este partido, entre ellos Andrés Sosa Chanamé (Madero), Juan Pecho Arias (dirigente de la Federación Minera) y Segundo Centurión (dirigente de la Federación Agraria Selva Maestra – San Martín), se denunció a del Prado y se señaló que la “actual coyuntura está inmersa una situación de grandes definiciones. Una posición donde unos tienen que optar simplemente por el reformismo electorero o por una posición revolucionaria” (17). Jorge del Prado, de la misma forma que toda la izquierda oficial son los responsables de la destrucción del movimiento sindical peruano. Por ejemplo, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), controlada por el PCP (Unidad), es hasta la actualidad una organización sin ninguna inciden-

cia en la defensa de los trabajadores. Esta central, corrió la misma suerte que todas las organizaciones populares controladas burocráticamente por la izquierda legal, que a partir de un falso clasismo, fueron convertidas en simples instrumentos electorales.

LOS PERESTROIKOS PERUANOS

Pero Jorge del Prado y sus más cercanos colaboradores, no solo practicaron el oportunismo a nivel local. Su conducta sinuosa tuvo dimensión internacional. Por ejemplo, en abril de 1985 por primera vez Mijail Gorbachov propuso a la asamblea plenaria del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) su famoso plan estratégico denominado Perestroika. Con este plan político de los grupos de poder soviéticos, que fuera presentado en nombre del leninismo y del socialismo, se inicio la cuenta regresiva de la bancarrota y destrucción de la antigua Unión Soviética. ¿Cuál fue la posición de Jorge del Prado?. En su periódico "Unidad" señaló inmediatamente que la "Perestroika es el gran jalón histórico de leninismo que mantiene la pureza de la ideología proletaria, en tanto corrige los errores de Krushchev y Brezhnev". En mayo de 1987, en el IX Congreso del PCP (Unidad) se reafirmó el apoyo a la Perestroika y a la gestión política del "camarada Gorbachov", porque estaba "perfeccionando el sistema económico del socialismo" para dar nuevos y vigorosos estímulos al crecimiento de las fuerzas productivas y al progreso científico técnico y fortalecer el socialismo. Las alabanzas a Gorbachov de parte de los perestroikos peruanos, como le decían en ese tiempo a los militantes del este partido, se hacía cuando las potencias de Occidente, sobre todo los Estados Unidos, habían convertido la "Perestroika. Mi mensaje a Rusia y al Mundo" en un best seller de las librerías burguesas de los países imperialistas. En 1988, del Prado, una vez más reafirmó su militancia en el proyecto político de Gorbachov.

Señaló que “ningún partido de izquierda podía restar “importancia a las reformas” que se estaban realizando en la URSS, a partir de la Perestroika, y que ello significaba “una nueva visión de libertad de expresión y la necesidad de combatir el abuso del poder”. Decía también que ahora va a existir una “mayor identificación de los partidos socialistas con el socialismo real” (18).

El apoyo militante de Jorge del Prado a la Perestroika, fue tanto “amor al chanco sino a los chicharrones”, como se dice en Perú. En efecto en agosto de 1991 Mijail Gorbachov, el histórico líder del socialismo real, como decían los comunistas peruanos, fue derrocado de la presidencia por un golpe militar organizado por el propio Partido Comunista del URSS, altos militares del ejército y miembros de la KGB (Comité de seguridad del Estado). Se impuso un gobierno del Consejo de Estado de Emergencia presidido por Gennady Yanasev, vicepresidente del gobierno de Gorbachov. ¿Qué dijo el inefable Jorge del Prado respecto a este golpe militar anti Perestroika?. En una entrevista para Radio Programas del Perú apoyó el golpe militar y dijo que sus “objetivos eran justificables”, y que las masas sostenían este golpe (19). Del Prado olvidó decir, que en efecto las masas salieron para sostener al borrachín Boris Yeltsin, quien se puso al frente del movimiento contra los golpistas. Valentín Pachó, otro dirigente del PCP (Unidad) y secretario general de la CGTP, dijo que el golpe era correcto porque los soviéticos estaban descontentos con Gorbachov (20).

LOS SUEÑOS INTERNACIONALES DE GONZALO

La extrema precariedad política con la que Gonzalo inicio su liderazgo político en Ayacucho no le impidió extenderse en pocos años a todo el Perú. Ello resultó un fenómeno remarkable que él pretendió reeditar en el campo internacional donde soñó con ponerse al frente de un movimiento comunista de

envergadura mundial, que se crearía a la sombra del proceso armado en Perú. Algo así como la revolución rusa de 1917 y la tercera Internacional Comunista dirigida por Lenin y los bolcheviques en el poder del Estado Soviético. En este terreno se movió a ciegas y sin ningún conocimiento, que lo llevó a cometer errores garrafales que mostraron su simpleza para ubicarse en el terreno político de Europa, Estados Unidos y otros países ricos. Hay varios casos que ilustran este problema. Un caso específico del nulo conocimiento que tenía Gonzalo de la situación internacional, se refiere a la creación del Movimiento Popular Perú (MPP), que actuaban en Francia, Suecia, Alemania y los Estados Unidos. Sus integrantes eran peruanos, que antes del inicio de la lucha armada, habían estado ligados a Sendero Luminoso, pero después de 1980 abandonaron al PCP para irse al extranjero. Estos mpp estaban organizados bajo esquemas dogmáticos y actuaban en los países ricos como si estarían en Ayacucho en la década del 70.

Otro caso que ilustra la ignorancia de Gonzalo respecto al campo internacional, es la “reunión cumbre” que se dio entre el “presidente Gonzalo” y el “presidente Víctor Fernández”. En los primeros días de mayo de 1987 Gonzalo se reúne durante toda una semana con Víctor Fernández, un extravagante personaje de nacionalidad española que llegó al Perú como el representante de la “fracción roja” del Partido Comunista de España. Gonzalo se tragó el cuento y creyó que había encontrado al futuro jefe y guía de la guerra popular en el Estado español. El jefe del PCP, no tuvo muchos problemas para convencer a su ilustre visitante que estábamos viviendo la etapa mas clamorosa de la revolución mundial y que se requerían “jefes revolucionarios” como él y Fernández para traerse abajo definitivamente el sistema capitalista y echar a patadas a los imperialistas. Lo indispensable para cumplir esta meta, dijo Gonzalo en esa ocasión, es “tomar el “maoísmo como mando y guía”, y el proceso mismo se encargará de generar

su propio “pensamiento guía”. Fruto de esa reunión, fue una “declaración conjunta” delirante (mayo 1987) catalogado por los firmantes como el “mayor logro de unidad comunista alcanzado en nuestros días”, y de “insoslayable importancia para reagrupamiento de los comunistas”, y el “futuro de la Internacional Comunista sustentada en el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo”. En la declaración se señalaba también que el Partido Comunista del Perú y el Partido Comunista de España, “unidos a otros partidos” servirían a que “brille el comunismo en la tierra”. Más no se podía pedir, dijeron sus partidarios que tradujeron esta declaración a varios idiomas.

Fernández regresó a su país repleto de las ideas que le había metido en la cabeza Gonzalo, además de una medalla de hojalata que había recibido como pergamino del “histórico encuentro”. A los pocos meses de haber regresado a España con las ideas importadas del Perú declaró que su partido y el proceso revolucionario en este país, habían generado al “Presidente Víctor Fernández” y su pensamiento guía en desarrollo como base de unidad partidaria”. A partir de ahí el “presidente Víctor Fernández”, imprimía por cuenta propia, hojas sueltas y afiches donde aparecía trazos pictóricos de su escuálida imagen con el puño en alto rodeado de Marx, Lenin, Stalin y Mao Tse-Tung. Parte del colorido era el fondo color rojo con la bandera comunista con hoz y martillo al estilo de la revolución cultural china. De esa manera “el proceso revolucionario español”, había “generado su pensamiento guía y su presidente Fernández que conduciría la lucha hasta el “dorado comunismo”. En 1990, a tres años de su viaje al Perú, el “presidente Víctor Fernández”, quemó una lata basura en una de las calles de Madrid, y llamó por teléfono a algunos medios de comunicación, incluido el Diario Internacional que ya se publicaba en Bruselas, para anunciar que la “guerra popular se había iniciado en el Estado Español”. Ni por compasión lo tomaron en serio y los periodistas estuvieron seguros que se

trataba de una chifladura de algún vagabundo que de esa manera entretenía sus inmisericordes días callejeros. La guerra popular, de este discípulo de Gonzalo, no duró más de lo que tardó en apagarse el recipiente de desperdicios.

En realidad Víctor Fernández, no era representante de ninguna fracción roja y menos del Partido Comunista de España. Era una especie de farsante político que había logrado organizar un pequeño grupo, integrado por su mujer, la número dos en la jerarquía del supuesto Partido, dos refugiados peruanos y un ciudadano español. Este partido, bajo la “magistral dirección de Fernández”, existía solo en la cabeza de este individuo descabellado. Uno de estos peruanos, entrevistado para este libro contó que Fernández sufría delirios políticos, y que su mujer tuvo huir lejos de España para escapar a los efectos delirantes de su marido. Ella viajó en secreto a Londres para evitar la ira del “pensamiento guía” que la había declarado “traidora” a la guerra popular en España. Fernández edita actualmente una página en Internet bajo el título de “Bandera Roja”, y se puede observar que sus desequilibrios no han concluido. En primera página, de color rojo, aparece su imagen rodada por las fotos alegóricas de Carlos Marx, Mao Tse-tung, y Lenin. Aparte de esta referencia, el tal “presidente Víctor Fernández”, se dedica ahora a hacer campaña a favor de las “cartas de paz” y en libertad de Abimael Guzmán.

¿Entonces quién le dio gato por liebre a Gonzalo y le presentó tremendo comunista?. En realidad fue Javier Esparza, con cuñado de Gonzalo (esposo de la hermana menor de la camarada Nora) y una especie de comandante en jefe de los MPP “organismo generado del PCP en el extranjero”. Esparza desde Suecia, donde residía como refugiado político desde 1983, organizó el encuentro entre el “maoísta” Fernández y el presidente Gonzalo. En 1980 cuando se inició la lucha armada, Esparza abandonó su militancia en el Partido Comunista del Perú (PCP) y rompió palitos con su con cuñado que lo de-

claró renegado. Una vez instalado en Suecia junto con los suegros (Carlos y Delia La Torre), se arrepintió de haber huido del Perú cuando las papas quemaban y escribió una carta a su cuñado quien lo perdonó el pecado oportunista y en recompensa lo nombró “responsable internacional” del PCP. En 1993, Esparza acabó en contubernio con la embajada peruana en Estocolmo, y conjuntamente con los diplomáticos de Alberto Fujimori, hizo campaña a favor de la “salida pacífica y negociada” de la lucha armada, tal como lo planteo desde la prisión Gonzalo.

EL PRESIDENTE GONZALO Y EL PRESIDENTE AVAKIAN

Si el caso Víctor Fernández fue un caso para Ripley, no fue el único. Unos años antes Gonzalo se unió al Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI), una organización marginal que desde hace más de dos décadas se presenta como la cumbre mundial de los revolucionarios a nivel mundial. En el caso del MRI apareció también la mano negra de Javier Esparza, y fue el que se encargó de hacer los contactos entre Gonzalo y los dirigentes del Partido Comunista Revolucionario (PCR) de los Estados Unidos cuyo líder es desde ese tiempo Bob Avakian, otro “presidente” que al estilo de Gonzalo se siente la reencarnación viva de Mao Tse-tung. No por gusto ha dicho el periódico Revolución (mayo del 2005), vocero del PCP-USA, que “Bob Avakian ha impulsado la idea y el concepto del comunismo a un nuevo nivel; mejor dicho, ha reavivado el proyecto comunista. En aspectos importantes ha superado a Marx, Lenin y a Mao” (21).

El inicio de esta relación sirvió para convencer al PCP de adherirse al Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI), que los maoístas estadounidenses intentaban dar cuerpo como la más grande iniciativa mundial para una nueva in-

ternacional comunista. El MRI se declara una organización revolucionaria maoísta y desde sus orígenes en 1980 hasta la actualidad funciona simplemente como un membrete en base a “comunicados” y “declaraciones”. No cuenta con ninguna instancia de dirección efectiva (conferencias, plenos, congreso, etc.) donde sus fantasmales integrantes puedan “hacer la lucha de dos líneas”. Sus acuerdos y declaraciones se deciden vía teléfono, fax o Internet. Los únicos que toman las decisiones en esta organización son los dirigentes del PCR-USA y de ello resulta que la línea política del MRI es igual a la línea política del PCR. Este grupo le gusta calificarse como embrión de una nueva internacional comunista, y se denomina centro internacional de las organizaciones marxistas-leninistas-maoístas. En los 28 años transcurridos desde su nacimiento, en lugar de desarrollarse se ha reducido cada vez más, y no ha cambiado su sistema de adherencia en base a declaraciones fabricadas en un mundo virtual telefónico vía Internet.

En marzo de 1984 el PCP de Gonzalo apareció como uno de los firmantes de la declaración redactada en la II Conferencia que oficialmente daba partida de nacimiento al MRI, cuyo contenido era de dudosa calidad revolucionaria y que según el mismo Gonzalo había sido “tachada por unos de oportunistas, por otros que no sirve para resolver los problemas candentes que la revolución exige”. Pero de todas maneras Gonzalo involucró a su partido en esta aventura que nada aportaría ni a la “revolución proletaria mundial”, ni al proceso de lucha armada en Perú. Su utilidad solo fue para que el PCR de los Estados Unidos se convirtiera en los representantes de la revolución peruana, algo así como el estandarte de la Internacional comunista marxista-leninista-maoísta, con sus respectivos pensamientos guías en cada país. De esa manera, un poco por la gestión de Esparza y otro poco por las ambiciones internacionales de Gonzalo, el PCP se vio involucrado en una organización cuyos adherentes en su mayoría eran caricatura de partidos políticos. Por ejemplo, entre los firmante de esa

segunda declaración (marzo 1984) aparecían organizaciones sin existencia real como el “Colectivo Comunista de Italia”, el “Grupo Internacional Revolucionario de Haití, el Partido Comunista de Colombia, Grupos Comunistas de Tootingham y Stockport en Inglaterra, y otros partidos que en su mayoría solo existían en el papel o en las ilusiones de los dirigentes del MRI.

El MRI aprovechó bien el prestigio que en el extranjero que había ganado la lucha armada peruana en las del 80 y 90. Esto le sirvió para atraer hacia su membrete algunas organizaciones comunistas serias de Turquía, India y Nepal. Esto no fue suficiente para activar esta caricatura de internacional comunista que nunca ha participado en una lucha directa ni los países ricos ni pobres. Desde que Gonzalo dijo si al MRI, este grupo anuncio en varios idiomas: “¡Agrupémonos todos en defensa de nuestra bandera roja que ondea en el Perú!”, pero cuando la lucha armada peruana decayó a consecuencia de la traición de sus dirigentes, el MRI guardó sus distancias y prefirió plantar su “bandera roja” en Nepal donde el Partido Comunista de Nepal (marxista-leninista-maoísta) inicio en 1996 su proceso armado. En la actualidad el PCP, que Gonzalo desde la prisión condujo a la capitulación sigue firmando las declaraciones públicas del MRI. Este partido en una cacofonía sin fin y apoyado por la organización del “presidente Avakian, sigue pidiendo al gobierno una “solución pacifica y negociada” a los problema de una guerra inexistente.

CAPITULO OCTAVO

CRÍTICA AL “PENSAMIENTO GONZALO”

El “pensamiento Gonzalo” es la parte más controvertida del proceso armado que se desarrolló en Perú desde 1980 hasta cerca del año 2000. Este “pensamiento” conceptualizado al interior del Partido Comunista del Perú (PCP) como “la “gran luz de nuestra ideología” o aplicación de la “verdad universal” a la situación concreta del Perú poco a poco alcanzó un rango doctrinal y fue caracterizado por su propio autor como “ideología específica” o “arma principal” en el proceso armado dirigido por el Partido Comunista del Perú (PCP). (1). Abimael Guzmán, para no quedarse rezagado de su “pensamiento”, se ha presentado como el legítimo “continuador” de Marx, Lenin y Mao Tsetung. El más grande marxista-leninista-maoísta vivo en la tierra, dijeron de él sus partidarios. En 1988 este “pensamiento”, se incluyó en el programa partidario, y ello sirvió para que este partido se convirtiera en una organización constreñida a la dirección de un jefe absoluto y venerado a quien los militantes estaban obligados a expresar fidelidad y “sujeción plena e incondicional”. Este problema, eminentemente ideológico, que durante el proceso armado adoptó la categoría de “aplicación magistral del marxismo” constituyó sin duda alguna la principal desviación ideológica política en el PCP, y fue el factor fundamental para la derrota de la lucha armada.

El “pensamiento Gonzalo”, en términos del pensamiento re-

volucionario, no tiene antecedentes en la historia de la lucha social revolucionaria y menos en la trayectoria histórica del marxismo. En Perú cuando se habla del pensamiento de José Carlos Mariátegui esta referido a su conocimiento del marxismo, como concepción científica del mundo y a su aplicación en el caso concreto del Perú. Pero ello no supone que el conocimiento marxista de Mariátegui se independice con su propio valor doctrinal del conjunto de la teoría marxista. En toda la obra teórica de este eminente comunista peruano no hay la más mínima referencia a un determinismo rígido para identificar un supuesto “marxismo-leninismo, pensamiento Mariátegui”. No existe tampoco una sola anotación donde se promoció sus ideas políticas (pensamiento) a síntesis magistral del marxismo “aplicado a la situación peruana” que bien pudo serlo, pero que él personalmente nunca lo presentó así. Mariátegui, junto con decir que las “revoluciones no eran ni calco ni copia” (oposición al dogmatismo y al mecanicismo vulgar) nunca conceptualizó su conocimiento teórico, como si se tratara del capítulo final de la ciencia marxista. Al contrario Mariátegui defendió la universalidad y el carácter dialéctico de esta ciencia. En razón de ello fue opuesto a encasillar dogmáticamente esta teoría a los parámetros sociales de un país. Junto a ello, Mariátegui señaló muchas veces, que la doctrina socialista era “adversa a toda fórmula de populismo demagógico y de caudillismo personalista” (2).

La materialización del pensamiento Gonzalo tiene lugar en un periodo que abarca un poco más de 20 años, y en su desarrollo, confluyen causas históricas-políticas propias de una izquierda incipiente y truncada en su relación con el proletariado y las aspiraciones reivindicativas de esta clase. En un primer momento se presentó como “pensamiento guía”, después se convirtió en “pensamiento guía del Presidente Gonzalo” y finalmente se transformó en “pensamiento Gonzalo” a secas. El tránsito conceptual de este pensamiento sería, hablando del Perú, de Mariátegui, a Mao y de ahí al pensamien-

to Gonzalo. En los inicios de la década del 60, los activistas de la reconstrucción del PCP, en cuya cabeza estaba Abimael Guzmán, solo reivindican el marxismo-leninismo. Aun no se habla ni de pensamiento Mao Tsetung, ni de maoísmo. La consigna es “retomar el camino de Mariátegui”. En 1965 se señalaba que la base ideológica del partido era el “marxismo leninismo y que nunca se debió abandonar la línea de Mariátegui”. (3). “Reivindicar a Mariátegui”, se dice (4). En 1968 Guzmán llama a defender la “vigencia del pensamiento de Mariátegui”, señalando que los comunistas peruanos tenían que seguir “el camino de Mariátegui” a quien se califica de “hombre luminoso no hay otro de esa talla...es una fuente de luz...o entronizamos el pensamiento de Mariátegui o el pueblo no avanza” (5). Después se transforma en “marxismo-leninismo-pensamiento Mao Tsetung” (se elimina de la lista a Mariátegui). De ahí se pasa a la etapa semifinal, cuando el pensamiento Mao Tsetung se convierte en maoísmo, y con ello el camino queda libre para agregar el “pensamiento Gonzalo. De esa manera como remate culminante el discurso queda estructurado bajo el concepto de “marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo.

Con el pensamiento Gonzalo, ocurre algo parecido a lo que según la crítica de Engels, había ocurrido con la filosofía alemana que se presentaba como si habría descendido del cielo sobre la tierra completamente acabada. Como si se tratara de la síntesis finita de todo el conocimiento producido por la humanidad. El “pensamiento Gonzalo”, como paradigma de una deformación política en el Partido Comunista del Perú (PCP), germina en un terreno social y político propicio para el surgimiento de caudillos, jefes o ideólogos egocéntricos contrarios a una línea marxista en el movimiento por el socialismo. Algunas de sus causas se relacionan al tardío desarrollo económico del país en el que coexiste un incipiente capitalismo dependiente con una estructura agraria semifeudal. Se vincula también al deficiente desarrollo del marxismo en el seno de

la clase obrera y a la perniciosa influencia de la pequeña burguesía intelectualizada en seno del proletariado. En los años 70 los activistas de los partidos “marxistas-leninistas”, que después se convertirían en Izquierda Unida (IU) un conglomerado electoral, que se introducen masivamente en sindicatos y organizaciones populares. Salvo el gran esfuerzo realizado en 1928 por José Carlos Mariátegui para fundar un verdadero partido revolucionario, no existe en Perú ningún antecedente que muestre que algún líder o grupo político de izquierda o de derecha haya realizado tentativas para estructurar una organización política exenta de caudillismo, burocratismo y otras lacras individualistas. El panorama político peruano es ilustrativo de esta situación calamitosa. Por el lado de la derecha, basta mencionar al Partido Aprista (Apra), organización vertical y prepotente, cuyos militantes dogmáticos y al borde del histerismo, rendían culto mesiánico a su fundador Víctor Raúl Haya de la Torre. Acción Popular (AP) desde su origen es una organización en la que sus dirigentes actúan no como líderes políticos, sino más bien como jefes de empresa. Mismo en la izquierda existe este problema. Un ejemplo de ello es cualquier organización política de la izquierda legal, cuyos orígenes están relacionados a la ambición electoral de sus dirigentes fundadores.

LA PERSONALIDAD EN LA HISTORIA Y EN LA LUCHA SOCIAL

Hay dos criterios ideológicos para referirse a la personalidad en el curso de la historia social. Un criterio se refiere a ubicar a la personalidad como un genio, algo extraordinario, magistral y fuera de lo normal. Se le extrae prácticamente del terreno real y objetivo, para colocarlo como hacedor de la historia. Bajo este concepto, el individuo es excepcional y su rol en el proceso social es insustituible. Este planteamiento es subjetivo y contrario a la dialéctica y en el plano estratégico sirve a

los grupos de poder. En este caso el “magistral jefe”, deviene un caudillo y se apodera de la organización y del proceso revolucionario. El otro punto de vista en torno a la personalidad, corresponde al materialismo histórico. Aquí la personalidad cumple un rol activo en el proceso histórico-político, pero no es el factor determinante. Lo fundamental, lo esencial es el desarrollo de las fuerzas productivas, las relaciones de producción, y la lucha de clases. En este sentido, decía, Plejanov, la personalidad puede influenciar el desarrollo del proceso social, pero “él verdaderamente, no puede hacer la historia” (6).

La personalidad en la historia ha sido un problema que el materialismo histórico ha tratado con rigurosidad, y sus conclusiones constituyen una ruptura con tesis idealistas que sobredimensionan el papel del individuo en el proceso de la lucha social. Para la doctrina marxista, el destino de un proceso social no depende de la acción individual del jefe por muy genio y talentoso que sea éste. Lo fundamental es la acción política de las masas y del pueblo. El mismo Hegel (Filosofía de la Historia) a pesar de su determinismo religioso admite que la historia mundial es en sí el proceso de la “conciencia hacia la libertad” que tienen los pueblos, donde los grandes hombres son apenas instrumentos del desarrollo histórico. No es como decían los teóricos de la pequeña burguesía en los siglos XVII y XVIII, de que los grandes hechos históricos y los movimientos sociales dependían de los héroes y de los grandes jefes (7).

La doctrina marxista toma en cuenta el rol de la personalidad en la lucha de clases y en la revolución social, pero antes de ello destaca el papel histórico-estratégico de las masas, sobre todo del proletariado, cuya lucha por el socialismo se relaciona a las condiciones materiales de la sociedad, principalmente a la producción de bienes materiales y a la lucha de clases. Ya en el Manifiesto Comunista publicado en 1848 se señala que las proposiciones teóricas de los comunistas hacia

las masas no eran “ideas o principios forjados o descubiertos por un redentor”. Y que los comunistas defendían la causa obrera, no desde el punto de vista de la pequeña burguesía, sino de las nuevas condiciones históricas cuya base material había creado el socialismo científico. Si habría que construir una escala política, o un parámetro jerárquico de los actores del proceso social y de la lucha por el socialismo, el rol principal le corresponde a las masas oprimidas (las masas hacen la historia), y fundamentalmente al proletariado industrial. En esta particularidad de los procesos sociales actúan los jefes del proletariado pero no con un rol político absoluto y único en el proceso, sino más bien como parte del desarrollo de la lucha de clases. Si en esta jerarquía se ubica en primer lugar al jefe, antes de la clase obrera organizada en su propio partido político, se regresaría a épocas remotas de los héroes tipo Robin Hood, cuando por falta de conocimiento científico y por intereses de las clases de la época, se creía que las luchas sociales y el cambio de sociedad estaban impulsadas por los grandes hombres quienes habían nacido predestinados para este cometido histórico.

Cuando Engels afirmaba que los grandes hombres “surgen por necesidad y casualidad” históricas no se colocaba ni él ni Carlos Marx como ejemplos culminantes de este fenómeno social. Por el contrario, Marx fue opuesto a todo personalismo y culto a la personalidad en las organizaciones obreras en las que participó. Marx anotó, que mientras existió la Primera Internacional (1864-1876) no permitió que se diera a la publicidad los numerosos escritos reconociendo sus méritos. Dice que ello le perturbaba y que “ni siquiera los contestaba y solo alguna que otra vez daba cuenta de ellos”. Engels y yo ingresamos en la Liga secreta de los comunistas bajo la condición de que se suprimiera en sus estatutos todo lo que contribuyera a fomentar la supersticiosa devoción a la autoridad, decía Marx (8.). Por su parte, Engels relaciona el rol de los grandes hombres a las leyes objetivas del proceso social (necesidad y

casualidad) y a los acontecimientos económicos (base material) afirmando: “El hecho que surja uno de éstos hombres precisamente en un momento y en un país determinado, es naturalmente, una pura casualidad. Pero si lo suprimimos se planteará la necesidad de reemplazarlo, y aparecerá un sustituto, más o menos bueno, pero a la larga aparecerá” (9).

Lenin luchó muchas veces contra las concepciones anticientíficas que sobredimensionaban la personalidad en el proceso social y que negaban el rol dirigente y fundamental de las masas, principalmente del proletariado. Durante todo el proceso de formación del Partido Comunista de Rusia, Lenin y los bolcheviques desarrollaron una gran batalla ideológica contra los populistas agrupados en el grupo “Voluntad del Pueblo” (Narodnaia Volia) que se reclamaban partidarios del socialismo, pero propugnaban equivocadamente la teoría de los “héroes” activos y la “multitud” pasiva. A partir de esta teoría metafísica y pequeño burguesa los populistas creían que la lucha por el socialismo en una Rusia era una cuestión de destacados individuos, los héroes”, y que las masas solo tenían que seguir a estos jefes que se presentaban como personajes iluminados de lucha social. Para los populistas rusos, la historia y la lucha por el cambio social era un asunto, no de la lucha de clases y de leyes objetivas de la sociedad, sino de la acción y voluntad de personalidades destacadas. De esta manera se negaba el papel de las masas oprimidas, no se tomaba en cuenta el rol del partido revolucionario, y sobre todo se desconocía la ubicación histórica del proletariado en la lucha por el socialismo. De esta confusión, los principales beneficiarios eran los poderosos zares, los feudales y las clases ricas.

EL “PENSAMIENTO GONZALO” Y EL CULTO AL JEFE

El “pensamiento Gonzalo”, aunque incipientemente se origina en los primeros años de la década del 60 y alcanza su punto más alto en el primer Congreso de este partido realizado en Lima el año 1988 cuando es integrado al programa del partido. Este “pensamiento”, como corriente contraria al marxismo resume una desviación ideológica desde el punto más extremo de la izquierda, y encubre su naturaleza en la necesidad de luchar contra aquellos que desde la muerte de Mariátegui en 1930 se había apoderado del Partido Comunista del Perú (PCP). Este “pensamiento”, en su desarrollo liquida principios fundamentales de la teoría marxista sobre la construcción del partido revolucionario, cuyos fundamentos doctrinales están referidos al centralismo democrático, a la crítica y autocrítica y a la rigurosa disciplina en base a la democracia partidaria. Estos principios desarrollados por Lenin, recusan cualquier manifestación de caudillos y personalismos que suplanten la dirección colectiva del partido. Gonzalo, en aplicación de su “pensamiento”, convierte al PCP en una organización política de carácter personal, y atomizada en torno al culto al jefe indiscutible, situado por encima de los órganos de dirección y del partido. Abimael Guzmán ha intentado dar una justificación “teórica” al “pensamiento Gonzalo”, y para este propósito ha dicho que este pensamiento surge del desarrollo de la lucha de clases y de la “aplicación del marxismo-leninismo-maoísmo a la revolución peruana” (10). Esta explicación reiterativa en discursos y textos oficiales del PCP no aclara la verdadera naturaleza ideológica y la trayectoria que ha seguido el proceso de instauración de la jefatura de Gonzalo y su pensamiento absoluto.

Ideológicamente, el “pensamiento Gonzalo”, significó la más grande debilidad teórica y práctica del proceso armado que se desarrolló desde 1980 hasta cerca del 2000. Este pensamiento, en apariencia se mostraba como el lado fuerte de este partido, pero por su esencia subjetiva constituyó la parte más vulnerable de este proceso. Las “cartas de paz”, redactadas en

1993 por Gonzalo y el Comité Central desde las prisiones en la que participó Vladimiro Montesinos como jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y agente de la CIA, se sustentaron precisamente en la falla ideológica que existía en la más alta instancia de dirección del Partido Comunista del Perú (PCP), en cuyo centro gravitaba como único elemento de dirección partidaria Abimael Guzmán. La lealtad y “sujeción” que expresaba la militancia a Gonzalo, como se vio en la práctica, no significaba una lealtad al marxismo ni siquiera al partido, sino más bien al jefe único. De esta manera el destino del partido y del proceso ya no dependía de la fortaleza del movimiento histórico de las clases oprimidas, sino más bien de la decisión y voluntad del jefe absoluto.

Los mismos organismos policiales, así como otras instituciones que se involucraron, directa o indirectamente, en el conflicto armado, concluyeron que la parte más débil de este partido radicaba en la relación jefe-militancia que imponía Gonzalo y en la “autoridad absoluta” que éste tenía sobre los militantes que asumían, no el papel de militantes, sino más bien de fieles discípulos” o seguidores de un personaje mítico. Así para el Instituto de Investigación para la Defensa Nacional (RAND) de los Estados Unidos, Sendero Luminoso no era otra cosa que un movimiento que reflejaba la personalidad de Abimael Guzmán, y que sus seguidores aceptaban sin discusión sus puntos de vista y que cumplían sus órdenes de manera incondicional. Para la Rand, “Una relación de esta naturaleza produciría una gran unidad interna”, pero agregaba, “tiende a limitar el papel de la dirección de segundo o tercer orden de la organización”, y es aquí decía esta institución, donde radica la mayor “vulnerabilidad de Sendero en caso de muerte o captura de Abimael Guzmán” (11). Otra opinión al respecto proviene de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que en su informe final del 28 de agosto del 2003, señala que Sendero Luminoso, es una organización “construida en torno al culto a la personalidad de Abimael Guzmán”, y ello dice

esta comisión, fue un factor “muy importante para lograr la cohesión interna del PCP-SL, pero se convirtió en su talón de Aquiles cuando cayó preso en 1992” (12).

La adoración a Gonzalo se transcribió en el discurso cotidiano, en documentos políticos del Partido y también en la literatura y poesía partidaria. «El viaje hacia el mar», se llama un cuento escrito por la camarada Myriam, número dos en el Comité Central del PCP y esposa de Gonzalo, además de miembro del Comité Permanente Histórico de este partido. Ese cuento cargado hasta el tope de subjetivismo refleja el espíritu y la forma en la que fue reconstituido este partido en la década del 60. El cuento expresa la oscilación ideológica de la dirección de este partido que se bambolea entre planteamientos típicamente idealista y posiciones políticas arcaicas de las épocas cuando aun no existía ni el proletariado ni el marxismo. En esta fábula se transforma en literatura la vieja concepción política del clan familiar donde el padre no es otro que Gonzalo. La trama esta construida por una trilogía cuyos elementos son, el papá (el presidente Gonzalo), los hijos (la militancia partidaria), y el camión (el Partido). La figuración es simple, pero representativa de los criterios políticos subjetivo impuestos por la cúpula del Partido Comunista del Perú, y la forma patriarcal que se instaló como sistema de dirección. En este cuento, la lucha que se desarrollo entre la capitulación y aquellos que planteaban proseguir la lucha armada.

El océano que se encuentra a un costado de la cordillera de los andes aparece como el comunismo. Para llegar a esta meta había que viajar en un camión, el solo medio de transporte válido, pero lamentablemente el único que podía conducir el vehiculo es el padre, su creador y sin él todo estaba perdido. “Avanzaron conducidos por el padre sabio y tenaz, firme y decidido”, si dice en el texto. El camino lleno de peligros, “escarpado, sinuoso y el frío de la tormenta los acechaba golpeándolos implacablemente”. Y cuando estaban cerca de la meta

(el mar), la “neblina espesó y el denso silencio de la puna, una indeseada presencia los detuvo: la patrulla de caminos, por la negligencia de uno de los hijos, faltaba justamente el documento que el guardián demandaba. El padre fue así conducido a la prisión”. El camión se queda sin su conductor, sin el padre. Los hijos inconsultamente, desobedeciendo al creador, al padre, toman el timón y siguen descendiendo rumbo al océano, pero, ellos, “aún eran jóvenes”, se dice en el poema, son ineptos para conducir el vehículo (el partido) y que no son nada sin la presencia física del padre, del creador. De esa manera, el camión, ya a la deriva, sin rumbo, se estrella “contra las rocas y cae al abismo” (13).

Este cuento, transfigura un proceso social, el mismo que es interpretado como si se tratara de un asunto específico de relaciones entre padre e hijos, donde el progenitor, no sólo es el “creador” de la familia, sino también el que decide el presente y futuro de los otros. Ninguno de los otros miembros del clan era capaz de forjar su propio destino apartado de la protección paternal. Una verdadera sociedad de la antigüedad cuando el patriarca era el guía espiritual de la tribu, pueblos y naciones. Algo así como Abraham, quien como dice la Biblia, fue padre del pueblo de Israel y quien convivía con los ángeles y hablaba con dios cotidianamente. Los hijos en esta trama, solo son personajes inexpertos y desobedientes cuya existencia depende del bien amado progenitor, y que al final aparecen como los responsables de la destrucción del camión (el partido). En esta historia el clan familiar pierde a su guía, al “creador”, y todo se va al diablo. Como en las tragedias griegas un hombre hace el universo, y fuera de él todo es tiniebla y sufrimiento. La camarada Miriam, a través de su simpleza literaria nos muestra un problema de esencia ideológica política grave y profundo inserto en los más altos rangos del PCP, cuya más alta expresión fue alcanzada en 1993, cuando el papá y la mamá (Gonzalo y la camarada Myriam), firmaron las cartas de paz y sin problemas condujeron a su “pueblo” a

una vergonzosa derrota. .

“Tiempo después... las hijas y los hijos de los hijos del padre, empapados con su luz, condenaron a los otros, reconstituyeron el camión, reemprendieron el camino y llegaron hasta el mar” (14).

Marcia, una poetiza y guerrillera del PCP, en mayo de 1990 declama un poema en honor de Gonzalo cuya evocación representaba más una ceremonia litúrgica y no un texto revolucionario. El poema se refiere a Gonzalo con el mismo lenguaje que usan los clérigos cuando hablan de Cristo. “Mirad como forma comunistas a su imagen y semejanza, dichosos los ojos que pueden verle y los oídos que pueden escucharle. Dichosos nosotros que sentimos tu presencia... Aprender del Presidente Gonzalo, encarnar el pensamiento Gonzalo” dice Marcia (15). Si a través de Cristo, se transmite la voluntad de Dios y crea a sus seguidores a “su “imagen y semejanza”, como dicen los textos bíblicos, Gonzalo lo hace desde su púlpito en la más alta instancia del PCP, y si los seguidores de Jesús están obligados a encarnar el pensamiento de sus profetas, el militante del PCP tenía que aprender y “encarnar el pensamiento” del jefe del partido. En el advenimiento espiritual, se dice: “El poder de la virtud del señor se transmite enteramente a los apóstoles. Los que habían sido formados por Adán a imagen y semejanza de dios, reciben ahora de modo perfecto la imagen y semejanza de Cristo” (16).

Gabriel Uribe, autor de la “La Otra Versión. Un Insólito Sendero Literario” (17), un libro que milita en las “cartas de paz”, absolutiza el rol del jefe y hace un paralelo literario entre Dios y un Gonzalo en prisión. El texto es un discurso partidario que bien pudo ser redactado por el mismo Gonzalo, sitúa el debate político entre una “reconciliación nacional” como parte del planteamiento respecto a una “solución política a los problemas de la guerra”, y el llamado “Bloque Escisionis-

ta” que desde el interior del PCP se negó desde un principio a seguir el camino de la capitulación propuesta desde la prisión en 1993. En el libro se transcribe la discusión entre Rudo, un militante que esta a favor de la lucha armada (irse contra la corriente) y Catalina, otro miembro de este partido, que sostiene las “cartas de paz”. Los dos personajes ficticios en la novela, pero reales en el hecho político, se enfrascan en una agitada discusión política cuyo eje es seguir o dejar de lado la lucha armada. Para uno de ellos, Gonzalo es el “creador”, y se dice que sin su “jefatura no se hubiera hecho esta gesta (la revolución), que sin él no estuviéramos aquí. ...Cómo prescindir del jefe”, dice Catalina. Porque quienes piensan como tu, argumenta ella, “renuncian al creador supuestamente por preservar la creación. ¿El creador del que estamos hablando ha muerto?. ¿Y quien puede tener más autoridad que al autor para velar por su obra?”.

Catalina la defensora de las “cartas de paz” y de la “reconciliación nacional”, aboga por preservar la unidad partidaria en torno a Gonzalo. Para dar contundencia a sus argumentos recurre a argumentos teológicos. Señala que el culto cristiano se preserva en base a seguir el camino legado por Cristo antes de que lo crucificaran. En su alegato hace un paralelo entre Cristo y Gonzalo, y anota que el centro de unificación partidaria es la jefatura (Gonzalo), y en el caso de los cristianos su centro es Cristo, pero como este está muerto hay problemas en la unidad entre los vicarios. Así entonces, dice Catalina, pero si Cristo estaría vivo, “aunque sea preso en algún lugar, ¿no sería para ellos un centro de unificación? en nuestro caso, la otra colina y el Bloque Escisionista se han dado la mano para ponerle una losa sepulcral al jefe cuando aun está vivo y ya se las había arreglado para retomar vínculos con la empresa” (el partido). En este libro, también se recurre a la mítica Odisea de Homero, para lograr una “alegoría necesaria” y reafirmar la necesidad de la “sujeción a la jefatura”, y de esa manera alejarse de todas las tentaciones terrenales, incluidas la voz

mágica y femenina de alguna hermosa sirena. “Ulises para avanzar en su travesía precisó sujetarse al tronco mas firme de su barca para no sucumbir ante los cantos de las sirenas. Ahí tienen una alegoría de la necesaria sujeción a la jefatura....” (18).

Si la literatura del PCP ha reflejado esa acentuada veneración hacia el jefe, no ha sido menos en los textos y pronunciamientos oficiales de los organismos generados de este partido. Los grandes esfuerzos, sacrificios y la valerosa resistencia de los prisioneros son calificados, antes que otra cosa, un mérito del presidente Gonzalo. “Los prisioneros de guerra arrancaron un triunfo político, militar y moral para el Presidente Gonzalo, el Partido y la Revolución” (19). En 1992, como se conoce el régimen de Fujimori perpetró una masacre en el penal de Canto Grande donde fueron asesinados cerca de 100 prisioneros de guerra. A raíz de esta matanza, los prisioneros sobrevivientes emitieron un comunicado donde hicieron ver que su resistencia se efectuó y encarnó “el todopoderoso pensamiento Gonzalo y con el insoslayable compromiso de dar la vida por el Presidente Gonzalo, el Partido y la revolución” (20). Una prisionera sobreviviente de Canto Grande, escribe un informe para la dirección del Partido Comunista del Perú. En el texto narra un pasaje dramático de los hechos dramáticos ocurridos en el penal, y señala que en los momentos más difíciles, “le agarré fuerte de la mano al compañero G. y le dije: eres forja del presidente Gonzalo, y él me contestó: somos forja del presidente Gonzalo” (21).

“Dar la vida por el presidente Gonzalo”, se convierte en un rito, y en un honor que pocos mortales podían aspirar. Así por ejemplo, un prisionero de la cárcel de Canto Grande narra que la resistencia heroica se había cumplido, y los prisioneros inmolados, “no vacilaron en cumplir con su compromiso de dar la vida por el Presidente Gonzalo, el Partido y la revolución”. En términos pletóricos, dice este sobreviviente “y la luz

del pensamiento Gonzalo, agárrate firmemente a él, nunca te apartes...Ha quedado plenamente demostrado que ha sido un triunfo del Presidente Gonzalo, del Partido y la revolución” (22). En un documento partidario publicado en 1993 se proclama que Gonzalo es “el hombre más grande de esta presente época, querido, respetado y heroico jefe del Partido y la revolución, continuador de Marx, Lenin y el Presidente Mao Tsetung”, y en el mismo documento se anota que los comunistas, son “forja de su forja, temple de su temple, nos enseñó el camino, la nueva aurora, y nos ha conducido, conduce y conducirá por siempre cogiéndonos de sus férreas manos hasta el comunismo...” (23). Al final de la resistencia en Canto, se narra en el libro testimonio “Gloria al día de la Resistencia Heroica” (primer aniversario), los prisioneros decidieron salir, y “prosiguieron saliendo dando vivas al Presidente Gonzalo y emplazaron a los miserables a que disparen” (24).

La práctica de sacrificarse y morir por el triunfo y prestigio del jefe, no proviene de las canteras del marxismo. Su origen es religioso y posiblemente de esencia fanática. Su práctica más conocida proviene del siglo XI una época de misticismo cuando se enfrentaban en Tierra Santa los guerreros de la cristianidad y los guerreros del Islam. Los primeros decían que luchaban y morían por dios y Cristo. Los segundos lo hacían por Alá y el profeta Mohamet. Es cierto que en las más importantes revoluciones sociales de la historia, como por ejemplo la Comuna de París en 1871, en Rusia en 1917 o en China en 1949, hubo miles de combatientes que ofrendaron heroicamente sus vidas por la justicia y la libertad. Pero en ninguno de esos casos, ningún combatiente del pueblo fue al frente de batalla gritando que moriría por alguno de sus más calificados jefes revolucionarios. Lenin en 1920, en un discurso dirigido a los combatientes rusos que partían al frente para luchar contra las tropas extranjeras invasoras, los arengaba en la “defensa de la patria”, “la defensa del socialismo” y en la lucha hasta la victoria final para no permitir el regreso de capitalistas y

terratenientes (25).

LIN PIAO Y ABIMAEEL GUZMAN

La idea de acentuar un pensamiento absoluto en una organización revolucionaria no pertenece a la experiencia marxista. Ninguna de las cumbres del pensamiento marxista propició tal aberración. Hay muchos analistas políticos que han visto una relación entre el “pensamiento Gonzalo” y la práctica política de Mao Tsetung. Es cierto que Gonzalo intentó reeditar la revolución china y imitar a Mao, pero en cuanto a la formulación de su “pensamiento”, habría que decir que en este terreno estuvo más cerca de Lin Piao y de Ten Sian Pin que de Mao. La influencia más cercana al desarrollo del “pensamiento Gonzalo”, es el planteamiento del dirigente chino Lin Piao. Aquí una breve explicación a este problema: En abril de 1969 se realiza el IX Congreso del Partido Comunista de China (PCCH), a pesar de la distancia entre China y Perú, ese evento será decisivo en el futuro del PCP y en la metamorfosis de la personalidad política de Abimael Guzmán. En ese Congreso, a iniciativa de Lin Piao, que más adelante intentaría un golpe militar contra Mao Tsetung, se introduce en los Estatutos del partido el “pensamiento de Mao Tsetung” como el “marxismo-leninismo de la época”. Ahí se señala que el fundamento teórico que guía el Partido Comunista de China (PCCH) es el pensamiento de Mao Tsetung. En el mismo Congreso Lin Piao propone que lo designen como el “más próximo camarada de armas” de Mao y en razón de ello se le nombra (de acuerdo a los estatutos) el legítimo sucesor del presidente Mao.

Lin Piao como militante del Partido Comunista de China, participó junto a Mao en la Larga Marcha. Fue uno de los jefes militares del Ejército Rojo y luchó contra los japoneses en Manchuria y la ofensiva en 1949, que derrotó definitivamente a los nacionalistas de Chiang Kai-shek. Tomó parte en la

Guerra de Corea al mando de un ejército de revolucionarios chinos. En 1959 fue nombrado Ministro de Defensa y fue uno de los que junto a Mao hicieron del Ejército Rojo una fuerza política que tuvo una importante participación en el proceso de la Revolución Cultural (1966). En la II Asamblea Nacional Popular (ANP) realizada en 1959 Lin Piao, fue elegido presidente de la República de China. En la Asamblea Nacional Popular de 1964 fue reelegido una vez más presidente. Lin Piao decía que las instrucciones del Mao eran “instrucciones supremas” y que cada frase del presidente Mao era una verdad. Lin Piao en representación del Comité Central del PCCH rindió el informe político en el IX Congreso que se inauguró el primero de abril de 1969. Fue en ese evento donde propuso que se incluyera en los estatutos del Partido el “pensamiento de Mao Tsetung”. En el mismo evento fue nombrado vicepresidente del Comité Central y el sucesor de Mao a la cabeza del partido y el Estado socialista. A partir de ese congreso fue llamado “subcomandante” y el “sucesor”. Con los rangos adquiridos en el IX Congreso, aspiraba a la presidencia de la República Popular y su ambición lo llevó a planificar un golpe militar cuyo objetivo fue asesinar al presidente Mao, tomar el poder y restaurar el capitalismo. Mientras Lin Piao, decía “Mao es un genio”, el verdadero Mao respondía, censurando a Lin Piao, que eso era puro sofisma: “No hay que dejarse engañar por aquellas personas que dicen comprender a Marx pero en realidad no lo entienden en absoluto” (26).

Lin Piao, fue el recopilador de las Citas del Presidente Mao, que fueron editadas en 1966 en el pequeño libro rojo. Se conoce que Lin Piao, nunca se separaba de su pequeño libro Rojo, cuyo texto utilizaba en cualquier conflicto político en el partido. En 1966 Lin Piao, editó la primera edición del pequeño libro rojo, y como presentación anotó: “Estudiar las obras del Presidente Mao, seguir sus enseñanzas, actuar según sus directivas, y ser un digno combatiente del presidente Mao” (27). En 1971, en complicidad con su hijo Lin Liguó, director

de operaciones de la Fuerza Aérea del Ejército Rojo planifica un golpe de Estado contra Mao Tsetung. ¿Cómo murió Lin Piao?. Hay dos versiones: una dice que fue muerto estrangulado en Pekín durante una sesión del Partido Comunista de China. Otra versión señala que Lin Piao, su mujer y su hijo Lin Linguo, murieron en septiembre de 1971 cuando el avión en que se fugaban hacia Rusia se estrelló en las montañas de Mongolia.

Según Li Yazhi, un participante de la Revolución Cultural, Mao siempre supo que Lin Piao era un derechista infiltrado en el poder popular y si dejó que el IX Congreso lo eligiera su “sucesor fue para “mejor desenmascararlo”. De acuerdo al mismo autor, el “sistema Lin Piao” así como el programa ideológico de éste, se basaba en la teoría burguesa respecto a que “son los genios los que hacen la historia”, teoría contraria a las ideas políticas de Mao Tsetung. A Lin Piao, anota Li Yizhe, le gustaba repetir refiriéndose a la autoridad de Mao, que “cuando el padre habla, los niños se callan, o cuando el Rey se jacta los siervos aplauden” (28). El mismo autor señala que Lin Piao se sirvió del movimiento revolucionario como “fuerza de apoyo” en su estrategia para usurpar el poder popular. Dice también que el error histórico del pueblo chino durante el desarrollo de la Revolución Cultural fue mantener el culto del “sistema de Lin Piao” el mismo que se tomó por el verdadero pensamiento de Mao Stung.

Las modificaciones en el Congreso de los comunistas chinos influyen en los cambios al interior del grupo liderado por Gonzalo. Su impacto es inmediato y a partir de 1970, se modifica el discurso de este grupo. Se agrega “marxismo-leninismo pensamiento Mao Tsetung”. Este hecho es la única relación que hemos encontrado entre el pensamiento Gonzalo, y la experiencia internacional de lucha por el socialismo (29). El problema del “pensamiento” como parte de los estatutos y programa de un partido es tan nocivo, que hasta la actualidad

los actuales dirigentes chinos lo usan para imponer desde el Estado un brutal sistema basado en la propiedad privada y en una economía de capitalismo salvaje. En octubre del 2007, el XVII Congreso del Partido Comunista de China (PCCh), reafirmó una vez más que este partido, se "guía en su actuación por el marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping y el importante pensamiento de la "triple representatividad".

En junio de 1975 el camarada "Álvaro" (seudónimo de Abimael) (30) se convierte en Gonzalo. No tenemos la certeza de que este cambio de seudónimo esté relacionado a la configuración absoluta de su pensamiento. Lo que si es claro es que a partir de 1975 Gonzalo había avanzado un buen trecho en encumbrar su primacía como jefe en el partido. En un evento partidario de 1976 (31), Gonzalo plantea la necesidad de una "cabeza que dirija el partido". Toda revolución tiene una cabeza, dice (32). Hasta aquí, no hay nada que afecte al marxismo, sobre todo si se exigía a los militantes que se sujeten al VI y VII Pleno del Comité Central. Estos eventos se realizaron en diciembre de 1976 y mayo de 1977 (33).

Algunos años después la sujeción ya no sería a los órganos o eventos partidarios, sino más bien a Gonzalo y a su pensamiento. El 5 de julio de 1979 durante el IX Pleno Ampliado del Comité Central del PCP, se establece la "jefatura de Gonzalo". En esta reunión considerada como "evento decisivo en la historia" del partido, se recompone el Comité Central, y se acuerda reconocer una "jefatura que tenga moral y ascendencia reconocida". Con este acuerdo Abimael Guzmán comienza a ascender los escalones del poder hasta imponer su "pensamiento". En dicho evento Gonzalo queda reconocido como "jefe del Partido y la Revolución". Posteriormente, Guzmán pretenderá hacer de su práctica una ley universal en las ciencias sociales y señala que no hay "jefatura que no se sustente en un pensamiento" (34). Seguido al reconocimiento de la "je-

fatura” el camino queda libre para finalmente convertirse en el “pensamiento Gonzalo”. Desde 1981, en la II Conferencia Nacional del Comité Central, el Partido Comunista del Perú (PCP) transforma el pensamiento Mao Tsetung en maoísmo y con ello el discurso político cambiará de forma. Será concebido como “marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo, principalmente pensamiento Gonzalo”. De aquí para adelante, Mariátegui y su pensamiento serán borrados del slogan partidario. Si antes se decía que había que formar a los militantes en el pensamiento de Mariátegui, ahora se tenía que hacer a “imagen y semejanza” de Abimael Guzmán, y a quien los militantes y simpatizantes estaban obligados a jurar fidelidad y “sujeción plena e incondicional”. “Tu pensamiento es luz poderosa, que esta en la mente de tu pueblo y los pueblos del mundo...Somos forja del Presidente Gonzalo, invicto comunista, acero puro” (35). Después se llegaría al primer congreso del PCP (1988), donde se declara a Gonzalo el mas grande marxista-leninista-maoísta viviente”, y en cuyo evento se exige “sujetarse a su dirección y mando personal”.

JEFATURA, PENSAMIENTO Y SUJECIÓN

Jefatura, pensamiento y sujeción plena al jefe del partido, son tres elementos que tienen una misma raíz ideológica cuya esencia es la revisión de la doctrina marxista en cuestiones fundamentales de la construcción y dirección del partido revolucionario. La jefatura partidaria, así como el pensamiento Gonzalo, aparecen como absolutos en los altos rangos del Partido Comunista del Perú (PCP). Se sitúan por encima de la estructura de participación de los militantes llámense congresos, conferencias, y otras instancias. Con ello queda abolida la lucha de dos líneas y el centralismo democrático que como lo prueba el marxismo son pilares de la organización comunista.

En que situación quedaba el principio de organización proletaria, si en el partido no podía haber “el más leve alejamiento del pensamiento Gonzalo”, o cuando pretende que la ideología que sustenta el PCP es el “marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo”, y que el “eje de todo es el partido Comunista del Perú, su dirección y la jefatura del presidente Gonzalo” (36). Aquí el problema no es el planteamiento en torno al jefe revolucionario o a su pensamiento político que el marxismo considera como fruto del desarrollo de la lucha de clases y del avance revolucionario del proletariado. Es justo tener en cuenta este fenómeno de carácter histórico político. Lo que no es correcto, y que escapa a la doctrina marxista, es que tanto la jefatura como el pensamiento de este jefe, como lo muestra el caso peruano, logren niveles absolutos, y que se ubiquen al mismo nivel o por encima de la organización y de la doctrina marxista. Si Marx, Engels, Lenin, fueron los más destacados jefes del proletariado internacional, no fue lo mismo con otros jefes y dirigentes que en el proceso de la lucha por el socialismo capitularon y se pasaron a la orilla de los enemigos de los trabajadores. Plejanov, uno de los jefes del proletariado ruso y uno de los más destacados marxistas de Rusia, renegó de la revolución y se convirtió como dijo Lenin en “lacayo del capital” (37). Kart Kausky fue el destacado jefe de la II Internacional Comunista y en la primera guerra mundial se puso al servicio de las grandes potencias imperialistas de occidente. Lenin lo calificó de renegado.

Gonzalo fue lejos en la formulación de su jefatura única y absoluta, y dijo que un dirigente es un “cargo orgánico”, pero no un jefe y menos una jefatura, que como lo dice él mismo, es un reconocimiento de autoridad partidaria y revolucionaria. “Hay una diferencia que hay que resaltar, dirigente es un cargo orgánico en tanto que jefes y jefatura lo entendemos como reconocimiento de autoridad partidaria y revolucionaria” (38). En la invención de Gonzalo el jefe o la jefatura está por encima de la organicidad partidaria y en razón a ello el

jefe queda al margen de las reglas internas y de los estatutos partidarios. Aquí Gonzalo adquiere inmunidad partidaria, no hay ninguna regla interna que lo pueda afectar. Su cargo es eterno y su autoridad no tiene límites. Aquí el “jefe” es algo parecido al presidente de una república burguesa quien mientras permanece en el poder no se le puede aplicar ninguna de las leyes del orden jurídico legal del país. Para que no haya dudas sobre el carácter superior del jefe, Gonzalo reafirma que “no hay dos personas iguales, nosotros no somos practicantes del igualitarismo, las personas cumplen el papel que les corresponde”, y anota a su propio gusto que “toda revolución genera un grupo de jefes y entre ellos uno destaca como superior...” (39).

En la historia de la lucha por el socialismo pocas veces se ha visto un caso similar al proceso peruano donde el jefe del partido adquiere por propia auto definición un rol político que sobrepasa la misma estructura partidaria, y que se presenta como la síntesis magistral de todo lo que ha acumulado el marxismo como ciencia social y filosófica. En el Congreso del PCP realizado en 1988 el pensamiento Gonzalo queda integrado al programa partidario y se convierte en uno de los elementos de la “Base de Unidad Partidaria”, que como se dice en un texto es el “fundamento de toda nuestra acción” (40). La unidad en el partido (base de la unidad) es fundamentalmente en torno al programa y a los principios del socialismo científico. La historia social muestra, que ninguno de los jefes históricos del proletariado intentó ubicar su pensamiento por encima de la organización revolucionaria. Marx y Engels en los inicios de la formación de las organizaciones comunistas, precisan que la unidad es en torno a la lucha por el comunismo. El concepto leninista del partido es irrefutable cuando se afirma que la unidad entre los militantes comunistas se sustenta en la fidelidad a la teoría marxista, a la dictadura del proletariado y la lucha por el comunismo. Mao Tsetung, enfatiza que la base teórica que guía la concepción política de

los “comunistas es el marxismo-leninismo”. (41)

Al amparo de que el “pensamiento Gonzalo” era parte del programa y eje de la unidad partidaria, el jefe (Gonzalo), adquiere una autoridad y mandato absoluto en el partido. Gonzalo podía decidir a su simple criterio quien o quienes podían ser dirigentes del partido. El concentra todo el poder del partido y es el único, al margen de las instancias partidarias, que puede tomar acuerdos sobre la guerra y la paz. Esta forma de autoritarismo en un partido es contraria a la práctica proletaria y resulta una copia de la forma en que están organizados los partidos burgueses cuyos jefes y dirigentes actúan autocráticamente sin tener en cuenta a la militancia. Hay pruebas de la forma dictatorial en que Gonzalo decidió a título personal situaciones fundamentales del proceso armado y del PCP. Así por ejemplo en 1993 estando en prisión y sin tomar en cuenta el esfuerzo que hacían los militantes para seguir desarrollando la guerra popular, suprimió cualquier cargo de dirección en el partido, salvo su rol de jefe y la de su mujer, la camarada Myriam . Gonzalo dijo que: “Ni los cargos ni las jerarquías valen, a excepción del Presidente Gonzalo y el Comité Permanente Histórico”. (42). Comité Permanente Histórico era una instancia del PCP que funcionaba al mismo nivel que el Comité Central. Sus integrantes, al momento de la firma de las cartas de paz en 1993, no eran otros que el mismo estaban Guzmán y su esposa (Myriam Iparraguirre).

Los estatutos y el programa partidario no tienen ninguna validez en relación a la autoridad absoluta del jefe. En una norma interna, elevada a rango de obligatoriedad en el primer congreso (1988), se señala que los militantes del partido se sujetan al presidente Gonzalo y encarnan su pensamiento. “Los marxistas-leninistas-maoístas, pensamiento Gonzalo nos sujetamos al Presidente Gonzalo y encarnamos el pensamiento Gonzalo” (43). Pero mucho antes de este congreso esta norma era obligatoria y se exige al militante “sujeción plena

e incondicional” al jefe del partido y creador del pensamiento Gonzalo. En un texto redactado por Gonzalo se dice: “como militantes tenemos disciplina y sujeción” (44). En una cita-ción memorizada y obligatoria que servía de introducción en las reuniones partidarias, la sumisión a Gonzalo estaba ase-gurada, y en ella se decía: “Partiendo de mi saludo y sujeción plena e incondicional a nuestro querido y respetado Presiden-te Gonzalo, el más grande marxista-leninista-maoísta vivien-te sobre la faz de la tierra, jefe del Partido y la revolución”. Este discurso, de carácter burocrático administrativo, se ex-presaba al inicio de cualquier reunión partidaria y servía de identificación del espíritu del militante. Cuando mayor era la vehemencia en la magnificación y elogio al jefe, mayor era la talla de comunista que adquiría el orador. De esta manera, los que mejor usaban el superlativo para adular a Gonzalo, eran los mejores “comunistas” y por analogía eran los que mejor habían asimilado el “pensamiento Gonzalo”, considerado por el mismo Abimael síntesis magistral de la ciencia marxista. Que alguien hiciera uso de la palabra sin hacer el panegírico al jefe, constituía una violación de las normas internas del partido, y ello era duramente criticado por los responsables políticos.

Para la redacción de este capítulo, se entrevistó a dos perua-nos que hasta cerca de 1990 integraron una escuela popular del Partido Comunista del Perú (PCP). Uno de ellos que por razones obvias lo llamaremos bajo el nombre de Aracelio, na-rra que a mediados de 1986 fue captado por un colega de la universidad donde era profesor. Así fue como llegó a una “Escuela Popular” que funcionaba en Lima. Las “Escuelas Po-pulares”, eran una instancia orgánica clandestina del PCP. No eran exactamente células, pero cumplían un rol primordial en la estructura orgánica de este partido. En estas escuelas se adoctrinaba, se captaba nuevo adeptos, y sus integrantes, en casos específicos, actuaban en acciones militares. Estas ins-tancias estaban dirigidas por un militante del PCP, sobre quien

recaía la responsabilidad política del grupo. Cuenta Aracelio, que la primera vez que participó en una reunión de la Escuela Popular el “responsable” le pidió que expresara su “sujeción plena e incondicional al presidente Gonzalo”. Sin entender mucho tuvo que repetir de paporrreta las frases que le indicó el “responsable”. De ahí para adelante el juramento a Gonzalo estaba asegurado, y en cada nueva reunión debía expresar su sermón de fidelidad al jefe del partido. Lo curioso, cuenta Aracelio, el mayor tiempo de cada sesión servía para que cada participante de la escuela expresara su saludo al presidente y jefe del partido. Jacinto, es otro de los entrevistados, y él participó en un “Escuela Popular” del norte del Perú. Cuenta que dicha escuela estaba integrada por más de 10 personas, la mayoría de ellas eran profesores de secundaria. El responsable político que en 1993 capituló y se enganchó como soplón en la policía, exigía que el saludo al presidente Gonzalo sea bien dicho y con fuerte entonación de voz. El método de conducir la reunión consistía en que al inicio había una ronda en la que tenían que participar todos los miembros presentes. La ronda era obligatoria y su finalidad era expresar la sujeción al jefe del partido. Claro, dice Jacinto, había que sujetarse y declarar la fidelidad también a cada uno de los organismos del partido, pero en primer lugar la sujeción era para el presidente Gonzalo a quien considerábamos el más grande “maoísta viviente sobre la tierra”.

Tanto Aracelio como Jacinto, desde el inicio tuvieron serias dudas si la vehemente sujeción al jefe servía para fortalecer al partido y a la revolución. Como lo constatamos, dicen ellos, este discurso fue utilizado por muchos para encubrir sus desviaciones ideológicas y políticas. Resultaba, cuenta Aracelio, que los campeones en declamar la alabanza a Gonzalo al final resultaron los que salieron huyendo de la organización, y muchos de ellos capitularon o se convirtieron en delatores. Por ejemplo, recuerda Jacinto, “Feliciano” fue mando militar del PCP y miembro del Comité Central junto con Gonzalo. Era uno

de los que recitaban los más hermosos discursos de “sujeción plena e incondicional”. “Feliciano fue capturado el 14 de julio de 1999 y después de unas semanas en prisión capituló y se convirtió en un colaborador de la policía y del ejército peruano. Es claro, agregó uno de los entrevistados, la “sujeción plena e incondicional a Gonzalo”, no resolvía los problemas internos y no era siempre sinónimo de entrega al partido y al proceso armado. Al contrario, esta práctica, se convirtió en una especie de taparrabo de individuos de más ínfima calidad política y moral.

EL CONOCIMIENTO Y LA VERDAD ABSOLUTA

El desarrollo de la ciencia es sin fin y los términos del conocimiento no pueden darse por acabados ni siquiera en sus etapas de mayor desarrollo. Cada etapa de la ciencia es un paso adelante hacia nuevos y más avanzados descubrimientos científicos. La existencia humana es corta y limitada para coronar el fin del conocimiento científico de una doctrina social y revolucionaria. Habría que dudar que un solo “pensamiento” pueda resumir como un todo acabado el contenido teórico universal del marxismo. El mismo Marx muchas veces tuvo que revisar y corregir algunas veces su pensamiento científico. Marx dijo en una oportunidad, que lo “único que sé es que no soy marxista”, con cuya famosa frase intentó cerrar el paso a cualquier manifestación personalizada y absoluta de la ciencia y de los procesos sociales. Federico Engels, afirmó en una oportunidad que había que echar a la basura el criterio sobre el “carácter definitivo del pensamiento y la acción del hombre”. Según él, el conocimiento no es una colección de tesis fijas y dogmáticas que solo se tienen que aprender de memoria. Para Engels, el proceso del conocimiento tiene una larga trayectoria de la ciencia que comporta fases cada vez más altas del conocimiento, pero sin llegar jamás a una “verdad absoluta, a un puesto en el que ya no se puede se-

guir cambiando. La historia, al igual que el conocimiento no puede encontrar jamás su remate definitivo” (45). Las más altas cumbres del pensamiento social, ya sea Marx, Engels, Lenin, Mao y otros, se presentaron con humildad frente al desarrollo del conocimiento humano, y en teoría y práctica nunca hablaron de su “verdad universal”, ni otras variantes del pensamiento puro y magistral. La naturaleza dialéctica del marxismo, hace que esta ciencia asuma críticamente lo más desarrollado del conocimiento universal. En su desarrollo y constitución, se nutre de todo lo mejor que la humanidad ha producido en las ciencias sociales, la filosofía, la economía, la teoría socialista, en la ciencia militar, y en todo aquello que involucraba el desarrollo científico de la humanidad. Asumir el espíritu de la filosofía marxista, es decir el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, implica profundizar en esta ciencia y ampliar el conocimiento concreto y práctico.

Lo que acabamos de anotar en torno a las pretensiones de la jefatura de Gonzalo es una parte del lado negativo de esta práctica política. Hay otros problemas y ellos se relacionan a las ambiciones políticas de largo aliento de Guzmán. Cuando el jefe del PCP agrega su nombre de militante en la lista doctrinal, no lo hace simplemente por simple figuración o por una razón de exotismo a la peruana. El “marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo”, y su agregado reiterativo que el “pensamiento es arma indispensable del triunfo”, o que “es principal para el caso peruano”, ha mostrado las ambiciones sin freno de este dirigente peruano. El marxismo, dice Lenin, apareció como continuación directa inmediata de las doctrinas de los más grandes “representantes de la filosofía, la economía política y el socialismo...Dando a los hombres una concepción del mundo íntegra” (46). Si el marxismo es el resumen de la ciencia en varios terrenos, habría que saber si el “pensamiento Gonzalo” tiene ese mismo origen. Es evidente que Gonzalo exagera un poco la nota, y el hecho de que antes que capitule fue el jefe de una organización que efectuaba lu-

cha armada, no le confiere meritos ni derecho para estar a la misma altura de Marx, Engels, Lenin y Mao. La repetición o la aplicación parcial y revisada de la ciencia marxista, como fue el caso peruano, no otorgan derecho a creerse tan importante como los creadores de esta ciencia. Una lucha armada por si mismo, y peor aun si esta concluyó en derrota por la traición de sus dirigentes, no configura un aporte al desarrollo de la ciencia marxista. Al contrario, esta derrota crea en el seno de los oprimidos desmoralización y desencantó frente al marxismo, y recuperarse costará mucho tiempo y grandes esfuerzos en el futuro. En América Latina hay muchos ejemplo de lucha armada que no han servido para nada, salvo para traicionar y desmoralizar a las masas oprimidas. En Perú mismo, por mencionar un ejemplo, la guerrilla del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), durante su corta existencia solo incentivó la conciliación, las treguas y los pactos políticos con los regimenes de turno.

La concepción partidaria basada en la jefatura indiscutible y absoluta es producto de la ideología burguesa. Esta ideología es la base para edificar una organización política en la obediencia servil del militante de base hacia el “jefe” inmaculado. La forma como se plantea el problema de la jefatura y el pensamiento Gonzalo, resultan una especulación metafísica, una interpretación antidialéctica y subjetiva de la realidad. En esa realidad ficticia Gonzalo se convierte en el jefe, es inmutable y eterno. Todo puede cambiar menos su jefatura y su forma de pensar (su pensamiento) que alcanza universalidad en el concepto de la política, a decir de su propio autor, es la concretización de la ideología del proletariado. El marxismo no asume el culto a la personalidad y lucha contra las corrientes religiosas, sectas o grupos políticos de ideologías idealistas, que presentan una extrema afirmación del jefe como autoridad suprema e indiscutible. Bajo estas premisas políticas, solo Gonzalo puede interpretar y aplicar “creadoramente” y “magistralmente” la ciencia marxista a la realidad peruana, y

ello le da derecho para considerarse el “continuador de Marx, Lenin y el presidente Mao Tsetung”, y por que no como se dice en los textos oficiales del PCP, el “más grande marxista-leninista-maoísta viviente sobre la tierra”. El marxismo en este caso, que por mutación se transforma en el “pensamiento Gonzalo”, deviene en algo personal y metafísico alejado de la naturaleza objetiva y racional que caracteriza esta ciencia. De este marxismo a la peruana, se cae en el seguidísimo vulgar y en los hechos se deja de lado la teoría revolucionaria para adoptar un voluntarismo idealista de naturaleza violenta o pacífica.

AUTORIDAD PARTIDARIA Y PRESUNCIÓN

Lenin, estaba en contra de lo que él calificaba de “presunción comunista” refiriéndose a aquellos dirigentes que tomaban el partido como una empresa privada y que creían que podían resolver los problemas del partido con decisiones personales (47). La medula del sistema de organización del partido, es el centralismo democrático, y la dirección colectiva de la organización. En este sistema de dirección el programa y los estatutos no pueden tener nombre propio y menos llevar las referencias del dirigente o jefe. Su aplicación es igual para todos los militantes del partido. “Hay que educar al partido en el programa del Partido”, dice Lenin (48). En estos principios de dirección van a descasar otros elementos fundamentales de la doctrina leninista de organización política de la clase obrera. La crítica y la autocrítica, y la consiguiente lucha de dos líneas como ejes del desarrollo partidario, fundamentan el principio de la democracia interna del partido. Bajo estas premisas se descarta cualquier manifestación de poder absoluto de un jefe o de cualquier dirigente. Orientar a los partidos comunistas en la práctica del centralismo democrático, fue una las grandes tareas de Lenin y de la III Internacional Comunista. “La centralización democrática en la organización

del partido comunista debe ser una verdadera síntesis, una fusión de centralización y de democracia proletaria...Una centralización formal y mecánica no sería que la centralización del "poder" en manos de una burocracia que tiene la ambición de dominar a los otros miembros del partido o a las masas del proletariado revolucionario fuera del partido" (49).

Lenin nunca hablo de la autoridad suprema del "jefe", y menos pidió que los comunistas rusos se "sujeten incondicionalmente a su jefatura". Eso no existió en la historia del leninismo ni en la trayectoria de la revolución rusa. Para él un partido comunista solo sería capaz de cumplir con su función revolucionaria, si estaba organizado en forma centralizada, "si reina dentro de el una disciplina férrea" casi militar, y si el centro del Partido era un órgano de dirección colectiva bajo el principio del centralismo democrático. Lenin, en su libro "Quehacer" analiza la relación masas-jefes, y ahí existe la "jefatura" absoluta de alguien en la organización revolucionaria, sino de una "docena de jefes" que todo movimiento crea en su desarrollo propio. Sin "una docena de jefes de talento, de jefes probados, preparados profesionalmente, instruidos por una larga práctica y bien compenetrados, ninguna clase de la sociedad contemporánea puede luchar con firmeza". Pero Lenin precisó, que el futuro de la organización política y del proceso revolucionario, no depende del jefe absoluto y único, sino más bien de la calidad de los dirigentes y la continuidad que estos pueden dar al movimiento revolucionario (50).

Para Mao el Partido Comunista, es "una unidad de contrarios", cuyas normas internas (orgánicas) son aplicables para todos de igual manera, y donde se descarta el absolutismo del dirigente o de los jefes. Como es posible dice Mao hablando del partido, que "un solo individuo lo decida todo". En este aspecto Gonzalo no es muy maoísta, sobre todo cuando 1993 redactó las cartas de paz que resultaron el factor fundamental en la derrota de la lucha armada peruana, Mao, dice, que

siempre que se trate de un asunto importante, es necesario discutirlo en forma colectiva, escuchar seriamente los distintos juicios...” Quien no actué así será un hombre hegemónico, príncipe hegemónico, mas que jefe de escuadra” (51). Mao, al contrario de Gonzalo, llama a las masas a remover orgánicamente a los dirigentes y jefes. ¿Por qué uno (hablando de dirigentes y jefes), solo puede ascender y no descender?, dice Mao. Anota que cualquier degradación o traslado a otro trabajo, “contribuyen, después de todo, a templar su voluntad revolucionaria” y le permite aprender de las masas. Yo mismo, dice Mao, tuve experiencias similares. En efecto, Mao varias veces fue removido y sacado del comité central del Partido Comunista y es el único de los líderes históricos que no fue secretario general del Partido. En 1927, la dirección del PCCH rechazó su trabajo sobre el campesino (52).

Mao siempre fue partidario de una dirección colectiva en el partido, y en ciertas circunstancias incentivó a los militantes a que lucharan contra sus propios dirigentes que violaban la democracia interna. Por ejemplo en 1962 llamó a rechazar la arbitrariedad “personal del primer secretario” y señaló que dentro de los comités del Partido, el “centralismo democrático es el único método que debe emplearse”. Por ejemplo, dijo Mao, en el Comité permanente y el Buró político del Comité Central, ocurre con frecuencia que me someto a los demás cuando desaprueban mis opiniones, sean correctas o no, pues ellos son la mayoría” (53). Para Mao Tsetung, las masas eran todo y estaban por encima de cualquier consideración. “No hay ni salvadores ni Dios, todo depende exclusivamente de nosotros. ¿Quién crea el mundo de los hombres?. Son las masas laboriosas” (54).

El endiosamiento del jefe, es una concepción idealista y burguesa de la historia. Es en esencia el desprecio a las masas populares y hace del partido una institución política de carácter privado, cuyo destino está ligado, no la lucha social y al

rol histórico de las clases, sino a la decisión vanidosa del jefe. Esta concepción del partido es una tergiversación del concepto materialista de la historia y vulnera la teoría marxista respecto a la organización del partido político de los trabajadores. La diferencia entre un partido burgués y una organización revolucionaria, radica no solo en sus objetivos estratégicos de clase, sino también en el sistema de organización y dirección partidaria. Los partidos burgueses funcionan con “jefes” burocráticos y caudillos que actúan como propietarios y gerentes donde ellos deciden la suerte y el destino político de la organización. Son eternos en el cargo y ninguna regla interna les afecta. Tienen derecho al veto y no responden a ninguna autoridad o regla partidaria. Incluso, muertos o en prisión siguen siendo “los jefes del partido”. Así se pudo constatar en 1992 cuando Gonzalo fue apresado por la policía. Desde prisión siguió decidiendo por cuenta propia el destino de la revolución y del partido.

Una de las características de las organizaciones políticas de la burguesía, ya sea en los países ricos o pobres, es que en ellas no existe la democrática interna. Sus jefes y dirigentes adquieren poderes ilimitados, y se sirven de la organización para conseguir ventajas personales o de grupo. Por mencionar un ejemplo, Víctor Raúl Haya de la Torre, fundó en 1924 el Partido Aprista (APRA), y fue “jefe” de esa organización durante 55 años hasta el último día de sus existencia en 1979 cuando falleció a los 84 años. El jefe del APRA era poderoso y no tenía contrincantes ni opositores en su organización donde le rendían culto. Quien se le ponía al frente era masacrado o muerto por los “búfalos” apristas o simplemente era expulsado. Bajo la consigna de “Fe, Unión, Disciplina y Acción” reinaba el “maestro” Haya de la Torre. Todos en el partido le expresaban su adoración como si se tratara de una divinidad egipcia. La militancia aprista lo convirtió en icono de sus esperanzas, y esperaban que él se pusiera al frente de la “unidad latinoamericana”. El culto a este individuo no tenía

ningún asidero político razonable y coherente, en tanto Haya de la Torre, fue durante toda su carrera política un aliado de los grupos de poder y del imperialismo americano. Jamás hizo algo positivo para el pueblo peruano. El “jefe” del APRA instituyó el “día de la fraternidad” y ello significa que cada 22 de febrero (aniversario del “jefe”), este partido convoca al “Mitin de la Fraternidad”. Ahí en medio del estrado, Haya de la Torre blandía un pañuelo blanco, mientras miles de seguidores apristas le rendían homenaje como si fuera un dios. Hasta ahora, como se podrá leer en un poema aprista que aquí mismo reproducimos, el fundador del Apra ha logrado la eternidad entre sus seguidores, quienes con el corazón en la mano piden su reencarnación y pronto regreso a la vida terrenal.

*Oh Víctor Raúl!
 Tu que naciste predestinado
 Tu que nutriste la mente....
 Oh Víctor Raúl!
 Como haces falta no te alejes más
 Encárnate en otro hombre
 Tu que fuiste hombre símbolo...(55).*

Con Abimael Guzmán busca la figuración histórica, el halago, el reconocimiento, la entronización política, y que la militancia le jure fidelidad. Sin antes considerar la sentencia de la historia social, ubica su nombre al mismo nivel de los más grandes jefes de la lucha por el socialismo. Así añade al discurso partidario la fórmula “marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo”. Su ambición va mas lejos y no tiene reparos para sobreponerse a los creadores de la ciencia marxista, señalando que su pensamiento Gonzalo “es principal” en tanto “verdad universal especificada a la realidad concreta de la sociedad peruana” (56). Gonzalo y su particular forma de aplicar el marxismo, no proviene del ejemplo de los jefes históricos del proletariado internacional, que a diferencia de Abimael Guzmán no pretendieron convertir sus ideas y pensamiento en verdades absolutas o en doctrinas definitivas y cerradas.

Una característica del espíritu y conducta los más destacados representantes del socialismo científico, ha sido la humildad para presentar sus ideas y obras políticas. Carlos Marx, hasta antes de su muerte en marzo de 1883 rechazaba que la grandiosa doctrina filosófica, social y política, creada por él llevara su nombre bajo el título de “marxismo” en la medida como decía “evocara un sistema definitivo y cerrado” (57). Fue Engels, el que después de la muerte de Marx, admitiría, que la fabulosa obra de Max se denomine marxismo. Engels para tomar esta decisión señala que sin Marx, “la teoría estaría bien lejos de ser lo que es ahora. Entonces es justo que esta teoría lleve su nombre”. Así de esta manera surge el término del marxismo, no por criterios egocéntricos y de figuración del mismo Marx, sino más bien, en reconocimiento merecido a la gigantesca obra del fundador del socialismo científico (58).

El mismo Mao, hablando casi con reproche de la publicidad que se hacía de las citas extraídas de sus obras política y recopiladas en el libro rojo editado por Lin Piao antes de que se pasará a la orilla de la contrarrevolución china, decía que nunca pensó que ese pequeño libro tuviera un ‘efecto mágico’, y que ello le hacía pensar a la fabula de la “Abuela Wang, que todo el tiempo alababa la dulzura de sus melones que vendía” (59). Mao, se opuso a la teoría de los grandes genios y de los jefes indiscutidos. En 1971, cuando aun se desarrollaba la Revolución Cultural, criticó con dureza el calificativo de “genio”, con que sus seguidores y el pueblo lo calificaban. “En lo que concierne al concepto de genio, yo pienso que se trata de una cuestión puramente teórica: en efecto cuando se hace alusión al genio, es a mi a quien se dirigen. Yo no soy un genio. Yo estudié las obras de Confucio durante seis años, los libros del capitalismo durante siete años, y es recién en 1918 que yo comencé a estudiar las obras marxistas-leninistas. ¿Cómo entonces pueden calificarme de genio?” (60). En esta misma dirección, enfatizó que el mito del “Jefe” no existe:

“Por alto que sea el puesto que ocupa, el debe quedarse en medio del pueblo como un trabajador ordinario. No tomemos poses con grandes aires; hay que liberarse del burocratismo”. Un dirigente dice él, “debe saber que sus conocimientos y su actos no forman más que una pequeña gota en el océano del conocimiento y del trabajo revolucionario”. El trabajo individual es limitado y estrecho, anota (61).

Para Mao el “individuo no es mas que un pequeño tornillo en el proceso revolucionario. El marxismo-leninismo nos enseña que todo el poder y los éxitos provienen del poder colectivo, ningún individuo puede separarse de una colectividad. Si comprendemos realmente la participación y la relación mutua de las masas y el individuo en la historia, entonces seremos modestos” (62). Pero Mao va más lejos y anota que para que la revolución no caiga en manos de la burguesía, no basta asegurar una justa línea política, sino también la formación de cuadros y dirigentes capaces de dar continuidad a la revolución proletaria. “Esto es de vida o muerte para nuestro partido y por nuestro país”, dice Mao. ¿Cuales son las cualidades que deben tener los cuadros y dirigentes que sucederán a los actuales dirigentes de la revolución china?, pregunta Mao en 1964. Su respuesta es contundente, y entre las cualidades que él anota que debía tener un jefe, destaca que éste debe ser “modesto y cuidarse de ser arrogante”, además estar imbuido de un espíritu autocrático (63).

VERDAD UNIVERSAL Y PENSAMIENTO PURO

El pensamiento guía al comienzo o el pensamiento Gonzalo después, viene a ser algo como el sujeto universal (de pensamiento puro) propuesto por Hegel, donde el pensamiento deja de ser real para convertirse en una categoría filosófica que resume todo el conocimiento científico de la humanidad. El pensamiento Gonzalo es también algo parecido al pensa-

miento puro de Kant donde la virtud y la sabiduría humana corresponden al “comportamiento de ese “hombre divino que llevamos en nosotros” (64). Es algo así como la “verdad extrahumana” que Lenin en su tiempo calificó de interpretación “mística idealista y religiosa”. Con Gonzalo el pensamiento sale de la conceptualización gramatical de la acción de pensar, para convertirse en una categoría doctrinal que de un salto alcanza el mismo nivel del marxismo. De esta manera el “Marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo, principalmente pensamiento Gonzalo”, como lo califica Abimael Guzmán, se convierte en un fenómeno que gira, no en torno de la ciencia y práctica histórica del marxismo, sino alrededor del pensamiento puro y casi sagrado de Gonzalo. Aquí hay un poco de aquella “concepción religiosa de la historia”, que en su tiempo Engels criticaba al filósofo Max Stirner, que “presentaba todo el proceso histórico como una simple historia de caballeros”, y que veía al hombre religioso como el “prohombre de quien arranca toda la historia” (65). Así, el pensamiento propiamente dicho, que tiene que ver con pensar y que se adjudica a todo aquel que piensa y reflexiona, se transforma en el caso de Gonzalo en la “ideología específica y principal” para los comunistas peruanos. El hombre más simple piensa y al margen de la calidad de sus reflexiones tiene su pensamiento adquirido a través de la experiencia directa o a través de la enseñanza teórica. Se puede usar el término “pensamiento” para indicar un conjunto de ideas propias o colectivas, pero éstas de por sí no constituyen una continuación lineal de una doctrina específica.

El pensamiento Gonzalo que se toma como la “aplicación magistral de la “verdad universal”, transforma la teoría política en algo mecánico que castra en la militancia partidaria la comprensión crítico-materialista de la práctica social y política. El cuadro, dirigente o simplemente militante del partido recibe la “verdad universal” directa de Gonzalo y no tiene que buscarla en ninguna obra clásica del marxismo. Si Gonzalo

era magistral en el análisis y en la síntesis del marxismo, decía el militante del PCP para qué buscar la verdad fuera del partido y de los discursos del venerado jefe. Así la “verdad universal” (marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo), de la que habla Gonzalo deja de ser “aplicación magistral del marxismo”, para convertirse en un sistema de pensamiento único y absoluto. En este contexto partidario, lo que dice y haga Gonzalo, es ley que se cumple sin discusión. De esta manera el militante pierde su conciencia crítica y asume un conocimiento pasivo y subjetivo en relación exclusiva con la acción política del jefe. Bajo la premisa de que todo proceso de lucha de clases genera su pensamiento revolucionario, se establece al interior del Partido Comunista del Perú (PCP), una relación de supremacía en la cual Gonzalo establece su dominación. Guzmán no tiene sustituto y su decisión es la última palabra en el partido. Nadie salvo él podía escribir, disertar, dar entrevistas, y hablar de la política peruana o del campo internacional. En este terreno abonado por la “sujeción plena e incondicional”, Gonzalo resume no solo la “verdad universal”, sino también toda la sabiduría humana con la que se podía contar para concretar la paz o la guerra en un proceso de lucha social.

CASTRACIÓN DEL ESPÍRITU CRÍTICO EN EL PARTIDO

Una prueba de castración del espíritu crítico del militante del PCP, se expresa con dramática claridad cuando Gonzalo traiciona y arrastra tras sus posiciones políticas al 100% de los dirigentes de este partido, incluido los que aún estaban libres. En octubre de 1993 Gonzalo desde la prisión redacta las “cartas de paz, con el apoyo del gobierno y los servicios secretos del Estado, difunde estas misivas como si se tratara de una “directiva” del PCP. Los que seguían desarrollando la lucha armada no supieron adoptar una posición clara y firme frente a

esta situación. Esas “cartas de paz” de naturaleza reaccionaria, no encontraron una respuesta doctrinaria al interior del Partido Comunista del Perú (PCP), y ello mostró el aspecto sumiso y seguidista de la militancia de este partido. Los dirigentes de este partido que aún se encontraban libres y que habían asumido cargos de dirección, se pronunciaron en defensa del proceso armado, rechazaron las cartas de paz calificadas de patraña policial, pero encontraron serias dificultades para resolver la verdadera naturaleza ideológica de estas cartas. En un grave error, cuyo costo sería la derrota del proceso armado, siguieron considerando a Gonzalo y otros miembros del comité central en prisión como dirigentes activos del partido, que incluso tenían autoridad para negociar la revolución en la que ellos ya no participaban directamente. Por ello resultó sumamente grave, que los dirigentes del PCP que desde 1992 se encontraban dirigiendo la lucha armada, seguían afirmando públicamente su veneración y “sujeción plena e incondicional al presidente Gonzalo”. Decían en textos y documentos que Gonzalo seguía siendo “el jefe del Partido y la revolución”. Hubo incluso dirigentes que al momento de ser detenidos por la policía lanzaron la consigna de seguir la lucha armada y rechazar el acuerdo de paz, pero una vez en los cuarteles del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) se confrontaron a Gonzalo en persona y acabaron dando vivas al acuerdo de paz y a una negociación con el régimen peruano. Con ello quedó claro que los seguidores de Gonzalo, se asemejaban más a fieles activistas de una secta religiosa que a verdaderos militantes comunistas, formados en el espíritu crítico, dialéctico, y sobre todo reflexivo frente a la realidad objetiva. Existe en el movimiento comunista internacional, una norma que se practica desde las épocas más remotas de la lucha social, mediante la cual un militante, cuadro, dirigente o jefe de un partido revolucionario que cae en manos de las fuerzas represivas, queda excluido de cualquier responsabilidad de dirección partidaria. Mismo en los ejércitos burgueses cuando un alto oficial cae en manos de sus enemigos, inmediatamente es reemplazado

por otro jefe militar.

Las fallas, los errores y desviaciones en las revoluciones se ven con mayor nitidez en los momentos más críticos de dicho proceso. Muchas veces, el ritmo de las acciones y la intensidad de la lucha de clases, dificultan ver la trayectoria vital, teórica y práctica de este proceso. La teoría enseña, por lo menos eso se admite en los textos marxistas, que ver solamente lo inmediato, lo cotidiano, constituye un grave error y una violación del carácter fundamental de la objetividad política. En Perú mientras la lucha armada se desarrollaba vertiginosamente, no se notaba con claridad la esencia perniciosa que se escondía tras la jefatura absoluta de Gonzalo y su pensamiento. Muchas veces, equivocadamente, se consideró que este aspecto, la fidelidad a Gonzalo (morir por el jefe y la sujeción incondicional a Gonzalo) era una de las virtudes del PCP, y en tanto ello era la parte más sólida del movimiento armado. La práctica y los hechos, mostraron que esta apreciación era errónea, y que lo que parecía la parte fuerte, resultó el lado más frágil y vulnerable del proceso armado.

La parte patética” en este problema, se expresó cuando el “pensamiento Gonzalo” y la jefatura absoluta de Gonzalo, alcanzaron dimensión extramental, metafísica y dual que servía bien para la revolución bien para la contrarrevolución. Para los seguidores de las “cartas de paz”, incluido Abimael Guzmán, la negociación con Fujimori y Montesinos, se hacía en aplicación del “pensamiento Gonzalo. Para los cuadros y dirigentes que habían asumido la dirección del proceso armado fuera de las prisiones, continuar con la lucha armada y rechazar la capitulación, se sustentaba en aplicación del “pensamiento Gonzalo”. Para estos dirigentes sus referencias ideológicas, tácticas y estratégicas, seguían proviniendo de la fidelidad al pensamiento Gonzalo, y consideraban a Guzmán no un capitulador sino más bien un héroe de la revolución.

Los comunicados editados fuera de la prisión precisaron la naturaleza contrarrevolucionaria de las cartas de paz y de la negociación con Fujimori, pero al mismo tiempo reafirmaban la “sujeción cabal e incondicional al Partido y al presidente Gonzalo”. Este problema, no encontró solución en una organización corroída por el culto al jefe, y ello en perspectiva favoreció no al grupo decidido a continuar la lucha armada, sino a aquellos que se inclinaron por la paz y la capitulación. Así por ejemplo, en un comunicado publicado de la dirección provisional del PCP, emitido pocos días después de la publicación de las “cartas de paz” (octubre 1993), se decía que la negociación y la supuesta participación de Gonzalo, era parte de la guerra de baja intensidad, y se les calificaba de “sinistra y proterva patraña”, cuyo propósito era “infamar inútilmente al Presidente Gonzalo”, y preparar el terreno para asesinarlo. En el mismo comunicado (66) se reafirmaba la “decisión inquebrantable” de dar la “vida por el Presidente Gonzalo, el Partido y la revolución”.

La sujeción incondicional a Gonzalo mostró toda su carga ideológica negativa poco tiempo después que Abimael Guzmán fuera detenido en 1992. Es historia bastante conocida, que en 1993 Gonzalo y la mayor parte del Comité Central del PCP desde la presión, se pusieron al frente de una negociación con el gobierno de Alberto Fujimori. Vladimiro Montesinos, agente de la CIA americana y jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), además de asesor personal de Fujimori fue, por parte del Estado peruano, el encargado de convencer a Abimael Guzmán de la necesidad de la negociación que dejara sin efecto la lucha armada. Esta negociación desde las prisiones, causa fundamental de la derrota de la lucha armada, se sustentó como dijeron sus propios autores, en la aplicación del “pensamiento Gonzalo”. Con la negociación por la paz, dice Gonzalo en un texto redactado en la prisión, el partido “entra a una nueva etapa... inédita, no ocurrido antes en revolución habida”, y que eso se resolvía a la “luz del

pensamiento Gonzalo” (67). De esta manera el pensamiento Gonzalo que sirvió para iniciar y desarrollar la lucha armada en 1980, servía a partir de 1993 en instrumento de la paz y de la capitación de sus dirigentes.

En el desarrollo mismo del proceso armado y del “pensamiento Gonzalo” el movimiento armado, así como el Partido se convierten en algo propio y personal de Abimael Guzmán, en la cual los militantes y seguidores, son en el terreno teórico político, repetidores, declamadores y vulgares copiadore del pensamiento puro del jefe. La ciencia marxista en este caso viene exclusivamente de Gonzalo, quien la entrega “magistralmente” en citas, discursos, conversaciones y frases repetitivas. Aquí ocurre algo de lo que decía Engels, que la militancia sin rebelarse contra esta “tiranía del pensamiento este aborto acabó por imponerse en su cabeza” (68). Así cuando Gonzalo, antes de caer en manos de la policía, repetía sin cesar que el dialogo con el gobierno era un trafico político contrarrevolucionario, la militancia en coro gritaba lo mismo. Pero cuando Gonzalo, en 1993 fue arrestado y confinado a una prisión militar, desde donde abogó por un dialogo de paz con el régimen de Fujimori, sin pestañar la militancia partidaria repitió sin ningún problema que el dialogo era lo mejor para el partido y la revolución. En el contexto partidario impuesto por Abimael Guzmán, el adherente al PCP deja de ser un militante comunista para convertirse simplemente en un discípulo del presidente Gonzalo. De esta manera los integrantes del partido antes de ser comunistas eran “soldados rojos de Gonzalo”, y si luchaban, sufrían o se inmolaban en la lucha revolucionaria, lo hacían antes que nada por el presidente Gonzalo a quien habían jurado fidelidad incondicional, y quien además creaba militantes a su “imagen y semejanza”. Como parte de este mismo hecho político, Gonzalo convierte su “pensamiento” en uno de los elementos de la “Base de Unidad Partidaria (BUP” alcanzando de esta forma una categoría doctrinal. Así el “pensamiento Gonzalo”, logra no solamente

ubicarse al mismo nivel del conjunto de la doctrina marxista, sino que en concreto se transforma en principal y como lo dice Gonzalo en “nuestra ideología” y “punto de partida de la base de unidad partidaria” (69).

EL CAUDILLO Y LA SUJECION INCONDICIONAL

En el primer congreso realizado en 1988, Gonzalo logra que su pensamiento se instituya como parte de la estructura del partido, y con ello concluyó cualquier posibilidad de un camino independiente y marxista de esta organización. En ese evento se acuerda que el Partido Comunista del Perú se fundamenta y “guía por el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente maoísmo y, específicamente por el pensamiento Gonzalo como aplicación creadora de la verdad universal a las condiciones concretas de la revolución peruana hecha por el Presidente Gonzalo, jefe de nuestro Partido” (70). Este acuerdo partidario es el remate de todo el camino que había recorrido Gonzalo para imponerse como absoluto en el PCP. Junto a ello, se refuerza la “sujeción incondicional al jefe”, y se eleva a tesis política la mistificación de Gonzalo y la creencia en su dirección considerada infalible. La concepción arbitraria del pensamiento Gonzalo, que se implementa paralelo a la reconstrucción de este partido y del desarrollo de la lucha armada sobrepone el individuo por encima de la dirección colectiva, y es la negación del programa revolucionario. Un programa político es universal en el tiempo y no puede depender de la existencia de una o varias personas. Pueden pasar varias generaciones de revolucionarios antes de que ese programa se materialice y se corone con el triunfo definitivo de la clase. La historia de la lucha social muestra que no bastó una vida entera para liquidar las viejas sociedades de explotación. En la misma trayectoria histórica del marxismo es evidente que la existencia terrenal de sus autores, no fue suficiente para dar por terminada la experiencia teórica y practica en la

lucha y construcción del socialismo.

El programa es el instrumento ideológico-político y la base unitaria de los militantes de un partido. El concepto de programa en una organización que se reclama revolucionaria, tiene que ver con el socialismo y el comunismo, y estas premisas no pueden estar ligadas al “pensamiento” absoluto de una persona, sino más bien al conjunto de la doctrina marxista, que como decía Lenin, es “todopoderosa porque es exacta” (71). El programa sintetiza la teoría revolucionaria, y tiene relación con las clases sociales que luchan por el cambio. No puede estar limitado al jefe que surge por “necesidad y casualidad histórica” y que en la dialéctica misma de la lucha podrá o no sobrevivir como revolucionario a la culminación del proceso liberador. Hay muchos ejemplos de “jefes” traidores, y uno bastante conocido es Karl Kautsky, jefe de la Segunda Internacional Comunista (1889-1914) y uno de los grandes teóricos marxistas de su tiempo que no sobrevivió en términos políticos a las pruebas que lo sometió la lucha de clases en Europa. Lenin lo calificó como la “más destacada autoridad de la II Internacional y uno de los jefes del proletariado” (72). Durante la primera guerra mundial Kautsky traicionó, renunció al marxismo y se convirtió en aliado de las potencias imperialistas de Europa. Lenin lo acusó de renegado y de Judas de la clase obrera. Ni Carlos Marx ni Federico Engels personificaron con sus nombres el Manifiesto Comunista (1848) que fue el primer programa revolucionario del proletariado.

Introducir el “pensamiento Gonzalo” y a su autor (Abimael Guzmán) en el programa se anula normas leninistas del funcionamiento interno del partido. En primer lugar se liquida el principio del centralismo democrático en la dirección del partido. En segundo lugar, se suplanta lo esencial en la lucha de dos líneas (lucha entre izquierda y derecha) y en su reemplazo se aplica una sofistería calificada hipócritamente de “lucha de dos líneas”, cuyo objetivo político no es luchar contra las

corrientes adversas al marxismo, sino más bien para consolidar la dirección absoluta del jefe e imponer su pensamiento como si fuera un catecismo religioso. Incluir el pensamiento Gonzalo en el programa convierte esta organización en un partido proletario caricaturesco. Algo así como una empresa privada que lleva el nombre y apellido del accionista principal, en cuya dirección actúan gerentes y administradores y no revolucionarios. Con ello se quiebra la estructura orgánica de dirección colectiva y se suplanta por una dirección personal de un jefe que encontró terreno fértil entre militantes y seguidores “formados a su “imagen y semejanza”. De esta manera, se establece un nexo entre el abandono del marxismo y la consolidación del pensamiento Gonzalo. Durante el desarrollo de la lucha armada se pierde lo que Lenin definió en 1907 como cuestión fundamental para la formación de un partido auténticamente revolucionario, refiriéndose al sistema del centralismo democrático cuya base ideológica es la línea política general de la revolución, el programa y los estatutos.

El centralismo democrático es uno de los aportes medulares de la teoría leninista sobre la construcción del partido revolucionario. Este principio significa la existencia indisoluble entre la dirección centralizada y la práctica democrática en todos los niveles de dirección, lo que hace del partido comunista una organización colectiva, pensante, crítica y científica, alejada de cualquier tendencia caudillista y de culto a la personalidad del jefe, como si ocurre en los partidos burgueses. Para Lenin el centralismo democrático resume al sistema de dirección democrática centralizada, donde absolutamente todas las instancias orgánicas del partido están dirigidas por un centro único, cuya base ideológica-política es la ciencia marxista, y no el “pensamiento” de tal o cual jefe. Este principio como rector de la estructura orgánica del partido, se materializa específicamente en los órganos de dirección como el Congreso, el Comité Central, la comisión política, la célula y otras instancias, evitando cualquier manifestación autoridad

absoluta que vulnere y desconozca precisamente este sistema de organización. Lenin, hablando en 1907 del Partido Socialdemócrata Ruso, afirma que en esta organización todos los “asuntos del Partido se llevan directamente a través de representantes, todos los miembros del Partido, en pie de igualdad y sin ninguna excepción: además todos los cargos, todos los comités directivos y todos los organismo del Partido son electivos, rinden cuenta de su gestión y se renuevan” (73).

DIRECCION ABSOLUTA Y EL FIN DE LA CONTRADICCION

Gonzalo ha repetido sin cesar su vocación por la lucha de dos líneas al interior del PCP, pero en la práctica la negó para establecer su dirección absoluta. El pensamiento Gonzalo en su desarrollo se convierte en un elemento unilateral, sin contradicción al cual los militantes estaban obligados a sujetarse incondicionalmente. Aquí se repite un poco las reglas validas en la jerarquía militar de cualquier ejército burgués, donde el soldado obedece a su superior sin “dudas ni murmuraciones. ¿Cómo un militante podía hacer lucha de dos líneas a quien había jurado fidelidad, lealtad y “sujeción plena e incondicional?”. Y a quien además consideraba, el más grande marxista viviente sobre la faz de la tierra y que era el creador de militantes a su “imagen y semejanza”. En este terreno, hacer lucha de dos líneas contra Gonzalo, era como si alguna alma en pena tuviera el coraje de enfrentarse a Dios, en cuya fantasía religiosa en el paraíso terrenal no hay derecho a la palabra, salvo para alabar al creador.

En octubre de 1993, Gonzalo y su pensamiento mostraran toda su esencia antimarxista, cuando desde prisión redactó y firmó las cartas de paz. Dichas cartas, redactadas y difundidas con la participación directa del gobierno y del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), mostraron todo el alcance contra-

revolucionario del método de la “sujeción” que implementó Gonzalo en la estructura del PCP. En 1993 Gonzalo escribió un texto titulado “Asumir y Combatir por la Nueva gran Definición”, en el que pretendió dar una justificación teórica a las cartas de paz. En dicho documento, considerado por sus seguidores como “magistral”, junto con justificar su cambio de posición y expresar sus temores de que algunos en el Partido rechazaran sus arreglos secretos con Alberto Fujimori, hizo uso de la “sujeción plena e incondicional” que había instituido en el partido para someter a esta organización y a la militancia a sus planes de capitulación. Ahí en ese texto dice; “ya esta la decisión hecha tomada y ejecutada....toca al Partido definir su posición públicamente. Sabemos que pueden rechazar nuestra posición y esto implicaría graves problemas para el Partido... se impondrá. Pueden aceptarla sin comprenderla a fondo, por sujeción eso seria bueno” (74).

La “sujeción incondicional” al jefe que Gonzalo aplicó como si se tratara de un método marxista, transgredió el sistema democrático colectivo (en el sentido revolucionario no en el falso colectivismo burgués) que debe primar en todo partido que se reclame del socialismo. La existencia de la incondicionalidad respecto al jefe es en si la negación misma del partido y ello conduce inevitablemente, como se ha visto en la experiencia peruana, a que una persona suplante la organización y todos los niveles de dirección. A partir de este fenómeno, contrario al principio leninista respecto a la organización proletaria, se crea al interior del Partido un sentido idealista y de dependencia política absoluta al jefe. La incondicionalidad en la estructura de dirección partidaria, crea un militante inculto, dogmático y sectario que podría ser capaz de grandes proezas en la lucha, pero que es incapaz de distinguir el día de la noche, o discernir correctamente por su propia cuenta en torno a un problema político simple. En esta situación el jefe se convierte en creador supremo y en el único que puede comprender y aplicar “creadoramente” la ciencia marxista y

no hay nadie como él para entender los fenómenos políticos sociales del país. Este intermediario entre el marxismo y los militantes deviene insustituible y eterno.

En política la “incondicionalidad” como práctica en el seno de un partido es servilismo, sin restricción alguna y ello conlleva inevitablemente a la tiranía del jefe. Como lo especifica la semántica el término significa ser adepto a una persona o idea. La incondicionalidad, aplicada como conducta partidaria, castra el espíritu crítico del militante, y es contrapuesta, al criterio científico y racional que debe tener todo aquel que se considere un militante comunista. Es cierto, así lo confirma la experiencia de la lucha social, en ciertas condiciones históricas políticas un jefe revolucionario se sitúa en los rangos más altos de la lucha social y se gana el aprecio, el cariño y la admiración de los militantes y el pueblo. Pero este fenómeno ligado a la lucha de clases y al papel del individuo en la lucha social, no puede servir para liquidar la estructura política de un partido revolucionario, cuya esencia es como decía Lenin, “una colectividad viva creadora”. O como decía Mao Tsetung que en el partido había que asegurar la “dirección colectiva e impedir que una sola persona tomara la conducción del trabajo” (75).

La práctica de exigir al militante fidelidad y “sujeción plena e incondicional” hacia el jefe, no proviene del marxismo. En ningún texto escrito por Carlos Marx, Federico Engels, Lenin y otros, se hace alusión a algo parecido a la “sujeción” del militante hacia los jefes del Partido. Los fundadores del socialismo científico, siempre fueron opuestos al culto a la autoridad del jefe. Ellos fueron contrarios a toda conducta y manifestación que ubicara a los dirigentes y jefes por encima del sistema de dirección colectiva de la organización política. Para Marx, el “gran hombre solo actúa en función de ciertos datos históricos” y declaraba en 1877 que si él y Engels, habían aceptado los cargos de dirección de la Liga de los Comunistas era bajo

la condición de que “fuese retirado de los estatutos todo lo que pudiera favorecer el culto de la autoridad” de los jefes. Para José Carlos Mariátegui, lo fundamental en la conducta del militante comunista es su compromiso con el proceso revolucionario, y respecto a esto anotaba en 1924, que: “Una vez puesta en marcha una revolución no se detiene. Tiene que llegar al termino de su trayectoria, si es necesario contra sus propios jefes de la primera hora” (76). Para Lenin la cuestión clave en toda organización revolucionaria era asumir el Partido en tanto expresión colectiva histórica de una vanguardia organizada. En la discusión que impulsó en el seno de los marxistas rusos para saber quién o quiénes podían ser militantes del Partido, él exige, no una sujeción a su jefatura, sino más bien una plena aceptación del programa, los estatutos y otras consideraciones que nada tenían que ver ni con la jefatura ni con ningún tipo de pensamiento guía (77). Así mismo, Lenin, se opuso a cualquier manifestación que hiciera de los jefes revolucionarios, personalidades inalcanzables para las masas y que transgredieran los términos organizativos de la organización política de los trabajadores. Durante toda su trayectoria al frente de los bolcheviques rusos, nunca intentó incluir su monumental obra teórica (su pensamiento marxista) en los estatutos o programa del partido.

No hubo mejores defensores de la dirección colectiva en las organizaciones de lucha por el socialismo que Marx y Engels. Se opusieron con tenacidad a todo culto a la persona y a los dirigentes. Marx en una carta a Guillermo Bloss (1877), se refiere a la popularidad que ellos habían alcanzado entre los obreros alemanes. Señala que tanto él como Engels, daban “un penique por la popularidad”. Para probar su repudio a toda expresión de culto al individuo anota que: “por repugnancia a todo culto a la personalidad yo, durante la existencia de la Internacional, nunca permitía que dieran a la publicidad los numerosos mensajes que llegan haciendo alusión a mis meritos...incluso nunca los respondía”. En la misma carta

Marx señala que la “afiliación, mía y de Engels, a la sociedad secreta de los comunistas se realizó sólo bajo la condición de que se eliminaría de los Estatutos todo lo que contribuía a la postración supersticiosa ante la autoridad...” (78). Por su parte Federico Engels, en una carta enviada a F. Mehring (1893) en la que comenta el contenido de un libro de filosofía escrito por este último (*La leyenda sobre Lessing*) en cuyo texto el autor (Mehring) hace referencia al enorme trabajo filosófico de su interlocutor. Engels, gentilmente rechaza los méritos que se le atribuye en dicha obra filosófica, y dice que si “algo tengo que objetar, es contra el que usted me atribuya más méritos de los que en realidad me pertenecen”. Para ello hace alusión a los 40 años que trabajó con Marx, y que a la muerte de este gran hombre, “a su compañero de menor talla’ (habla de él), “se le suele encomiar más méritos de lo que merece. Creo que este es mi caso. La historia terminará por poner las cosas en su sitio, pero para entonces ya me habré muerto tranquilamente y no sabré nada de nada” (79).

Para Lenin en el partido y en la revolución no había dirigentes ni jefes insustituibles. Reconocía que los procesos sociales “sacaban a la luz grandes hombres y hacían florecer talentos que, hasta entonces, parecían imposibles”. Pero adjuntaba que esos “grandes talentos al desaparecer”, eran reemplazados por otros grupos de hombres que continuaban su obra (80). Según el gran revolucionario Ruso, los jefes eran los más destacados cuadros del partido, y sobre ello dice: “los partidos políticos están dirigidos, por regla general, por grupos más o menos estables, integrados por las personas más prestigiosas, influyentes y expertas, elegidas para los cargos de mayor responsabilidad y llamadas jefes” (81). Pero el mismo tiempo Lenin afirma que “la iniciativa histórica de las masas” se sobrepone a la importancia de los jefes (82). Consideraba también que el Partido, antes de otras consideraciones, era una vanguardia colectiva, dirigida no por un jefe por muy brillante que este fuera, sino mas bien por “una docena de

jefes” de talento y “preparados profesionalmente” (83). Lenin se opuso a todo seguidísimo de carácter servil al interior del partido comunista, y anotaba que ello era contrapuesto al desarrollo del partido, señalando que: “El comunista que se vanagloriase de serlo, simplemente por haber recibido conclusiones ya establecidas, sin haber realizado un trabajo muy serio, difícil y grande, sin analizar los hechos frente a los que está obligado a adoptar una actitud crítica, sería un comunista lamentable”(84).

China que podría ser la experiencia más próxima al denominado “pensamiento Gonzalo” no registra algo semejante. En 1969, una etapa bastante posterior al triunfo de la revolución china, se instituyó el “pensamiento Mao Tsetung”, pero ello no sirvió para violar y liquidar el criterio marxista de la organización comunista. Para Mao, como señala Alain Bouc (85) el mito del jefe no existe. El se puso en contra de los “ideólogos de escritorio” y de los “doctrinarios de salón”. Mao nunca se separó ni dejó de escuchar a las masas populares. En la heroica larga marcha estuvo al frente de los soldados y de los campesinos. Ya en el poder, no se apoltronó en el palacio de gobierno, pasaba la mitad del tiempo en el campo, en las fábricas, y ahí donde el pueblo lo requería. Mao Tsetung, a quien tanto se le acusa de haber fomentado y practicado el culto de la personalidad, fue contrario a que los dirigentes o jefes violen la dirección colectiva. El Partido, decía él, era una “importante institución partidaria que garantiza la dirección colectiva” y donde se debía impedir que una sola persona acapeare la dirección y la gestión de los asuntos. Exigía que en todas las instancias del Partido, incluyendo el Comité Central, la célula de base y mismo en el seno del ejército rojo, se estableciera una “unidad real y no formal” entre la dirección y las bases, y que una sola persona no podía resolver los problemas importantes del partido”(86).

Mao es incontestablemente el más prestigioso ideólogo y re-

volucionario histórico de china. Es sobre todo el jefe que al frente de 700 millones de personas y del ejército rojo derrotó a las tropas invasoras de Japón y venció al ejército de diez millones de soldados de Chiang Kai-shek, jefe del Kuomintang, sostenido por los Estados Unidos y demás potencias occidentales. A través de la guerra revolucionaria liquidó tres mil años de opresión feudal y de servidumbre, y estableció la Republica Popular de China. El pueblo chino, liberado de una opresión milenaria, tuvo muchas razones para expresar su inmensa gratitud, incluso que le rindiera homenaje como jamás hombre alguno merito en China. Pero sin embargo, Mao fue opuesto a toda violación del sistema de dirección democrática del Partido Comunista de China. Fue agudo crítico de aquellos dirigentes que ven por encima del hombro a las masas, y que creen que han logrado acumular infaliblemente todo el saber humano. En una ocasión anotó, que un “cuadro debe quedarse como un hombre del pueblo”. Al triunfo de la revolución china, hizo prohibir que se celebre el aniversario de los jefes, y que se nombrara las plazas, calles, avenidas y fábricas con el nombre de los dirigentes del partido (87).

Mao no acepta que se use el poder para minimizar la sabiduría del pueblo y menos para despreciarlas y no tomarlas en cuenta. “Por alto que sea la posición que uno ocupe, hay que quedarse en el centro del pueblo como un trabajador ordinario. No hay que adoptar poses de grandes señores... Los dirigentes deben saber que sus conocimientos y sus actos no son mas que una pequeña gota de agua en el océano del conocimiento y del trabajo revolucionario... Un individuo no es mas que un pequeño tornillo en el proceso revolucionario. El marxismo-leninismo nos enseña: todos los triunfos vienen del poder colectivo de las masas, ningún individuo puede separarse de la colectividad... Si comprendemos realmente el papel que cumplen las masas y el individuo en la historia, y su relación mutua, entonces seremos mas modestos” (88). Según el testimonio que presenta Alain Bouc, la modestia de

los jefes y el respecto a las masas, fue una conducta que guió a Mao desde el comienzo de su carrera política hasta el fin de ella. Señala este escritor que si bien es cierto que Mao aceptó en cierta medida el uso político de su grandiosa personalidad durante la Revolución Cultural, lo hizo como medio táctico en la lucha contra la derecha china encabezada por Liu Shaoshi, Lin Piao, Teng Siao Ping y otros, que desde el interior del partido y del Estado complotaban para liquidar el proceso socialista. Incluso lanzó duras críticas sobre el uso exagerado del Libro Rojo, que como se sabe fue editado y promocionado por Lin Piao, ministro de defensa en esa época quien se había declarado heredero de Mao Tsetung.

INDICE

PROLOGO.

Capitulo Primero.

GUERRA CONTRARREVOLUCIONARIA.

- Los norteamericanos en la lucha antiguerrillera.
- Fuerzas Armadas y “excesos militares”.
- Exterminio de subversivos.
- Victimas de la guerra en cifras oficiales.
- La militarización del país.
- Belaúnde y el inicio de la guerra interna.
- El general Clemente Noel.
- La “Casa Rosada” y el cuartel Los Cabitos.
- Tortura y muerte en Ayacucho.
- Carlota Tello en la “Casa Rosada”.
- Acción contrainsurgente en el campo.
- Estrategia antisubversiva y terror.
- Telmo Hurtado en Accomarca.

Capitulo Segundo.

RONDAS DE LA MUERTE

- Dimensión y cantidad de rondas y ronderos.
- Origen de las rondas.
- Rondas y militares.
- El reclutamiento.
- Rondas y desinformación.
- Rondas y los partidos políticos.
- “Madre Coraje y grupos paramilitares urbanos.

Capitulo Tercero.

RELIGION Y GUERRA CONTRAINSURGENTE

- La iglesia en la eterna represión.
- El ejército de la iglesia.
- La pastoral de la guerra.
- Los curas “izquierdistas”.

-El padre Mariano, la CIA y los militares.

Capitulo Cuarto.

LA IZQUIERDA PERUANA DURANTE LA GUERRA INTERNA

- Primavera electoral de la izquierda.
- Represión contra el movimiento sindical y crisis de dirección.
- Procesos electorales y pobreza.
- Auge y bancarrota de Izquierda Unida (IU).
- Crisis en la izquierda y confrontación armada.
- Parlamentarismo y lucha anti guerrillera.
- Promoción de la miseria y "acción cívica".
- Izquierda y Organizaciones no Gubernamentales (ONG).
- ONG y guerra contrainsurgente.
- La izquierda y los crímenes organizados desde el Estado.
- Operación Mudanza I.
- Izquierda y el exterminio de prisioneros en Canto Grande.

Capitulo Quinto.

DOS DECADAS DE LUCHA ARMADA

- El camino inédito de la subversión.
 - Avance subversivo. Pánico en la orilla del Estado.
 - De Chuschi a Lima.
 - El voto dinamitero de Sendero Luminoso.
 - Ayacucho, del hambre a la lucha armada.
 - La flor de retama.
 - Desde Ayacucho a Lima.
 - El ejercito en Ayacucho.
 - Uchiza nunca más.
 - La guerrilla entre la represión y capitulación.
 - Feliciano y el arrepentimiento de la lucha armada.
 - La guerrilla y el nuevo poder.
 - Los comités populares, realidades o ficción.
 - Raucana.
 - Seguridad en el seno de las masas populares.

Capitulo Sexto.

MRTA, LUCHA ARMADA Y CAPITULACION

- El surgimiento del MRTA.
- El doble juego político del MRTA.
- El festín electoral de los tupacamaristas.
- La historia aprista de Víctor Polay.
- Polay el preferido de Haya de la Torre.

CAPITULO Séptimo.

GONZALO ENTRE EL MITO Y EL OPORTUNISMO

- Abimael Guzmán en Ayacucho.
- Contienda entre moscovitas y pro chino.
- Ravines, del Prado y Gonzalo.
- Velasquismo: revolución o contrarrevolución.
- La Unión Soviética en el Partido Comunista.
- Los Perestroikos peruanos.
- Los sueños internacionales de Gonzalo.
- El presidente Gonzalo y el presidente Avakian.

CAPITULO Octavo.

CRITICA AL "PENSAMIENTO GONZALO"

- La personalidad en la historia y en la lucha social.
- El pensamiento Gonzalo y el culto al jefe.
- Lin Piao y Gonzalo.
- Jefatura, pensamiento y sujeción.
- El conocimiento y la verdad absoluta.
- Autoridad partidaria y presunción.
- Verdad universal y pensamiento puro.
- Castración del espíritu crítico en el partido.
- El caudillo y la sujeción incondicional.
- Dirección absoluta y el fin de la contradicción.

BIBLIOGRAFIA Y NOTAS

Capitulo Primero.

GUERRA CONTRARREVOLUCIONARIA.

1. Defensa Nacional, Revista del Centro de Altos Estudios Militares, Lima, octubre de 1983.
General Jorge Chávez Quelopana. Doctrina Metodológica de un Plan Contrasubversivo a nivel Nacional. Publicado en Defensa Nacional, octubre de 1983, revista del Centro de Altos Estudios Militares (CAEM).
2. General Jorge Chávez Quelopana. Doctrina Metodológica de un Plan Contrasubversivo a nivel Nacional. Publicado en Defensa Nacional, octubre de 1983, revista del Centro de Altos Estudios Militares (CAEM).
3. Profesor Jorge Rodríguez Beruff. Un ensayo sobre la doctrina militar en el Perú, 1948-1968 -Lima: Mosca Azul, edición de 1983.
4. Conferencia de Inteligencia de Ejércitos Americanos (CIE), realizada en 1981.
5. Santa Fe II. Una estrategia para América Latina en la década de 1990.
6. El diario de Marka, lunes 3 de enero 1983.
7. Profesor Jorge Rodríguez Beruff. Los militares y el poder: Un ensayo sobre la doctrina militar en el Perú, 1948-1968 -Lima: Mosca Azul, edición de 1983.
8. Documento secreto de la Presidencia de la Republica, del 10 de julio de 1991.
9. Documento publicado por la revista Oiga del 29 de noviembre de 1993.
10. Denuncia formulada por la periodista Cecilia Valenzuela. Se publicó el domingo 14 de julio de 1991. Tomado de la revista Quehacer, julio-agosto 1991.
11. Carta de Benedicto Jiménez Bacca, publicado por el diario La Republica, diciembre 2000.
12. Entrevista publicada la revista Oiga, del 7 de de julio de 1986.
13. Diario El Comercio, 31 de julio de 1992.
14. Información aparecida el 9 de abril de 1997 en todos los medios de comunicación del Perú.
15. La Guerra de la Droga: Alain Labrousse. Ex-Director del Observatoire Géopolitique des Drogues. París –Francia.
16. Información tomada del libro: Biografía No autorizada de Álvaro Uribe Vélez. El Señor de las Sombras. Autores; Joseph Contreras y Fernando Garavito, Colombia 2002.
17. Michel Chossudovsky, Global Research, abril del 2004. Droga y CIA en Afganistán.
18. Las fuentes son: The Peru Report, junio 1992, Perú en Números 1993, diarios y revistas del Perú- Informe Perú: Políticas agrarias para la eficiencia

- económica. Consecuencias de la producción de coca. Banco Mundial, abril 1992. Seguridad Democrática integral. Armas para la paz. Publicado por Instituto de Defensa Legal, Santiago Pedraglio, Lima, 1990.
19. Diario Expreso 19 de noviembre de 1989. Tomado del libro Seguridad Democrática integral. Armas para la paz. Publicado por Instituto de Defensa Legal, Santiago Pedraglio, Lima, 1990.
 20. Evaristo CASTILLO ASTE, Mayor del Ejército de Perú. Entrevista de Pepe Mejía, publicada en El Mundo (España), 5 de mayo de 1995.
 21. Las Fuentes: The Internacional Institute for Strategic studies (The Military Balance 1995-1996. Publicación de la Oxford University. L'Année stratégique 1990. Les Equilibres Militaires 1989-1990. Las cifras para Perú se basan en estadísticas oficiales, así como en declaraciones de altos mandos militares de las fuerzas armadas.
 22. Comisión Especial de Investigación y Estudio sobre la Violencia y Alternativas de Pacificación, Senado de la Republica enero de 1992.
 23. Fernando Olivera, declaraciones al diario La República, 31 de agosto 1984. En la época era secretario general de la Fiscalía de la Nación.
 24. Comisión Especial de Investigación y Estudio sobre la Violencia y Alternativas de Pacificación, Senado de la Republica enero de 1992.
 25. Directiva secreta de las fuerzas armadas en 1983. Fueron reveladas en el programa de televisión "En Persona" de Cesar Hildebrandt, en 1991.
 26. Claude C. Sturgill, Profesor del Air War College, Air University de la Base Maxwell y del United States Army's Military History Institute, 1983.
 27. Declaraciones del general Luis Cisneros Vizquerria. Revista Quehacer, Nº 20 de enero 1983.
 28. Declaraciones del general Hugo Martínez Aloja. Diario La República, 24 de noviembre 1991.
 29. Declaraciones del general Clemente Noel. Revista Oiga, 19 de septiembre 1983.
 30. Enrique Bernales, declaraciones al diario La República, Lima 25 de junio 1991.
 31. Paramilitarismo y control social. Treinta años de terrorismo de Estado en Colombia, 7 de marzo 2007.
 32. Documento secreto publicado por el diario Marka del 15 de abril de 1983.
 33. Documento secreto de las fuerzas armadas, octubre de 1989, publicado por la revista Oiga del 12 de julio de 1993.
 34. General Carlos Arnaldo Briceño Zevallos, 4 de enero 1983, publicado por la prensa de Lima del 5 de enero 1983.
 35. Comisión de la Verdad y Reconciliación, informe final, del 28 de agosto 2003.
 36. Idem.
 37. Declaraciones del presidente Alejandro Toledo, publicado por el diario Expreso, 22 de noviembre 2003.

38. Informe sobre Derechos Humanos en Perú 1993. Departamento de Estado de los Estados Unidos, febrero de 1994.
39. Crímenes de la derecha peruana que el pueblo nunca olvidará. Artículo de Cesar Romero, El Diario Internacional, miércoles 4 de junio de 2008.
40. Censo por la Paz 2000, del Programa de Apoyo al Repoblamiento (PAR).
41. El Diario de Marka, 28/12/82.
42. Clemente Noel, Ayacucho, Testimonio de un soldado, 1989.
43. Elecciones, no Guerra Popular, si, Comité Central del Partido Comunista del Perú, Lima 1990.
44. Clemente Noel, Ayacucho, Testimonio de un soldado, 1989.
45. El Diario Marka, 28 de diciembre de 1982.
46. Entrevista en Oiga, 30 de mayo 1988.
47. Noel acusa. Entrevista en Oiga, 30 de mayo 1988.
48. El Diario, 1° de febrero de 1983.
49. Revista Causachun Perú, 23 de febrero 1983.
50. Mario Vargas Llosa. Conclusión sobre Uchuraccay. Marzo 1984.
51. Muerte en el Pentagonito. Ricardo Uceda, Lima, 2004.
52. Clemente Noel, Ayacucho, Testimonio de un soldado, 1989.
53. Muerte en el Pentagonito. Ricardo Uceda, Lima, 2004.
54. General Clemente Noel. Declaraciones para la revista Oiga, Lima 19 de septiembre de 1983. Entrevista realizada por Fernando Flores Araoz.
55. General Noel avaló guerra sucia, Mónica Vecco, Unidad de Investigación, diario La República, 23 de enero 1995.
56. Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe, agosto de 2003. Declaración testimonial de Esteban Canchari Cacñahuaray.
57. Idem.
58. Idem.
59. Muerte en el Pentagonito. Ricardo Uceda, Lima, 2004.
60. El testimonio de Jesús Sosa Saavedra ha sido tomado del libro "Muerte en el Pentagonito, 2004. Autor Ricardo Uceda.
61. Idem.
62. El Comercio. Lima 7 de Marzo de 2006.
63. Libro "Muerte en el Pentagonito. Ricardo Uceda, Lima 2004
64. Declaraciones de Gloria Cano. Aprodeh, 15 de junio del 2005.
65. Ana Véliz y Elías Navarro. Diario La Republica, 4 de junio del 2008.
66. General Noel avaló guerra sucia, Mónica Vecco, Unidad de Investigación, diario La República, 23 de enero 1995.
67. La República, 23 de enero 1995.
68. France 3. TV. Testimonio de Edgar Vivanco.
69. Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe agosto 2003.
70. Muerte en el Pentagonito. Ricardo Uceda, Lima 2004.
71. Idem.
72. Profesor Jorge Rodríguez Beruff. Un ensayo sobre la doctrina militar en el Perú, 1948-1968 -Lima: Mosca Azul, edición de 1983.

73. Comisión de la Verdad y reconciliación, informe final, agosto de 2003.
74. Perú Hoy: En el oscuro sendero de la guerra. Instituto de Defensa Legal, enero de 1992.
75. General Adrián Huamán Centeno, declaraciones para el diario La República, 20 de febrero 1989.
76. Cien años del Ejército Peruano, Víctor Villanueva, Lima 1969.
77. Las Guerrillas del Perú, de Rogger Mercado, Lima, 1967.
78. Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe 2004.
79. Confesiones de un contrainsurgente, Oswaldo Carpio y Zenaida Mateos, Revista Quehacer número 72, Lima-Perú, julio-agosto 1991.
80. Roberto Clemente Noel Moral, discurso de despedida de Ayacucho, diciembre 1983.
81. Confesiones de un contrainsurgente, Oswaldo Carpio y Zenaida Mateos, Revista Quehacer número 72, Lima-Perú, julio-agosto 1991.
82. Muerte en el Pentagonito. Ricardo Uceda, Lima 2004.
83. Sonia Muñoz. Testimonio publicado en la Revista SI, Lima 13 de junio 1988.
84. CVR), informe final, agosto del 2003.
85. Ídem.

(*). Conferencia de Inteligencia de Ejércitos Americanos (CIE) es un evento que se realiza en coordinación con la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA) que desde 1960 propician los Estados Unidos y que se realiza cada dos años en diferentes países de América latina. Según los militares americanos este es un foro donde los Comandantes de los Ejércitos Americanos deliberan asuntos de mutuo interés, y sirve para promover unidad, mejorar la seguridad del hemisferio y fortalecer lazos de amistad interamericana. La primera conferencia se realizó el 12 de agosto de 1960 en Panamá patrocinada por el ejército de los Estados Unidos.

(**). Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Se constituye mediante el Decreto Supremo N° 065-2001 PCM del 4 de Junio del 2001 Exime de responsabilidades a los gobiernos de Fernando Belaúnde, Alan García Pérez y Alberto Fujimori. Cuando culpa a los subversivos de las violaciones de los derechos humanos, lo hace para exculpar a las fuerzas armadas y al Estado.

(***). Relación de periodistas y un guía asesinados en Uchuraccy, el 26 de enero 1983.

Eduardo De la Piniella Palao y Pedro Sánchez Gaviria (El Diario de Marka), Willy Retto Torres y Jorge Mendívil Trelles (El Observador), Jorge Sedano Falcón (La República), Amador García Yanque (semanario Oiga), Félix Gavilán Huamán (corresponsal en Ayacucho de El Diario de Marka), Octavio Infante García, y el guía Juan Argumedo García, y el comunero Severino

Morales Ccente, quien se opuso al asesinato de este último.

(****) Jesús Sosa Saavedra, sub oficial del ejército y ex miembro del Servicio de Inteligencia Militar. Su carrera de miembro de Inteligencia se inició durante el gobierno de Fernando Belaúnde (1980-1985). Desde 1983 hasta 1990 estuvo destacado en la “Casa Rosada” y participó en cientos secuestros, torturas y asesinatos. Con el gobierno de Alan García Pérez (1985-1990) siguió su carrera criminal en el seno del ejército y grupos paramilitares. En el periodo del régimen de Alberto Fujimori, Sosa se integró al grupo “Colina”, y desde ahí participó en decenas crímenes clandestinos de estudiantes, trabajadores, profesores, campesinos y otros. Jesús Sosa fue entrevistado para el libro “Muerte en el Pentagonito”, del periodista Ricardo Uceda publicado en 2004.

(*****) Acción Popular (AP) es uno de los grandes partidos políticos de la burguesía peruana. Su fundador y líder fue Fernando Belaúnde Terry dos veces presidente del Perú. Su primer gobierno fue en el periodo 1963-1968, y su mandato fue interrumpido por un golpe militar encabezado por el general Juan Velasco Alvarado. Su segunda administración transcurrió entre 1980 y 1985, y en el primer año de su gobierno se inició la lucha armada del Partido Comunista del Perú (PCP).

-La iglesia en Ayacucho. Desde el inicio del conflicto armado se unió a las fuerzas militares. En 1983, el general Clemente Noel declaró para la revista Oiga que desde que “asumió el mando de las operaciones en Ayacucho hemos empezado a trabajar de la mano con la iglesia católica”. (Declaraciones del general Clemente Noel, Oiga, 19 de septiembre 1983).

Oficio de la presidencia de la Republica del 25 de julio de 1991, en la que Fujimori se dirige al ministro de defensa para pedirle que premie al grupo de militares, que según el texto estaban “prestando eficiente servicio en materia de seguridad nacional y defensa de los altos valores de la democracia”. Los militares premiados eran los responsables de una centena de secuestros y asesinatos, entre estos la matanza en Barrios Altos (9 personas adultas y un niño) el secuestro y ejecución clandestina de 9 estudiante y un profesor universitario (La Cantuta), y el asesinato de 34 estudiantes en Huancayo. El grupo de premiados eran los integrantes del grupo Colina que dirigía Vladimiro Montesinos desde el SIN.

Capitulo Segundo.

RONDAS DE LA MUERTE

1. La información sobre cantidad de rondas y ronderos proviene del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Publicado por la Comisión de

- la Verdad y Reconciliación, informe final 2003.
2. Comisión de la Verdad y reconciliación (CVR), agosto 2003.
 3. Armas para los ronderos. La Republica, 16 de junio de 1991.
 4. Declaraciones de Alberto Fujimori, en 1992.
 5. Center for Hemispheric Defense Studies, Research and Education in Defense and Security Studies Militarización- Desmilitarización de la Seguridad Pública en el Perú. Brasilia Brasil, agosto de 2002.
 6. Fuente: Ministerio de Defensa y Comisión Especial del Senado. Informe 1992. Declaraciones del general Nicolás Hermosa Ríos, Comandante General de las Fuerzas Armadas. Publicado en Interpress Service del 10/12/93. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Aprodeh 25/03/94. Las cifras para el 1995 fueron publicadas por el diario El Mundo del 10 de agosto 1995. Comando Conjunto de las FFAA-Comisión de la Verdad y Reconciliación, informe 2003.
 7. Reflexiones sobre rondas campesinas, protesta rural y nuevos movimientos sociales, Orin Starn, Lima-Perú, abril de 1991.
 8. Mandamiento de los Ronderos, San Miguel, 28 de septiembre de 1984.
 9. Recordando a don Juan Huamán. La vida por las rondas. Publicado en Patria Roja, órgano del Comité Central del Partido Comunista del Perú (Patria Roja), marzo de 1990.
 10. Reflexiones sobre rondas campesinas, protesta rural y nuevos movimientos sociales, Orin Starn, Lima-Perú, 1991.
 11. Federación de Rondas campesinas, Cajamarca, agosto 1968.
 12. Perú Hoy. Informe: "En el oscuro sendero de la guerra". Publicado por la ONG, Instituto de Defensa Legal, enero de 1992.
 13. Bases de Discusión. Clases sociales en la Revolución. Partido Comunista del Perú (PCP), Lima 1988.
 14. Manual para combatir a la Resistencia 1982. Documento secreto del Pentágono norteamericano. G.H. Decker, general del ejercito USA, y R.V. Lee, mayor general del ejercito USA.
 15. Revista Ideele, diciembre de 1991. Esta revista es publicada por el Instituto de Defensa Legal, una ONG ligada a la izquierda legal del Perú.
 16. Comisión de la Verdad y Reconciliación, informe del 2003.
 17. Comité de autodefensa, informe de la Comisión de Defensa y reconciliación, agosto 2003.
 18. Diario Expreso, Lima 3 de abril 1989.
 19. Rondero Preso, Revista Caretas del 4 de marzo de 1991.
 20. Diario Expreso, 15 de junio 1993.
 21. General Manuel Delgado Rojas, jefe político militar de la región del Centro, declaraciones a la revista SI, 23 de diciembre de 1990.
 22. Revista Ideele, es una publicación de la ONG d Instituto de Defensa Legal, diciembre 1992.
 23. Senado de la República, Violencia y pacificación 1991, enero de 1992.
 24. Diario Expreso, 2 de febrero de 1992.

25. Jugando a las rondas con los militares, artículo del diario La Republica, 19 de diciembre de 1991.
26. Secuestro en Chuschi, artículo de María Alvarado. Publicado en el diario La Republica del 7 de abril 1991.
27. Relato de la Comisión de la Verdad y reconciliación, informe 2003.
28. Revista Si, 4 de julio de 1988. Artículo de Magno Sosa.
29. La Republica, 26 de junio de 1992.
30. Diario La Republica, Francisco Reyes, de la Unidad de Investigación, 26 de junio de 1992.
31. Declaraciones de José Antonio Martín Tallin, publicado en el diario La Republica del 22 de octubre de 1990.
32. Senado de la Republica del Perú, Comisión Especial de Investigación y Estudio sobre la violencia y alternativas de pacificación. Violencia y Pacificación en 1991. Publicado en enero de 1992.
33. Perú Hoy, en el Oscuro Sendero de la guerra. Editado por el instituto de defensa legal, enero de 1992.
34. Lewis Taylor 1997, citado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), agosto 2003.
35. Revista Cambio, febrero de 1992. Esta publicación era vocero del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).
36. Ronda Fatal, Otra masacre en Uchuraccay: ronderos contra ronderos. Revista Si, 30 de septiembre de 1990.
37. Izquierda Unida (IU). Tesis Política, primer Congreso Nacional, setiembre 1988.
38. Ultima Hora, 24 de junio de 1991.
39. Bernard Aranson, secretario de Estado Adjunto para asuntos Interamericanos de los Estados Unidos, discurso en el Congreso de los Estados Unidos, 13 de marzo de 1992.
40. Entrevista al general Sinesio Jarama, revista Quehacer, 1991.
41. Enrique Obando, investigador de CEPEI, Entrevista de Mariella Balbi, La Republica 16 de febrero de 1992.
42. Expreso, Los frutos de la experiencia: rondas y brigadas, 12 de junio 1992.
43. Comité de autodefensa-CAD-Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
44. Expreso, 8 de junio de 1992.
45. Revista Caretas, 17 de febrero de 1992.
46. Perú en Números 1991. Richard Webb y Graciela Fernández Baca.
47. Declaraciones de Rolando Ames, senador y dirigente del Movimiento de Afirmación Socialista (MAS). La Republica, 22 de diciembre de 1991.
48. El Nacional, 22 de junio de 1992.
49. Ídem.
50. Enrique Bernaldes, declaraciones en el diario Expreso, 4 de marzo de 1992.

51. Henry Pease, texto de campaña electoral: "A los luchadores por la Vida y por la Paz", marzo de 1990.
52. Entrevista a María Elena Moyano. Diario La Republica, 22 de septiembre de 1991.
53. Revista Oiga, 2 de marzo de 1992.
54. Revista Caretas, 27 de febrero de 1992.
55. Caretas, 24 de febrero de 1992.
56. Caretas, 17 de febrero de 1992.
57. Fuente: Diario La República Domingo 18 de abril de 1993, y del 4 de enero de 1995. Comisión de la Verdad y Reconciliación, informe final 2003. Entrevista a Walter Ortega, Ex Secretario general de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán. Estudios en Profundidad (16 de mayo 2002). Entrevista a Charles Jaime Lastra Domínguez en Huaycán . Estudios en Profundidad.

Capitulo Tercero.

RELIGION Y GUERRA CONTRAINSURGENTE

1. Declaraciones de Luigi Dossena, Nuncio Apostólico del Vaticano y Decano del cuerpo diplomático. Diario La Nación 28 de julio de 1993.
2. Bartolomé de las Casas. Nació en Sevilla en noviembre de 1484 y murió el 17 de julio de 1566 a la edad de 82 años. Fue uno de los principales defensores de los indígenas en el siglo XVI.
3. Carta de Bartolomé de las Casas. Carta al Rey de España. Texto original, publicado en Obra Indigenista, publicada en 1552.
4. José Carlos Mariategui. El factor religioso. La Religión en el Tahuantinsuyo. Lima 1928. 7 Ensayos.
5. Ídem.
6. La Mita durante el imperio Incaico, era un sistema de producción comunal tributario que hacía la población a favor del Estado Inca. Mediante la Mita, el campesino del incanato, de 18 años hasta cerca de los 50, estaba obligado a cultivar las tierras del Inca, o también a realizar trabajos de carreteras, servir en el ejército Inca y hacer labores domésticas en las familias reales. Este trabajo se hacía por turnos, y a diferencia de la "Mita de la Colonia", no liquidaba físicamente al ciudadano del imperio. La Mita incaica, se transformó durante el sistema colonial, en la base de la explotación minera y en el sustento de todas las riquezas que se trasladaban a la metrópolis imperialista en España.
7. Carmen Bernand, "De colonialismos e imperios: respuesta a Annick Lempérière", Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Número 4 – 2004.
8. La Rebelión de Tupac Amaru; Boleslao Lewin, Tomo I. 1957, Buenos Aires -Argentina.
9. Carta pastoral del Obispo de Argentina, 26 de junio de 1781. Publicado por Boleslao Lewin, La Rebelión de Tupac Amaru, Tomo 1. Buenos Aires

- 1957.
10. Declaraciones del cardenal Juan Landazuri, publicado en El Comercio, 8 de septiembre 1980.
 11. Declaraciones en el Diario, Ojo, 30 de octubre de 1980.
 12. Caretas, 14 de abril de 1994, publicado en el libro de Magno Sosa Rojas, Cipriano: el teólogo de Fujimori, 2001.
 13. Declaraciones para el diario Expreso, 24 de julio 1992.
 14. Declaraciones para la revista SI, agosto de 1992.
 15. Tomado textualmente del artículo: En Perú la religión es peor que el opio. Luis Arce Borja, 5 e agosto 2004.
 16. Ricardo Durand, obispo del Callao, 28 de julio 1993.
 17. Te Deum por el 162 aniversario de la independencia del Perú, realizada en la Catedral de Lima. Homilía del sacerdote José Lobatón, 29 de julio de 1983.
 18. Declaraciones al diario La Republica, 12 de julio de 1992.
 19. Consejo permanente del Episcopado Peruano, comunicado publico, Lima 16 de junio de 1992.
 20. Declaraciones del obispo Eduardo Vásquez Tarazona. La Republica 31 de julio de 1994.
 21. Declaraciones de Luciano Metzinger, ex secretario del Episcopado peruano. Entrevista de Hernando Calvo Ospina y Katlijn Declerq, Perú 1991, para el libro: Perú los Senderos posibles.
 22. (Fuente Perú en Números 1994 y 1996. Anuario Estadístico. Richar Web y Graciela Fernández Baca.
 23. Discurso del papa Juan Pablo II en Ayacucho. 1985.
 24. Mensaje de despedida del Papa, Juan Pablo II. Lima 16 de mayo de 1988.
 25. Publicado en Oiga 16 de abril de 1990.
 26. Declaraciones al Diario La Crónica, 06/09/1982.
 27. Declaraciones al diario La Prensa, 17/07/1983.
 28. Declaraciones formuladas el 9 de junio de 1986, publicado en Violencia política en el Perú 1980-1988. Desco.
 29. Cardenal Juan Landazuri, declaraciones al diario Expreso, Lima, 30 de julio de 1992.
 30. Declaraciones del Arzobispo de Lima, Augusto Vargas Alzadora. Diario Expreso, 25 de septiembre 1992.
 31. Diario El Peruano, 30 de julio de 1984.
 32. Entrevista a Luciano Metzinger, presidente de la Comisión Episcopal de Acción Socia. Revista Ayllu, 30 de octubre de 1991.
 33. Hubert Lanssiers, sacerdote defensor de los derechos humanos. Diario la Republica, 29 de mayo de 1994.
 34. Declaraciones al diario El Comercio 27 de marzo 2007.
 35. Hubert Lanssiers, sacerdote defensor de los derechos humanos. Diario la Republica, 29 de mayo de 1994.

36. Declaraciones al diario La Republica, 29 de mayo 1994.
37. "Hubert sin miedo". Entrevista de Mariela Balbi. Mira. Revista dominical de el diario El Sol, 11 de agosto de 1996.
38. Declaraciones del general Luis Cisneros Vizquerra, revista Quehacer número 20 de enero 1983.
39. Noel Niega cargos y contra ataca. Fernando Flores Araos. Revista Oiga 19 de septiembre de 1983.
40. Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe final 2003.
41. Declaraciones al diario El Peruano, 28.4.93.
42. Informe de la CVR, informe de 2003.
43. Declaraciones de Luis Cipriano, la mayoría de los diarios de Lima, 14 de abril del 2001.
44. Declaraciones al Diario Expreso, del 29 de julio de 1993.
45. La voz de Monseñor Duran, obispo del Callao. Entrevista publicada en el "Suplemento Especial; 28 de julio de 1993.
46. Declaraciones para el Suplemento especial, 7 de junio 1994.
47. Entrevista del diario La Republica, 13 de enero de 1992.
48. Declaraciones en septiembre de 1991, durante una misa en la Catedral de Lima. Publicado en Caretas, septiembre 1991.
49. El Comercio 29 de agosto 1986.
50. Diario Expreso, 29 de octubre de 1986.
51. Información de la revista Caretas, edición número 1142.
52. Reportaje de Gustavo Gorriti, revista Caretas 14 de enero 1991.

Capitulo Cuarto.

LA IZQUIERDA PERUANA DURANTE LA GUERRA INTERNA

1. Partido Comunista del Perú (Patria Roja. Comunicado publico, 27 de julio del 2000;
2. Séptima Conferencia Nacional del Partido Comunista del Perú (Patria Roja), 27 de julio del 1972.
3. Izquierda Unida (IU) frente a las acciones de Sendero. Publicado en Senda Proletaria, órgano central del Partido Comunista del Perú (marxista-leninista), agosto de 1982.
4. Periódico Trinchera Roja, órgano del Comité Regional de Lima (Partido Comunista Revolucionario PCR, 25 de noviembre de 1977.
5. Por la Unidad Política y orgánica de los partidos de UDP (Unidad Democrática Popular), Vanguardia Revolucionaria (VR), Comisión Política, 1° de octubre de 1981.
6. Javier Iguíñez. Política Industrial Peruana 1970-1980. Editado por el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), 1984.
7. Artículo de Berthuel Alvarado Mujica, Lima 1985.
8. Informe preparado por Rafael Hidalgo. Revista Caretas, 30 de abril de

- 1998.
9. Informa sobre las huelgas. Organización de Estados Americanos (OEA), 6 de febrero 1998.
 10. Juan José Gorriti. Declaraciones a la revista Caretas, 30 de abril 1998.
 11. Declaraciones al diario La Republica, 12 de abril 1991.
 12. César Hildebrandt. Diario Liberación, 18 de febrero 2001.
 13. Alfonso Barrantes Lingán. Entrevista de la revista Equis X, septiembre 1980.
 14. Tesis Políticas de Izquierda Unida. Primer Congreso Nacional. Estrategia y objetivos tácticos. Setiembre 1988.
 15. Almanaque Estadístico. Perú en Números 1990. Richard Web y Graciela Fernández Baca.
 16. O'Brian y Sierra-Socialismo y Participación-Forum Solidaridad Perú 1994.
 17. DGE. Informe de la situación ocupacional. Ministerio de Trabajo. Informe estadístico 1982, 1983 y 1984.
 18. Actualidad Económica. Numero Especial de 1985-Almanaque Estadístico. Perú en Números 1990. Richard Web y Graciela Fernández Baca.
 19. Iván Reyes Ato. El desastroso gobierno de Alan García: 1985-1990. Mayo 2006.
 20. Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo 1990-Autopsia de un fracaso, Patricio Ricketts Rey de Castro. Expreso 21 de julio 1991.
 21. O'Brian y Sierra. Socialismo y Participación. Forum Solidaridad Perú, agosto 1994.
 22. Augusto Antionoli, ministro de trabajo. Publicado en Gestión 30 de marzo 1995.
 23. Perú Situación Económica y Social Perspectivas. Perusispers, Gestipolis 2002.
 24. Alberto Moreno. Carta por el X aniversario de Izquierda Unida. Periódico Patria Roja 1990.
 25. Instituto de Defensa Legal (IDL). La guerra interna. Diagnostico de la situación actual de violencia política. Diario Expreso, 2 de marzo 1991.
 26. Henry Pease. Diario La Republica, 13 de noviembre 1989.
 27. Henry Pease. Diario La Republica, 30 de diciembre 1990.
 28. Patria Roja, comunicado de julio de 1990.
 29. Henry Pease. Diez años de lucha con el pueblo. Una visión autocrítica. Noviembre 1990.
 30. Primera Conferencia Política Nacional del PUM. Setiembre de 1991. Acuerdos y Resoluciones publicado por "El Mariateguista", numero 28.
 31. Patria Roja. XII Pleno del Comité Central del Partido Comunista del Perú, agosto 1990.
 32. Patria Roja. "Cambio 90: posibilidad y perspectivas". Julio-agosto 1990.
 33. Hugo Blanco, comunicado público, 2006.
 34. Comité Central del Partido Comunista del Perú (Patria Roja), mayo del

2006.

35. Renán Raffo Muñoz. Secretario General del Partido Comunista del Perú. 15 de mayo 2006.
36. Diario Marka, editorial del 12 de marzo 1982.
37. Sinesio López. Acuerdo Nacional para realizar una transición seria y pacificar el país. Revista Ideele, agosto 1992.
38. Convergencia Socialista. Primer Encuentro Nacional. En defensa de la paz, la democracia y los salarios. Lima 15 de diciembre de 1988. Firmado por Enrique Bernales, Edmundo Murrugarra, Francisco Guerra García, Alfredo Filomeno y otros.
39. Alfonso Barrantes Lingán. Discurso en CADE 84. Noviembre de 1984. Publicado en el libro: Barrantes sus propias palabras. Mosca Azul editores, Lima 1985.
40. Plataforma de Emergencia de Izquierda Unida (IU). Política de pacificación, marzo 1990.
41. Manual del ejército. Guerra no Convencional. Contra subversión. Ministerio de Defensa del Ejército Peruano, 1990. Publicado por Caretas, 23 de setiembre 1991.
42. Humberto Paredes Vargas. Como se organiza. Revista Caretas, julio 1992.
43. Comas de organiza. Revista Caretas, 30 de julio 1992.
44. Javier Diez Canseco, entrevista de Santiago Pedraglio, Revista SI, 24 de febrero 1992.
45. Rondas campesinas versus terrorismo. Diario La Republica, 29 de marzo 1989.
46. Instituto de Defensa Legal (IDL). En el oscuro sendero de la guerra, 1992.
47. Rolando Ames, declaraciones al diario La Republica, 10 de diciembre 1990.
48. Enrique Bernales Ballesteros. Presidente de la Comisión de Pacificación del Senado 1991. Publicado en La Republica, 25 de junio 1991.
49. Manuel Dammert. Declaraciones a Ultima Hora, 19 de febrero 1992.
50. Entrevista del diario La Republica, 16 de marzo 1992.
51. Declaraciones al diario La Republica, 26 de julio 1992.
52. Diario Expreso, 13 de marzo 1992.
53. Diario Expreso, 22 de marzo 1992.
54. Diario La República, 18 de febrero 1992.
55. Henry Pease. Un año de gobierno. La esperanza puesta a prueba. Revista Quehacer, junio-julio 1986.
56. Resumen Semanal, año XIV, número 641, octubre 1991.
57. Las Guerrillas en el Perú y su represión. Ministerio de Guerra. Departamento de relaciones publicas del Ejército. Lima 1966.
58. Manual para combatir la Resistencia o fuerzas irregulares. Documento secreto del Pentágono. Estados Unidos, 1982. G.H. Decker, general en jefe

- USA, y el mayor R.V. Lee, mayor general del ejército USA.
59. Pronaa. Comedores Populares. Declaración de Alberto Fujimori, 23 de octubre 2003.
 60. Revista Ideele, numero 30. Octubre 1991.
 61. Izquierda Unida (IU). Plataforma de emergencia, marzo 1990.
 62. Cambio 90. Lineamientos del Plan de Gobierno 1990.
 63. Perú en Números 1991. Richard Webb y Graciela Fernández Baca-Mario Padrón, Desco 1982.
 64. Agustín Haya de la Torre, director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Entrevista de Mariella Balbi, El Comercio 11 de setiembre 2006.
 65. Informe Mundial sobre desarrollo Humano 1993. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 1993.
 66. Alexander Watson, embajador de los Estados Unidos en Perú. Enero de 1994.
 67. Comisión organizadora de la Asociación de Promotores Sociales del Perú. "Los organismos no gubernamentales", Lima, 1993.
 68. James Petras. "Las ONG no son sino empresas de la pobreza. Entrevista de Juan Pablo Palladito. Setiembre 2006.
 69. Las personas y las organizaciones que ellos se dan. Informe de la ONU (edición en francés 1990).
 70. Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), informe final, agosto 2003.
 71. Rondas Campesinas. ¿Armas para la paz?. Revista Ideele, julio de 1991.
 72. Ante el horror sin límites, ¿hay salida?. Revista Ideele, agosto 1992.
 73. Jaime Urrutia C. ¿Existe una estrategia antisubversiva?. Ideele, agosto 1992.
 74. Escuela en tiempo de Guerra. Publicado en abril 1992.
 75. Diario Expreso, 3 de noviembre 1992.
 76. Gloria Helfer. Asumo el poder como un servicio. Entrevista de Mariella Balbi, revista Viva, diciembre 1990.
 77. Diario La Republica, 20 de enero 1994.
 78. Mónica Vecco. Diario La Republica, 3 de julio 1993.
 79. El Comercio, 17 de octubre 1992.
 80. Diario La Republica, mayo 1991.
 81. Pedro Pablo Checa. Entrevista de José Mejía (España). Publicado en la revista Si, diciembre de 1987.
 82. Testimonio del general Máximo Martínez Lira, director de la Guardia Republicana, Lima 1986.
 83. Periodista Augusto Zimmerman. Testimonio, 1986.
 84. Rolando Ames, declaraciones para la revista SI, diciembre de 1987.
 85. Revista Quehacer, número 41, junio-julio 1986. Director Marcial Rubio.
 86. Idem.
 87. Comisión de la Verdad y Reconciliación, informe final, agosto 2003.

88. Enrique Bernales, revista Oiga 1989.
89. Comisión de la Violencia y Pacificación 1991. Senado de la Republica del Perú, enero 1992.
90. Carlos Tapia. Revista Oiga, 21 de setiembre 1992.
91. Comisión Interamericana de Derechos humanos. Audiencia, 12 de noviembre 2001. Testimonio de la matanza en Canto Grande en 1992.
92. Testimonio tomado del libro "Ojo por ojo", del periodista Umberto Jara, Lima 2004.
93. Ídem.
94. Resumen Semanal, Lima 8-14 de mayo de 1992.
95. Declaraciones de Pilar Coll. Coordinadora de los Derechos Humanos. Revista SI, 11 de mayo 1992.
96. Publicado en El Comercio, 23 de febrero 1992.
97. Abandono y mano dura: la lógica autoritaria. Marco Del Maestro. Ideele, junio de 1992.
98. Revista SI, del 11 al 17 de mayo de 1992. Director Ricardo Uceda.
99. Mónica Feria: Yo conozco el infierno, he venido del infierno. Testimonio, publicado en el 2007.
100. Lo de los penales: Si pudo ser de otra manera. Ideele, junio de 1992. Es una revista que edita la ONG, Instituto de Defensa Legal.

(*). Entre los firmantes aparecen, el APRA, el PPC, el Movimiento de Afirmación Socialista (MAS), Rolando Ames, Carlos Tapia (Izquierda Socialista), Gustavo Mohome (Acción Socialista), Manuel Dammert (Partido del Socialismo Mariateguista), Edmundo Murrugarra (Convergencia Socialista) Julio Castro Gómez (Partido Mariateguista Revolucionario), Guillermo Herrera (Partido Comunista Peruano). Diario La Republica, diciembre 1991.

(**). Izquierda Unida (IU) fue fundada en 1980, y en sus inicios estaba integrada por el Partido Comunista Peruano, pro Soviético, Unidad Democrática Popular (UDP), Partido Comunista del Perú (Patria Roja), Unión de Izquierda Revolucionaria (UNIR), Partido Comunista Revolucionario (PCR), Partido Socialista Revolucionario (PSR-ML), Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (Focep) y el Partido Revolucionario (Trinchera Roja).

(***). Estos votos se repartieron de la siguiente manera: El Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (Focep), liderado por Hugo Blanco logró 433,413 votos (12.3% del total del electorado): el Partido Socialista Revolucionario (PSR, liderado por el general Leonidas Rodríguez logró 232,529 votos (6.6% del total del electorado): el Partido Comunista Peruano pro Soviético obtuvo 207,612 votos (5.9% del total del electorado): la Unidad Democrática Popular (UDP) consiguió 169,741 votos (4.5% del total del electorado). Fuente: Jurado Nacional de Elecciones del Perú.

(****). Las principales organizaciones de este conglomerado electoral fueron: El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), no pudo reeditar su performance electoral de 1978. El UNIR (Patria Roja), cuyo candidato fue Horacio Zevallos, dirigente del Sutep y militante de Patria Roja. La Unidad de Izquierda (UI) dirigido por el general Leonidas Rodríguez. Unidad Democrática Popular (UDP, liderado por Carlos Malpica.

Capítulo Quinto.

DOS DECADAS DE LUCHA ARMADA

1. Intoxicación Elemental. Le nouvel Observador, 26 de marzo 2008.
2. Violencia Política en Perú. 1980-1988. Centro de Información y Promoción del Desarrollo-DESCO.
3. Violencia Política en Perú-1980-1988. Centro de Información y Promoción del Desarrollo-DESCO.
4. Sinesio López. El pueblo como victima. El Diario Marka, 28 de diciembre de 1982.
5. Violencia Política en Perú-1980-1988. Centro de Información y Promoción del Desarrollo-DESCO.
6. Declaraciones del general del ejército Clemente Noel Moral. El Observador, 11 de septiembre 1983.
7. Carlos Tapia, Adiós a las armas. 15/05/93.
8. La Republica agosto 1991.
9. Federico Salazar. Meridiano, Lima 26 de julio 1992.
10. CVR. Los actores armados. El Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, informe final agosto 2003.
11. Sobre la Guerra Prolongada, mayo de 1938. Obras Escogidas de Mao Tse Tung. Tomo II.
12. Henry Favre. Perú: Sendero Luminoso y Horizontes Ocultos. Universidad Nacional Autónoma de México. 1987.
13. Fuente: Comisión del Senado de la Republica del Perú. Informe, enero 1992-Reporte Especial de Desco noviembre de 1994. Perú en Números 1994; Richard Web y Graciela Fernández Baca.
14. Declaraciones del general del ejército Víctor Malca, ministro de defensa de Fujimori. Diario Expreso 14 de diciembre de 1991.
15. Enrique Obando. La Republica, 30 de noviembre de 1991.
16. Sendero avanza. Revista SI, marzo de 1987.
17. Artículo de Nicolás Lucar. Revista Si, abril 1988.
18. General Adrián Huamán Centeno, entrevista de la revista SI, abril de 1988.
19. Diario Expreso, 4 de noviembre de 1990.
20. General Adrián Huamán Centeno. Entrevista de Carlos Noriega. Especial Domingo, 20 de mayo de 1990.
21. ¿Puede ganar Sendero?. Fernando Rospigliosi, revista Caretas, marzo

- 1992.
22. General del ejército Sinesio Jarama, declaraciones para Última Hora. 8 de enero de 1992.
 23. Luis Arce Borja. Entrevista (no publicada) a Delia y Carlos La Torre Carrasco, Bruselas 1993.
 24. Testimonio del teniente general (r) PNP Vidal, Entrevista de CVR 30.09.02.
 25. Libro: Sendero: Historia de la guerra milenaria en el Perú. Lima 1990. Autor Gustavo Gorriti Ellenbogen.
 26. Hacia la guerra de guerrillas, Comité Central Ampliado del PCP, agosto de 1980.
 27. Hacia la guerra de guerrillas, Comité Central Ampliado del PCP, agosto de 1980.
 28. Informe final de la Comisión de la Verdad y reconciliación, agosto de 2002.
 29. Javier Iguíñez. Desde la Crisis económica peruana. Estrategia de Desarrollo y política económica, junio 1981.
 30. Cifras del Censo Nacional de 1981. Dirección General de Cuentas Nacionales (INE). Revista Socialismo y participación de junio de 1984.
 31. Yanaconas-yanacónaje. Nombre utilizado para referirse a los campesinos, en mayor parte de los andes, a quienes el terrateniente le entregaba tierras. Estas tierras tenían que ser trabajadas por los campesinos, y a cambio de ello entregaba parte de la producción al propietario de la tierra. Otra forma para pagar el uso de la tierra consistía en trabajar varios días a la semana las tierras que tenía en uso personal el latifundista.
 32. Luis Lumbreras Salcedo, entrevista de Raúl Gonzáles. Revista Quehacer, julio 1988.
 33. Luis Lumbreras Salcedo, entrevista de Raúl Gonzáles. Revista Quehacer. Julio de 1990.
 34. José Matos Mar-José M. Mejía. Reforma Agraria. Logros y contradicciones 1969-1979.
 35. (Simon Strong. Sendero Luminoso, el movimiento más letal del mundo. Londres 1992.
 36. Entrevista al general Juan Velasco Alvarado. Le Monde, 1972.
 37. La Prensa, 16 de diciembre de 1980.
 38. Fernando Belaúnde, Caretas 21 de septiembre 1981.
 39. A nuestro heroico pueblo combatiente. Comité Central del PCP, 01/01/81.
 40. Diario El Comercio 25 de mayo de 1981.
 41. Ricardo Letts, El Diario Marka 3 de diciembre de 1981.
 42. Víctor Hurtado. El terrorismo es contra la izquierda. Caballo Rojo, suplemento dominical de El Diario, octubre de 1981.
 43. Desarrollemos la guerra de guerrillas. Comité Central del PCP, febrero de 1982.
 44. Elecciones no, guerra popular sí, mayo 1990.

45. Diario Marka, 28 de diciembre 1982.
46. No votar: sino generalizar la guerra de guerrillas para conquistar el poder para el pueblo. Comité Central Partido Comunista del Perú, febrero de 1985.
47. Comisión de la verdad y reconciliación. Informe final, agosto 2003.
48. Senado de la Republica Peruana. Violencia y pacificación en 1991. Publicado en enero de 1992.
49. General del ejército Sinesio Jarama, entrevista publicada por la revista Quehacer, julio-agosto 1988.
50. El ataque a Uchiza en marzo de 1989, fue posible reconstruirlo con la información y testimonios publicados en las siguientes publicaciones: Revista SI del 10 de abril de 1989. Revista Caretas del 3 de abril 1989. Obra teatral perteneciente al Partido Comunista del Perú (PCP), publicado en 1990 cuyo tema es el ataque a Uchiza. Perú 1989. En la espiral de la violencia. Instituto de Defensa Legal (IDL).
51. Gordon McCormick, Sendero Luminoso y el futuro del Perú. Informe preparado para el Departamento de Estado-Oficina del secretario de Defensa de los Estados Unidos. Marzo 1990.
52. Discurso de Bernard Aronson, secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
53. Autocrítica publica de Margie Clavo Peralta. Difundida el 17 de septiembre 1995 en el programa „Contrapunto“ de Canal 2 de Televisión.
54. „Entrevista exclusiva con ‚Feliciano‘. ‚Guzmán es un psicópata““. Caretas, Lima, 10 de abril de 2003.
54. Camarada Artemio. Partido Comunista del Perú - Comité Regional Huallaga, Febrero 2000.
55. Las cifra sobre acciones guerrilleras 1980 hasta el 2000, provienen del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Análisis de Desco (Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, publicado en Violencia Política en el Perú 1980-1988.
56. Entrevista a Artemio, diario La Republica, 6 de septiembre del 2005.
57. Del Campo a la ciudad. Informe de Ángel Páez, revista SI, junio de 1989.
58. Ana Murillo, La Republica, 21 de julio de 1989.
59. Conferencia Nacional del PCP, 1982.
60. Simon Strong, Sendero Luminoso. El movimiento subversivo más letal del Mundo. 1992.
61. Elecciones, No, guerra popular, Si. Comité Central del PCP, 1990.
62. Gordon McCormick, Sendero Luminoso y el futuro del Perú, marzo 1990. Estudio preparado por para el Departamento de Estado-Oficina del secretario de Defensa de los Estados Unidos.
63. From the Sierre to Cities. Gordon H. McCormick, 1992. Investigación para el Nacional Defense Research Institute.
64. Sinesio López. El Perú es un país ingobernable. La Republica, febrero 1992.

65. En el oscuro sendero de la Perú. Instituto de Defensa Legal (IDL), enero de 1992.
66. Comisión de la Verdad y reconciliación (CVR), informe final 2003.
67. Revista Quehacer, N° 73. Septiembre-octubre 1991.
68. Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), informe final, agosto 2003.
69. Ídem.
70. Ídem.
71. Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Testimonio de una señora 19/07/2002.
72. Simon Strong, Libro Sendero Luminoso, el movimiento subversivo más letal del mundo, 1992.
73. Henry Favre. Perú: Sendero Luminoso y Horizontes Ocultos. Universidad Nacional Autónoma de México. 1987.
74. CVR 18/07/2002.
75. La Republica, ediciones del 7 y 8 de septiembre 1991.
76. Expreso, 11 de septiembre de 1991.
77. Testimonio de una habitante de Raucana. Tomado de la CVR, informe final agosto de 2003.

Capitulo Sexto.

MRTA, LUCHA ARMADA Y CAPITULACION

1. La guerrilla no tiene futuro político. Entrevista a Víctor Polay Campos. Caretas, 8 de mayo 2008.
2. Entrevista de Víctor Polay Campos. Comisión de la Verdad y Reconciliación, informe 2003.
3. Cartas de Alberto Gálvez Olachea y Peter Cárdenas Schulte. Comisión de la Verdad y Reconciliación, junio del 2003.
4. Dirección Nacional del MRTA. Conferencia publica, 16 de agosto de 1985.
5. Comité Central del MRTA. Informe sobre la situación nacional, setiembre 1990.
6. Mensaje a la Nación del MRTA, firmado por Néstor Cerpa Cartolini, 19 de abril 1990.
7. Comité Central del MRTA. Informe sobre la situación nacional, setiembre 1990.
8. Idem.
9. Víctor Polay Campos. Entrevista publicada en el diario El Nacional del 17 de diciembre de 1989.
10. Ídem.
11. Comité Central del MRTA. Informe sobre la situación nacional, setiembre 1990.
12. Víctor Polay Campos, entrevista, revista SI, 8 de mayo 1989.
13. Declaraciones de Víctor Polay Campos, a la policía antiterrorista del

Perú, el 18 de junio 1992.

14. Víctor Polay Campos, «entrevista en la clandestinidad», agosto 1985.
15. Entrevista a «Germán» y «Ricardo», mandos regionales del MRTA, publicado en Caretas, 15 de julio 1991.
16. Entrevista de Víctor Polay Campos, diario La Republica, 26 de mayo 1991.
17. Víctor Polay Campos, diario La república, 8/7/92.

CAPITULO Séptimo.

GONZALO ENTRE EL MITO Y EL OPORTUNISMO

1. Informe de Bernard Aronson, secretario de estado Adjunto para Asuntos Interamericanos de EEUU, 13 de marzo 1992.
2. Entrevista del Siglo. Entrevista en la Clandestinidad. Presidente Gonzalo rompe el silencio. Lima, domingo 24 de julio 1988.
3. Efraín Morote Best. Rector de la Universidad de Huamanga. Este centro de estudios fue fundado el 3 de julio de 1677 con el nombre de Universidad Menor de Ayacucho. Era la etapa virreinal, y España estaba gobernada por el Rey Carlos II. Esta universidad fue clausurada el 20 de febrero de 1885, durante la republicana. El 24 de abril de 1957, cuando gobernaba Manuel Prado, fue reabierta bajo el nombre de "Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Entra en funcionamiento el 3 de julio de 1959.
4. José Sotomayor Pérez. 40 años de la Conferencia Histórica-Lima 2004.
5. Saturnino Paredes. La Situación actual y perspectivas de la Revolución peruana. Ediciones Bandera Roja, 23 de octubre de 1982.
6. Patria Roja. La Lucha por la Construcción del Partido. Informe presentado a la VII Conferencia Nacional. 27 de julio de 1972. Ediciones Patria Roja, febrero 1974.
7. Ídem.
8. Gustavo Espinoza, Frente al Perú Oligárquico 1928-1968. Lima 1977.
9. Pronunciamiento del Partido Comunista Sobre el movimiento de Andamarca", 1965. Publicado en el libro Las Guerrillas del Perú, Roger Mercado, Lima enero de 1982.
10. Resumen del artículo: La Dimensión Histórica del problema social latinoamericano. Autor, Luis Arce, agosto 2005.
11. Economía peruana: ensayo de interpretación. Autores: Hugo Cabieses y Carlos Otero, publicado por Desco-Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo- Lima 1977.
12. Información tomada del artículo de Manuel Miguel de Priego: Jorge del Prado a dedicación exclusiva.
13. Caretas, 24 de abril 1989.
14. Declaraciones de Gustavo Espinoza. Publicado en el libro: Frente al Perú Oligárquico 1928-68, Debate Socialista, Lima 1977.
15. Congreso Nacional del Partido Comunista Peruano, Informe Político del

secretario general, Jorge del Prado, 28 de mayo de 1987.

16. Publicado en la revista *Quehacer*, número 50 de febrero 1988-Lima Perú.

17. Comunicado 1990, publicado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 28 de agosto 2003.

18. Declaraciones de Jorge del Prado. Revista *Si*, julio 1988.

19. Declaraciones publicadas por la revista *Caretas* del 26 de agosto 1991.

20. Declaraciones a la *Republica* 21 de agosto 1991.

21. Celebración de la autobiografía de Bob Avakian. *Revolución (USA)*, 29 de mayo del 2005.

*El *Diario*. La entrevista a Abimael Guzmán constituyó una primicia periodística. Fue el único reportaje que el jefe de la guerrilla maoísta concedió durante su etapa de clandestinidad. Como lo ha admitido el mismo Guzmán, algunos medios extranjeros le habían ofrecido hasta un millón de dólares por una entrevista, pero su preferencia fue por el *Diario*. Para la primera edición se imprimió 100 mil ejemplares que cubrieron más de 40 páginas de toda la edición tabloide del día 28 de julio de 1988. En solo dos horas se agoto esta edición, y de todo el Perú se multiplicaron las limadas telefónicas para ofrecer entre 5 y 10 veces más el precio normal por algún ejemplar que hubiera podido quedar en stock. A los siguientes días hubo otra edición de 120 mil ejemplares y ellos se volatizaron a las pocas horas de circulación. Así se llegó a la tercera edición de agosto de 1988 de 125 mil ejemplares en formato revista con 94 páginas y con un adicional en el precio de venta. Esa edición no tuvo tanta suerte como la primera y la segunda. En la madrugada del día de distribución la policía en un violento operativo asaltó la imprenta donde se concluía la edición. Cien mil ejemplares fueron a parar a los almacenes de la policía antiterrorista. El gobierno de García Pérez no soportó la presión de la entrevista a Gonzalo y violando la constitución y las leyes ordenó la confiscación de esta edición, que de acuerdo a las normas vigentes en esos momentos era completamente legal. Solo se salvaron 25,000 ejemplares que se vendieron en semi clandestinidad en Lima.

** José Carlos Mariátegui fallece en abril de 1930, a solo dos años de haber formado el Partido Comunista (partido Socialista como se le llamo en ese tiempo). Mariátegui no fue solamente el fundador del PCP sino uno de los mas grandes pensadores marxistas de América Latina, y a su muerte dejo un enorme vacío político en el movimiento político peruano. El 20 de mayo de 1930, Eudocio Ravines, quien llegó de Paris convocado por el mismo Mariátegui, toma posición de la dirección del partido, quien de dogmático partidario de los "soviet peruanos" se convirtió en un extremo anticomunista y aliado de los grupos de poder. Este personaje, que acabo trabajando para la derecha más recalcitrante del país, fue agente de la CIA americana. El *New York Times*, del 26 de diciembre de 1977, publicó una investigación

sobre la CIA y su relación con personajes políticos latinoamericanos. En primera fila aparecía Ravines quien había sido contratado por la CIA como periodista y escritor.

CAPITULO Octavo.

CRITICA AL "PENSAMIENTO GONZALO"

1. Documentos Fundamentales. Acerca del pensamiento Gonzalo. Primer congreso del PCP, 1987-1989.
2. J.C. Mariátegui. Antecedentes y Desarrollo de la Acción Clasista. 7 Ensayos de Interpretación de la realidad peruana, 1928.
3. Bandera Roja, N° 6, año 1967. Este era el vocero oficial del grupo que se llamaba la "Fracción Roja".
4. Bandera Roja, 28 de enero 1967.
5. Para entender a Mariátegui, conferencia de Abimael Guzmán, 1968.
6. Plejanov, La Función de la personalidad en la historia.
7. Thomas Carlyle, historiador, publicista y crítico. Nació en Escocia el 4 de diciembre de 1795 y murió en febrero de 1881. Este teórico de la burguesía señalaba que los grandes jefes eran el motor de la historia. En 1837 escribe su famoso libro "Historia de la revolución francesa". El interpreta los hechos históricos como un hecho propulsado por los héroes y los grandes jefes.
8. Carlos Marx y Federico Engels, Obras completas XXVI.
9. Carta de Engels a H. Starkenburg, 25 de enero 1894.
10. Presidente Gonzalo rompe el silencio, entrevista de Luis Arce y Janet Talavera. El Diario julio de 1988.
11. Sendero Luminoso y el futuro del Perú. Gordon H. McCormick, preparado para el Departamento de Estado, oficina del Secretario de Defensa de los Estados Unidos, marzo 1990.
12. Comisión de la Verdad y reconciliación (CVR). Informe final 28 de agosto del 2003.
13. Camarada Miriam, Penal Militar Base Naval del Callao, febrero 1995. Publicado en la página Web del Movimiento Popular de Alemania.
14. Ídem. . El Viaje hacia el mar.
15. Marcia, Ayacucho 17 de mayo de 1990.
16. Corintios 15-48.
17. Gabriel Uribe. La Otra Versión, Un insólito Sendero Literario. Lima marzo 2003.
18. Ídem. La Otra Versión.
19. Pronunciamento del comité de Familiares de presos políticos, prisioneros de guerra y desaparecidos del Perú. Mayo 1993.
20. Comunicado, de los prisioneros de guerra de las luminosas trincheras de combate de Canto Grande, abril 1992.
21. Informe-testimonio de c. Brenda, prisionera de guerra y sobreviviente

- de la matanza en la prisión de Canto Grande en mayo de 1992.
22. Testimonio de un combatiente, publicado en el libro, "Gloria al Día de la Resistencia Heroica, primer aniversario, PCP mayo 1993.
 23. Comité de Socorro Popular del Perú, Defender la vida del Presidente Gonzalo, en defensa de la jefatura, contra la dictadura genocida". Publicado en el libro, "Gloria al Día de la Resistencia Heroica, primer aniversario, PCP mayo 1993.
 24. Gloria al Día de la Resistencia Heroica, primer aniversario, mayo 1993.
 25. Lenin, discurso a los combatientes del Ejército Rojo que partían al frente polaco. Pravda, mayo 1920.
 26. Mao Tsetung, 31 de agosto de 1970.
 27. Citaciones del presidente Mao Tsetung, 1966, edición en francés.
 28. Li Yizhe: A propósito de la democracia y de la legalidad bajo el socialismo. Edición en francés, 11 de noviembre de 1974.
 29. Comunicado del PCP publicado en Bandera Roja Nº 42, mayo de 1970.
 30. En junio de 1975 se realizó en Lima una reunión del Comité Regional denominado "14 de junio". Es en este evento Álvaro se convierte en Gonzalo.
 31. VI Pleno del Comité Central del Partido Comunista del Perú, realizado en diciembre de 1976.
 32. Información tomada del documento: Sesión preparatoria del II Pleno del Comité Central, agosto 1990.
 33. VI y VII Pleno del Comité Central, eventos que se realizaron en diciembre de 1976 y mayo de 1977. La importancia de estos plenos para el desarrollo del PCP, radica en sus acuerdos. El VI pleno se efectuó bajo la consigna de "Reconstituir el partido desde el campo y desarrollar el camino de cercar las ciudades desde el campo". El VII pleno tuvo como consigna "Construir en función de la lucha armada". Fuente, Sesión preparatoria del II Pleno del Comité Central, agosto 1990.
 34. Presidente Gonzalo rompe el silencio, entrevista de Luis Arce y Janet Talavera. El Diario julio de 1988.
 35. Selección del poema titulado: "Pensamiento Gonzalo garantía de triunfo hasta el comunismo". Por los 14 años de guerra popular victoriosa. 17 de mayo de 1994, Comité Zonal de Ayacucho.
 36. Construir la Conquista del poder en medio de la guerra popular. II Pleno del Comité Central del PCP, 1991.
 37. Lenin, Significado de la Confraternización. Pravda, mayo 1917.
 38. Presidente Gonzalo rompe el silencio, entrevista de Luis Arce y Janet Talavera. El Diario, julio de 1988.
 39. Abimael Guzmán, Asumir y combatir por la nueva gran decisión y definición. Comité Central del PCP, 1993.
 40. Contra la dictadura genocida y vendepatria, persistir en la guerra popular, PCP Perú, marzo de 1995.
 41. Mao Tsetung. Citas, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Pekín, 1966,

pág. 1; la cita es tomada del “Discurso de Apertura de la I Sesión de la Asamblea Nacional Popular (primera legislatura) de la República Popular China”.

42. Texto redactado por Abimael Guzmán: Asumir y Combatir por la Nueva Gran Decisión y Definición. Editado por el Comité Central del PCP, 1993.

43. Bases de Discusión. Línea de Construcción de los tres instrumentos de la revolución, 1988, página 372.

44. Asumir y combatir por la Nueva Gran Decisión y definición, Comité Central del PCP, octubre 1993.

45. F. Engels, Ludwing Feuerbach y el fin de la filosofía clasista alemana, 1886.

46. Lenin, Las tres fuentes y las tres partes integrantes del marxismo, 1913.

47. Lenin, tomo XXVII, tomado de Cuestiones del Leninismo de Stalin.

48. Lenin en el VIII Congreso del Partido Comunista Bolchevique. Resumen del Informe sobre el programa del Partido, marzo 1919.

49. III Internacional Comunista, fundada en marzo de 1919 a iniciativa de Lenin y del Partido Comunista Ruso se incluyó la Tesis sobre la estructura, los métodos y la acción de los partidos comunistas. Tercer Congreso realizada en junio de 1921. Textos completos de la Tercera Internacional Comunista, edición en francés 1975.

50. (V. I. Lenin. ¿Qué hacer?, 1902.

51. Mao Tsetung. Discurso ante una Conferencia ampliada de Trabajo convocada por el Comité Central del Partido Comunista de China, 30 de enero 1962.

52. Mao Tsetung. Encuesta sobre el movimiento campesino en Hunan, 1927.

53. Mao Tsetung. Discurso ante una Conferencia ampliada de Trabajo convocada por el Comité Central del Partido Comunista de China, 30 de enero 1962.

54. Mao, Entrevista con militante de bases en 1971, publicada por los servicios de Taiwán. Tomado del libro: Mao Tsetung, o la revolución profundizada. Alain Bouc, Paris 1975.

55. Poema, del aprista Ricardo Ñique Cornelio, julio 2006.

56. Sobre campaña de rectificación con Elecciones, no, guerra popular, sí. Comité Central del PCP, 1991.

57. Kart Marx, Friedrich Engels, autor Jean Brubat, 1970, edición en francés.

58. Kart Marx, Friedrich Engels, autor Jean Brubat, 1970, edición en francés.

59. Carta de Mao a Chiang Ching, 8 de julio de 1966. Publicado en Mao Tsetung, o la revolución en profundidad. Alain Bouc, 1975, edición en francés.

60. Mao Tsetung, o la Revolución en profundidad, Alain Bouc, edición 1971. Edición en francés.

61. Mao Tsetung, o la revolución en profundidad. Alain Bouc, 1975, edición

en francés).

62. Ídem. (Mao Tsetung, o la revolución en profundidad).
63. El falso comunismo de Krushov y las lecciones históricas que da al mundo. Artículo publicado en la revista Jen Min Jih, julio de 1964. Tomado del libro (en francés): De la China, autor Maria-Antonietta Macciocchi, 1979.
64. Emmanuel Kant. Crítica de la Razón Pura. Dialéctica Trascendental. Ideal de la Razón pura.
65. Marx y Engels, La Ideología Alemana,
66. Declaración del 7 de Octubre, PCP, Comité Central, octubre de 1993.
67. Asumir y combatir por la Nueva Gran Decisión y definición, Comité Central del Partido Comunista del Perú (PCP)
68. Federico Engels, La Ideología Alemana.
69. II Pleno del Comité Central del PCP, agosto 1990.
70. Programa del PCP, Documentos Fundamentales, primer Congreso 1986.
71. Lenin, Las tres partes y las tres fuentes integrantes del marxismo.
72. Lenin, La Revolución proletaria y el renegado Kautsky, 1918.
73. Lenin, Definición del Partido Obreros Socialdemócrata de Rusia (POS-DR), Obras Completas, tomo 14.
74. Asumir y combatir por la nueva gran decisión y definición", octubre de 1993.
75. Mao Tsetung, Reafirmar el sistema del Comité del Partido, septiembre de 1948.
76. José Carlos Mariátegui, Fascismo Sudamericano, noviembre 1924.
77. Un Paso Adelante, Dos pasos atrás, Lenin, mayo 1904.
78. Carlos Marx, carta a Guillermo Bloss, Londres, 10 de noviembre de 1877.
79. Carta de Engels a Franz Mehring, Londres, 14 de julio de 1893.
80. Lenin, discurso en las exequias de Sverdlov, 18 de marzo de 1919.
81. Lenin. Tomo XXV, páginas. 187 y 188.
82. Prefacio a la traducción rusa de las cartas de Marx a L. Kurklemann, 5 de febrero 1905.
83. Que Hacer, Lenin, febrero de 1902.
84. Lenin Tareas de las Juventudes Comunistas. Discurso en la I Sesión del III Congreso de Juventudes Comunistas de Rusia Moscú, 2 de octubre de 1920.
85. Mao Tsetung, o la revolución profundizada. Alain Bouc, Paris 1975.
86. Mao Tsetung, Sobre el fortalecimiento del sistema de comités del Partido, septiembre 1948.
87. Reflexiones de Mao Tsetung sobre el arte de gobernar, Obras completas, volumen IV, tomado del libro de Roy MacGregor-Hastie: Mao Tsetung. El despegue irresistible de un hombre y de su pueblo. Edición en francés, 1964.
88. Mao Tsetung, 1970, tomado del libro de Alain Bouc, Mao Tsetung, o la Revolución en profundidad, 1971. Edición en francés.

Este libro se terminó de imprimir en XXX, en los talleres de XXX, en febrero de 2009.

Se utilizó la fuente Caxton.
Fue diseñado, en Buenos Aires, por Carlos Moreno Rodríguez